**UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE DERECHO
DOCTORADO EN DERECHO**

TESIS DOCTORAL

TEMA:

**Derechos fundamentales en el trabajo rural. Eficacia del
derecho laboral en Argentina y Brasil para trabajadores en
tareas agrícolas no registrados.**

Apellido, Nombre: Araujo Avelino, José

Director de Tesis: Duarte, David

BUENOS AIRES – ARGENTINA

AÑO - 2017

AGRADECIMIENTOS

En este largo camino de la vida, corro y no puedo parar, con la esperanza de ser campeón ... (Millonario y José Rico) para ganar y superar los obstáculos que las adversidades de la vida nos impone.

Pero para que todo esto suceda, hay que querer y hacer frente a las dificultades que la vida ofrece, siguiendo en su camino todo el tiempo.

Y fue así... y vivir un momento de alegría, al final de una etapa académica, que es este Doctorado en Derecho del Trabajo, como una realización personal y profesional.

Por supuesto, que por sí sola, también, no sería posible para él llegar a este objetivo.

Por lo tanto, quiero dar las gracias especialmente, a mi familia por su apoyo incondicional, y que me trajo estímulos que me impulsaron a buscar nueva vida todos los días, para llevar a cabo este doctorado.

Doy las gracias a la Universidad del Estado de Bahía - UNEB, en particular el Departamento de Camaçari (Campus XIX), dónde soy un profesor efectivo y que me permitió llevar a cabo este desafío.

Asimismo, agradezco a la UBA por darme esta oportunidad y, en especial a mi Director de Tesis, doctor David Duarte por compartir nuevas ideas y experiencias, que se convirtió en buenos amigos.

Agradezco también a mi coordinadora y amiga, doctora Viridiana Díaz Aloy por los consejos y enseñanzas.

También estoy agradecido por todos los funcionarios de la UBA y en especial, las personas que trabaja en la Secretaría de Posgrado por su dedicación y puntualidad en las actividades administrativas.

También quiero agradecer a mis compañeros de doctorado por compartir sus conocimientos dentro y fuera de la universidad.

Finalmente, agradezco a mis amigos y a todos los que han estado siempre presentes y animando a mis estudios, dándoles la oportunidad de hacerme aún más.

Abstract

El presente trabajo de investigación estudia los Derechos fundamentales en el trabajo rural, concretamente, la eficacia del derecho laboral en Argentina y Brasil para los trabajadores en tareas agrícolas no registrados. La profusión de prácticas ilegales de parte de los empleadores en el sector rural de ambos países, y el ejercicio deficiente del poder de policía del Estado, propicia una situación que requiere de una revisión de las normas que regulan esta actividad laboral y de los mecanismos de control de su efectivo cumplimiento. Los derechos de los trabajadores requieren de un marco conceptual amplio y coherente que posibilite una fundamentación adecuada y una tutela apropiada en especial a las jornadas de trabajo que afectan directamente a la situación del empleado y a la salud del trabajador, contribuyendo su inadecuada administración a la persistencia de altos índices de trabajadores rurales en condiciones laborales de franca explotación y de vida indignas. En el ámbito del Derecho del Trabajo se parte del fenómeno histórico de la explotación para sancionar dentro de la normativa protectoria general una serie de normas tuitivas específicas que garanticen topes y condiciones de trabajo compatibles con las características psicofísicas de los trabajadores. La magnitud y consecuencias del problema han variado con los nuevos escenarios sociales, lo que requiere de nuevos análisis que posibiliten adecuar las acciones en contra de este flagelo en el empleo. Se procura realizar un análisis comparativo entre las normas de Argentina y de Brasil, con énfasis en el análisis de las violaciones a los derechos de los trabajadores rurales sin registro en el sector agrícola en la región de la provincia de Buenos Aires y la región de sisal, en el estado de Bahía- Brasil. Se procura señalar la falta de cumplimiento de los derechos fundamentales constitucionales y laborales en favor de los trabajadores rurales agrícolas no registrados en ambos países, y por éste motivo, a fin de diagnosticar cuáles son las razones que impiden que esos derechos se hagan efectivos. Se ha encontrado que la realidad de los países estudiados y de los sectores productivos presenta diferencias que impiden soluciones extrapolables, y ello lleva a la conclusión de que la clave de la búsqueda de soluciones está en el conocimiento profundo de la realidad de cada colectivo de trabajadores, el estado de las diferentes dimensiones

intervinientes en el sistema productivo, y la revalorización de las entidades sindicales para aportar sus conocimientos sobre los detalles de la vida de cada sector en el diálogo entre empleados, empleadores y el Estado, a fin de que se procuren por la vía normativa e institucional, soluciones realistas, viables y adaptadas a las verdaderas necesidades de aquellos a quienes se procura amparar en sus derechos fundamentales.

Palabras Clave: Trabajador rural agrícola no registrado – Argentina – Brasil – Región Sisalera – Derecho del Trabajo - Explotación

TABLA DE CONTENIDO

Abstract	3
Palabras Clave	4
Tema de investigación.....	7
1. Introducción al Problema Científico	7
2. Delimitación del Problema	11
3. Contexto del problema e interrogante	11
4. Justificación y Originalidad	12
5. Objetivos de la investigación	16
5.1 Objetivos específicos	17
6. Formulación de la hipótesis	18
7. Propuesta de la tesis	18
8. Metodología	20
8.1 Instrumento	21
8.2. Entrevista semiestructurada a representante sindical de trabajadores rurales de Argentina / Brasil	21
9. Antecedentes y fuentes de consulta	23
10. Marco Teórico	24
<u>CAPÍTULO I</u>	
1. La situación del ámbito rural en Mercosur, y en Argentina y Brasil.....	26
2. Historia y actualidad. El trabajador rural, contexto y regulación laboral..	29
3. El contexto argentino	33
4. El contexto en Brasil	41
5. Contexto actual	49
6. La Región Sisalera en Brasil - características.....	66
<u>CAPÍTULO II</u>	
1. La eficacia y efectividad de la Norma	70
2. La eficacia de la norma	71
3. Control de las normas	77
4. Derechos fundamentales en el trabajo rural.....	94
5. Marco Normativo vigente.....	109
<u>CAPÍTULO III</u>	
1. Aspectos prácticos de su contemplación efectiva. Diagnóstico. Leading case : Buenos Aires	129
2. Irregularidades detectadas. El trabajo rural no registrado. Información estadística, actuación de las instituciones estatales y sindicales, nivel de cumplimiento de la normativa vigente.....	129
3. Región Pampeana de la Provincia de Buenos Aires	140
4. Factores que propician la informalidad del sector	149
<u>CAPÍTULO IV</u>	
1. Aspectos prácticos de su contemplación efectiva. Diagnóstico. Leading case : Región de Sisal en el Estado de Bahía.....	159
2. Irregularidades detectadas. El trabajo rural no registrado. Información estadística, actuación de las instituciones estatales y sindicales, nivel de cumplimiento de la normativa vigente.....	159
3. Factores que propician la informalidad del sector	176
<u>CAPÍTULO V</u>	
1. Diagnóstico	185

2. Eficacia del derecho laboral en Argentina y Brasil para trabajadores en tareas agrícolas no registrados. El rol de las instituciones.....	185
3. Variables que inciden en los altos índices de empleo no registrado en las zonas estudiadas. Cómo afectan el contexto, en distintas dimensiones observables.....	187
4. Causas que contribuyen a la ineficacia en la protección de los derechos legalmente vigentes del trabajador rural en Argentina y Brasil...	191
5. El rol de los Tribunales laborales en la defensa de los intereses del trabajador rural	192

CAPÍTULO VI

1. Propuestas para la mejora de las condiciones laborales del trabajador rural agrícola en Argentina y en Brasil.....	199
2. Activismo social	199
3. Acción sindical	204
4. Certificación laboral de productos	205
5. Soluciones desde las políticas hacia el mercado de trabajo	210
6. Cambio normativo	221
11. CONCLUSIONES	228
12. Bibliografía	238
12.1. Legislación Brasileña	259
12.2. Legislación Extranjera	260
12.3. Legislación de Trabajo de Argentina	261
13. Anexos	263
13.1. Entrevista semiestructurada a representante sindical de trabajadores rurales de la Región de Sisal. Dirigente Sindical FETAG - Bahía	263
13.2. Preguntas orientadoras y respuestas del Secretario	264
13.3. Entrevista semiestructurada a Dirigente Sindical – UATRE - Argentina	269
13.4. Preguntas orientadoras	269

Tema de investigación

Derechos fundamentales en el trabajo rural. Eficacia del derecho laboral en Argentina y Brasil para trabajadores en tareas agrícolas no registrados.

El presente tema de investigación se inserta dentro del área del Derecho Laboral, y está relacionado con el campo de los derechos fundamentales laborales de los trabajadores y trabajadoras rurales en el sector privado, porque antes que trabajadores son personas, en la relación de trabajo son personas en situación de trabajo, y como tales tienen todos los derechos humanos que lo protegen desde el bloque de constitucionalidad.

1. Introducción al Problema Científico

El trabajo en el medio rural es considerado una actividad ardua y sufrida, pues el trabajador está en todo momento expuesto al frío, o al sol y al calor, lo que contribuye al aumento de enfermedades y a la consecuente disminución de su productividad. (Organización Internacional del Trabajo, 2001)

La actividad agropecuaria sigue siendo la más riesgosa del mundo, con una tasa de accidentes que alcanzan los 250 millones a nivel mundial de los cuales alrededor del 15 por ciento suele ser mortales. El campo sigue siendo un lugar peligroso para el trabajo: la falta de prevención, concientización y capacitación abre las puertas de los riesgos laborales en una actividad que incluye maquinas pesadas, trabajo a campo, manejo de electricidad y condiciones climáticas severas. El cansancio, la desatención, la irresponsabilidad y el exceso de confianza son los principales motivos que llevan a los accidentes más frecuentes. [...] La falta de responsabilidad es una de las principales causas, ya que muchos empleados, incluso habiéndolos capacitado, se arriesgan con maniobras peligrosas para ganar tiempo o buscar la solución más sencilla. (Wullich, 2014, pág. 1)

Estas pueden ser causadas por agentes físicos como los mencionados (afectación osteoarticular, musculoesqueléticas por posturas forzadas y

movimientos repetitivos, bursitis en rodillas o glúteos, fatiga, inflamación de vainas tendinosas, artritis, reuma, osteoporosis, broncoespasmo, bronquitis, queratitis crónica, melanomas o cáncer cutáneo por exposición a la radiación solar ultravioleta, dermatitis); o por otros como la exposición a agentes carcinógenos químicos o biológicos (arsénico, polvo de madera), inhalación de sustancias como caspa de ganado, polen de cereales, antígenos fúngicos, ácaros, insecticidas organofosforados, (asma, rinitis, inflamación de mucosas), picaduras, rasguños o mordeduras de insectos o animales, hantavirus, dermatitis irritativa, etc. (Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, 2008); (Superintendencia de Riesgos del Trabajo, 2008); (Argentina: mal uso de los agroquímicos provoca problemas de salud, 2013) A estos cabe sumar la distancia entre los lugares de trabajo y las viviendas de los trabajadores, el uso de maquinarias agrícolas y los riesgos de accidentes (caídas de tractor, aprisionamientos en el enganche, vuelcos de tractor, caídas de aperos, caídas de altura en trabajo en silos, etc. (Bulacio, 2006)

En la Argentina la Superintendencia de Riesgos del Trabajo cuenta con un registro de accidentabilidad laboral por el cual ha contabilizado 38.189 accidentes y enfermedades laborales en el sector agrario en 2011; 36.332 en 2013; 34.060 en 2014 y 32.705 en 2015, observándose una leve mejoría. Todos los años, estas cifras solo son superadas por el sector de la construcción. (Superintendencia de Riesgos del Trabajo, 2016)

El trabajador rural ejerce un papel fundamental en la agricultura y la ganadería, desde la preparación del suelo para el cultivo, hasta la plantación y cosecha de los alimentos para el consumo propio y de la colectividad, así como también el cuidado de los animales y es un aporte sustancial en el desarrollo económico de un país y resulta paradójico que en una actividad que aporta riquezas se encuentren los trabajadores más pobres de las fuerzas productivas.

De acuerdo con el Convenio nº 141 de la OIT (OIT, 2015), la expresión "trabajadores rurales" abarca a todas las personas dedicadas, -en las regiones rurales-, a tareas agrícolas o artesanales, o a ocupaciones similares o relacionadas. De acuerdo con el mencionado convenio, se consideran

trabajadores rurales a las personas asalariadas, arrendatarios, aparceros o pequeños propietarios cuya principal fuente de ingresos sea la agricultura y que trabajen la tierra por cuenta propia o exclusivamente con la ayuda de sus familiares, o recurriendo eventualmente a trabajadores suplentes y que no empleen mano de obra permanente, no empleen mano de obra numerosa, con carácter estacionario o no cultiven sus tierras por medio de aparceros o arrendatarios.

En Brasil, en el período colonial del siglo XVII el trabajo rural dio inicio al proceso de movimientos sociales y estuvo marcado por la gran ocupación de la tierra, donde predominaban los latifundios heredados de las capitanías hereditarias y sesmarías; los monocultivos de exportación, orientados a atender los requisitos económicos de la metrópolis portuguesa, y el trabajo esclavo. (Martins, 2003)

Al poco tiempo los trabajadores rurales se fueron organizando en busca de mejores condiciones de trabajo y la conquista de nuevos derechos para mejorar su condición social y patrimonial para tener una vida digna, especialmente en la vejez.

Mediante intensas luchas del sector se logró que el Estado comenzase a crear mecanismos de protección de los derechos del trabajador rural y a insertar en sus constituciones garantías fundamentales que hasta entonces no eran reconocidas para ese sector. Las normas se fueron perfeccionando a lo largo del tiempo de acuerdo con las necesidades y los sistemas a los que esos trabajadores eran sometidos.

El concepto de derechos fundamentales constitucionales implica brindar garantías legales a todos los ciudadanos para que éstos tengan sus objetivos reconocidos por el estado democrático de derecho. Los derechos fundamentales del trabajador, a su vez, se dirigen al trabajador en su relación de empleo. Es decir, una relación de trabajo con su respectiva contrapartida en forma de salario. (Nascimento, 2011, pág. 26)

Los derechos inherentes a la clase rural -que produce desde el alimento básico "in natura" hasta la extracción del cuero para hacer el calzado que usamos-, fueron quedando por fuera de la protección fundamental. Al parecer la complejidad de derechos y protección fue en aumento para el trabajador urbano y dejando de lado al trabajador rural no registrado. (Zimmermann, 2006)

Ante la ineficacia de los derechos fundamentales constitucionales y laborales de los trabajadores rurales agrícolas no registrados, el objetivo de la presente tesis es investigar y demostrar las causas que llevan a la violación de esos derechos por parte de los empleadores rurales.

El incumplimiento de estos derechos es bastante común, como por ejemplo, en el caso del empleado que trabaja lejos de una ciudad y compra sus alimentos al empleador, lo que encarece el precio de los mismos, haciendo que esté en una condición de dependencia inaceptable, ya que cuando recibe su salario mínimo, el valor no alcanza para cubrir ese alimento básico que ya consumió, a pesar de que formalmente se cumpla con los derechos laborales y humanos. (Trinidad, 2011, pág. 78)

En Brasil, estudios revelan que: "el trabajo del campo está marcado por la presencia de los movimientos sociales, los cuales cooptan los diversos programas y proyectos públicos y privados. Mientras tanto, las acciones desarrolladas por las diversas entidades son incapaces de producir mejoras significativas para el bienestar de la población local". (Evangelista, 2010)

Entre las entidades a las que hace referencia la cita, hace referencia a asociaciones y movimientos como la APAEB-Valente Asociación para el Desarrollo Sostenible y Estados Sisaleros de la región, a la que se hace referencia más adelante.

De esta forma, observamos que los valores contenidos en las constituciones buscan proteger a los trabajadores -como por ejemplo, la dignidad de la persona humana, la seguridad en el lugar de trabajo, la remuneración justa y acorde con el esfuerzo realizado-, e implican que el empleado en la actividad

rural también tiene derecho a la previsión social y otros beneficios idénticos a los demás trabajadores. Es decir, la Constitución no sólo se preocupa por asegurar el acceso a la justicia, sino por satisfacer los derechos; especialmente los fundamentales (inclusive el de realización de la justicia), de forma concreta, sustancial. (Meireles, 2007)

2. Delimitación del Problema

La investigación para la tesis tendrá como marco temporal el estudio de los antecedentes históricos, legislativos y doctrinarios, así como los datos oficiales divulgados entre el período de 1988 a 2014.

Por tratarse de un análisis comparativo entre las normas de Argentina y de Brasil, se opta, en el presente estudio, por analizar las violaciones a los derechos de los trabajadores rurales sin registro en el sector agrícola en la región de la provincia de Buenos Aires y la región de sisal, en el estado de Bahía-Brasil. La comparación resulta de suma importancia en cuanto a los criterios de integración regional y armonización normativa de los dos países, que se ajusta a los objetivos de la creación del MERCOSUR.

Dado que las subdivisiones de categorías de trabajadores rurales están bastante diversificadas, nos limitaremos en la futura investigación a los trabajadores rurales no registrados en el sector agrícola, en Argentina y Brasil, desde el surgimiento de dicha categoría en el período colonial, hasta la actualidad, con el fin de diagnosticar por qué razones esos derechos no se cumplen de forma efectiva. Según los roles del Estado (Judicial, Legislativo Ejecutivo), los operadores jurídicos (abogados, dirigentes sindicales, dirigentes sociales, etc.).

3. Contexto del problema e interrogante

Hemos observado un gran número de trabajadores agrícolas sin registro de empleo, principalmente, en la región sisaleira del Estado de Bahía, Brasil, que aunque poseen derechos garantizados por la Constitución y por las leyes

laborales incorporadas al sistema jurídico -sin embargo-, generalmente no se toman vacaciones, no cobran horas extras, ni reciben licencias, de entre otros derechos de los que gozan los demás trabajadores.

Buscamos avanzar en la investigación y entender las razones que hacen que no se apliquen los derechos fundamentales constitucionales en la vida del trabajador rural no registrado, principalmente en el sector agrícola, de forma de entender también los motivos por los que el poder fiscalizador del estado y de los sindicatos no aplica medidas correctivas a las personas que menosprecian la mano de obra rural al infringir esos derechos fundamentales.

En este sentido, partimos del supuesto de que es muy difícil el control de la aplicación de los derechos laborales fundamentales al trabajador rural agrícola sin registro de empleo, ante el no ejercicio del poder de policía del Estado para disuadir al empleador de estas prácticas ilegales.

Presentado el contexto del problema, se formula el interrogante central de la investigación:

¿Por qué los dispositivos legales establecidos por las constituciones de Argentina y Brasil, así como las leyes positivas, no consiguen garantizar los derechos fundamentales en las relaciones de trabajo del trabajador agrícola no registrado? ¿Por qué la función fiscalizadora del sindicato rural no es eficiente para garantizar los derechos laborales de los trabajadores?

¿Cuáles serían las garantías necesarias para la realización de los derechos fundamentales de los trabajadores rurales? ¿Los trabajadores rurales están suficientemente informados de cuáles son sus derechos?

4. Justificación y Originalidad

El legislador constituyente, entidades no-gubernamentales, órganos de clase, la sociedad en general, dedicaron mucho tiempo luchando y debatiendo a fin de garantizar a los trabajadores los derechos fundamentales y laborales como forma de preservación de la dignidad del ser humano.

Si bien esto se ha discutido a lo largo de toda la historia, aún existen muchos vestigios de violación de los derechos fundamentales y laborales que están pendientes de efectivización, especialmente entre las categorías de trabajadores rurales del sector agrícola.

Mediante los datos estadísticos recolectados en Argentina y Brasil, relativos al trabajo rural sin registro de empleo en la agricultura, podemos afirmar que la falta de cumplimiento de los derechos laborales rurales por parte de los empleadores, se transformó en un gran desafío para los gobiernos y los otros actores sociales, ya que la cuestión es de orden público y de carácter social, cuya responsabilidad pertenece al Estado. Además, los trabajadores rurales casi nunca poseen las condiciones laborales mínimas, lo que configura trabajo en situación precaria, causando daños de orden económico-social.

A pesar de tener los derechos garantizados por las normas, los trabajadores rurales agrícolas del Estado de Bahía-Brasil, no acostumbran acudir al Ministerio de Trabajo y Empleo, al Ministerio Público de Trabajo, ni a la Justicia Laboral para reclamar la falta de implementación de los derechos laborales por parte de los empleadores.

bajo diversos campos sociales, como por ejemplo, la protección de los derechos humanos, del medio ambiente, etc. Sobre el tema específico de la presente tesis, encontramos pocas investigaciones, aunque ha sido constatado en un estudio que "la falta de registro del empleo en el sector de agricultura de la provincia de Mendoza se relaciona con los pequeños períodos de ciclos de colecta, visto que son discontinuos, además de permitir diversas modalidades de contrato de trabajo" y, encontramos que "la alta incidencia del trabajo temporal y, en la mayoría de los casos, no registrado, sobre todo en el empleo ligado a producción vitivinícola". (Fabio, 2010) (Moreno, 2009)

De acuerdo con ciertos estudios (Benencia, 2004), en la década de 1990 hubo una fuerte inmigración de trabajadores de países limítrofes en Argentina, principalmente de personas de origen boliviano, que se concentró en el área metropolitana en la provincia de Buenos Aires, para trabajar en la agricultura.

Los trabajadores inmigrantes, celebraban contratos de trabajo bajo la forma de aparcería y contratos flexibles, en los que acababan por renunciar a los derechos laborales regidos por ley, con el fin de ocupar espacios que pertenecían a los trabajadores locales, lo cual resultó en violentos conflictos en la región.

Cuando se trata de trabajadores rurales de sexo femenino, el número de trabajadores no registrados es aún mayor, porque, de acuerdo con el estudio, “las mujeres quedan subsumidas en el hogar y la familia, que se entienden como sus ámbitos de dominio y acción, desde donde construyen sus identidades. Su trabajo “colabora” con el del hombre y es considerado parte de la producción familiar, en un medio donde las “fronteras” entre lo productivo y lo reproductivo son poco claras. Así, los trabajos de las mujeres en el agro permanecen ocultos, desvalorizados históricamente”. (Arce, 2013). Es importante también mencionar la existencia de trabajo infantil en ámbitos rurales que se encuentra prohibido, tanto por la normativa nacional (Ley 26.390/2008, Decreto 1117/2016 de determinación de los tipos de trabajo que constituyen trabajo peligroso para menores, Ley 26.847 que incorpora el art. 148bis al Código Penal en 2013 penalizando con uno a cuatro años el aprovechamiento del trabajo infantil, con la sola excepción de fines pedagógicos o de capacitación o cuando lo hacen los padres) como por los Derechos Fundamentales de la OIT (1998) y los Convenios 182 y 138 de la OIT que Argentina ratificó con la Ley 25.255/2000 y Ley 24.650/1996 (sobre peores formas de trabajo infantil y edad mínima de admisión al empleo, respectivamente) (Organización Internacional del Trabajo, 2017) Con el apoyo de la OIT y UNICEF, Argentina se encuentra trabajando en la limitación de las prácticas de trabajo infantil en el país. (OIT Argentina, 2016)

Los datos estadísticos confirman que el mayor número de trabajadores no registrados está en el medio rural y, por eso, son considerados invisibles en el orden económico de los países, porque no hay carga tributaria para el empleador, dejando al trabajador sin la protección de las garantías laborales que las leyes le confieren.

Encontramos en Brasil, muchos estudios sobre el trabajo en la agricultura. No obstante, las investigaciones generalmente dan un mayor énfasis a las cuestiones relacionadas con los derechos humanos, ambientales y sociológicas de los trabajadores en sus comunidades más que a explorar el campo jurídico. Una tesis de doctorado de la USP constató que la “actividad informal posee características del trabajo asalariado, constatándose una relación asalariada, y que el factor más agravante de esa situación es la ausencia del vínculo laboral formal con las empresas, y, consecuentemente, de los derechos de los trabajadores”. (Beltrao, 2009)

Es importante destacar que, aunque existen estudios sobre el trabajo en la agricultura, los resultados presentados tienen siempre como parámetros los datos estadísticos divulgados tanto por los gobiernos, como por entidades representativas. No fue encontrada hasta el momento una investigación de carácter jurídico, para diagnosticar cuales son las causas que contribuyen al alto índice de trabajadores no registrados.

Estudios demuestran que los trabajadores rurales no conocen las leyes que protegen sus derechos laborales de igual forma que los de los trabajadores registrados, y por eso no es común que busquen a la justicia laboral para corregir tales incumplimientos por parte del empleador. (Dezemone, 2007) Es importante sugerir que esta falta de información de los trabajadores debe ser revertida por medio de un trabajo de los sindicatos y las instituciones civiles y estatales, de manera coordinada y conjunta, a fin de dar a conocer a los trabajadores rurales cuáles son las formas viables con las que cuentan para acceder a la información que necesiten y realizar denuncias.

Es fácil observar que los trabajadores rurales todavía demuestran miedo a sufrir represalias, así como a ser reprimidos o castigados por sus patrones, en el trabajo por sus empleadores, y por este motivo no acuden al poder judicial para tutelar sus derechos. Este hecho es consecuencia de los vestigios remanentes del modelo de explotación de la mano de obra adoptado desde el surgimiento del trabajo rural, donde todo esfuerzo era compensado con comida o mercaderías y, por eso, buena parte de esos trabajadores no se da cuenta de

que podría tener una vida mejor si los derechos laborales fueran efectivizados como manda la ley.

En ese aspecto, observamos en Brasil que los actores sociales, en especial los sindicatos de trabajadores rurales de la agricultura, no han ejercido un papel eficiente para corregir esas injusticias en beneficio de los trabajadores a los que se supone que representan.

Como vimos en algunos estudios realizados tanto en Argentina como en Brasil, los trabajadores rurales agrícolas conviven con muchos problemas sociales que están lejos de ser resueltos, como por ejemplo, trabajo en condición análoga a la del esclavo, largas jornadas de trabajo, falta de registro del contrato de trabajo, entre otras situaciones que contribuyen en gran medida al desnivel social que tienen con respecto a los demás trabajadores.

Buscando innovar y contribuir para mejorar la convivencia social y las condiciones de trabajo del trabajador rural agrícola, la presente tesis realiza una investigación de carácter jurídico, para diagnosticar las razones por las cuales los trabajadores no son registrados y para proponer una solución que pueda disminuir estas desigualdades en relación al trabajo urbano.

5. Objetivos de la investigación

Esperamos con la presente investigación identificar los factores relacionados a los problemas encontrados en la aplicación de los derechos fundamentales de los trabajadores rurales agrícolas no registrados y poder entender cuáles son las razones que llevan a la falta de aplicabilidad de las leyes en la protección de los derechos existentes para con el trabajador rural, con el objetivo de presentar una propuesta capaz de contribuir a la reducción en la violación de los derechos de los trabajadores.

5.1 Objetivos específicos

- Analizar las condiciones bajo las cuales se procesan las relaciones de trabajo del hombre de campo en Brasil y Argentina en el período 1988 a 2014;
- Identificar las fallas en el cumplimiento de las obligaciones por parte de los empleadores con respecto a los trabajadores rurales agrícolas no registrados;
- Identificar los principales impedimentos para el efectivo cumplimiento de las obligaciones laborales por parte de los empleadores rurales;
- Verificar cómo se procesa la actuación de los sindicatos de trabajadores rurales agrícolas en Argentina y Brasil;
- Analizar la función del poder de policía del Estado, incluyendo la competencia administrativa del Ministerio de Trabajo para el cumplimiento de las obligaciones de las leyes laborales y Convenios de la OIT sobre inspección del trabajo y trabajo agrícola;
- Identificar y comentar, por medio de decisiones judiciales, cuál es la tendencia de la jurisprudencia en Argentina y Brasil respecto al derecho de los trabajadores rurales agrícolas no registrados.
- Indicar medios para garantizar el cumplimiento de los derechos laborales asegurados por la Constitución a los trabajadores rurales agrícolas en los dos países;
- Proponer al Estado, a través de sus órganos auxiliares y a los sindicatos de trabajadores rurales agrícolas que realicen regularmente una fiscalización en lugares de trabajo para disuadir la contratación de trabajadores rurales sin registro.
- Realizar programas con cursos para información y capacitación para empleadores y trabajadores para conocer cuáles son los derechos

fundamentales que deben respetarse para garantizar un trabajo digno en el ámbito rural.

6. Formulación de la hipótesis

Existe ineficacia, es decir, no hay cumplimiento de los derechos fundamentales constitucionales y laborales en favor de los trabajadores rurales agrícolas no registrados en Argentina y Brasil, en razón de las falencias de la función fiscalizadora de los sindicatos rurales para garantizar los derechos laborales de los trabajadores.

7. Propuesta de la tesis

En sentido general, sabemos que las leyes son aprobadas por el Poder Legislativo, y refrendadas por el Poder Ejecutivo. En algunos casos, estas normas poseen efectos inmediatos y en otros, necesitan ser reglamentadas para ser aplicables en el sistema jurídico.

La efectividad de esas leyes está intrínsecamente relacionada con la actuación del Poder Público. Sin la presencia del Estado no hay cómo controlar los dictámenes de las normas. El Estado Social, por su propia naturaleza, "se caracteriza como un Estado intervencionista, requiriendo, por tanto, la presencia activa del poder político en las esferas sociales, ante la creciente dependencia del individuo, que necesita de la provisión de sus condiciones mínimas de existencia por parte del Estado". (Bonavides, 1980, pág. 228)

De este modo, para hacer que las leyes sean cumplidas por todos es necesario que haya una plena participación del Estado, a través de sus órganos de control en cada segmento de actuación, y en colaboración con los actores sociales, además de la propia sociedad.

Aún no se sabe por qué razones, tanto en la provincia de Buenos Aires, como en la región sisaleira de Bahía en Brasil, hay una gran cantidad de trabajadores rurales agrícolas sin registro, conforme estudios realizados por la OIT (Bertranou, Casanova, & Lukin, 2013), por el IBGE (Melo Quintslr, 2013), y por el DIEESE (Figueiredo, Mineiro, Santos, & Freitas, 2012), lo que representa una gran preocupación no sólo para el Poder Público, sino también para todos los involucrados, ya que las normas laborales son de orden público y, por tanto, son inflexibles.

Los datos presentados por la OIT, por el IBGE, y por el DIEESE, demuestran que los empleadores rurales actúan unilateralmente en el incumplimiento de las leyes laborales al flexibilizar las normas. La consecuencia resulta en la violación de los derechos fundamentales de los trabajadores rurales agrícolas.

En este sentido, se pretende en la presente, investigar por qué razones aún existe un gran porcentaje de trabajadores rurales agrícolas, en la provincia de Buenos Aires y en la región sisaleira del Estado de Bahía, Brasil sin registro, ya que las normas laborales son rígidas.

Como propuesta para esta tesis, pretendemos:

- Abordar y alertar a la función de fiscalización del Estado, a través de los órganos administrativos del Ministerio de Trabajo, para el fiel cumplimiento del Convenio nº 129 de la OIT, que trata de la inspección del trabajo agrícola, que fue ratificado por Argentina y no por Brasil.
- Sugerir la importancia de la ratificación del convenio por parte del Brasil, a fin de lograr la armonización de las normativas laboral internacional, en función del mecanismo de integración económica que se propone el MERCOSUR.
- Presentar las funciones de las representaciones sindicales que tengan como fin velar por la defensa de los intereses colectivos en lo que se refiere a las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores rurales agrícolas;

- Relevar y analizar datos estadísticos aportados por organismos estatales y privados respecto de los índices de trabajo no registrado rural en un país y otro y en las regiones de estudio seleccionadas y la información pertinente sobre las condiciones de trabajo en el sector agrícola.

8. Metodología

La metodología utilizada en la construcción de la tesis sobre los derechos fundamentales constitucionales y laborales de los trabajadores rurales agrícolas sin registro tiene como base la investigación bibliográfica, a fin de identificar las causas que dificultan o impiden los dispositivos legales establecidos por las Constituciones de Brasil y Argentina, y legislaciones específicas, realizando un análisis comparado con el fin de diagnosticar las violaciones a los derechos fundamentales en las relaciones de trabajo del trabajador rural agrícola no registrado, e indicar los mecanismos capaces de tornarlos eficaces.

Sobre los aspectos históricos de aparición de las normas, se identifica en qué momento histórico se pensó en su creación y cuándo efectivamente fue utilizada de forma certera. Se identificará además el aspecto histórico-evolutivo y el de su inaplicabilidad.

La investigación se basa en la revisión de la literatura y en la observación de material estadístico disponible sobre la situación laboral del trabajador rural en Argentina y Brasil. Los datos serán recogidos a través de los institutos reconocidos por los gobiernos y analizados cualitativamente. La interpretación de datos objetiva sintetizarlos y organizarlos para llegar a las soluciones de los problemas propuestos en el estudio, buscando formas más amplias de responder los problemas de la investigación. (Gil, 2001)

A su vez, se completa la información con datos cualitativos recopilados mediante una entrevista semiestructurada que se administra a directivos de los Sindicatos de trabajadores rurales agrícolas de Argentina y Brasil.

Como fuente documental para el desarrollo del presente plan de investigación que tiene por objeto final la elaboración de la tesis doctoral, se utiliza la legislación y se cuenta con el apoyo de la doctrina existente relacionada con el trabajo rural en Argentina y Brasil. Asimismo, se considerará el aporte de estadísticos de organismos como el Ministerio de Trabajo y Empleo, AFIP y también RENATEA, y sus equivalentes en Brasil, para conocer registros de trabajos Clandestinos Rural.

8.1 Instrumento

Entrevista semiestructurada a representante sindical de trabajadores rurales de Argentina / Brasil.

Funciones de las representaciones sindicales que tengan como fin velar por la defensa de los intereses colectivos en lo que se refiere a las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores rurales agrícolas.

8.2. Entrevista semiestructurada a representante sindical de trabajadores rurales de Argentina / Brasil

1. De acuerdo a su experiencia con trabajadores rurales en su país. ¿Considera Ud. que se respetan los derechos constitucionales fundamentales de éstos? ¿Por qué?
2. ¿Los trabajadores rurales de su país logran alcanzar una calidad de vida digna? ¿Cómo es la vida del trabajador rural argentino/brasileño?
3. En los últimos años, ¿Ha observado que las condiciones laborales y económicas de la población rural ha mejorado, empeorado o se mantiene estable? ¿Podría describir el panorama general?

4. En los últimos años, ¿se han conquistado nuevos derechos en materia laboral rural en su país? ¿Se han plasmado en leyes? ¿Podría ampliar por qué?
5. Las leyes laborales de protección del trabajador rural, considera Ud. que se cumplen en la región de la Provincia de Buenos Aires/Sisalera de Bahía? ¿Podría explicar por qué?
6. Las normas laborales del ámbito rural ¿consideran adecuadamente el bienestar de los niños de las familias de trabajadores? ¿De los ancianos? ¿Y en la práctica concreta éstas se cumplen? ¿Podría ampliar por qué?
7. Conoce Ud. la existencia de violaciones a los derechos de los trabajadores rurales sin registro en el sector agrícola en la región de la Provincia de Buenos Aires/sisalera del Estado de Bahía? ¿Podría describirlas?
8. ¿Considera Ud. que el marco normativo nacional proporciona a los Sindicatos de trabajadores rurales, les permite cumplir fehacientemente con sus objetivos y finalidades de protección al trabajador? ¿Existen limitaciones? ¿Cuáles?
9. Si existen irregularidades, ¿Cuáles cree Ud. que son sus principales causas y responsables?
10. ¿Qué aspectos en materia de derechos y condiciones laborales se destacan más en cuanto a diferencias percibidas con los trabajadores rurales en comparación a los trabajadores urbanos, de otras industrias o empleados públicos?
11. Ante los casos en que los trabajadores rurales son menospreciados y sus derechos vulnerados ¿Resulta eficiente el poder fiscalizador del Estado? ¿Y el de los Sindicatos? ¿Qué haría falta mejorar al respecto?

12. ¿Qué cambios normativos e institucionales considera Ud. que son necesarios para que los Sindicatos puedan garantizar fehacientemente el cumplimiento efectivo de los derechos fundamentales y laborales del trabajador rural en la región?

9. Antecedentes y fuentes de consulta

Hasta el momento presente, el relevamiento bibliográfico preliminar fue realizado en Argentina, a través de las bibliotecas de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, la Universidad de Quilmes, la Universidad Nacional de Cuyo, en la biblioteca digital de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la Revista de Estudios Rurales, Revistas Electrónicas de la UBA, Revista Laboral de la Sociedad Argentina de Derecho Laboral, Scielo. En relación a las obras literarias, encontramos y revisamos los autores Alejandra de Arce (2013), Mário Eduardo Ackerman (2007), Viridiana Díaz Aloy (2000), Mariana Batich (2004), Mayrian Matsuo Beltrão (2009), Marcus Dezemone (2007), David Duarte (2011), Antônia dos Reis Salustiano Evangelista (2010), Fabio J.F (2010), Luigi Ferrajoli (2001,2002 y 2004), Anete B.L. Ivo (1987), E. Maniglia (2009), Rodolfo Nápoli (1958), María Belén Nocetti (2011), Leandro Fabio Pastorino (2011), Benencia Roberto (2004), Miguel Antônio Sansó (2006), Marta Silvia Moreno (2009), y los citados en las referencias de este proyecto.

En Brasil, fue realizado el relevamiento bibliográfico preliminar en las bibliotecas digitales SEER - Sistema Electrónico de Edición de Revistas online disponibles en internet y a través de las Universidades Federales y Estatales, como la Universidad del Estado de San Pablo, Universidad Federal de Bahía, además de Revistas Interfaces Científicas, de la Universidad Tiradentes, Revista Brasileira de Direito , donde no encontramos obras referidas a los derechos fundamentales y laborales del trabajador rural para la futura tesis.

Así, el relevamiento bibliográfico de investigaciones en Argentina y en Brasil sobre el tema muestra que aunque existan estudios sobre trabajadores rurales,

estos estudios no tienen connotación específica de violación de derechos de los trabajadores rurales, en especial respecto a los trabajadores no registrados del área de la agricultura, lo cual nos hace creer que es un tema original e innovador para el campo científico y jurídico, razón por la cual tiene el objetivo de buscar soluciones para que se puedan extirpar estas violaciones del ámbito del derecho laboral, con la expectativa de disminuir las desigualdades sociales no sólo en las regiones investigadas, sino también en las demás regiones, que podrán usar este trabajo como parámetro de referencia en el combate a las desigualdades sociales.

10. Marco Teórico

La presentación del marco teórico es de gran importancia para cualquier investigación, porque permite al investigador organizar las ideas principales que fundamentarán el estudio en su camino hacia la confirmación o refutación de la hipótesis sugerida a partir del problema diagnosticado, y describe el estado actual del conocimiento del asunto de acuerdo con la búsqueda bibliográfica y la consulta a las personas consideradas referentes o conocedoras de la cuestión. (Biagi, 2012, pág. 63) A tales efectos, después de haber revisado y consultado algunas referencias bibliográficas sobre el tema de investigación, y de haber contextualizado la temática, se considera pertinente consultar algunas bases teóricas de autores, para fundamentar la presente Tesis.

El derecho agrario, concebido para la regulación de los fenómenos económico-jurídicos que surgen con relación a la explotación en las faenas agrícolas y pecuarias, nace en la segunda década del siglo XX, con la aparición del *ius agrarium* como rama científica del derecho de la mano de Giangastone Bolla, en Florencia, Italia, conductor de la Revista de Derecho Agrario. Entre sus antecedentes, se remontan a las legislaciones de la antigüedad compilaciones de normas agrarias, como la presente en la Ley de las XII Tablas. Sin embargo, este concebía a la tierra y todo lo que en ella crece, bajo el absoluto dominio de los terratenientes. Con la caída del imperio romano, se impone un derecho agrario que se identifica con un derecho feudalista, impuesto a espaldas de los

trabajadores rurales. “Pasa el feudalismo, adviene la revolución francesa y, porque el Derecho romano ejerce gran influencia sobre los políticos de la época, la concepción antigua de la propiedad renace, pero muere el Derecho agrario, yugulado por el extraordinario auge que el Código Napoleónico le proporciona al Derecho civil. Y tienen que transcurrir muchos años, más de cien para que aquél reviva, ahora con las características de un Derecho clasista, de un Derecho de los campesinos.” (Hernández, 2012, pág. 28)

Las dos escuelas agrarias que sostienen en la doctrina agraria, una que el principio del derecho agrario surge con el inicio mismo de la humanidad, y la otra, que comienza con la estructuración científico jurídica para la regulación de relaciones de aspectos económicos y técnicos del campo, resultan conciliables, ya que este se inicia cuando la humanidad giraba prácticamente en torno a la vida rural, y se estructura como fenómeno jurídico económico y técnico cuando las relaciones con la vida rural y urbana deben conciliarse, a fin de proteger la vida rural, en minoría numérica respecto de las grandes urbes.

La evolución del Derecho Agrario se asienta en tres fuerzas impulsoras: el capitalismo, que enfrenta fuerzas burguesas y liberales, la ruptura de la unidad del derecho privado napoleónico, y el surgimiento de los Estados como garantes del derecho social. Es por ello que la configuración del ius agrarium moderno se sitúa temporalmente en la segunda década del siglo XX.

En Latinoamérica, el énfasis se encuentra en la reforma agraria, destacando el énfasis en el problema de la distribución de la tierra y de la riqueza, y la lucha por sacar de la pobreza y del estado de postración a vastos sectores sociales. Los Principios Inspiradores que se sostienen en el siguiente Marco Teórico, son el Principio Anti-latifundista, dado que el acaparamiento de las tierras en pocas manos conduce a la marginalización del trabajador y la población rural, con graves consecuencias en lo social, lo económico y lo ambiental. También se sostienen en el presente marco teórico los principios de sustentabilidad, seguridad alimentaria, participación del Estado en el desarrollo agrícola, sobre todo para asegurar el bienestar de los trabajadores y diferentes actores,

derecho a la propiedad en una concepción civilista no ajena al interés general. (Jiménez, 2008); (Núñez, 1999); (Hernández, 2012)

CAPÍTULO I

1. La situación del ámbito rural en Mercosur, y en Argentina y Brasil.

En 2014 se firma la Decisión CMC N° 23/14 de nueva política de Cooperación Internacional del MERCOSUR, por la que se sostienen los siguientes objetivos y principios generales:

Los **objetivos generales** de la Política de Cooperación Internacional del MERCOSUR son:

- Fortalecer las capacidades de cada uno de los miembros del bloque.
- Profundizar la integración regional.
- Reducir las asimetrías entre los países del bloque.
- Intercambiar de manera horizontal conocimientos y experiencias, buenas prácticas, políticas públicas tanto al interior del bloque como con otras instancias de integración regional y extrarregional existentes.

En base a estos objetivos generales, la cooperación del MERCOSUR se rige por los siguientes **principios generales**:

- **Adecuación** con las prioridades de cooperación del bloque.
- **Solidaridad**, entendida como la consecución de los objetivos de desarrollo de todos los participantes.
- **Respeto** a la soberanía y no injerencia en los asuntos internos de los países; ninguna iniciativa o proyecto de cooperación puede avanzar en modo alguno sobre las potestades soberanas de los Estados.
- **Horizontalidad**: los países intervinientes establecerán sus vínculos de cooperación como socios en el desarrollo.
- **No condicionalidad**: la cooperación estará libre de condicionamientos de políticas de cualquier índole.

- **Consenso:** la cooperación en el MERCOSUR debe ser negociada, planificada y ejecutada de común acuerdo entre los socios cooperantes.
- **Equidad:** la cooperación debe distribuir sus beneficios de forma equitativa entre todos los participantes. Este criterio también debe ser aplicado en la distribución de costos, que deben ser asumidos de forma proporcional a las posibilidades reales de cada socio.
- **Beneficio mutuo:** la cooperación internacional del MERCOSUR debe buscar en todas sus instancias resultados favorables para las partes intervinientes.
- **Naturaleza complementaria** de la cooperación con los objetivos y políticas del MERCOSUR.
- **Respeto de las particularidades** culturales, históricas e institucionales de los socios en la identificación y la formulación de los programas y proyectos de cooperación.
- **Protagonismo de los actores locales** en todas las etapas de los programas y proyectos de cooperación. Se debe promover la utilización de saberes, instituciones y consultores técnicos del bloque.
- **Optimización de la asignación de recursos** para aumentar el alcance de los resultados de los proyectos de cooperación, estableciendo mecanismos que prioricen asociaciones con instituciones y especialistas regionales que permitan una mayor sustentabilidad.
- **Acceso a la información:** la información de los proyectos tanto en términos de diseño, como de ejecución y valorización de impacto, debe estar disponible para todos los participantes del mismo.
- Gestión centrada en el cumplimiento de los **resultados objetivamente verificables** establecidos por las partes para cada proyecto. (Cooperación en el Mercosur, 2014).

Los trabajadores rurales de Argentina y Brasil, aunque posean protección constitucional, se rigen por leyes propias, haciendo que en muchos casos, estos queden olvidados del sistema legal general del que gozan las demás categorías de trabajadores y, como consecuencia de esto, sus derechos sean infringidos por los empleadores rurales.

De este modo, se observa que si bien los trabajadores rurales no registrados del sector agrícola reciben salarios y mantienen relación de dependencia con el empleador, - cumpliéndose así los requisitos de un contrato de trabajo-, sin embargo, no tienen sus derechos garantizados como deberían. La consecuencia en términos prácticos es el fraude a la seguridad social, sin mencionar la pérdida de otros derechos sociales que favorecen al trabajador.

De acuerdo con un estudio de la OIT (Bertranou, Casanova, & Lukin, 2013), en Argentina el porcentaje de trabajadores no registrados alcanzó la magnitud del 34,6% en el período 2012-2013. Señala al trabajo doméstico, el trabajo rural, el trabajo por cuenta propia y el trabajo en la construcción y en el comercio como los sectores de mayor informalidad en el empleo, y marca a la región del Gran Buenos Aires como una de las responsables por este alto índice.

En Brasil, la situación del trabajador no registrado es todavía más grave. Los datos presentados en 2012 por el IBGE (Melo Quintslr, 2013) muestran que el 43,1% está en la informalidad. El problema es aún más grave en la región Norte, con 67,5% y la región Nordeste, con 74,5% de trabajadores no registrados. Entre las categorías de trabajadores no registrados están los domésticos, los trabajadores por cuenta propia, trabajadores de comercio, y los trabajadores rurales. Cabe destacar que de éste porcentaje, 27,6% son trabajadores rurales y trabajadores de la industria que no estaban registrados.

De acuerdo con los datos divulgados por el DIEESE, en el año 2010 el estado de Bahía presenta un porcentaje de 28,2% de trabajadores no registrados en la agricultura, ganadería y pesca. De este porcentaje, la región de sisal, presenta el sorprendente número de 66,99% de empleados sin registro. (Figueiredo, Mineiro, Santos, & Freitas, 2012)

Demostrada la existencia de violación de los derechos fundamentales de los trabajadores rurales, tomamos como punto de partida de la investigación de la futura tesis, el estudio de las causas que contribuyen a la ineficacia de los derechos que están legalmente vigentes en ambos países.

2. Historia y actualidad. El trabajador rural, contexto y regulación laboral.

De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, históricamente, la mayoría de la población mundial habitaba y laboraba en el ámbito rural. En la Actualidad, se estima que un 50 por ciento de la población global vive y trabaja en el medio rural, y el otro 50 en territorios urbanos. Asimismo, llama la atención sobre un desequilibrio notorio, dado que el sector rural alberga al 75 por ciento de los pobres del mundo.

En América Latina, este porcentaje es menor, dado que posee un auge agrícola, y llegó a disminuir la pobreza en su población rural de un 60 por ciento en 1980 a un 53 en 2010. Aunque la reducción de tasa de pobreza es mínima en comparación con la expansión y auge de la agricultura y el crecimiento agroexportador de la región. (Soto Baquero & Klein, 2012) Sin embargo, los pobres rurales, comparativamente con los pobres urbanos, son mucho más pobres y sufren de mayores necesidades sin cubrir. A su vez, de los pobres rurales, el 50% son indigentes, y esta pobreza es estructural y duradera. (Hertford, Echeverri Perico, & Moscardi, 2000, pág. 12) Las condiciones que generan estos altos niveles de pobreza, son, fundamentalmente, la precariedad y la informalidad en el mercado de trabajo.

En el campo, los mercados de trabajo funcionan de manera diferente. Las relaciones asalariadas son menos frecuentes que en las áreas urbanas, el trabajo familiar es muy común, los mercados de trabajo son a veces de tipo spot (es decir, se conforman para fines y momentos específicos), el empleo depende mucho de la agricultura y la ganadería, y la situación y condiciones del activo «tierra» (o propiedad agrícola) suele ser la principal preocupación, incluso antes que el empleo. [...] En el medio rural, la actividad dominante es la agricultura y la ganadería, que genera el 60 por ciento de los ingresos rurales. Esta actividad tiene algunos sectores modernos, prósperos y generadores de empleo, con salarios razonables y efectos multiplicadores en la economía rural. (Sector rural y desarrollo local en América Latina y el Caribe, 2012)

Sin embargo, en la gran mayoría de los casos, se trata de una agricultura tradicional, de baja productividad, poco articulada con la agroindustria, dependiente de tecnologías poco intensivas en capital y que utiliza mano de obra no calificada. Eso explica, en parte, los bajos salarios que se pagan y los ingresos limitados de los productores que dependen principalmente de ese tipo de explotaciones.

En los países del Mercosur, predominan niveles muy altos de polarización en la distribución del ingreso como regla general, que se eleva a niveles extremos en la sociedad rural, con vastas poblaciones de campesinos viviendo en paupérrimas condiciones. Solo dos países, Argentina y Uruguay, presentan, en la región, una distribución de ingresos menos polarizada y menor diferencia de productividad respecto del interior del sector agrícola y el nivel intersectorial. (Calderón, 1990, pág. 24)

Esta polarización, encuentra su explicación en los modelos de desarrollo que se han adoptado históricamente en la región. En el siglo XVIII y principios del XIX, Latinoamérica se basó en un modelo primario exportador, con mano de obra proveniente de migraciones intercontinentales (africanos) y fuerza de trabajo aborigen. Desde sus orígenes, esta relación se configuró sobre un sistema de remuneraciones exiguas, jornadas de trabajo extensas, condiciones de trabajo duras y difíciles. Asimismo, este sistema se valía, para garantizar la permanencia de la población en zonas rurales de: esclavitud, cláusulas de dependencia laboral por largos periodos, retenciones por endeudamiento, imposiciones de parte del Estado para los agricultores independientes pequeños.

Lentamente se fueron generando movimientos de trabajadores que presionaron para revertir sus lesivas condiciones de trabajo y que, paralelamente a cambios hacia formas contractuales salariales, lograron posiciones más favorables, aun cuando su situación seguía siendo fuertemente marginal. Sin embargo, los empresarios no cedieron en mantener un férreo control sobre la tierra, lo cual tuvo como respuesta un creciente proceso de colonización espontánea y algunos movimientos

sociales de acceso a la tierra. En todo caso, el resultado final fue la consolidación de una estructura agraria dualista, en la que unos pocos empresarios concentraban gran parte de las mejores tierras, destinándolas principalmente a la ganadería y cultivos de exportación; y un número creciente de indígenas y pequeños agricultores mantenían el control de una exigua superficie, la mayor de las veces con serias limitaciones ecológicas, produciendo alimentos para el autoconsumo y para el mercado interno. (Calderón, 1990, pág. 27).

Las pocas oportunidades laborales de los sectores urbanos, contribuyeron a evitar las migraciones de población rural, situación que hacia los años 30 fue modificada por el inicio de un proceso de industrialización en la región. Este proceso de industrialización, se planificó con base en la transferencia de excedentes productivos, de capital y de mano de obra del sector rural, que debía financiar al sector industrial. Así se configuró un escenario, que continuó desarrollándose patológicamente, contraponiendo ambos sectores productivos: El industrial, que logró retener el excedente y capitalizarse, y el rural, que, sin poder de negociación, sufrió una sistemática descapitalización y consecuentemente, empobrecimiento estructural. Ello condujo a migraciones de la población rural hacia áreas urbanas, que, hacia los años 50, al no poder ser absorbidas por la industria, se instalaron en amplios cordones de miseria, típicos de las metrópolis latinoamericanas. En el modelo económico neoclásico, las zonas rurales fueron restablecidas como parte de la estructura del modelo primario exportador, que responde a la división internacional del trabajo, por la cual Latinoamérica satisface la demanda de los países desarrollados con la producción de alimentos básicos. (Calderón, 1990, pág. 28) En este contexto, la población rural se reduce en su condición de marginalidad y pobreza. Resulta asimismo llamativo, que el proletariado latinoamericano, a diferencia del de Europa, que ha surgido de las primeras industrias, en esta región surge de centros de producción minera y agropecuaria: En Brasil, de plantaciones de azúcar y café y en Argentina, del sector agrario. (Vitale, 2009, pág. 53).

Asimismo, la polarización económica extrema en las zonas rurales de la región, responden también a resabios de estructuras históricas que datan del período

de la conquista. La Corona española, retribuía a los colonizadores con la apropiación individual de enormes superficies de tierra, con un interés inicial en la minería. Con la práctica de la encomienda, se asignó a algunos conquistadores, la responsabilidad de la educación y protección de grupos de indígenas. En la práctica, se asignaba trabajo de los aborígenes en determinadas extensiones de tierra a cambio de protección. Allí, estos trabajaban y pagaban tributo, con lo que, durante los primeros siglos de la colonia, se utilizó la encomienda como instrumento de usurpación y esclavitud. Así, con el crecimiento de la actividad económica de agricultura, hacia el siglo XVII, se configura formalmente una estructura de explotación, que favorece a los encomenderos, que un siglo más tarde, llevó al despojo de los aborígenes de sus tierras, concentrándolos en pequeñas reducciones. Ya en el siglo XIX, se consolida el complejo característico de latifundios y minifundios, en el que coexisten las grandes haciendas con múltiples pequeñas explotaciones. Pese a los procesos de modernización de los sistemas agrícolas a partir de los años '60, este dualismo persiste hasta la actualidad. Hacia 1980, se incrementó la expandió la frontera agrícola, con incrementos de superficie notables, como en Brasil, que entre 1970 y 1980 expandió su superficie agrícola en 75 millones de hectáreas, que se mantienen en manos de grandes capitales, expulsando de este estrato a los pequeños agricultores. (Calderón, 1990, pág. 32).

La actividad rural en la región, sin embargo, no debe enfrentar adversidades significativas a nivel ambiental como otras regiones, dado que cuenta con abundantes recursos naturales. En América Latina habita solo un 10% de la población mundial, y ésta posee el 23% de las tierras cultivadas, el 46% de los bosques tropicales y casi un tercio del agua dulce del planeta. A su vez, la agricultura del sector rural es altamente heterogénea y se posiciona entre las principales del mundo. Esto proporciona ventajas competitivas de altísima relevancia, y brinda la posibilidad de un excedente que puede ser volcado a distintas áreas de desarrollo. Sin embargo, las escasas reformas agrarias realizadas han resultado ampliamente insuficientes e ineficaces para revertir la desigual distribución de la tierra, y los efectos negativos de las políticas de sustitución de importaciones han generado serias dificultades para los

productores rurales, que la ausencia de políticas públicas de apoyo al sector han agravado. (Hertford, Echeverri Perico, & Moscardi, 2000, pág. 11).

Lo que caracteriza a la distribución rural de Latinoamérica en general, es la extrema concentración de la tierra en manos de grandes capitales, y la alta proporción de pobres en zonas rurales. Los países en desarrollo con mayor índice de concentración de la tierra son Perú, México, Paraguay, Venezuela, Argentina, Colombia y Brasil, seguidos de Guatemala, Panamá, Fiji y otros. La falta de una distribución justa y equitativa de las tierras, dificulta ampliamente cualquier intento por revertir la pobreza estructural de un sistema productivo rural excluyente, que mantiene limitado al trabajador rural, quien carece de poder de negociación, de representación, y de estructuras organizativas para presionar a la autoridad o a los grupos económicos contrarios a sus intereses. (Calderón, 1990, pág. 32).

3. El contexto argentino

La historia del trabajo rural en Argentina, así como en toda América, puede ser estudiada en seis distintas etapas: 1) Época precolombina o aborígen - fue la forma originaria y común a todo pueblo del mundo que tenía como meta la organización gentilicia y se muestra en las condiciones de trabajo de los pueblos indígenas más avanzados de México y de Perú, durante el período inmediatamente anterior a la llegada de los españoles; 2) Época del descubrimiento, conquistas y colonización - en éste período los españoles llegan con el objetivo de adquirir una gran fortuna para poder disfrutar de ésta en su tierra natal. Los indios fueron los que más padecieron, porque fueron despojados de sus tierras y sus bienes, además de sufrir la privación de sus libertades; 3) Época del Virreinato del Río de la Plata - hubo una gran transformación del sistema económico, que velaba por el interés de la propia España, posibilitando al Río de la Plata mayor participación política frente a las autoridades del Perú. Sin embargo, al final del siglo XVIII, los ganaderos y agricultores comenzaron a reclamar por el libre comercio, disminuyendo aún más el poder de compra de los trabajadores, lo que obligó al gobierno de Buenos Aires a preocuparse y comenzar a organizar el trabajo del campesino;

4) Época de la independencia nacional - los trabajadores del Río de la Plata vieron las primeras medidas favorables después de la Revolución de Mayo, cuando el gobierno comenzó a pensar de modo más humanitario, decretando la libertad personal y económica de los trabajadores, posibilitándoles la oportunidad de comercializar los productos fruto de su labor; 5) Época de la organización patria - período en que el país se comienza a organizar, lo que posibilitó la diversificación de la economía, haciendo más difícil la explotación del trabajador rural. En 1853, nace la Constitución Nacional, que entre otros objetivos se encargaría de promover la libertad y el bienestar general de todos los hombres. Después de esto, comienzan a surgir las primeras organizaciones obreras ligadas a las industrias, dejando de lado a los agricultores; y, 6) Época contemporánea - significa para la Argentina grandes transformaciones, donde comienza a reconocer los derechos de esos hombres por medio de la aprobación de legislaciones que protegen al trabajador y el reconocimiento del Derecho Laboral en el país, lo cual trae conquistas para el trabajador de forma general, en especial, el trabajador rural, con la creación de estatutos como el Estatuto del Peón de 1944, siendo incorporado al Nuevo Régimen de Trabajo Agrario en 2011 a fin de proporcionar mejores condiciones de trabajo en el campo. (Nápoli, 1958, pág. 18) (INFOJUS, 2011).

El Sistema Laboral Argentino ha tenido un punto de inflexión muy grande a partir de los años '90. Entre 1930 y 1989, se dio un periodo en el que Argentina, tras la crisis de 1930, realizó profundos cambios a nivel económico, político, social, cultural y social. Por esos años, el modelo agroexportador vigente en el Argentina dejó de ser viable y la mayoría de los países debieron cerrar sus fronteras económicas, lo que produjo el resquebrajamiento del mercado internacional.

Delpech Fernández, Grenetto, Asta, Currao, & Coppia, (2006) señalan que durante la etapa del peronismo, el sistema de relaciones laborales, adquirió características específicas en relación al sindicalismo y la sanción de leyes. En relación a las leyes del ámbito laboral, fue durante el gobierno de Perón que se implementaron, garantizándose como derechos del trabajador beneficios como las vacaciones pagas, el aguinaldo, la indemnización por despidos y la

jubilación. Además, se creó el Estatuto del Peón Rural, los Tribunales de Trabajo y las Convenciones Colectivas de Trabajo.

Tras el derrocamiento de Perón con el golpe militar del año '55, se sucedieron distintos gobiernos que dieron curso a diferentes modelos económicos de industrialización interna. Ya a mediados de la década del 70`, convergen ejerciendo una gran influencia, varios factores a escala mundial y local (crisis del petróleo, influencia de la guerra fría, terrorismo de Estado con la dictadura militar en 1976, etc.), produciendo el quiebre del Estado Benefactor. Esta segunda crisis estructural del capitalismo, significó un cambio en el área económica y político social del país. El mercado nacional, bajo influencia del liberalismo, se abre a la economía internacional afectando la industria nacional. Consecuencia de ello han sido: cierres de fábricas, despidos masivos, disminución de afiliados a sindicatos, un mercado de trabajo desequilibrado y un mayor incremento de desocupados. (Delpech Fernández, Grenetto, Asta, Currao, & Coppia, 2006).

A partir de la década del '90, con el surgimiento del menemismo en Argentina, se consolida la desindustrialización y una mayor apertura económica, lo que fue acompañado por una reforma de la legislación laboral que introdujo la flexibilización del mercado con la intención de reducir costos. Consecuencia de ello fue mayor crecimiento del desempleo, el avance de la precarización de las condiciones de trabajo y la reestructuración del movimiento sindical. De acuerdo con los autores, el proceso de privatización que se dio durante ese periodo, determinó una fuerte restricción del ámbito de acción del Estado y modificó la relación capital-trabajo en la medida en que disciplinó al asalariado: estimuló los retiros voluntarios, estigmatizó la figura del "viejo" trabajador, produjo una ruptura de la identidad colectiva preexistente, con el objetivo de crear una nueva, asociada a la empresa y redujo el número de empleados a través de los despidos.

Por otra parte, la integración del país en el mundo y el achicamiento del Estado, profundizaron el aumento del desempleo, una mayor precariedad de las condiciones laborales y en la flexibilización laboral. Las medidas

desreguladoras del mercado de trabajo, empleadas por el gobierno, crearon nuevas formas de empleo y la marginación y hasta exclusión de amplias franjas de la sociedad. Los autores describen estas nuevas modalidades de empleo como:

La sanción de distintas leyes durante la última década creó una nueva relación entre capital y trabajo, signada por la legalidad de la explotación de la fuerza laboral como consecuencia de la complicidad entre el Estado y los empleadores. Esto es lo que constituye nuestra premisa básica: el capital prevalece sobre el trabajo. [...] La reforma de la legislación laboral abrió las puertas a la existencia de nuevas formas de emplear la fuerza de trabajo, las cuales evidencian las condiciones de inferioridad del trabajador con respecto a su empleador. La precariedad, ya sea en términos de la cantidad de horas trabajadas, la duración de los contratos o el cumplimiento de las normas legales, deterioró algunos o todos los derechos con que contaba un trabajador hasta entonces a la hora de establecer una relación contractual. Algunas de las nuevas modalidades de empleo son: trabajo por plazo fijo, trabajo eventual o temporario, trabajo por temporada, trabajo por equipo, trabajo a tiempo parcial, trabajo por pasantía, trabajo por período de prueba. Ahora son empleos precarios e institucionalizados. (Delpech Fernández, Grenetto, Asta, Currao, & Coppia, 2006).

De acuerdo con las estimaciones del Banco Mundial, Argentina ha logrado un desarrollo económico importante en los últimos años. El gasto social ha sido prioritario, con programas, como la Asignación Universal por Hijo y un mayor alcance de cobertura del ámbito previsional. (Argentina: panorama general, 2014) De acuerdo con Damill & Frenkel, (2013), el nuevo escenario que se da en Argentina a partir de 2001, se dio en un marco social y político altamente conflictivo, en el que se han dado múltiples contradicciones. En medio de ello, se anula la vinculación del dólar a precios y tarifas internos del país, se instrumentan varios planes sociales para mitigar el impacto negativo de la crisis, y se logra contener el abrupto movimiento declinante del empleo que se venía arrastrando de periodos anteriores. Se da paso a una recuperación

económica y asume un nuevo gobierno que da inicio a un largo periodo que continúa hasta la actualidad de lo que se dio en llamar Kirchnerismo. En este marco se dio un lustro a partir del 2003 con un desempeño macroeconómico de amplia mejora, en el que se dio un perceptible repunte de la ocupación laboral y los salarios, en un marco de alta rentabilidad de los bienes producidos por el país, que luego se deterioró en una grave desmejora. A nivel laboral y de actividad productiva y económica, se responde a ese esquema, con un periodo desde 2002 hasta 2007 positivo, con momentos de declinación en 2009 y 2012, y el inicio de un periodo de desaceleración a partir de la crisis de las hipotecas sub prime en EEUU en 2007 y de la fuerte caída en los precios de las commodities que Argentina exporta. Argentina, pese a la crisis internacional, resiste en función de su baja dolarización interna y su aislamiento de los mercados financieros, a pesar de ser estos aspectos conflictivos. Sin embargo, a partir de 2008 se produce una fuerte aceleración inflacionaria (no registrada en las cifras oficiales) seguida de recesión local, empeoramiento de las cuentas públicas, caída del PBI, y menor dinamismo económico, lo que termina afectando los niveles de ocupación laboral. Observa el autor que:

Es destacable el hecho de que la tasa de ocupación de tiempo completo en el sector privado se encuentre, a fines de 2012, en un nivel muy semejante al observado al inicio del lustro, lo que establece un franco contraste con el incremento acelerado del quinquenio anterior. Sin embargo, la tasa de desempleo abierto urbano continuó descendiendo, aunque mucho más lentamente. En este caso, dado el relativo estancamiento del dinamismo del sector privado en lo que se refiere a la generación de ocupaciones, es el aumento del empleo público lo que explica en gran medida la declinación de los indicadores de subutilización de la mano de obra. Los hechos estilizados en materia de generación de empleo son entonces, en este segundo lustro, marcadamente diferentes de lo que habían sido en el precedente. (Damill & Frenkel, 2013, pág. 22).

El autor señala un leve aumento del empleo formal, a pesar del cuadro desalentador general, coincidentemente con Alonso & Di Costa, (2011) quienes señalan una caída del desempleo en 2007 que no fue acompañada de una

recuperación del trabajo formal suficientemente dinámica. (Alonso & Di Costa, 2011) La dependencia del país de la importación de energía y los efectos negativos de las políticas de precios, generaron fragilidad económica y aceleraron los procesos inflacionarios. Los efectos de la informalidad en el mercado laboral argentino, son particularmente fuertes:

- Los trabajadores informales tienen una mayor exposición al desempleo. Incluso en el escenario actual de descenso, su tasa de desocupación es cinco veces más alta que la de los trabajadores registrados. Seis de cada diez desocupados estaban en negro en su último empleo; entre los que tienen experiencia laboral, la proporción es siete de cada diez.
- Los trabajadores informales están afectados por una gran inestabilidad: tres de cada cuatro no alcanzan a cumplir un año en el empleo; uno de cada dos tiene un trabajo de menos de tres meses de duración.
- El ingreso promedio de los trabajadores informales es casi la mitad que el que ganan los trabajadores en blanco. (SEL Consultores, 2007).

Luego de 2011, se da un contexto económico altamente problemático, (desequilibrios externo y fiscal, declinación sostenida de las reservas de divisas del Banco Central, brecha cambiaria, inflación elevada, estancamiento productivo y del empleo privado, incertidumbre acerca del curso futuro de la economía). Los planes de contención social por medio de asistencia económica a los sectores más afectados dan cierta contención a la situación, sin embargo, la desmejora del poder adquisitivo del sector asalariado, en función de la inflación, han producido una desmejora sostenida del sector trabajador argentino. (Damill & Frenkel, 2013) En cuanto a las condiciones laborales más actuales, cabe agregar la apreciación de Mera, Massia, Anchorena, & Gismondi, (2014).

El mercado de trabajo se encuentra en una situación de poco o nulo avance en los últimos años, específicamente entre 2008 y 2013. A pesar de una ligera disminución en la tasa de desempleo, ésta no revela un

crecimiento en la tasa de empleo sino una caída en la búsqueda laboral por parte de la población. La participación del trabajo asalariado privado sobre el total es cada vez menor, y los salarios reales sufrieron una leve caída desde 2011. La imagen se completa con un elevado porcentaje de trabajadores que no acceden a derechos laborales como obra social, vacaciones y son remunerados por debajo del salario mínimo. (Mera, Massia, Anchorena, & Gismondi, 2014, pág. 1).

Los autores, en cuanto a la precariedad laboral, analizan indicadores que arrojan información acerca del estado de la cuestión: un 28% de los trabajadores asalariados argentinos recibe una remuneración por debajo del salario mínimo vital y móvil. Asimismo, un tercio de éstos no posee obra social, aguinaldo, no se le realizan descuentos jubilatorios, ni goza de vacaciones pagas. Esto se da con mayor frecuencia en las mujeres y en la mitad de los ocupados jóvenes y de los trabajadores con estudios secundarios incompletos. En cuanto al poder adquisitivo de los salarios, el sector cuentapropista es el único que se ha sostenido estable, mientras que los asalariados del sector público se han visto mayormente afectados. En términos comparativos, los autores encuentran que, "los trabajadores brasileños tienen un poder adquisitivo en término de los bienes seleccionados que es 5% mayor que el de los argentinos. Más alejados, los chilenos pueden comprar 54% más de canastas, los españoles 181% y los estadounidenses 462%." (Mera, Massia, Anchorena, & Gismondi, 2014, pág. 10) La problemática en Argentina no es solo relativa al empleo informal, sino a la amplia disparidad de ingresos en distintos sectores formal e informal.

A pesar de que la globalización, a la cual Argentina no era ajena, que ha elevado las exigencias de las empresas agrícolas en sus sistemas de producción, los avances no han alcanzado al tratamiento de la mano de obra, que continúa profundizando una tendencia de tercerización y sustitución de trabajadores permanentes por personal temporario, que alcanza aún a la mano de obra especializada. Esta tendencia responde a una flexibilización del trabajo rural, y no necesariamente a necesidades estacionales del ciclo productivo. Los trabajadores permanentes ocupan cargos de supervisión y control con más alta

remuneración; puestos que en establecimientos medianos pueden ser ocupados por trabajadores familiares. En los últimos años, la tendencia en crecimiento es la intermediación y tercerización de la mano de obra, siendo la flexibilidad la figura clave que procura elegir la organización productiva para resolver sus necesidades de capital y de mano de obra barata. (Neiman, Los estudios sobre el trabajo agrario en la última década: una revisión para el caso argentino, 2010) No se ha logrado incorporar las masas campesinas al desarrollo económico y social, ni la redistribución de la tierra, ni una modernización tecnológica uniforme, tampoco se ha se cuenta con subsidios agrícolas suficientes, ni se ha logrado elevar la calidad de vida rural. Entre las causas por las cuales no se han alcanzado estos objetivos, se encuentran las limitaciones que imponen los altos costos que imponen las extensas áreas de cobertura, limitaciones de las instituciones locales para la correcta distribución de beneficios, fragilidad de servicios técnicos y administrativos para impulsar cambios y reformas, y ausencia de eficiencia y transparencia en la coordinación administrativa para gestión de proyectos de inversión para el desarrollo rural. (López, 2008).

De acuerdo con Maurizio (2014), Argentina y Brasil se destacan entre los países latinoamericanos, por haber desarrollado un progreso importante en la mejora de las condiciones laborales a fin de revertir las tendencias de informalidad y precariedad originadas en los años ´90. (Maurizio, 2014) Sin embargo, la situación de Argentina en materia laboral, no ha logrado superar su situación de fragilidad, generándose lo que Marsollier (2012) denomina “un escenario de profundas transformaciones económicas y sociales de carácter estructural que develan un mercado laboral en crisis, cuyo indicador más evidente es la mayor precarización de las condiciones laborales” (Marsollier R. , 2012, pág. 3). Para la autora, continúan siendo conceptos cotidianos de la realidad laboral argentina fenómenos como la inestabilidad laboral, el subempleo, la ambigüedad de rol, la sobrecarga ocupacional, y el conflicto. Asimismo, este contexto dificulta el desarrollo de los profesionales, al darse una inserción laboral con condiciones poco favorables al trabajador. Cabe mencionar, que en este y otros estudios de Marsollier, se establecen relaciones entre esta situación laboral inestable generalizada, y los riesgos psicosociales a

los que se expone el trabajador argentino actual: estrés, burnout, mobbing , etc. Ante ello, las modificaciones que se han dado en los últimos años a la legislación laboral, solo han redundado en una mayor precarización de las condiciones laborales, en detrimento de la integridad física y psíquica del trabajador, sosteniendo un marco normativo que da lugar a una dinámica del mercado laboral que atenta contra la salud de éste. (Marsollier R. G., 2009, pág. 18).

4. El contexto en Brasil

En Brasil, vale la pena señalar que antes de la era industrial no existía una normativa sobre las jornadas de trabajo y por lo tanto los empleadores actuaban libremente. Tenía como referencia a la Ley de las Indias (1593), que regía en España. Posteriormente, un decreto de 1891, que regía sólo en el Distrito Federal, disponía que la jornada de los niños era de nueve horas y de las niñas, de ocho horas. Las horas de trabajo fueron siendo distinguidas según las categorías profesionales. En 1932, fue emitido el primer decreto limitando la jornada laboral de ocho horas para el comercio y los industriales, la que al año siguiente se extendió a otros trabajadores. Se reguló la unificación de las jornadas de trabajo en 1940 para todas las categorías de trabajadores, a ocho horas diarias y 48 horas semanales. En 1943 surge la primera legislación laboral que, entre otras cosas, también regula la jornada de trabajo. Por lo tanto, con la promulgación de la actual Constitución de 1988 se definió la jornada de trabajo a las 8 horas diarias y 44 horas semanales. (De Barros, 2012, pág. 522).

En cuanto a aspectos macroeconómicos, Brasil ha experimentado en los últimos 30 años, una profusión de transformaciones positivas y negativas, alternadamente. La segunda mitad de los años ´80 y principios de los ´90, una serie de planes heterodoxos han llevado al país al fracaso en términos de crecimiento económico, lo que impidió controlar la inflación, redujo el PBI y generó fuertes conflictos económicos y sociales. No fue sino hasta 1994 que el país logra exitosamente combatir la hiperinflación y lograr cierta estabilidad.

Este proceso de estabilización, dio lugar a la recuperación del crecimiento económico en Brasil los años siguientes. Sin embargo, este crecimiento no fue lineal, sino que entre los años 1994 y 1999, se dieron comportamientos recesivos de la economía. La inestabilidad de la moneda y los efectos de las crisis internacionales (Crisis mexicana de 1995, crisis asiática en 1997 y crisis rusa en 1998), afectaron el tipo de cambio en Brasil, que sufrió una corrida cambiaria en 1999. Después de un largo período de estancamiento económico, el PBI comienza a incrementarse satisfactoriamente desde 2004, logrando alcanzar un 6% en 2007.

Naturalmente, estos movimientos espasmódicos de la economía brasileña, han tenido efectos en el mercado laboral. Durante el periodo de 1985-2007, Menezes Filho & Scorzafave, (2010) analizan los índices de crecimiento del PBI de Brasil en su evolución a lo largo de los años. Este tuvo un crecimiento fuertemente interrumpido en 1991 y ha tenido altas y bajas intermitentes. En un seguimiento de la misma línea de tiempo, dando seguimiento a la tasa de participación en la fuerza laboral, se ha observado un movimiento del mercado laboral que se desarrolla con total independencia del crecimiento del país a nivel macroeconómico. El ejemplo más claro es que los índices de participación en la fuerza laboral de 1991 han tenido un crecimiento sostenido que no condice con la fuerte baja del PBI.

Sin embargo, debe hacerse una distinción entre cantidad y calidad de trabajo. A lo largo de la evolución del mercado laboral brasileño de los últimos 25 años, diferentes grupos socioeconómicos se han visto afectados de distinta manera respecto de su participación en la fuerza laboral del país. No se debe ingorar que el porcentaje de informalidad en el mercado brasileño es cercano al 50% de los trabajadores de este país. Las causas de tan altas tasas de informalidad, como se ha visto, no guardan tanta relación con cuestiones macroeconómicas, sino con aspectos políticos, en cuanto al diseño de políticas públicas, e institucionales, dentro de lo cual resulta indispensable considerar el rol del Derecho. (Menezes Filho & Scorzafave, 2010).

En 1988 Brasil ha adoptado una nueva Constitución, que reviste mayores regulaciones laborales. Entre las medidas relacionadas con el mercado de trabajo, se reduce el máximo de horas de trabajo por semana 48 a 44 horas, y se incrementa la prima por horas extraordinarias del 20% al 50%. La nueva Constitución también modificó el sistema obligatorio de cuentas de ahorro individuales (Fundo de Garantía por Tiempo de Servicio- FGTS), creado en 1966. Antes de las reformas, la ley exige a los empleadores a depositar el 8% de los salarios de los trabajadores en una cuenta de propiedad de éstos. En caso de separación, los trabajadores podrían retirar los fondos acumulados (además de la tasa de interés). Además, si una empresa inició una separación que tuvo que pagar una multa equivalente al 10 por ciento del monto acumulado en la cuenta. Como parte de la reforma de 1988, esta pena se aumentó a 40 por ciento, elevando considerablemente el costo de despedir a un trabajador "(Djankov y Ramalho, de próxima publicación). Menezes Filho & Scorzafave, (2010) cotejan estos cambios con los índices de informalidad en Brasil antes y después de 1988, encontrando que no se han dado efectos de la nueva Constitución Brasileña en el sector laboral informal. (Menezes Filho & Scorzafave, 2010, pág. 16).

La informalidad en el mercado laboral brasileño ha tenido fluctuaciones a lo largo de los años. Si bien ésta cayó perceptiblemente en los años ochenta, en los '90 comenzó a incrementarse la informalidad para alcanzar su máximo valor a un 53,4% en 1999. Después de 2002 se ha dado un proceso reversivo, logrando que la tasa de informalidad se reduzca 4 puntos porcentuales, alcanzando el 47,5% de los trabajadores en 2007 (unos 39 millones de trabajadores). (Menezes Filho & Scorzafave, 2010, pág. 15).

Durante el periodo comprendido entre los años 2003-2008, tanto en la Argentina y Brasil el proceso de formalización, si bien lento y leve, se llevó a cabo en un contexto de fuerte recuperación del salario mínimo. Por lo tanto, Maurizio (2014) concluye que durante la década de 2000 Argentina y Brasil han pasado por un proceso de formalización del empleo en un contexto de alto nivel de generación de empleo y más - no menos - controles y regulaciones sobre las condiciones de trabajo en comparación con períodos anteriores. Contrario a

esto, en la década de 1990 el proceso de flexibilización se llevó a cabo junto con un aumento de la informalidad y una reducción de la elasticidad de la producción-empleo. Todos estos patrones han fundado dudas, con base en la investigación de la autora, sobre los argumentos que exigen una flexibilización más profunda y la desregulación del mercado de trabajo para aumentar la demanda de trabajo y la formalización. (Maurizio, 2014) A pesar de ello, el índice de informalidad continúa siendo alarmantemente alto en ambos países.

Del análisis de encuestas llevadas a cabo por el Instituto Nacional de Estadísticas de Brasil durante un periodo comprendido entre 2003 y 2011, y de los datos obtenidos en la Pesquisa Mensal de Emprego (PME); se ha encontrado que Brasil presenta a 2011 un crecimiento de la participación del empleo formal dentro de la tasa de crecimiento de empleo total del país, de un 10% respecto del año 2003. (de 51.6% a 61.6%). Argentina, durante el mismo periodo ha presentado un crecimiento del 11% (de 38.6% en 2003, a 49.7% en 2011). Estos niveles de participación del empleo formal en el crecimiento del mercado laboral de ambos países, son únicos en Latinoamérica. También se destacan durante este periodo Argentina y Brasil en cuanto a la disminución de la precarización laboral, con 5% en Argentina y 6% en Brasil. Este proceso de formalización laboral se ha dado, en ambos países, en un contexto de fuerte crecimiento del empleo en general. Este desarrollo se ha dado con periodos en que el flujo se a llegado a invertir, generándose más excluidos del sector laboral informal que ingresantes a éste. El sector de mayor ingreso a la formalización fue dado, tanto en Argentina como en Brasil, por el empleo en el sector público. (Maurizio, 2014).

El análisis empírico de Maurizio (2014) confirma también que el aumento de la participación de los asalariados registrados en el empleo total ha sido un fenómeno positivo, no sólo porque ello induce a salarios más altos y la expansión de la cobertura del sistema de seguridad social, sino también porque produce efectos de igualación. Finalmente, concluye la autora que:

A pesar del fuerte proceso de formalización experimentado por estos países durante la última década, los asalariados informales aún

representan una proporción importante del empleo total, lo que demuestra que estos mercados de trabajo todavía exhiben un alto grado de precariedad laboral. Por lo tanto, las tendencias de la generación de empleo con la formalización laboral y la consolidación de las instituciones laborales deben continuar fortaleciéndose. Al mismo tiempo, estas políticas deben complementarse con el desarrollo de un sistema integral de protección social basado no sólo en los pilares de la seguridad social tradicionales, sino también en los componentes no contributivos. Por último, todas estas políticas deben enmarcarse dentro de una estrategia de desarrollo económico a largo plazo construida sobre la base de una estructura productiva integrada que lleva a una alta eficiencia, la competitividad sistémica y el aumento de la demanda de trabajo. (Maurizio, 2014, pág. 19).

Los investigadores Ulyssea & Szerman, (2006), analizando los datos recogidos por la Pesquisa Mensal do Emprego (PME) en Brasil, también han estudiado los patrones de movilidad de los trabajadores que se mueven dentro del sector informal e informal a fin de estimar los determinantes de la duración de empleo en ambos sectores. Los autores encontraron que la escolaridad y la edad están asociados con la duración de empleo en el sector formal. También hallaron que si el trabajador no logra salir del empleo informal dentro del plazo de los primeros 3-6 meses hacia el sector formal, existe una alta tasa de riesgo de que permanezca en el sector informal un largo tiempo.

Los autores han observado, que el mercado laboral brasileño se encuentra fuertemente segmentado, y que las diferencias de sueldos y beneficios entre trabajadores formales e informales se mantienen altas, a un nivel creciente y preocupante.

Esta asociación entre la segmentación y los diferenciales salariales del mercado laboral está basada en la suposición de que los empleos formales están sujetos a un régimen sin precios establecidos, y de y que existen barreras de entrada en el sector formal (debido, por ejemplo, a la existencia de sindicatos o regulaciones muy restrictivas del mercado de trabajo). En este

contexto, se da frecuentemente la situación de que dos trabajadores completamente homogéneos - tanto en términos de productividad y preferencias - reciban salarios diferentes dependiendo de qué sector están ubicados. (Ulyssea & Szerman, 2006).

La informalidad laboral no describe un fenómeno único, sino que, en diferentes sectores de actividad, va adquiriendo distintos significados. En Brasil, el sector agropecuario presenta una tasa muy alta de informalidad, que ha decrecido muy poco entre 1985 y 2007 (de 90% a 80%). El sector industrial, en los años '80, presentaba unos niveles de formalidad alrededor del 30%, porcentaje que se elevó hasta alcanzar un 50% en 2002, lo que señala al sector industrial como el más afectado por el crecimiento de la informalidad en los años '90 en Brasil. Este crecimiento se vio reforzado por prácticas de tercerización, una política por la cual, en función de reducir costos, los empleadores despiden empleados afectados a actividades como limpieza, seguridad, etcétera, y contratan, para esas actividades a empresas especializadas en esos servicios. Muchas veces, se ha dado, que los mismos empleados despedidos de una empresa, son tomados por otra empresa, ésta última especializada en servicios que aquélla contrata bajo la modalidad de tercerización. De esta manera, y dado que, muchas veces, estas empresas de servicio contrata al personal como trabajador informal, se ha dado un desplazamiento de un amplio grupo de trabajadores del sector formal al informal. (Menezes Filho & Scorzafave, 2010, pág. 20).

En relación a la pobreza, las cifras son bastante diferentes. Brasil ha logrado entre los años 1985 y 2007 un descenso importante en la tasa de pobreza, de un 33% de familias pobres, a un porcentaje cercano al 17%; Factores que colaboraron con la disminución de la pobreza en Brasil han sido los planes de estabilización de la inflación y el aumento de los salarios. Entre 1987 y 1989, sin embargo, la pobreza volvió a niveles cercanos al 35% con el retorno de la inflación y se mantuvo estable hasta 1993, cuando empezó a descender. En 1993 y 1995, otro plan de estabilización fue implementado con éxito, haciendo descender el nivel de pobreza significativamente y entre 2003 y 2007, los programas de transferencia condicional de efectivo, junto con un mercado

laboral en auge y aumentos reales de los salarios mínimos han ayudado a reducir la pobreza de manera notable. (Menezes Filho & Scorzafave, 2010, pág. 20).

Recientemente se ha investigado la relación entre la informalidad y la desigualdad en Brasil. El impacto de la segmentación del mercado laboral y, en particular, la segmentación formal-informal, tiene importantes consecuencias en términos de desigualdad. Si bien las tasas de informalidad tienden a disminuir, las diferencias de ingresos entre los dos sectores están aumentando y este hecho está contribuyendo a la profundización de la desigualdad en Brasil. Entre 2002 y 2005 hay un aumento en la brecha salarial controlada entre los trabajadores formales e informales, lo que contribuye a un aumento de la desigualdad en ese período. La diferencia salarial formal / informal en Brasil en la línea de tiempo, muestra que la brecha disminuyó de manera constante hasta el año 2001, pero se ha mantenido estable o incluso ligeramente creciente en el últimos 10 años. El factor de distinción por excelencia en materia salarial, está dado por la educación, lo que genera el mayor porcentaje de diferencia salarial. (Menezes Filho & Scorzafave, 2010, pág. 30).

Las consecuencias de la flexibilización laboral se hacen evidentes en el estudio de múltiples casos que ofrecen ilustración de la realidad que le toca vivir a millones de trabajadores brasileños. Emblemático es el caso de McDonald's en San Pablo, que ha llegado a ser acusado de prácticas de trabajo esclavo, maltrato, acoso de empleadas embarazadas, bajos salarios que ponen a muchos de los empleados regulares de las casas de comidas rápidas por debajo del umbral de la pobreza extrema, etc. El sindicato de las cadenas de comidas rápidas, Sindifast, creado bajo el patrocinio de éstas, se ha considerado fraudulento, y una estructura falsa que solo funge como amortiguador de las denuncias de sus empleados, y como instrumento de aprobación de convenios colectivos irregulares. Ello tiene un correlato en el ámbito judicial que da evidencia de la gravedad de la situación de este sector de trabajadores altamente precarizados:

En agosto de 2012, Sinthoresp encontró 1.790 denuncias individuales en curso, presentadas contra McDonald's únicamente en el Tribunal Laboral Regional de la Ciudad de São Paulo. Esto excluye los casos resueltos en o fuera de este tribunal y las quejas desestimadas. Concretamente, uno de los restaurantes, donde trabajan un total de 230 empleados, tenía 151 querellas pendientes. A pesar de todas estas pruebas abrumadoras y de las numerosas informaciones en los medios de comunicación, el Ministerio concluyó que no había ninguna razón para proseguir con la investigación. (Beirnaert, 2013).

Esta situación, preocupantemente actual, da cuenta de la urgente necesidad de reformas institucionales y legislativas que garanticen el cumplimiento de los derechos fundamentales de los trabajadores, a fin de que gocen de una vida digna, aspecto en el que la normativa vigente, está claramente fallando.

De acuerdo con los estudios analizados por Hertford, Echeverri Perico, & Moscardi, (2000), América Latina, en general, presenta una serie particular de grandes obstáculos del desarrollo rural, siendo la defectuosa función estatal una de las principales.

1. La resistencia a adaptarse a la transición de un modelo de desarrollo cerrado a uno abierto es la primera. Grupos de poder que defienden el estado de las cosas y se resisten al cambio impiden el desarrollo rural en términos equitativos, y los sucesivos gobiernos latinoamericanos no ayudan a dicha transición.
2. El Estado, en sus funciones, ha adoptado en el pasado una función benefactora de la producción agropecuaria, pero no del bienestar de la población rural.
3. La tecnología no ha sido desarrollada con visión estratégica y la investigación agropecuaria ha sido insuficiente.

4. La pobreza rural, persistente, al ser tratada desde una perspectiva de políticas sociales, y nunca desde una visión de política económica. No se reconoce que la pobreza rural es estructural e independiente del modelo económico o de las condiciones económicas prevalecientes, lo que impide un abordaje adecuado de la problemática. (Hertford, Echeverri Perico, & Moscardi, 2000, pág. 21).

La pobreza rural, en relación a la de pobres urbanos, suele tener niveles de educación más bajos, familias más numerosas y niveles más elevados de dependencia. Asimismo, suelen tener acceso más limitado a los servicios y a la salud. En Brasil, persisten elevados niveles de analfabetismo en pobladores rurales mayores de 15 años. Estos, en general, no disponen de establecimientos educativos, y mucho menos de calidad, y muchas veces carecen de servicios básicos. A pesar de que para Brasil la agricultura representa el 40% de sus ingresos por exportaciones y que ocupa el 25% del empleo, solo han logrado disminuir los niveles de pobreza rural en centros agrícolas desarrollados. (Valdés & Wiens, 1997).

5. Contexto actual

Rubio, Martínez, Jiménez, & Valdivia, (2002) encuentran en la región, cinco tendencias actuales en materia de fuerza de trabajo rural:

1) Crecimiento de la mano de obra asalariada en términos absolutos, o por lo menos relativos, a la fuerza de trabajo no asalariada; 2) feminización de la fuerza de trabajo rural; 3) aumento de los trabajadores eventuales en relación con los permanentes; 4) urbanización de los trabajadores rurales, 5) incremento de los trabajadores rurales no agrarios. (pág. 158).

El crecimiento de trabajadores asalariados en la zona rural ha sido consecuencia de reformas y la introducción de leyes sociales, por lo cual el papel del derecho en este aspecto cuenta con antecedentes claros que muestran su importancia para influir en la modificación de esta situación. Sin

embargo, surgen nuevos problemas, como la feminización de la fuerza de trabajo estacional, ya que las mujeres aceptan salarios más bajos o el incremento del trabajo estacional y temporario por sobre los trabajadores asalariados, al punto en que en algunos países han desaparecido los trabajadores permanentes en las áreas rurales. El trabajo temporario, viene acompañado de precarización, inestabilidad, pago a destajo, ausencia de beneficios sociales y protección laboral, propiciado por la desregulación laboral y los cambios regresivos de la legislación, lo que sumado al escaso poder de negociación de los trabajadores temporales, evidencia, nuevamente, la importancia de una regulación adecuada para el logro de relaciones laborales más equitativas.

En Brasil, la urbanización de los trabajadores rurales es un fenómeno creciente, en especial de los trabajadores temporarios de la agricultura. Allí, los “boias frías” y “volantes” habitan la periferia de pueblos y ciudades y oscilan entre el empleo rural y el urbano. Surgen también pequeños asentamientos poblacionales carentes de servicios básicos, desdibujándose la frontera entre lo rural y lo urbano. En cuanto al trabajo temporario, en Argentina, la región pampeana ha incursionado en la agricultura moderna, con mecanización de tareas e incorporación de tecnologías bioquímicas, genéticas y agronómicas, con lo que los trabajadores fijos han ido desapareciendo, y permanecen los transitorios, por lo que la mano de obra se relocaliza hacia centros urbanos. En las economías regionales de otras provincias argentinas, la tendencia es similar, con preferencia de la mano de obra femenina y precarización laboral. (Rubio, Martínez, Jiménez, & Valdivia, 2002, pág. 163).

Entre los trabajadores rurales, existen diferencias o estratificaciones, según las condiciones en que desempeñen su trabajo: El obrero agrícola de empresas agrarias modernas, que utilizan maquinarias, sistemas de irrigación, fumigación y demás, con un régimen salarial y un nivel de vida superior al del resto de mano de obra rural. En peores condiciones se encuentran los peones de latifundios, los aparceros, precaristas y las comunidades indígenas, mal pagados, desarrollando labores carentes de la asistencia de la tecnología, y

con mayor precariedad y muy bajo nivel de vida. (Araya Pochet, 1995, pág. 205).

A los problemas que se encuentran instalados en la ruralidad latinoamericana, como la descapitalización del sector, las desigualdades entre campo y ciudad, la coexistencia de pequeñas propiedades frente a grandes explotaciones agroindustriales, se suman la dependencia de los productores agrarios de las empresas proveedoras de insumos como agroquímicos y semillas, y la ausencia de crédito. Al cuadro se suman fenómenos complejos como la sobreexplotación, el agotamiento de los suelos, la fluctuación de precios regidos generalmente por los mercados internacionales, y aspectos relacionados con decisiones políticas desfavorables para el agro: En Argentina, los acontecimientos sociopolíticos del siglo XXI, llevaron al colapso de las ideas de desarrollo propuestas en la década del '90. Entre sus causas, cabe mencionar la concentración del poder económico, la corrupción generalizada, atomización del Estado y la exclusión social. Las falencias que surgen de este deterioro productivo, económico, cultural, organizativo y social del ámbito rural, permite reconocer los elementos necesarios para generar un desarrollo rural sostenible en países como Argentina y Brasil. Entre estos, se destacan la necesidad de concebir una ruralidad basada en el progreso humano, el fortalecimiento de la ciudadanía y la democracia, el desarrollo económico equitativo, la sostenibilidad, la superación del enfoque asistencial, y el capital social como base fundamental del diseño de estrategias de desarrollo rural sostenible. Esto requiere, además, de la disminución de la pobreza de la población rural, la planificación territorial, el fortalecimiento de la economía multisectorial, el capital social y la eficiencia productiva, lo que no es posible sin una institucionalidad orientada a políticas orientadas positivamente hacia los actores rurales. El rol del Estado, pasa así a ser el de promotor del desarrollo y del fortalecimiento de la competitividad regional, catalizador de las iniciativas sociales, y facilitador del proceso de innovación. (Feito, 2005).

Por su parte, Faiguenbaum, Ortega, & Soto Baquero, (2013) advierten que el desarrollo productivo y la extensión agrícola no siempre dan resultados positivos como instrumentos para combatir la pobreza rural. La transferencia

tecnológica, la asistencia técnica y demás actos propios de desarrollo rural, procura incrementar la productividad de los agricultores, en especial de los productores pobres, que con base en conocimientos científico-técnicos se supone aumentarían sus ingresos y con ello mejorarían sus condiciones de vida. Sin embargo, en un mercado globalizado, estos pequeños productores, encuentran dificultades y barreras muy fuertes para ingresar a los mercados abiertos y competitivos propios del sector. A ello cabe sumar que los programas de fomento productivo y extensión rural suelen ser parte de políticas públicas dispersas y desarticuladas, y no logran hacer mella en la pobreza y desigualdad rural. Estas políticas, sin un marco político institucional de largo plazo que sustente su inserción en los mercados, no son capaces de producir una verdadera inclusión social.

Finalmente, se llega a la regulación de los mercados de trabajo rural como eje de la debilidad de las políticas de lucha contra la pobreza rural, dado que si los empleos no son de calidad y no califican de trabajo decente, de nada sirven para combatir la pobreza. Los hogares rurales pobres suelen ser de trabajadores asalariados, por lo que no es la falta de trabajo, sino la calidad de éste el foco del problema y donde se encuentra la gran falla:

Este déficit de trabajo decente en la región se explica por un gran vacío u omisión sea en los marcos regulatorios y/o en su aplicación en las zonas rurales, así como de políticas públicas, particularmente en el caso de las que se orientan a la lucha contra la pobreza, que no consideran que el empleo asalariado sea un factor fundamental para explicar los bajos ingresos de los hogares rurales pobres en muchos países, y a la vez un medio importante para la superación de esa condición. [...] Los niveles de informalidad en los mercados laborales agrícolas y rurales no agrícolas son muy altos en muchos países de la región, [...] En la mayoría de los casos estos puestos de trabajo en efecto no alcanzan los estándares del trabajo decente (o empleo digno): se realizan sin contratos, carecen de previsión social, de condiciones adecuadas de trabajo, son improductivos e inadecuadamente remunerados, no están reconocidos o protegidos por

la ley y los trabajadores carecen de derechos. (Faiguenbaum, Ortega, & Soto Baquero, 2013, pág. 65).

En Argentina, las políticas públicas han adoptado formas de intervención que procuran alcanzar la equidad social con un modelo orientado a la focalización, la privatización, la descentralización y la desregulación. (Feito, 2005) Otro de los aspectos necesarios para un desarrollo equitativo con la población trabajadora rural, de acuerdo con las investigaciones consultadas por Soto Baquero & Klein, (2012), es el de la capacidad de negociación colectiva, y con ello, de la sindicalización del personal rural.

Las organizaciones sindicales pueden ser un instrumento muy eficaz para contribuir a la reducción de la pobreza rural, en parte jugando el papel de controladores de la legislación vigente, en este caso con respecto al cumplimiento del pago del salario mínimo que, como se ha visto, influye decisivamente en los niveles de pobreza. Pero evidentemente, también si es que tienen la capacidad de establecer negociaciones colectivas que impactan positivamente los ingresos laborales. (Soto Baquero & Klein, 2012, pág. 27).

Argentina, cuenta con algunos centros laborales organizados sindicalmente, como la Patagonia, Entre Ríos, San Juan y Mendoza, generalmente provenientes de la agroindustria de la fruta. Sin embargo, fuera de estos casos, los sindicatos y las negociaciones colectivas se encuentran prácticamente ausentes. Esto significa una seria desventaja para el trabajador rural, dado que el movimiento sindical resulta necesario para el logro de cambios en la estructura del empleo rural. La debilidad sindical en la región, se debe, en gran medida, al reemplazo de asalariados permanentes por temporarios, al surgimiento de contratistas de mano de obra, y a la creciente pluriactividad ocupacional, por la cual el trabajador realiza distintos trabajos a lo largo del año, agrícolas y no agrícolas, rurales y también urbanos. Estos cambios en el funcionamiento del mercado de trabajo rural no siempre son comprendidos por la legislación laboral, por lo cual estas nuevas realidades quedan fuera del ámbito de protección de la Ley. En cuanto a la protección social, en Argentina,

el sector rural carece de cobertura al no mediar contrato en sus tareas laborales, lo que presenta una diferencia notable con Brasil, que posee un programa especial de cobertura para el sector rural que alcanza aún a las economías familiares. “Si muchos de los ocupados en el sector rural de Brasil, particularmente en el Nordeste como ya se mencionó, ganan menos de un salario mínimo, entonces se produce una situación en que cuando la persona se jubila mejora sus ingresos. Se comprenderá entonces el impacto que la extensión de la seguridad social puede tener sobre la pobreza rural.” (Soto Baquero & Klein, 2012, pág. 27).

En los hechos, desde los '90 y luego del 2008, la problemática del campo argentino no ha dejado de agravarse, al generarse con la Resolución N° 125¹ el aumento y movilidad de las retenciones a la exportación de productos agropecuarios, en pleno conflicto por la politicidad del territorio, poniéndose en juego la pugna por porcentajes de apropiación de la rentabilidad de la producción agropecuaria y el sentido mismo del rol de los actores rurales. (Castro García, Comelli, Ciccolella, Negro, Godfrid, & Schvartz, 2009) Se produjeron, así, migraciones masivas de la población rural hacia centros urbanos, no solo por la falta de oportunidades laborales, sino por la ausencia de servicios básicos por el abandono que han sufrido muchos poblados del interior del país. ("El campo está peor que en 2008 cuando estalló el conflicto por la 125", 2014) Actualmente, las distorsivas retenciones por derechos de exportación, el atraso cambiario ante una moneda nacional devaluada con un dólar oficial muy por debajo del valor real que deben pagar los productores para pagar insumos importados, la ausencia de mantenimiento de rutas y caminos rurales, los cupos limitados para exportación, se combinaron anulando la competencia tradicional del mercado agrario, avícola y ganadero, agobiado por los gastos de flete, comercialización y los impuestos. Todo ello, en un contexto de incertidumbre e inflación, coloca a los productores rurales argentinos en una situación de escasa o nula rentabilidad, baja competitividad y los obliga a vender su producción a precios menores al valor de mercado. (Mira, 2015) Por esta situación, muchos productores no han podido levantar

¹ La Resolución N° 125/08 consistía en la implementación de un esquema de retenciones móviles para la soja, el girasol, el maíz, el trigo y los productos derivados que se obtienen de ellos.

sus cosechas, perdiéndose la producción debido a la renta negativa, y poniéndose en riesgo más de 1,5 millones de puestos de trabajo rural. (Bertello, 2015) En este contexto, la única salida que encuentra la población rural, es migrar hacia las grandes ciudades.

La falta de infraestructura que lleva al aislamiento, el déficit en servicios y, sobre todo, la escasez de trabajo de buena calidad van despoblando el campo. Según la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), entre 2010 y 2013 se perdieron 300.000 puestos de trabajo en las cadenas agroindustriales de todo el país. (El gran éxodo: el campo se vacía y huye a ciudades hacinadas, 2015).

La falta de luz, de gas, de telefonía, de internet, de caminos, se combina con otra característica propia de la actualidad argentina, como los empleos estatales en municipios que son grandes empleadores y agotan sus recursos en ello, quedando nulos recursos para la inversión en mejora de infraestructura y desarrollo de las poblaciones pequeñas. En Argentina, las tasas de empleo solo se han incrementado dentro del ámbito de contratación estatal, con lo que el sector privado formal se encuentra alcanzando apenas un tercio de la población económica activa. En Buenos Aires, hay más de 100 pueblos abandonados, a punto de desaparecer. Actualmente, en Argentina, más del 90% de la población vive en centros urbanos. Mientras que Brasil ha incrementado sus niveles de producción agroindustrial, Argentina la ha disminuido, dado que no solo la migración de la población rural alcanza a los trabajadores y peones, sino también a los productores y empleadores, incapaces de sostener la presión tributaria y optan por acercarse a centros urbanos que gozan de subsidios en transporte, luz y otros servicios. En todo ello, la inseguridad jurídica es un factor que desmotiva a los inversores, al tratarse de forma generalizada la normativa de regiones productivas con características completamente diferentes y la falta de estímulo a la reactivación de las economías regionales, a la vez que no brinda a los trabajadores la protección suficiente como para gozar de garantías mínimas laborales en el ámbito rural. (El gran éxodo: el campo se vacía y huye a ciudades hacinadas, 2015) (Kessler & Cortés, 2005).

Las problemáticas que afronta el sector rural argentino, son, principalmente, “una economía basada fundamentalmente en la producción primaria, productos destinados principalmente al mercado interno, deficiencias de infraestructura (vialferroviaria- fluvial-portuaria), escaso grado de electrificación rural, mano de obra rural insuficientemente capacitada, elevada migración rural, bajo grado de asociativismo y de organización, elevada proporción de productores minifundistas, población rural con alto grado de NBI², e importante brecha tecnológica en la mayoría de las cadenas” (Quintana Pujalte & Piñeyro, 2014, pág. 204) A ello cabe sumar que existe un conflicto político nacional de enfrentamiento con el agro, en el que solo trasciende la voz de productores agrarios con mayor peso político, quedando relegado un porcentaje mayoritario de actores del sector que quedan sin representación. Esta población mayoritaria desplazada del ámbito laboral digno, es así arrastrada al borde de la exclusión, debiendo recluirse en la dependencia del gobierno, bajo planes sociales, que constituyen políticas de resolución coyuntural de la pobreza estructural.

Los pequeños y medianos productores, son así, políticamente relegados, al no participar del espacio de Opinión Pública, y se niega su existencia como sujetos sociales al quedar totalmente excluidos de los espacios de discusión y reclamo, sufriendo vulnerabilidad económica, jurídica y política. Quedan así, excluidos totalmente del sistema. (Quintana Pujalte & Piñeyro, 2014, pág. 213) Así, Argentina, al igual que el resto del Cono Sur, se caracteriza por procesos laborales rurales en los que priman el trabajo femenino, el infantil, el trabajo estacional y precario y por sobre todo: la pobreza. (Soto Baquero & Klein, 2012, pág. 20).

Argentina carece de marcos legales apropiados de cobertura nacional, coherentes y articulados con los marcos legales provinciales. El uso del territorio de forma coherente e integral no es un aspecto abordado en materia jurídica nacional, contándose solo con las prescripciones del Código Civil,

² NBI: Necesidades Básicas Insatisfechas.

comunes a todo inmueble urbano o rural, y con tres leyes más recientes: la Ley Nacional N° 23.160/2006 de Comunidades indígenas; la Ley Nacional de Catastro N° 26.290/2006 de funcionamiento de catastros territoriales y creación del Consejo Federal del Catastro, y la Ley Nacional N° 26.331/2007 de presupuestos mínimos de protección ambiental en la explotación de bosques nativos. Por su parte, las constituciones provinciales de varias provincias: Formosa, Río Negro, La Pampa, Neuquén, Chaco, Formosa, Catamarca, Tierra del Fuego, San Juan, Misiones, Jujuy y Santa Cruz, sostienen principios de aplicación de políticas integrales de tierras, mecanismos de regulación y distribución de fundos, medidas impositivas, acceso al crédito y la tecnología, medidas educativas, fomento del cooperativismo y promoción de la agricultura familiar. (Sili & Soumoulou, 2011) Sin embargo, el principal problema de este cuerpo normativo, es que no es respetado, y los pequeños productores e indígenas sufren violencia rural de todo tipo para ser obligados a abandonar sus tierras, mediante operativos de desalojo de gendarmería y guardias privadas, coacción física, incluyendo asesinatos, operativos nocturnos de detención de campesinos acusados de usurpación, acciones policiales sin orden judicial y criminalización de los conflictos de tierra contra las familias campesinas. (Percincla, y otros, 2011, pág. 10).

Desgraciadamente, el espíritu de la ley, en numerosas Provincias, no se ha traducido en políticas públicas exitosas de ordenamiento territorial, de uso y distribución equitativa de la tierra. Es más, en algunos casos, cuando se disponía de esas herramientas de administración de la tierra pública para posibilitar la estabilidad social, la sustentabilidad ambiental y el combate a la pobreza rural, éstas se han administrado mal en desmedro del medio ambiente, de los agricultores más pequeños y de las comunidades de indígenas. (Sili & Soumoulou, 2011, pág. 36).

La informalidad en el empleo rural es una constante que se puede apreciar tanto en Argentina como en Brasil. Soto Baquero & Klein, (2012) en su informe para la Organización Internacional del Trabajo, explican que los trabajos en malas condiciones, mal remunerados, que no están protegidos por la Ley ante la ausencia de regulación adecuada, conforman un sector informal sin

protección social ni representación que recibe, entre muchas desventajas, la de una significativa quita salarial en relación al trabajador formal. Llama la atención, asimismo, que “La informalidad, aunque es generalizada para todos los trabajadores agropecuarios, se concentra particularmente entre los trabajadores temporales, y como estos trabajadores son contratados normalmente en el sector moderno de la agricultura, entonces se aprecia claramente cómo coexiste el sector moderno y la pobreza de sus trabajadores” (Soto Baquero & Klein, 2012, pág. 22) En Argentina, seis de cada diez trabajadores permanentes agropecuarios, reciben remuneraciones inferiores al salario mínimo determinado por Ley por la Comisión Nacional de Trabajo Agrario. En el caso de los trabajadores temporarios, casi todos ellos informales, en ninguna provincia del país sus remuneraciones alcanzan el salario mínimo mensual establecido para el peón general. (Soto Baquero & Klein, 2012).

El caso de Brasil, se ha observado desde 2006 un avance en todo el país en la formalización de puestos de trabajo en el sector agropecuario, especialmente para los trabajadores permanentes, y en mucha menor medida, pero igualmente con tendencias crecientes, se desarrolló el empleo formal en trabajadores temporales. Un factor de peso en la reducción de pobreza, ha sido y es, indiscutiblemente, el cumplimiento del salario mínimo en las remuneraciones del trabajador rural, tanto permanente como rural. Las condiciones laborales deficientes en el ámbito rural, y su consecuencia directa, la pobreza estructural, como se ha señalado en esta breve reseña, posee diferentes causales, entre las cuales, el derecho cumple un rol de importancia, pero que debe ser acompañado de cambios a otros niveles, como político y cultural, a fin de lograr revertir esta tendencia:

una buena parte de la pobreza se puede explicar por las condiciones de empleo que tienen las personas que participan en la actividad económica. Otra parte se explica por aquellas personas que no participan. Las instituciones del mercado laboral influyen, también, tanto por inadecuaciones a la realidad siempre cambiante como por la falta de voluntad para implementar la legislación vigente. Una parte de la pobreza

se explica por cuestiones políticas, otra por situaciones estructurales de origen histórico. (Soto Baquero & Klein, 2012, pág. 44).

El caso de Argentina presenta una particular distribución regional, dado que la mitad de los asalariados se concentra en la Región Pampeana, zona de agricultura extensiva mecanizada, que expulsa mano de obra familiar y no familiar sistemáticamente a pesar de su desarrollo. Muchos trabajadores rurales están ocupados menos de 6 meses al año, y la ocupación es preponderantemente transitoria. Las transformaciones de los procesos productivos, ha fomentado la participación de trabajadores temporarios estacionales, aún en las empresas de producción permanente, que optan por sustituir a la fuerza laboral permanente por la contratación continua de trabajadores transitorios. “Una consecuencia importante de este comportamiento es el cambio en las situaciones clásicas de precariedad laboral que caracterizaban a este segmento, incrementando las situaciones de desempleo estacional, haciendo más incierta su inserción laboral y debilitando o desdibujando la relación salarial” (Neiman, 2012, pág. 12) Similar situación se observa en otras regiones argentinas, de producción de frutas, y que debe adaptarse a los requerimientos del comercio de exportación. En todos los casos, la informalidad es una situación generalizada, y los trabajadores carecen de protección social y de acceso a la educación (la gran mayoría no ha terminado la escolarización primaria) y más del 75% no alcanza el salario mínimo vital y móvil.

El trabajador rural, el poblador rural, posee características muy diferentes del habitante de centros urbanos. Y este es un aspecto que no puede ser ignorado.

En toda formación social, las categorías genéricas de actores (locales y externos) se apropian del espacio según sus modalidades y en función de sus posturas, que reflejan conjuntamente su personalidad propia y su posición en las relaciones de clase o de grupos. En las sociedades modernas, los actores sociales han vivido el territorio como un producto, un campo de acción y se han situado en él, sobre todo a partir de su utilización económica; de la misma manera, los actores sociales han

identificado al territorio como substrato y regenerador de su cultura, sobre el que se insertan las dimensiones económicas y políticas de su existencia o de sus estrategias. Ahí, los actores, sobre todo los locales, no se separan jamás del espacio que les originó o al cual se encuentran arraigados; esos fuertes vínculos provienen de un proceso profundamente enlazado a través de flujos de información, que se establecen a partir del espacio social de referencia: pueblo, comunidad, barrio, ciudad, etc., además de las redes impersonales y los lazos familiares. (Ávila Sánchez, 1999).

La construcción de los territorios surge de la interacción entre actores y sus actividades y estrategias operacionales basadas en su cultura e historia particular. El fenómeno del aprendizaje colectivo y las formas de cooperación y asociación entre los actores desarrollan prácticas de adaptación a escala local, y transmiten la identidad del poblador rural. El entorno rural, no es comprendido, lo que ha llevado en Argentina y Latinoamérica en general, una carencia de visión estratégica de largo plazo, y la falta de una institucionalización adecuada a las verdaderas necesidades del sector.

La mayoría los países de la región carecen tanto de una estrategia como de una institucionalidad responsable de abordar el desarrollo rural, lo que da como resultado un conjunto disperso de actividades públicas, bajo la forma de programas y proyectos, predominantemente de índole sectorial, desconectadas entre sí y muchas veces también respecto a las realidades específicas que pretenden hacerse cargo. Como consecuencia de este vacío se produce un predominio de la “lógica de proyectos” individuales, que se abstrae de los contextos más amplios (económicos, sociales, territoriales, institucionales) y dificulta la interacción entre los diversos actores intervinientes en los territorios.

A ello cabe sumar un segundo orden de problemas, se refiere a las políticas públicas orientadas a mejorar los ingresos de los hogares rurales que carecen de sintonía con la realidad y las transformaciones del medio rural y de las estrategias de supervivencia de estos en relación a sus dinámicas de ingresos

y empleo. Estas políticas no suelen lograr los resultados esperados, al no tomar en cuenta la heterogeneidad de los hogares rurales pobres, la influencia de los mercados laborales en los ingresos de los hogares y los fenómenos migratorios. Por ello, suelen surgir políticas pensadas para agricultores familiares campesinos que ignoran otros tipos de hogares rurales pobres con otras modalidades de obtención de recursos. Suelen confundir lo rural con lo agrícola, y desarrollo rural con desarrollo de la agricultura, lo que evidencia un erróneo diseño institucional que ignora la realidad social que procura transformar. Quedan, así, excluidos los distintos sectores de empleo asalariado y las actividades rurales no agrícolas. (Faiguenbaum, Ortega, & Soto Baquero, 2013, pág. 61).

El caso de Brasil es diferente, ya que en éste se ha logrado disminuir significativamente la pobreza rural con base en conquistas sociales plasmadas en la Carta Constitucional de 1988 y en un plan nacional de combate contra la pobreza extrema, Plan Brasil Sin Miseria, con acciones articuladas que contribuyeron a la reducción de la pobreza en el sector rural. Sin embargo, esta disminución de la pobreza rural, resulta insuficiente cuando se la relaciona con la dinámica económica del sector agropecuario. Brasil, a diferencia de los demás países latinoamericanos, no adoptó irresponsablemente los lineamientos neoliberales de los '90, sino que, amparado por la obligatoriedad impuesta por su Constitución de cumplir con la Ley Orgánica de la Asistencia Social (LOAS) y con la jubilación rural para no contribuyentes, protegió a los grupos sociales más pobres, incluyendo a los del sector rural. En los años dos mil estas políticas lograron mayor estabilidad y continuidad, y a ellas se sumó el Plan hambre Cero (Programa Fome Zero – PFZ) como política social que generó gran expectativa y derivó luego en el Programa Bolsa Familia o Programa Beca Familia. Durante este periodo, y gracias a un buen desempeño de la economía nacional y una inserción adecuada a la internacional, a partir de 2004 las exportaciones se vieron beneficiadas por los altos precios internacionales de las commodities, dando un alto superávit comercial. Ello fue acompañado por disminución de la inflación, valorización del Real, aumento de la oferta de empleo, recuperación del salario mínimo, mayores ingresos para los trabajadores, mejoras en el mercado de crédito y la consolidación de

políticas sociales distributivas. Durante el segundo mandato del Presidente brasileño Lula, se combina el desarrollo social con el crecimiento económico (Programa de Aceleración del Crecimiento – PAC), se eleva la inversión pública en estructura, y se apoya la formación de capital por el sector privado. Por todo ello, la crisis financiera global no afectó a Brasil, ya que este había tomado medidas anticíclicas y el aumento de la demanda interna le permitió avanzar en su objetivo de continuar reduciendo la pobreza y de la mejor distribución de la renta. Así, la pobreza rural de Brasil, pasó de un 17,4% a un 8,8% entre 2000 y 2008.

Faiguenbaum, Ortega, & Soto Baquero, (2013) considera el caso brasileño como paradigmático de las transformaciones en el medio rural, ya que ha logrado dinamizar el medio rural brasileño, al comprenderlo como un espacio socio-productivo que va más allá del sector agropecuario. Para este logro, Brasil ha comprendido la realidad del espacio rural brasileño. Al contrario que en los demás países latinoamericanos, la población rural no solo no sufrió migraciones hacia sectores urbanos, sino que creció. La reducción de la pobreza en Brasil ha sido posible no solo por el desarrollo agrícola, sino, principalmente, por las transferencias de ingresos, la seguridad social y las actividades rurales no agropecuarias. Estas avaladas por políticas públicas de combate a la pobreza que comprenden lo rural no como sector económico, sino como espacio, de manera integral. A modo de resumen, cabe observar que, en Brasil:

La reducción de la pobreza debe asociarse a un conjunto de factores: I) las transferencias privadas provenientes del trabajo tanto en la venta de mercancías (inclusive artesanales) y del asalariamiento agrícola estacional; II) los programas de aumento de la producción vinculados a compras públicas de productos básicos para distribución en programas sociales o para la alimentación escolar (ejemplo de eso es el Programa de Adquisición de Alimentos - PAA); III) la diversificación de las economías rurales y el trabajo industrial en pequeños municipios; IV) la ampliación del público destinatario del PRONAF; y V) la mejoría de la infraestructura y de la prestación de servicios públicos, sobre todo en educación, salud,

energía eléctrica y telecomunicaciones. (Faiguenbaum, Ortega, & Soto Baquero, 2013, pág. 110).

Estos factores permitieron reducir no solo la pobreza, sino la indigencia, que se redujo de un 30% en 1995 a un 19% en 2006 y a un 8,5% en 2010. Junto con estas mejoras, se redujeron las desigualdades y las mujeres incrementaron su renta en un 37,7% y creció la tasa de crecimiento de negros y pardos en sus ingresos. La pobreza extrema, aún se encuentra localizada territorialmente en los estados de las regiones Norte y Nordeste del país, donde la indigencia, a fecha 2010, alcanzaba niveles del 35% en hogares rurales.

Entre las políticas de relevancia, específicamente destinadas al ámbito rural en Brasil, Faiguenbaum, Ortega, & Soto Baquero, (2013) destacan:

a) Políticas de Empleo (general y específica):

– Política de valorización del salario mínimo.

b) Políticas de Protección Social:

– Programa Bolsa Familia.

– Jubilación rural de no contributivos.

c) Políticas de fomento productivo rural:

– Políticas de Desarrollo Agrario: Programa Nacional de Fortalecimiento de la Agricultura Familiar (PRONAF), Programa de Adquisición de Alimentos de la Agricultura Familiar y Programa de Merienda Escolar.

– Políticas de Desarrollo Territorial Rural: Consorcios Intermunicipales de Seguridad Alimentar y Desarrollo Local, Territorios Rurales do MDA y Territorios da Cidadanía. (pág. 118).

Estas políticas han sido posibles por una asignación presupuestaria adecuada, la aplicación efectiva de recursos y designación de éstas como prioridad a nivel nacional. El ajuste nominal del salario mínimo ha sido otro factor que trajo toda una serie de beneficios para los trabajadores y para la salud económica del país en general, así como propició la mejora de la distribución de ingresos. La reducción de la pobreza, se ha logrado no con largos periodos de espera, sino

rápidamente, y ello solo fue posible por la reducción del empleo informal. La formalización del empleo rural y la recuperación del poder de compra del salario mínimo, condujo rápidamente a la mejora de las condiciones de vida del trabajador rural.

De 2002 a 2010, Brasil logró incrementar en más del 50% la formalización del empleo, un 33,14 en el medio rural. Asimismo, se procuró reemplazar las labores que realizaban los trabajadores temporales con el ingreso de tecnología, y reinsertar a éstos en trabajos permanentes y formales. El Programa Bolsa Familia creado en 2003, permite la transferencia de ingresos del gobierno federal a las familias rurales con bajos ingresos, con la condición de que los niños estudien y sean vacunados. Asimismo, las jubilaciones y beneficios rurales, proporcionadas por el sistema asistencial social brasileño, se comenzaron a cumplir cabalmente en los años '90, al introducir el principio de acceso universal de esta población a ambos sexos y considerar a las personas con discapacidad física. Esto incluye al trabajador rural informal (art. 194).

Art. 194. La seguridad social comprende un conjunto integrado de acciones de iniciativa de los Poderes Públicos y de la sociedad, destinadas a asegurar los derechos relativos a la salud, a la previsión y a la asistencia social.

Párrafo único. Corresponde al Poder Público, en los términos de la ley, organizar la seguridad social con base en los siguientes objetivos:

1. Universalidad de la cobertura y de la atención;
2. Uniformidad y equivalencia de los beneficios y servicios a las poblaciones urbanas y rurales;
3. Selectividad y distribución en la prestación de los beneficios y servicios;
4. Irreductibilidad del valor de los beneficios;
5. Equidad en la forma de participación en el coste;
6. Diversidad de la base de financiación;

7. Carácter democrático y descentralizado de la gestión administrativa, con la participación de la Comunidad, en especial de los trabajadores, empresarios y pensionistas. (Constitución de la República Federal de Brasil, 1988).

Esta normativa sustenta las bases para la más importante de las innovaciones para la reducción de la pobreza rural, al introducir un régimen especial para ancianos y personas con discapacidad física, hombres o mujeres, con el único requerimiento de haber ejercido la actividad rural en su vida laboral, lo que amplió considerablemente el número de beneficiarios. Ello significó salir de la pobreza para los hogares agrícolas por cuenta propia, y reducir la pobreza en los grupos de agricultores familiares y otras familias rurales.

A estos instrumentos, Brasil ha sumado otros programas de combate contra la pobreza rural, como:

I) Programa Nacional de Fortalecimiento de la Agricultura Familiar (PRONAF), que contribuyó a sacar de la pobreza a hogares de cuenta propistas y pequeños agricultores familiares. Este fue acompañado de un modelo de financiamiento para la agricultura nacional, el Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR) dirigido a determinados productores, regiones y productos. Los créditos del PRONAF, a su vez, apoyaron financieramente tanto actividades agropecuarias como no agropecuarias de estos agricultores familiares. También existe un PRONAF de infraestructura y servicios, que constituye en una línea de financiamiento para la infraestructura y modernización de los establecimientos de agricultura familiar, y fue dirigida a Territorios Rurales.

II) Programa de Adquisición de Alimentos (PAA) de la agricultura familiar. Este programa combina acciones de corto plazo con acciones estructurales, procurando la seguridad alimentaria y combatir la pobreza, desde una perspectiva no asistencialista para el desarrollo local y una verdadera inclusión social. Esta consiste en la adquisición de productos generados por los productores familiares para cubrir los insumos que el Estado utiliza para sus sistemas de distribución de alimentos para personas con inseguridad

alimentaria, para meriendas escolares, hospitales, entidades filantrópicas y demás.

III) Programa de la Merienda Escolar. Aplicado con continuidad y perfeccionamiento, ya que impacta positivamente en la agricultura familiar a la vez que aumenta la asistencia escolar, mejora las calificaciones y capacitación de la fuerza de trabajo y dinamiza la economía local.

IV) Programas de desarrollo territorial que abarcan principalmente a municipios rurales que procuran promover y apoyar las iniciativas de la sociedad civil y de los poderes públicos en los Territorios Rurales, coordinando acciones que trascienden la actividad agraria y favoreciendo la cohesión social y territorial. Incluye programas para llevar energía a todos los poblados rurales, entre otras mejoras. (Faiguenbaum, Ortega, & Soto Baquero, 2013, pág. 137).

A pesar de las mejoras logradas, los autores sostienen que Brasil reconoce que aún le resta mucho por hacer, y en sus políticas públicas, el conocimiento de la realidad de los pobres del campo es considerado fundamental para el perfeccionamiento y mejora de las acciones de combate contra la pobreza rural. Para ello, considera importante avanzar en la siguiente dirección: Manteniendo las políticas de salarios decentes, mejorando la calificación para el empleo, fomentando acuerdos entre Estado, trabajadores rurales y empleadores, dirigiendo acciones hacia las mujeres y los jóvenes, brindando crédito a los agricultores familiares para que logren una inclusión productiva y fortaleciendo los mercados institucionales con prioridad de la agricultura familiar. Para ello, el Estado no puede descuidar la infraestructura para traslado de producción, el acceso a servicios públicos (salud, educación, luz) y el abordaje multidimensional en las políticas territoriales tendientes a disminuir la pobreza rural.

6. La Región Sisalera en Brasil - características.

La región Sisal o Sisalera, de acuerdo con la investigación de Moreira & Ferreira, (2011) es una zona rural del Estado de Bahía, situada en el Nordeste

resistente, que es utilizada para fabricar cuerdas, artesanías y tapetes : “Un árbol con hojas espinosas donde se extrae fibras para la fabricación de cuerdas, colchones, alfombras y papel. También es exportada para México y usada en la fabricación de tequila. ” (Vasconcelos, 2001, pág. 28) Si bien su producción representa un alto porcentaje del PIB baiano, las profundas desigualdades en la distribución de los dividendos mantienen al trabajador rural en la pobreza y la indigencia.

La precarización del trabajo en los campos de sisal se extendió a los demás aspectos de la vida humana. De los 800 mil habitantes de la región, más que mitad es considerada extremadamente pobre y analfabeta, con renta media mensual inferior a \$39,00 dólares. Municipalidades como Quijingue, Monte Santo y Cansanção, ocupan los peores lugares en el Índice de Desarrollo Humano de Bahía (CODES, 2005 A: 7-9). Esa situación es muestra de la implantación del modelo desarrollista de los años 70/80, en que a modernización tecnológica rural representó la llegada de actores externos, entre ellos, el capital internacional. Motivada por fuerzas económicas, la propuesta buscaba atender dos grandes intereses: atraer inversiones internacionales para consolidar el desarrollo capitalista en el país, y eliminar los riesgos de la temida reforma agraria. (Moreira & Ferreira, 2011, pág. 183).

Esta zona ha sido escenario de una profunda precarización de las relaciones de trabajo en las Sociedades Anónimas de producción de Sisal, lo que ha generado movilizaciones entre los trabajadores y propiciado su organización sindical. Originalmente, han surgido organizaciones de apoyo a los movimientos del campo con el soporte de la acción social de la iglesia, con una filosofía libertaria. En los años ´70 trabajaban más de 60 mil niños en la producción del sisal, y las mutilaciones con las máquinas de sisal eran algo frecuente. Con la asistencia de organizaciones internacionales como Unicef y la OIT, se logra en 1996 combatir el trabajo infantil. Estas luchas han fomentado una cultura participativa en la región, y la llegada en 2003 del Ministerio de Desarrollo Agrario con el Programa Nacional de Agricultura Familiar, permitió la creación de condiciones más favorables para el trabajador, mejoras en la

infraestructura y el acceso a servicios como telefonía, internet. (Moreira & Ferreira, 2011).

Se han desarrollado programas varios como:

1. El Programa Nacional de Apoyo a los Territorios de la Ciudadanía, que ha subvencionado actividades para el fomento de la autonomía de los líderes y actores locales en áreas de gestión y producción.
2. El Programa de Erradicación del Trabajo Infantil
3. La Campaña de Agricultores de Sisal
4. El Programa Territorios de la Ciudadanía, que permite la toma de decisiones participativa en cuestiones relativas a género, raza, religión y otras.

Estas intervenciones han brindado a la zona un aumento del número de familias alcanzadas por el Programa Familia (Bolsa Familia); gestionar créditos para los productores familiares; asegurar productores con el Programa Garantía de la Cosecha dado que en ocasiones las sequías han estropeado los cultivos; Gestionar la compra de productos agrícolas generados por las familias agricultoras, realizar actividades de capacitación, sumar equipos del Programa Salud Familiar, programas educativos y de alfabetización y equipamiento mediante el Programa Infraestructuras Rurales y Urbanas, que incluye conexiones a la red eléctrica, transferencia de tecnología, construcción de escuelas y viviendas sociales, etc.

Las acciones emprendidas por esta práctica todavía hoy se guían por las directrices y normas establecidas por las políticas y programas nacionales de apoyo al desarrollo del territorio, implementadas por el Ministerio de Desarrollo Agrario. Esta iniciativa de Conselho de Desenvolvimento Sustentável do Território do Sisal (CODES SISAL) sigue las directrices dictadas por el Gobierno Estatal, que establece los Territorios de Identidad como políticas de planificación, y para el desarrollo de políticas públicas en el Estado de Bahía. (Defensa de la igualdad y de los derechos humanos en la Región Sisalera (Brasil), 2010)

El Conselho de Desenvolvimento Sustentável do Território do Sisal (CODES SISAL) se conforma de 48 entidades públicas y privadas, con la finalidad de articular políticas públicas y proyectos que mejoren la situación de la región. Se centra en actividades de desarrollo social, derechos y ciudadanía, organización sostenible de la producción, acceso al agua, sanidad, educación y cultura, infraestructura, medio ambiente, comunicación y regularización de la propiedad. Realiza talleres, reuniones, seminarios y campañas, organiza Ferias de Agricultura Familiar, dicta cursos y canaliza los fondos obtenidos por donaciones del gobierno federal en la cobertura de necesidades locales. Ello ha servido para fomentar el asociacionismo y la cooperación. Ha contribuido a la sostenibilidad de la región. (Carneiro Morais, Araújo Braz, de Souza, Couto, Araújo Queiroz, & Souza de Oliveira, 2010).

La puesta en práctica de la CODES, ha permitido el incremento de empleo, de la renta, de la expectativa de vida y ha propiciado la diversificación de la Organización Productiva. La organización de los productores en Clusters como herramienta de desarrollo, ha permitido integrar a pequeños medianos y grandes productores mejorando su competitividad. Este tipo de organización productiva promueve cadenas, motores de desarrollo y actividades complementarias que crean condiciones alternativas en la ruralidad. (Portilla Rodríguez, La cadena del Sisal: Motor de Desarrollo en el Estado de Bahía - Brasil, 2008).

CAPÍTULO II

1. La eficacia y efectividad de la Norma

El control de las Normas. Derechos fundamentales en el trabajo rural. Normativa vigente. Comparaciones entre los marcos normativos argentino y brasilero.

2. La eficacia de la norma

Las normas vigentes de un país deben ser observadas por todos para garantizar el fiel cumplimiento del texto legal aprobado por los legisladores. En este contexto, para que una norma sea considerada operativa en el ordenamiento jurídico, se ha de observar si la misma está o no siendo cumplida por todos sus destinatarios.

Cuando hablamos de “eficacia”, sin duda pensamos en la cualidad que tiene una acción para producir el efecto deseado, pero con relación a las normas jurídicas solemos confundir la eficacia con la validez, la vigencia, la obligatoriedad y otros términos similares, por lo cual es importante precisar este concepto. Por eficacia de las normas debemos entender la capacidad que en la realidad tienen éstas para normar la conducta; en otras palabras, es la adecuación de la conducta de los destinatarios de la norma, en los hechos, al objeto directo que ésta persigue, lo que a su vez significa que estas normas son efectivamente obedecidas y que lo son porque ellas son vividas [...] como socialmente obligatorias. En esta cuestión, es importante distinguir el tipo de expresión lingüística que se utiliza: uno es el significado del lenguaje normativo y el otro el de la certeza de que esa norma es derecho vigente y eficaz. (Hernández Cruz, 2015, pág. 13).

Es a partir de esta idea que decimos que una norma posee eficacia, si los dispositivos establecidos por una ley están siendo observados por todos.

Para Hans Kelsen (1945), las normas tienen fuerza vinculante. Estas obligan, imponen un deber, no en sentido moral, sino jurídico-objetivo. Las personas se encuentran, entonces, obligadas a comportarse de la manera que las normas prescriben. Al ser el derecho el que regula su propia creación su legitimidad y validez no depende, para el autor, de consideraciones políticas, sociales o morales. Sin embargo validez no es equivalente a eficacia, ya que esta última no depende de la cadena de validez de la creación de la norma, sino de su efectivo cumplimiento. Simplemente, cuando las personas cumplen con las

órdenes que emanan de un cuerpo sistema de normas, éste es eficaz en un sentido objetivo. (Kelsen, 1945); (García Holgado, 2011).

Es importante señalar que eficiencia, eficacia y efectividad son términos que denotan distintos significados, y sobre los cuales cabe hacer una breve conceptualización a fin de evitar confusiones.

El principio de eficiencia, tiene fundamento en las acciones administrativas ejecutadas por el Estado, pues, éstas deben ser orientadas para la concretización material y efectiva de la finalidad puesta por la ley, obedeciendo las reglas jurídico- administrativas. (França, 2000, pág. 168) En este sentido,

[...] deber de eficiencia es lo que se impone a todo agente público de realizar sus atribuciones con presteza, perfección, y rendimiento funcional. Es el más moderno principio de la función administrativa, que ya no se contenta con ser desempeñada tan sólo con legalidad, exigiendo resultados positivos para el servicio público y satisfactorio entendimiento de las necesidades de la comunidad y de sus miembros. (Lopes, 1999).

Por el otro lado, está el concepto de eficacia, entendida como la capacidad de alcanzar objetivos previamente fijados como meta. Tratándose de normas jurídicas, la eficacia consiste en la capacidad de alcanzar los objetivos en ella traducidos, que son, en última instancia, los dictámenes jurídicos objetivados por el legislador. Así, “la norma jurídica puede tener eficacia jurídica sin ser socialmente eficaz, es decir, puede generar efectos jurídicos, como, por ejemplo, el de revocar normas anteriores, y no ser efectivamente cumplida en el plano social”. (Silva, 1996, pág. 66).

A su vez, la efectividad de los derechos sociales puede ser entendida como la concretización de efectos jurídicos en el mundo de los hechos, es decir, constituye la materialización del derecho, pues, “simboliza la aproximación, tan íntima como sea posible, entre el deber ser normativo y el ser de la realidad social”. (Barroso, O direito constitucional e a efetividade de suas normas: limites e possibilidades da Constituição Brasileira, 1996, pág. 83).

La efectividad y la eficacia se relacionan con la aplicabilidad de la norma (Sarlet, 2001), en lo que respecta a la relación entre la eficacia jurídica y la aplicabilidad, podemos decir que,

La eficacia y aplicabilidad son fenómenos conexos, ya que la eficacia es encarada como potencialidad (la posibilidad de generar efectos jurídicos) y la aplicabilidad, como realizabilidad, razón por la cual eficacia y aplicabilidad pueden ser vistas como dos caras de la misma moneda, en la medida en que apenas la norma vigente será eficaz (en el sentido jurídico) por ser aplicable y en la medida de su aplicabilidad. (Silva, 1996).

El Tribunal brasileño de Cuentas de la Unión - TCU³, define la Eficiencia como la relación entre los productos (bienes y servicios) generados por una actividad y los costos de los insumos empleados durante un determinado período de tiempo. La Eficacia como el grado de alcance de las metas programadas en un determinado período de tiempo, independientemente de los costos implicados. Y la Efectividad como la relación entre los resultados alcanzados y los objetivos que motivaron la actuación institucional. En otras palabras, es la relación entre los impactos reales observados en la población y los impactos que serían esperados como consecuencia de la acción institucional.

Las teorías sobre el tema de la eficiencia, eficacia y efectividad en la literatura son bastante amplias. Sin embargo, para nuestra investigación se utilizarán las definiciones pertenecientes al campo jurídico en las relaciones privadas relacionadas a los derechos fundamentales de segunda dimensión, porque trata de "derechos económicos, sociales y culturales que se identifican con las libertades positivas reales o concretas y acentúan el principio de la igualdad" (Mainglia, 2009).

El derecho del trabajo, cuenta con disposiciones o mandatos legales que son asistidos para su cumplimiento por la coacción o fuerza, con la finalidad de

³ Órgano de control y fiscalización Federal de Brasil, vinculado al Poder Legislativo Nacional.

ordenar la convivencia humana conforme al valor de justicia. Así como reconoce plenamente el derecho de cada uno de los miembros de la comunidad, procura regular el diario convivir de un ser humano de naturaleza gregaria en torno al objetivo ideal de paz y armonía.

El derecho es un instrumento para asegurar un orden social que, en cierta manera, viene a ser un compromiso entre los principios de la justicia y la efectiva distribución del poder. La sociedad no tiene como objetivo "guardar" el derecho, pero lo cierto es que sin éste, aquélla no se da. Se plantea así un dilema: o cumplimiento estricto del derecho o arbitrariedad; justicia o caos; paz social (justicia, derecho, amor) o guerra intestina (destrucción, esterilidad, fracaso). Actúa a modo de matriz o molde que regula la convivencia y trata de ordenarla con miras a un fin. (Vázquez Vialard, Derecho del trabajo y de la seguridad social, 1999a, pág. 108).

Sin embargo, para que el derecho cumpla con la finalidad para la cual fue creado, debe ser respetado, y para ello se cuenta con mecanismos que aseguran su cumplimiento. La obligatoriedad general es la eficacia de la norma, su efecto esencial. Estas deben ser observadas y cumplidas por la generalidad de los ciudadanos. Para asegurar esto, la norma prevé las consecuencias jurídicas de su incumplimiento. (Castro Vítores, 2004) Por otro lado, los encargados de velar por el cumplimiento de la norma, son organismos institucionales estatales, que deben realizar una labor de control, observación y defensa del cumplimiento de los derechos sostenidos por las normas laborales:

El Estado tiene funciones indelegables en el mundo de la economía global que estamos experimentando. Entre ellas, tiene especial relevancia el trabajo y el empleo. Es por ello que se le han asignado funciones cuasilegislativas y hasta cuasijudiciales, a fin de velar por el cumplimiento de las normas a través del pleno ejercicio del poder de policía laboral, y a través de las reglamentaciones, puede contribuir a la mejor aplicación de las normas sin alterar su letra y espíritu (art. 99, inc. 2o, C.N.). (De Diego, 2002, pág. 129).

Las normas jurídicas, para cumplir con su finalidad de asegurar el orden social y la justicia, deben ser observadas y respetadas. El deber de cumplir las leyes es un efecto inmediato de su promulgación, para lo cual el derecho cuenta con mecanismos para asegurar su cumplimiento a través de las sanciones correspondientes por su inobservancia, convirtiéndolas así en una realidad jurídica. Así se aseguran los efectos esenciales de las normas: El deber jurídico de cumplimiento y obediencia (eficacia obligatoria); la reacción jurídica o sanción en caso de incumplimiento (eficacia sancionadora) y finalmente, la eficacia constitutiva, que da lugar a las relaciones jurídicas. (López Días, 2006).

Para asegurar su cumplimiento y observación, el derecho laboral se vale de sus ramas judicial y procesal:

Se distingue también el derecho laboral judicial o procesal del derecho administrativo. El primero se ocupa de los procedimientos que se utilizan en sede judicial cuando un conflicto se ventila ante los tribunales competentes. El derecho administrativo del trabajo es el conjunto de normas de procedimiento referidas a la intervención del Estado como administrador, como árbitro, mediador o simplemente como veedor frente a los sujetos individuales o colectivos del derecho del trabajo, generalmente en el plano de la resolución de los conflictos que se planteen, o en el marco de la negociación colectiva.

El derecho administrativo del trabajo se ocupa también del control del cumplimiento de las normas laborales, a través de la autoridad administrativa generalmente representada por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos de la Nación. En efecto, en ejercicio del poder de policía, a través de los cuerpos de inspectores y de los procedimientos especiales para instar el cumplimiento o para sancionar los incumplimientos, debe velar por el cumplimiento formal y material de las normas legales y convencionales, ya sea de oficio o a petición de parte interesada. (De Diego, 2002, pág. 65).

Existen conductas prohibidas por la ley en el ámbito laboral que suelen ser difíciles de combatir, como por ejemplo, la discriminación por origen étnico o nacionalidad, ya que los empleadores fundan en otras causas distintas a la discriminación prohibida su decisión de excluir a alguien en razón de su raza, origen étnico, religión, etc.

Si bien existen autoridades administrativas capaces de intervenir en estos casos y se cuenta con los recursos judiciales que en la medida en que se logre acreditar la existencia efectiva de un acto prohibido, imponen el cumplimiento de la ley, este sistema no es perfecto. Lo mismo ocurre con el trabajo rural, que por su desarrollo en lugares remotos y las características propias de su ámbito de desempeño, suelen mantener irregularidades contrarias a la ley sin ser detectadas con relativa facilidad. Aunque en este caso, resulte por la falla de los organismos e instrumentos de control institucionales que deberían ocuparse de ello. Es responsabilidad de los restantes poderes estatales asegurar el cumplimiento de la ley:

Derechos sociales: carácter protectoría. La Constitución Nacional protege al trabajo en sus diversas formas y dispone que las leyes aseguren al trabajador los llamados derechos sociales que enumera el art. 14 bis. El mandato constitucional se dirige primordialmente al legislador, pero su cumplimiento atañe asimismo a los restantes poderes públicos, los cuales, dentro de la órbita de sus respectivas competencias, deben hacer prevalecer el espíritu protector que anima a tales normas, en el marco que exigen las diversas formas de la justicia. (CSJN, "Valdez, Julio H. c/Cintioni, Alberto D.", 3-V-1979, D.T., 1979, pág. 355). (De Diego, 2002, pág. 101).

La eficiencia es tratada en el campo jurídico como un principio inherente propio de la Administración Pública, porque "impone al administrador el deber de la buena administración, a pesar de aun no estar bastante claro, a partir de qué nivel la falta de eficiencia pasaría a implicar responsabilización. " (Moraes, 2011) Es decir, es la forma de actuación de la Administración Pública para con los administrados, siempre preservando los intereses colectivos.

Por el otro lado, la eficacia, en tanto tema de la presente investigación, está estrictamente vinculada a la satisfacción de los derechos fundamentales, "en tanto valores esenciales del Estado [que] pasan a ser comprendidos como postulados sociales, que manifiestan un determinado orden de valores sirviendo, de esta forma, y a partir de entonces, de inspiración, impulso y directriz para la legislación, la administración y la jurisdicción". (Bonavides, Curso de Direito Constitucional, 2001, pág. 541).

En efecto, frente a un universo de normas laborales que regulan, entre otros, los derechos de los trabajadores es común observar que los trabajadores rurales, en particular, los de la agricultura de la Provincia de Buenos Aires y de la Región de Sisal del Estado de Bahía en Brasil, en su mayoría aún se encuentran en la informalidad en sus puestos de trabajo.

Las normas del derecho del trabajo deben, por tanto, tener aplicación de carácter inmediato, pero siempre, respetando el derecho adquirido, el acto jurídico perfecto y la cosa juzgada. No obstante, no es así como se comportan los empleadores rurales agrícolas, y de este modo, mantienen trabajadores sin registro de contrato de trabajo, tornando las normas ineficaces espontáneamente y perjudicando al trabajador.

El resultado de la ineficacia se traduce entonces, en la no efectividad de la ley por parte de los empleadores rurales. La efectividad consiste en volver operativa una norma existente en el ordenamiento jurídico. Por ejemplo, si la ley dice que el trabajador debe estar registrado, la efectividad se concreta con el registro efectuado por el empleador.

3. Control de las normas

En este apartado se procura responder: ¿De quién es el deber de fiscalizar y controlar la violación de las normas jurídicas en las relaciones privadas?

En el plano internacional, la OIT por medio del Tratado de Versalles (1919), ha delegado en los Estados la competencia para organizar un servicio de inspección del trabajo para dar fiel cumplimiento de las leyes. En el sector de la agricultura, especialmente, la OIT, trató acerca de la inspección del trabajo por medio del Convenio nº 129 de la OIT, adoptada por la Argentina y por Brasil no, sosteniendo la competencia de los Estados para ocuparse de la inspección del trabajo y fiscalizar el cumplimiento de las leyes. (Organización Internacional del Trabajo, 1969).

Mediante las competencias atribuidas por las normas de la OIT a los Estados para cuidar de la inspección, crear leyes y fiscalizar, observamos que en Argentina, el control y la fiscalización del trabajo de la agricultura es realizado por medio del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, como autoridad máxima y, por la Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (RENATEA) y la Comisión Nacional de Trabajo Rural. Los trabajadores están representados por la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE).

En Brasil, actúan en nombre del Estado, el Ministerio de Trabajo y Empleo (MTE), el Ministerio Público de Trabajo (MPT), y los sindicatos de los trabajadores rurales. En ambos países la intervención del Poder Judicial en las cuestiones que involucran la inspección, fiscalización y aplicación de las leyes del trabajo ocurren cuando hay provocación por parte de los interesados, en razón de la inercia legal.

La intervención del Estado no se reduce a la sanción de la ley y su aplicación por los jueces cuando alguien denuncia su violación; se inviste al poder administrador de la facultad de ejercer el contralor del cumplimiento de dichas normas, así como de sancionar las infracciones comprobadas. Esas funciones, que incluyen la de habilitación de los respectivos instrumentos de control que debe llevar el empleador y autorizar las situaciones de excepción previstas en la ley, integran la llamada policía del trabajo (poder de policía, según algunos) que

constituye una rama del derecho administrativo laboral. (Vázquez Vialard, Derecho del trabajo y de la seguridad social, 1999a, pág. 83).

Las labores de inspección y fiscalización del cumplimiento de la normativa registral y de las condiciones laborales rurales, se encuentran fragmentadas en Argentina. Observa, Sánchez Enrique (2016), que para ello, se cuenta con un esquema complejo de organismos estatales articulados de manera muy limitada. Los principales organismos de inspecciones relacionados con la labor en el ámbito rural en Argentina son los siguientes:

Table

	Competencia Territorial	Órgano de contralor	Objeto	Características
Materia Laboral	Nacional	Ministerio de Trabajo RENATEA Sindicatos (UATRE)	Orden público laboral. Condiciones de empleo digno. Registración Laboral	En algunos casos concurre con competencias locales de inspección laboral
		CNTA – Comisión Nacional de Trabajo Agrario	Asistencia técnico-administrativa necesaria para el funcionamiento de la Ley agraria	Organismo Autárquico tripartito (Ley 26.727) - Emite normas regulatorias y Realiza acciones de fiscalización.
	Provincial	Secretarías de Trabajo Provinciales (Ley 25.232)	Fiscalización del cumplimiento de reglamentos en materia de salud, seguridad e higiene en el trabajo.	Cumple facultades de inspección no delegadas a la Nación. Vela por el cumplimiento de las condiciones laborales de los trabajadores agrarios temporarios.
Otras Inspecciones Locales	Municipios, Provincias y CABA		Aspectos locales de inspección laboral. Higiene y Salubridad. Ejecución de multas. Bromatología.	
Control de Migraciones	Nacional	Ministerio del Interior y Transporte (Dirección Nacional de Migraciones Ley 25.871)	Control migratorio. Ingreso, egreso y permanencia de extranjeros.	Gendarmería, Prefectura Naval, Policía Aeronáutica, INTERPOL. Inspecciones de DNM a establecimientos laborales.
Fiscales	Nacional	AFIP – Administración Federal de Ingresos Públicos	Controles fiscales e impositivos	Controles por citación, verificación e inspección
Seguridad Social	Nacional	ANSES – Administración Nacional de Seguridad Social	Control y prevención de obligaciones de seguridad social	Verifica documentación de empresas, domicilios de solicitantes, sujetos de derecho de prestaciones y entes públicos.
Seguridad e Higiene en el trabajo	Nacional	SRT - Superintendencia de Riesgos de Trabajo	Entidad autárquica que fiscaliza el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene y el funcionamiento de las Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (ART).	

Gráfico: 2 “Controles e inspecciones relacionados con el trabajo rural” (Honorable Cámara de Diputados de la Nación, 2015, pág. 172)

El sistema de fiscalización argentino cuenta con una pluralidad de organismos facultados para fiscalizar diversos aspectos de una misma manera, pero lo realizan sin coordinación, con concurrencias y discordancias entre facultades de inspección a nivel nacional y provincial. A su vez, a partir de la autonomía que la Constitución Nacional Argentina en su artículo 5 concede a las provincias, éstas cuentan con diferentes organismos de inspección y han celebrado pactos con el Estado Nacional de manera independiente, generándose grandes desigualdades en materia de facultades de inspección de las provincias.

En términos generales, las Secretarías de Trabajo Provinciales, cuentan con facultades no delegadas a la Nación en virtud del Pacto Federal del Trabajo, Ley 25.232 (año 2000), por el que las provincias deben fiscalizar el cumplimiento de las leyes y reglamentos en materia de salud, higiene y seguridad en el trabajo dentro de su jurisdicción. La Resolución 11/11 de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario, a su vez, faculta a las Secretarías de Trabajo Provinciales a velar por el cumplimiento de las condiciones generales laborales de los trabajadores agrarios temporarios. (Sánchez Enrique, 2016).

La Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA) es un organismo tripartito de carácter normativo propio del Régimen Estatuario instaurado por la Ley N° 26.727 “Nuevo Estatuto del Peón Rural” (Título XIII, Capítulo I, artículo 84), que actúa en el ámbito del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social el cual, conforme con lo establecido en el artículo 85 de la misma ley, tiene a su cargo la asistencia técnico-administrativa necesaria para el funcionamiento de la misma. El organismo es Presidido por el Subsecretario de Relaciones Laborales del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, completando la representación del Estado Nacional, otro representante de la cartera laboral que ejerce la función de Presidente Alterno y un representante del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, con sus respectivos suplentes. Del organismo nacional (C.N.T.A.) dependen Comisiones Asesoras Regionales (CAR) que comprenden a las regiones productivas del país y distintas unidades de

negociación regional de menor ámbito territorial con asiento en las todas las provincias, representativas de las distintas producciones agrarias específicas que componen las economías regionales. (Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA), 2016).

Concretamente, la Comisión Nacional de Trabajo Agrario, un organismo autárquico, autónomo y normativo del Ministerio de Trabajo, cuenta con las siguientes funciones:

- Establecer las categorías de los trabajadores permanentes que se desempeñen en cada tipo de tarea, determinando sus características y fijando sus remuneraciones mínimas.
- Establecer las modalidades especiales de trabajo de las distintas actividades cíclicas, estacionales u ocasionales y sus respectivas remuneraciones con antelación suficiente al comienzo de las tareas, así como fijar la integración de los equipos mínimos o cuadrillas de trabajo para las producciones que así lo requieran.
- Asegurar la protección del trabajo familiar y del trabajador permanente en las actividades agrícolas.
- Dictar las condiciones mínimas de vivienda y alimentación cuando fueran proporcionadas por el empleador y determinar las deducciones que se practicarán sobre las remuneraciones por el otorgamiento de esos beneficios. • Adecuar la aplicación de las normas de higiene y seguridad en el trabajo al ámbito rural.
- Asesorar a los organismos nacionales, provinciales, municipales y entes autárquicos. (Neiman, 2012, pág. 22).

Por la sanción de la Ley 25.877, en el año 2004, el Sistema Integral de Protección del Trabajo y de la Seguridad Social, le asigna nuevas facultades al Ministerio de Trabajo de Nación para realizar acciones de fiscalización sobre

trabajo, en especial el infantil, con la idea de hacer más eficientes los controles provinciales. Pero esta ampliación de facultades del Ministerio de Trabajo Nacional, resulta concurrente con la fiscalización provincial generando allí un conflicto.

Las Tareas de fiscalización del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, se organizan de la siguiente manera, conforme al esquema que se presenta a continuación:

Gráfico: 3 Etapas del Plan Nacional de Regularización del Trabajo (PNRT)” Fuente: (Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, 2016)

A estas, se suman las acciones de fiscalización de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que realiza controles acerca de aportes y contribuciones de los empleadores en el Sistema Único de Seguridad Social (SUSS), que a su vez se encuentra a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), y se encuentra facultado para aplicar penalidades, tipificación y procedimientos sancionatorios.

Se siguen sumando organismos con facultades de control. La Ley. 24.557 (1995), crea la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT), una entidad autárquica bajo la jurisdicción del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, con facultades para fiscalizar el cumplimiento de las

normas de seguridad e higiene en el trabajo y el funcionamiento de las Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (ART). Este organismo, para desarrollar acciones en la jurisdicción de las provincias, se encuentra obligado a celebrar convenios con cada Provincia, agravando el esquema de fragmentación que menciona Sánchez Enrique (2016). Con ello se descentralizan las funciones del Ministerio de Trabajo de la Nación, quitando poder a este organismo fundamental.

Por su parte, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación también realiza inspecciones de trabajo agrario y brinda información sistemática sobre el mapa productivo que permite tener una aproximación a la posible distribución de los trabajadores, considerando la necesidad cuantitativa de mano de obra que resulta de las inspecciones realizadas. Lamentablemente, este organismo, carece de facultades de inspección específicas.

Cuando en 2011 la ley 26.727 establece un nuevo régimen de trabajo agrícola en Argentina, transfiere las funciones del Registro Nacional de Trabajadores Agrícolas del RENATRE, entonces a cargo de UATRE a un nuevo organismo autárquico situado bajo la jurisdicción del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación: El Registro Nacional de Empleadores y Trabajadores Agrícolas (RENATEA).

El RENATEA también estaba dotado de facultades de inspección respecto de registro laboral del trabajador rural, y del cumplimiento de la Ley 25.191 de registro y entrega de los empleadores a los trabajadores de su Libreta de Trabajo Agrario. Estas inspecciones podían ser tanto de oficio como por causa de denuncias. Las facultades del RENATEA, sin embargo, no le permitían realizar controles respecto del control de condiciones de trabajo de los trabajadores regidos por convenios colectivos de trabajo especiales. Si en sus inspecciones, el organismo encontraba situaciones imputables como trabajo infantil trata de personas con fines de explotación laboral o violaciones a las necesarias condiciones de seguridad e higiene en el trabajo, no podía actuar,

sino que debía comunicar las situaciones detectadas a otros organismos competentes para fiscalizar o sancionar dichas violaciones.

Las funciones de registro y fiscalización del trabajo rural han sido motivo de disputa también. En noviembre de 2015, con un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se da lugar a un recurso presentado por la UATRE por la inconstitucionalidad de los arts. 106 y 107 de la Ley 26.727 de creación del RENATEA, ente mixto (público y estatal), restituyendo al organismo público no estatal RENATRE, sus funciones tradicionales de registro y fiscalización de trabajo rural.

En este contexto resulta oportuno mencionar que en enero de 2015 fue reglamentada la Ley 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas y su modificatoria N° 26.842. En este sentido, frente a los numerosos casos vinculados con trata de personas con fines de explotación laboral (876 desde 2012)⁵ y de trabajo infantil, se creó en 2015 bajo la jurisdicción de RENATEA, la Coordinación de Políticas de Inclusión. Esta es un área especializada en articular con los organismos competentes, tanto en materia de fiscalización específica como de asistencia a las víctimas, las denuncias de presuntos casos de trata de personas con fines de explotación laboral, y de generar políticas públicas para prevenirlos. (Sánchez Enrique, 2016).

El RENATEA constituye una institución de central importancia para el contralor en materia laboral en el ámbito rural en Argentina. Sus informes y denuncias aportan información que permite contar con un panorama acerca de los niveles de informalidad que persisten en las zonas rurales del país. Sin embargo, actualmente, se encuentra en un cruce de denuncias de corrupción y vaciamiento que deben ser esclarecidas para contar con la veracidad de sus producciones en materia informativa. (Venegas denunció vaciamiento en el Renatea y dijo que Tomada irá preso, 2016) Se ha denunciado por ejemplo, que la fiscalización se tercerizaba y las formas de explotación extremas no eran denunciadas, por lo que la dirección de dicho organismo ha pasado por distintas manos en los últimos años y se encuentra en proceso de

reestructuración. (Norte Grande: revelador informe sobre el trabajo rural en negro, 2013); (Marchesani, 2016); (Bertello, Denuncian irregularidades en el Renatea, un ente para el campo, que controló el kirchnerismo y desvió \$15 millones, 2016).

Existen varios organismos más que se articulan con los mencionados, como la Procuraduría contra la Trata y la Explotación Laboral (PROTEX), la Dirección de Orientación a las Víctimas (DOVIC), el Programa de Rescate a Víctimas del Ministerio de Justicia Derechos Humanos y el Comité ejecutivo contra la Trata, y que se orientan a la asistencia de trabajadores rurales víctimas de explotación laboral y trata de personas. Así, concluye el autor que:

Por todo lo expuesto, puede inferirse que, si bien el escenario de organismos de inspección es amplio, la complejidad del diseño institucional resulta un obstáculo para realizar acciones de fiscalización, coordinadas y sistemáticas. De este modo, la fragmentación, la inestabilidad de competencias estatales, y la falta de coordinación conspira contra la eficiencia de las inspecciones, ya que se requiere la fiscalización conjunta de al menos cinco organismos, coordinando dos niveles, el nacional y el provincial. Esto último se complejiza porque en la actualidad depende de los pactos y de la relación política, no sólo institucional sino también político partidaria, que cada provincia tenga con el Estado Nacional. (Sánchez Enrique, 2016, pág. 32).

Esta fragmentación, en Argentina, se da también en el ámbito sindical, ya que la regulación del trabajo, por ejemplo, de cosecha, de acuerdo por la Ley 26.717 de trabajo agrícola, encuadra sindicalmente a los trabajadores de cosecha de aceitunas, yerba, etc., en la UATRE (Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. Sin embargo, cuando estos mismos trabajadores se desempeñan en labores de cosecha de uva, deben afiliarse al SOEVA (Sindicato de Obreros y Empleados Vitivinícolas y Afines, y cuando se emplean para cosechar frutas, en el SOEFRN y N, Sindicato de la Fruta de Río Negro y Neuquén. El problema, como se puede vislumbrar en lo expuesto, es que suelen ser los mismos trabajadores, los que a lo largo del año van

trabajando en distintas cosechas, y que se ven sometidos a diferentes regímenes jurídicos, y reguladas sus tareas por distintos sindicatos, diluyendo la fuerza de su participación gremial, de reclamo y exigibilidad de derechos. Ello resta fuerza a las decisiones o posibilidades de estos organismos de detectar y actuar ante situaciones de incumplimiento de la ley laboral. (Sánchez Enrique, 2016).

La Secretaría de Inspección del Trabajo del Ministerio de Trabajo de Brasil, se ocupa de las inspecciones de manera centralizada, ya que intentos previos de descentralizar las operaciones de inspección daban lugar a que se avise siempre antes a los terratenientes, quienes dispersaban a los trabajadores o disimulaban las irregularidades. La Unidad Móvil Especial de Inspección, es el sub-organismo encargado de cumplir con estas. (Oficina Internacional del Trabajo, 2001) El Sistema Federal de Inspección del Trabajo (SFIT) surge como una demanda interna del Ministerio de Trabajo y Empleo (MTE) para su labor de supervisión. Por Decreto 5.841/1965 del Reglamento de la Inspección de Trabajo, en su art. 1 se determina que:

El Sistema Federal de Inspección de Trabajo, dependiente del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, bajo la supervisión del Ministro de Estado, tiene como finalidad garantizar, en todo el territorio nacional, la aplicación de las disposiciones legales y regulatorias, incluyendo convenciones, internacionales ratificadas, de actos y resoluciones de las autoridades competentes y convenciones colectivas de trabajo, en lo que concierne a la duración y las condiciones de trabajo, así como la protección de los trabajadores en el ejercicio de la profesión. (Presidência da República Federal do Brasil, 1965).

A su vez cuenta con una herramienta de vigilancia, el CAGED⁴ que es un Registro General de Empleados y Desempleados que también cumple fines de registro estadístico. (Resende Chagas, Salim, & Mendes Santos Servo, 2012).

⁴ Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED).

Los sindicatos brasileños han adoptado medidas creando mecanismos de apoyo, realizando estudios y colaborando en las inspecciones. En 1963 se crea la oficina del Superintendente para la Política Agraria (SUPRA) como nueva instancia gubernamental para ayudar a los campesinos a establecer sindicatos por centenares. Con ello se creía que se podría romper la hegemonía tradicional de la oligarquía rural y avanzar en reformas superadoras. Esta entidad unió a representantes de distintos intereses, fundó decenas de sindicatos de trabajadores rurales (STR) y construyó la CONTAG (Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura), la mayor organización campesina de Brasil hasta la fecha. Dejó de funcionar esta oficina en 1964 con el gobierno militar en Brasil, y se reprimió a las Ligas Campesinas y al Movimiento de los trabajadores rurales en general, quedando solo los sindicatos anticomunistas y conservadores. (Mançano Fernandes, Welch, & Gonçalves, 2012).

Con todo ello, la acción de los sindicatos en Brasil, puede verse entorpecida, por la presencia de un monopolio sindical, pautada por una prescripción legislativa, por la cual, a pesar de que en la práctica hay en este país una multiplicidad de sindicatos, el Estado solo admite la existencia de una organización por sector de actividad. Argentina, ha adoptado variantes de organizaciones, en especial a nivel confederal, permitiendo el reconocimiento de diferentes niveles de representatividad y concediendo ciertas prerrogativas a las organizaciones más representativas. (Oficina Internacional del Trabajo, 2000).

Brasil también cuenta con organizaciones de control, como la Comisión Permanente de Investigación, Inspección y Control de las Condiciones de trabajo, que fue creada en el año 1993 compuesta por organizaciones gubernamentales, sindicatos, grupos eclesiásticos y ONGs, y que se aboca fundamentalmente a la investigación de situaciones de servidumbre rural por deudas y a la erradicación del trabajo infantil, realizando inspecciones. (Oficina Internacional del Trabajo, 2001).

Dentro de los grandes logros se puede mencionar el Programa Nacional para Fortalecimiento de la Agricultura PRONAF. Dicho programa se inició con líneas de crédito, atendiendo a 47 familias llegando hoy en día a ayudar 1.3 millones de familias con una inversión que alcanza los 6 mil millones de dólares. Además de la línea de crédito logramos implementar la creación de nuevas tecnologías, asistencia técnica, comercialización, formación y capacitación, además de monitoreo de las políticas con la participación de los beneficiados que son los trabajadores, los productores, los sin tierra. A pesar de los avances en reforma agraria, no es suficiente y se debe ampliar, ajustar y avanzar aún más en políticas públicas.

El PRONAF se creó en 1995 luego de presiones y negociaciones entre los movimientos sociales, en vista de la necesidad de una política agraria diferenciada para la agricultura familiar. El objetivo del programa es financiar las actividades agropecuarias y no agropecuarias exploradas mediante el empleo directo de la fuerza de trabajo del productor rural y de su familia. (Osorio Rojas, 2007, pág. 2).

Con la creación del Ministerio de Política Agraria, bajo el cual se centralizan los programas de reforma agraria y al PRONAF (Programa Nacional de Fortalecimiento de la Agricultura Familiar), se realizan acciones como la creación del Banco de la Tierra para promover el crédito a productores pequeños. (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 1999) El PRONAF, se instituye en 1995 y desde entonces ha evolucionado, agrupando agricultores según sus especificidades y creando nuevas modalidades de crédito y vías de apoyo a la agricultura familiar brasileña. (Zaar, 2011).

El Grupo Especial de Fiscalización Móvil y el Grupo Ejecutivo de Represión del Trabajo Forzado (GETRAF), actúa para la erradicación del trabajo esclavo o las servidumbres forzadas, logrando bajar las cifras de personas en esta situación. Sin embargo, en cuanto a resultados en materia de medidas que garanticen la seguridad personal de los trabajadores y se cumpla la observación de los derechos humanos en áreas rurales, los resultados han sido escasos, con

ausencia estatal y lentitud o incapacidad del sistema judicial. (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 1999).

Esto último es importante, ya que cuando todos estos mecanismos fallan y la ausencia estatal es total, cosa muy frecuente en grandes extensiones rurales de Brasil, en especial las más pobres y alejadas de los centros urbanos, se considera la vía judicial como forma de hacer valer los reclamos por incumplimiento de la normativa laboral vigente. Osorio Rojas (2007) observa que “ La intervención del Estado se realiza sólo cuando hay denuncias ” (pág. 1), por lo que la efectividad de la vía judicial es sumamente necesaria en este contexto. Sin embargo, el trabajador rural no registrado, carece de documentación alguna con qué acreditar o comprobar su situación de trabajador rural. Los requisitos estipulados en la ley especial para la comprobación de la situación laboral irregular, al no contemplar la realidad de este tipo de trabajadores, suelen encontrar los reclamos de esta mano de obra explotada y no registrada, improcedente. Los trabajadores rurales suelen trabajar en el campo para su propia subsistencia y la de su familia, por lo que difícilmente cuenten con los medios formales que le permitan acreditar el efectivo ejercicio de actividad en conflicto con la ley. El art. 48 de la Ley N° 8.213/91 de Seguridad Social, exige al trabajador que reclama beneficios sociales, documentación que respalde su labor por los meses que éste reclama de contribución patronal, cosa que plantea un conflicto directo con la protección de los derechos del trabajador rural en su contexto y circunstancias habituales reales. (Leite, 2014); (Osorio Rojas, 2007).

Este desamparo ha llegado a niveles extremos al punto de llamar la atención de la comunidad internacional. En 2015, la CIDH órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), lleva a la Corte IDH a Brasil por una situación conocida desde 1989 de violación sistemática a la Convención Americana sobre Derechos Humanos de decenas de miles de trabajadores sometidos a trabajo esclavo, por la que la Comisión Interamericana atribuye al Estado de Brasil responsabilidad e intencionalidad manifiesta ya que conocía la situación y no adoptó medidas de prevención ni respuesta, ni proveyó a las víctimas de mecanismos judiciales efectivos para la

protección de sus derechos, ni sancionó a los responsables ni procuró reparación alguna a los damnificados. La falta de mecanismos de control, se encuentra entre los reclamos de la Organización de los Estados Americanos a Brasil:

La situación de extrema y especial vulnerabilidad de dicho grupo se debe, entre otros, a la falta de recursos adecuados y efectivos que protejan sus derechos no sólo de manera formal; la pobreza extrema en la que vive gran parte de la población de los estados de los cuales son oriundos; la insuficiente presencia de instituciones estatales; y la inequitativa distribución de la tierra. (Organización de los Estados Americanos, 2015).

Si bien en la práctica no han logrado perfeccionar su labor en materia de fiscalización y prevención, varios organismos han trabajado durante casi dos décadas, denunciando en soledad los abusos de los trabajadores rurales y demandando que estas se investiguen. Entre ellos, se destaca la labor de movimientos sociales como la Comisión Pastoral de la Tierra, la CONTAG - Confederación Nacional dos Trabajadores en la Agricultura y los Sindicatos de Trabajadores Rurales (STR ´s), que a partir de los años noventa, han tenido un rol más relevante en la sociedad, presionando al gobierno de Brasil para enfrentar problemáticas de abuso como en trabajo esclavo en el ámbito rural. También se han creado comisiones especiales para dar tratamiento al tema en el ámbito parlamentario, como la instalación del Foro Nacional Permanente La violencia en contra de Campo en 1992, que permitió una aproximación entre las agencias estatales y movimientos de la sociedad civil, con la finalidad de buscar de manera conjunta solución al trabajo esclavo rural. Luego, por Decreto Nº 1538/1995 se creó el Grupo Ejecutivo para combatir el trabajo forzoso (GERTRAF), integrado por varios ministerios, entre ellos el de Desarrollo Agrario, y por sociedades civiles que no forman parte del Poder Ejecutivo y organismos internacionales como la. En el mismo año se creó el ya mencionado Grupo Móvil Especial de Inspección, del Ministerio de Trabajo y Empleo, una organización especializada en el rescate de trabajadores sometidos a la esclavización. Este Grupo Móvil es el instrumento operacional del GERTRAF, y tiene como objeto central establecer, a partir de la orientación

de la Secretaría de Fiscalización del Trabajo, el planeamiento de las acciones de fiscalización sobre situaciones concretas que hayan sido objeto de denuncias.

Los fiscales refuerzan la actuación de los auditores con medidas judiciales urgentes, que pueden ser acompañadas de bloque de los bienes de los acusados que se negasen a observar los derechos de los trabajadores.

También se cuenta con el organismo de la CONATRAE (Comisión Nacional para a Erradicación de Trabajo Esclavo), vinculado con la Secretaría Especial de Derechos Humanos de la Presidencia de la República, y compuesta por integrantes de los Ministerios de Agricultura, Defensa y Desarrollo Agrario, Medio Ambiente, Trabajo y Empleo y Previsión Social. También cuenta con dos representantes del Ministerio de Justicia, uno del Departamento de Policía Federal y de la Policía de Tránsito Federal y de entidades no gubernamentales.

Existen otros mecanismos, como el Registro de los empleadores multados por el uso de mano de obra esclava, que se conoce en Brasil como "lista negra (Lista Suja)" Los empleadores que entran en esa lista luego de haberse completado el proceso administrativo por el que se prueba la práctica de éste de reducción a la esclavitud de sus trabajadores, previenen a bancos públicos y organismos de Desarrollo Regional a fin de limitar el acceso al crédito y a beneficios fiscales a estos empleadores o empresas infractores. Luego de dos años de monitoreo, se quita de la lista al infractor. (Alves Pereira Mourad, 2015) Esta lista se ha extinguido en 2015, cayendo en desuso. (Canuto, da Silva Luz, & Rodrigues Costa, 2015).

La eficacia normativa guarda relación con el concepto de Estado Social de Derecho, y trasciende la mera observación coaccionada de la ley, abarcando una serie de garantías y seguridades que el Estado debe ofrecer a fin de garantizar con eficacia la observancia de los derechos fundamentales. Para ello, Estado, política y Derecho deben alcanzar una serie de características necesarias que hacen a una verdadera eficacia:

- a) El orden jurídico debe tener un contenido axiológico en cuanto a valores propios del derecho, como la justicia, el bien común, etcétera.
- b) La actividad del gobierno debe mostrar un total respeto a los derechos humanos de los gobernados; es decir, debe existir una amplia consideración y respeto por los derechos individuales y los derechos sociales.
- c) La estructura racional, que es el Estado, debe perseguir la democracia social como forma de vida [...] y a ese fin debe encaminarse toda actividad política (tanto la gubernamental como la social.)
- d) Se debe garantizar la seguridad mediante la aplicación judicial del derecho, de manera pronta, expedita, imparcial y profesional que realicen los órganos jurisdiccionales de gobierno.
- e) El Estado debe contar con mecanismos que limiten y distribuyan las competencias de los órganos de gobierno del Estado. (Hernández Cruz, 2015, pág. 23)

Para ello, las instituciones estatales deben también considerar una serie de factores que no pueden desarticularse de lo anterior si se desea una observación real y efectiva de los derechos humanos y realmente se quiere garantizar su cumplimiento:

- Tutela y garantía de los derechos humanos consagrados en la Constitución y en los tratados.
- Desarrollo nacional, en sus diversos aspectos: económico, social, político, cultural y ambiental (rural y urbano), y rectoría del Estado en todos los aspectos del desarrollo.
- Régimen de economía mixta, que justifica la intervención del Estado en la actividad económica.
- Distribución de funciones entre diversos órganos de gobierno, evitando la concentración en uno solo.

- Sistema de gobierno descentralizado en tres niveles (“federal”, local y municipal).
- Defensa jurídica de la Constitución a través de mecanismos de control constitucional, para asegurarse de que los actos de las autoridades se apeguen a los mandatos de ésta.
- Estado democrático con una forma de gobierno descentralizada y representativa.
- Protección y reconocimiento de los derechos de los grupos sociales vulnerables. (Hernández Cruz, 2015, pág. 24)

La eficacia normativa y la verdadera observación de los derechos humanos no es un aspecto que compete únicamente al ámbito del Derecho o judicial, como se ha observado, sino que requiere de una articulación de políticas, de gobierno e institucionales en las que se considere la perspectiva de los derechos humanos ante cada decisión. Se debe tener presente que “El fin de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre” (Sieyès, 1989, pág. 9) Por ello, las decisiones políticas fundamentales, deben ser plasmadas en normas jurídicas a fin de ser dotadas de obligatoriedad para garantizar su cumplimiento y observancia en beneficio de toda la sociedad.

4. Derechos fundamentales en el trabajo rural.

El tema de la eficacia normativa no se agota en la obligatoriedad del derecho ni en la coacción del estado, sino que requiere de validez, consenso y un Estado de Derecho concebido como una forma de vida conforme a la ley, en el que gobernantes y gobernados se ordenen en función de construir mejores condiciones de vida para el individuo en sociedad. Ese marco de certeza y seguridad jurídica entre los individuos que debe garantizar el Estado de Derecho, se encuentra estrechamente ligado a la eficacia normativa, en especial a la constitucional, en la que se consolidan los derechos fundamentales, como condición esencial para el desarrollo integral de sus ciudadanos en todas sus potencialidades. (Hernández Cruz, 2015).

Los derechos fundamentales trascienden la perspectiva de garantía de posiciones individuales, en la medida en que se reconoce que tales derechos, además de imponer ciertas prestaciones a los poderes estatales, consagran también los valores más importantes de una comunidad política como la eficacia de la ley. "En un modelo de Estado Constitucional de Derecho se exige de los poderes públicos -y en especial del poder que juzga-, el control y la realización concreta de las garantías necesarias para el respeto de los derechos fundamentales" (Duarte, 2011, pág. 10).

El concepto de derechos fundamentales está bien definido por Ferrajoli en la citación de David Duarte al afirmar que se le aplica a todos los seres humanos en cuanto dotados del status de personas, de ciudadano o personas con capacidad de obrar; "entendiendo por derecho subjetivo, cualquier expectativa positiva (de prestaciones) o negativa (de no sufrir lesiones) adscripta a un sujeto por una norma jurídica; y por status la condición de un sujeto, prevista asimismo por una norma jurídica positiva, como presupuesto de su idoneidad para ser titular de situaciones jurídicas y/o autor de los actos que son ejercicio de éstas" (Durate, 2011), que tuvo como propuesta de forma amplia abarcar todos los derechos de los ciudadanos.

La intención de Ferrajoli sería resolver un problema histórico relativo a la aplicación de los derechos fundamentales de forma igualitaria, sin embargo, la cuestión todavía encuentra un obstáculo para su efectividad, haciendo que existan aún con mucha frecuencia causas de violaciones de los derechos laborales en la actualidad. Así, teniendo como base los derechos fundamentales del trabajador, como los derechos de personalidad tutelados en razón de la necesidad de interferencia estatal en el ámbito de la autonomía de la voluntad, en cuestiones personales del empleado. Cabe destacar, entonces, algunos aspectos ilustrativos: la limitación al poder de fiscalizar la actividad del empleado (el control del empleado), la libertad de pensamiento, de convicción filosófica y política (la libre afiliación sindical). (Barroso, 2010) De esta forma, vemos que existen derechos fundamentales por medio de los cuales se busca defender la dignidad moral del empleado de perjuicios tales como el daño

moral, el acoso moral y el acoso sexual. (Carrion, 2011) Además de eso, en consonancia con lo antes dicho, el derecho a no ser discriminado; derecho que resguarda a la mujer trabajadora, al trabajador extranjero, al trabajador con necesidades especiales, al trabajador portador del virus HIV, son también derechos fundamentales que deben ser protegidos. (Meireles & Meireles, 2009).

En un esfuerzo por evitar confusiones terminológicas, Canessa Montejo, (2006) aclara que derechos humanos y derechos fundamentales, son términos que bajo ciertos criterios doctrinarios, entienden a los derechos humanos como aquellos formulados en las declaraciones y convenciones internacionales; y los derechos fundamentales son derechos humanos positivados en las constituciones estatales. Sin embargo, el debate sobre la precisión conceptual de estos términos continúa en la Filosofía del Derecho, agregando complejidad:

Al lado de este complejo problema, existe una proliferación de términos o denominaciones cuando se refieren al listado de derechos laborales recogidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos. Así, tenemos términos como “derechos humanos fundamentales”, “derechos fundamentales en el trabajo” o “derechos sociales fundamentales” por mencionar tres de los más recurrentes. Todos ellos provocan serias confusiones por aludir a distintos aspectos – en muchos casos contradictorios- sobre los derechos laborales, a la vez que no resaltan las singularidades de los derechos laborales en el ámbito de los derechos humanos. Se trata del problema del concepto de los derechos, es decir, responder al para qué de los derechos. (Canessa Montejo, 2006, pág. 3).

Para dilucidar dicho debate, el autor propone postular una categoría jurídica flexible que permita incluir los rasgos singulares de los derechos laborales recogidos en los tratados de derechos humanos, ofrecer razones que expliquen por qué este grupo de derechos laborales encuentran justificación para formar parte de los derechos humanos, y finalmente, ofrecer un listado de esta categoría jurídica en cuestión.

Para Canessa Montejo (2014), la fundamentación antropológica de los derechos humanos laborales surge de la teoría de las necesidades, por la cual se procura satisfacer una necesidad a fin de evitar un daño o perjuicio. Tras un debate público y democrático sobre cuáles necesidades existentes deben ser satisfechas en razón de un valor generalizable a todos los miembros de la comunidad, y materializando la satisfacción de necesidades aprobadas en un derecho. La insatisfacción de ciertas necesidades provoca un daño, sufrimiento o perjuicio grave de manera generalizada en cualquier sujeto, independientemente de su sexo, condición social, cultural o económica, en especial las necesidades básicas. En la discusión acerca de si una necesidad debe o no ser satisfecha de manera general, se consideran cuatro limitantes básicos:

- Escasez. La consideración de que no es posible satisfacer todas las necesidades en función de que los recursos disponibles son limitados. Lo que no debe ser confundido con una mala distribución de los recursos disponibles.
- No todas las necesidades pueden materializarse en derechos por su naturaleza (necesidad de afecto, de amor), lo que impide que sean recogidas bajo una fórmula normativa.
- Imperativo kantiano. El hombre no ha de ser un mero medio para otro hombre.
- Las necesidades que merecen ser satisfechas no deben esconder la explotación del ser humano como medio.
- La satisfacción de las necesidades no debe poner en peligro el medio ambiente. (Meik, Duarte, Canessa, Zas, Cremonte, & Crespo, 2014, pág. 394).

Estas necesidades, a su vez, requieren que el sujeto actúe moralmente y de manera racional para alcanzar sus propósitos, bajo las condiciones de libertad y bienestar, entendiendo libertad como el control de la conducta por propia elección voluntaria con el conocimiento de las circunstancias relevantes, y entendiendo bienestar como el contar con las capacidades y condiciones

generales necesarias para actuar. El sujeto, al reconocer la premisa de que para asegurar la existencia del agente moral o de la persona, es necesario satisfacer las propias necesidades, reconoce, asimismo, lo fundamental de la satisfacción de esas mismas necesidades para los demás sujetos. Ello sostiene el reconocimiento mutuo de un conjunto de derechos sobre los cuales se asienta la regulación legítima de su convivencia. Es así, que los derechos fundamentales garantizan las condiciones de vida que aseguran la igualdad de oportunidad de goce de los otros derechos. Para que ello argumentativamente tenga mayor consistencia, Canessa propone subsumir la autonomía y la supervivencia que asegura la existencia del sujeto moral en el valor fundamental de la dignidad humana, que engloba a los demás. Al considerar la autonomía en los valores de igualdad y libertad como constituyentes de la dignidad humana, se asegura no entrar en conflictos al establecer las relaciones entre necesidades, su satisfacción y los derechos que las resguardan.

La dignidad como concepto, en su etimología, proviene del latín *Dignitas*, que se traduce como valor. Es un valor social que resulta de las formaciones socioculturales habituales dentro del mundo que generan las relaciones personales intersubjetivas. El significado adquiere importancia en un colectivo social y se institucionaliza, es compartido, internalizado y aprehendido por los individuos como parte del cuerpo de conocimiento que define su actuar. En el largo proceso de sedimentación social que implica la construcción del valor de dignidad, se produce una sedimentación social que gesta una institucionalización objetivada sólida, pero sujeta a transformaciones.

Baje este esquema, el valor "dignidad" incorporado al orden institucional se legitima y se interpreta tanto cognoscitiva y normativamente, de allí la trascendencia social del término y la recurrencia en su uso como argumento para justificar los derechos humanos. Desde ese valor sustantivo se asienta el ordenamiento de la comunidad. Se trata de la correspondencia entre la dignidad humana como valor fundamental - pilar de la colectividad que coloca a sus miembros como centralidad del tejido social - y los derechos básicos como reglas normativas fundamentales -

que aseguran la centralidad del individuo en la colectividad-. [...] la dignidad humana contiene un conjunto de valores (la seguridad-autonomía, la libertad y la igualdad) que otorgan contenido a los derechos humanos. Es decir, la dignidad es un supervalor que abarca otros valores sustanciales y que desde los cuales se fundamentan los derechos personales y de seguridad individual, los derechos cívico-políticos y los derechos económicos, sociales y culturales . [...] la dignidad humana, al ser un valor fundamental, puede contener en su interior otros valores también esenciales, en tanto consolida un criterio de unicidad axiológica y no lo dispersa con otros valores que pueden entrar en competencia. (Meik, Duarte, Canessa, Zas, Cremonte, & Crespo, 2014, pág. 398).

De acuerdo con la perspectiva kantiana, el principio de la dignidad de la naturaleza humana tiene el acento puesto en la autonomía, y justifica la satisfacción de los derechos desde una fundamentación antropológica, asegurando la supervivencia física por medio de la satisfacción de las necesidades. De este modo, al exigir que se asegure la autonomía de los sujetos, se justifica doblemente desde la satisfacción de las necesidades y el respeto a la dignidad humana, la validación de la fundamentación de los derechos humanos laborales dentro de un principio de universalización.

Los principios del derecho, por su parte, constituyen líneas maestras a las que se debe ajustar la estructuración de un sistema normativo, se orientan al cumplimiento de la finalidad que se persigue. Estos principios concentran la filosofía del sistema y sostienen aspectos fundamentales de carácter técnico que orientan sobre los modos más convenientes de implantación de un sistema capaz de alcanzar la mayor eficacia posible. Entre estos se incluyen en el ámbito laboral y de seguridad social, los principios de dignidad del hombre, de libertad, solidaridad y subsidiariedad, así como los principios de universalidad, integralidad, igualdad y unidad de gestión. (Vazquez Vialard, Derecho del trabajo y de la seguridad social, 1999b).

En el transcurso de la historia humana, se han plasmado derechos fundamentales en las constituciones de todos los países, con vistas a reunir un

complejo de informaciones acerca de la protección de la persona humana. Muchos de los derechos fundamentales se encuentran positivados en las Constituciones; no obstante, no todos esos derechos están explicitados en las leyes generales de los países, “[...] necesitándose en muchos casos de un análisis más profundo, sobre todo en la interpretación y aplicación de los principios generales del derecho, a fin de mantener relación con las mejores formas de tratamiento y existencia del ser humano”. (Nascimento, 2011, pág. 34).

En cierto modo, los derechos fundamentales tienen por objetivo la protección general de forma indistinta, es decir, se resguardan ciertos derechos de la persona que deben ser observados y cumplidos de manera obligatoria, como por ejemplo, la vida humana, la dignidad de la persona, la protección del libre pensamiento. (Carrion, 2011) Es bastante común confundir los derechos fundamentales con los derechos previstos en las Constituciones, sin embargo, cada uno de estos derechos tiene una función en el campo jurídico. Los derechos fundamentales son “todos aquellos derechos subjetivos que corresponden universalmente a todos los seres humanos en tanto dotados de status de persona, de ciudadano, o de personas con capacidad ad de actuar” (Ferrajoli, 2001, pág. 19), es decir, los derechos fundamentales llegan más allá de los derechos previstos en la Constitución, como también, a los que fueron incorporados al derecho positivo, como por ejemplo, aquellos comprendidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, siendo derechos innegociables. Para Ferrajoli, “los derechos patrimoniales no están insertados en este contexto, porque poseen la característica de ser negociables”. (Ferrajoli L. , 2004).

La clasificación de los derechos fundamentales posee diferentes situaciones jurídicas particulares, pues, son universales y se refieren a la igualdad de todos; personalísimos y, por tanto, indivisibles. Por esto, la ofensa al valor de una persona implicará a todas; son inviolables, inalienables e indisponibles. A su vez, su violación justifica la violencia (legítima defensa), tornando aún más insensata la asociación entre derechos fundamentales y otras figuras de derechos y prerrogativas sugeridas por las más que globales categorías de los

derechos subjetivos y diversas situaciones jurídicas. (Ferrajoli L. , 2002, pág. 730).

Como se ha señalado, los Derechos humanos laborales se consagran en los tratados internacionales de derechos humanos y en las constituciones nacionales, en un proceso iniciado en el siglo XX y que continúa en revisión permanente. La Organización Internacional del Trabajo, desde 1919 ha producido normativa vital para el reconocimiento y consenso sobre estos derechos, consolidándolos en la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) y en los Pactos Internacionales y Tratados regionales, siendo el tema laboral parte de dichas regulaciones. (Canessa Montejo, 2006).

Desde el año 1999, la Organización Internacional del Trabajo ha promovido el concepto de trabajo decente. Este organismo internacional considera que el trabajo decente es el que favorece la inserción en la vida comunitaria, genera riqueza, construye el progreso social no solo de los trabajadores, sino de los países en general, y que permite a sus ciudadanos acceder a una vida digna. Sus características son:

- Libre elección y ejercicio del trabajo, y por lo tanto, elimina y prohíbe el trabajo forzoso, el trabajo esclavo y el trabajo infantil. Trabajo con seguridad social, desde la propia iniciación del contrato laboral, con los aportes al sistema de previsión social, la prevención de riesgos laborales y la compensación ante cualquier accidente o enfermedad laboral.
- (Con) tutelas que protegen la maternidad, infancia, matrimonio, vacaciones, enfermedades, salarios diferidos de compensación, vejez, y todas aquellas circunstancias atípicas que acontecen en la vida de los individuos.
- Derecho a la libre asociación y afiliación a las organizaciones que defienden los intereses de los trabajadores: el sindicato. Sin libertad sindical y derecho de asociación, el resto de los derechos se verán seriamente limitados, y a mediano plazo, cercenados. Asociado a ese

derecho se encuentra el fortalecimiento del diálogo social entre empleadores, gobiernos y trabajadores y su correlato en la negociación colectiva.

– (Permite la) conciliación entre vida familiar y trabajo, indica que es necesario desarrollar políticas de responsabilidad familiar compartida, en igualdad de condiciones y oportunidades para hombres y mujeres.

– Impone la eliminación de toda forma de discriminación, ya sea por sexo, edad, raza, religión, orientación sexual, nacionalidad, etc. Trabajo Decente requiere que todas las políticas de empleo estén orientadas a la generación de empleos. (Faiguenbaum, Ortega, & Soto Baquero, 2013, pág. 66).

Al hablar de los derechos de los trabajadores rurales, resulta propio tener presentes los orígenes y el proceso evolutivo de los derechos fundamentales conquistados por los trabajadores durante largos períodos de luchas para tener una vida mejor.

Se ha mencionado que Canessa Montejo (2006) propone enumerar los derechos laborales fundamentales, y lo hace bajo un criterio de clasificación que distingue entre derechos individuales, colectivos y de prestación social, y especificando cuál es el instrumento internacional de derechos humanos que lo ha consolidado. A saber:

Gráfico: 4 “Derechos Laborales Fundamentales, clasificación y consolidación normativa”

Fuente: Elaboración Propia sobre textos de: (Canessa Montejo, 2006, págs. 3-6)

De este modo, Canessa Montejo (2006) logra sistematizar los derechos laborales básicos, a fin de establecer sus límites y diferenciarlos de los demás derechos laborales no recogidos en los cuerpos normativos que los reconocen como derechos humanos.

Cada uno de esos temas citados discriminación, derecho a la promoción de empleo, a la huelga, etc., ameritarían una investigación específica. Por lo tanto, para no desvirtuar el objeto de investigación, estos temas no serán abordados, ya que la intención de la presente Tesis es investigar la eficacia de los

derechos fundamentales laborales de los trabajadores agrícolas rurales no registrados de Argentina y Brasil.

La protección de los derechos fundamentales del trabajo comenzó a debatirse en el período de la Revolución Industrial en razón de las consecuencias adversas que ésta tenía para el trabajador. Si por un lado, la máquina posibilitó la producción en serie y la instauración de un nuevo modo de producción, por el otro, trajo enfermedades, accidentes e invalidez; en síntesis, la necesidad de un aparato de protección social. (Nascimento A. M., 2010). La influencia de los derechos fundamentales en las relaciones de carácter privado también puede ser verificada, porque,

Se ha observado un crecimiento de la teoría de la eficacia horizontal (o irradiante) de los derechos fundamentales, es decir, de la teoría de la aplicación directa de los derechos fundamentales a las relaciones privadas, especialmente frente a las actividades privadas que tengan cierto carácter público, por ejemplo, matrículas en escuelas, clubes asociativos, relaciones de trabajo, etc. La idea es que las normas definitorias de los derechos y garantías fundamentales tienen aplicación inmediata (eficacia horizontal inmediata). Ciertamente esta eficacia horizontal o irradiante trae una nueva visión de la materia, ya que las normas de protección de la persona, previstas en la Constitución Federal, siempre fueron consideradas como dirigidas al legislador o al Estado (normas programáticas). Esa concepción no prevalece más, ya que la eficacia horizontal hace más evidente y concreta la protección de la dignidad humana y de otros valores constitucionales. (Gonçalves, 2010, págs. 45-46).

Es en el propio ser humano, como poseedor inherente de la dignidad, y en el propio Estado Democrático de Derecho, garante de esta dignidad, donde se encuentra la fundamentación tanto de los derechos fundamentales como de los derechos humanos, en cualquiera de sus acepciones. Los derechos fundamentales necesitan ser resguardados y respetados. Es imprescindible su

constante vigilancia. Las acciones del Estado deben estar pautadas por la valoración de la dignidad humana, para el ejercicio pleno de la ciudadanía.

La protección de los Derechos Humanos tiene como premisa el dar oportunidad, a los sectores excluidos, de tener condiciones suficientes para el ejercicio de sus derechos fundamentales que son intrínsecos a todo ser humano independientemente de su raza, credo, nacionalidad o cualquier otro aspecto.

Sin embargo, aunque las legislaciones de los países sean muy protectoras de los trabajadores, los altos índices de trabajo rural agrícola sin registro son bastante alarmantes y fáciles de constatar. He aquí que las leyes no se cumplen, haciendo que los trabajadores ejerzan sus actividades en condiciones precarias, bajo régimen de esclavitud en muchos casos, y sin gozar de los derechos laborales.

La flexibilización de los derechos laborales es una estrategia utilizada por los empleadores, con la autorización del Estado, mediante la intervención de los actores sociales, con la idea de aumentar la cantidad de puestos de trabajo y, consecuentemente, reducir el desempleo.

En Argentina, a partir de la década de 1990, cuando la flexibilidad comenzó a restringir los derechos del trabajador, el gobierno percibió que el empleador actuaba libremente, celebrando contratos de trabajo de corto plazo, y cuando extinguía el vínculo pagaba una baja indemnización, además de exigir en muchos casos un desmesurado esfuerzo personal del empleado para ejecutar las actividades, con jornadas excesivas. (Cordeiro, 2000).

Por su parte, en Brasil, la flexibilización de los derechos laborales es de plena evidencia, y es incluso incentivada por el gobierno, bajo el argumento de disminuir el desempleo en el país. No obstante, no es benéfica para el trabajador ni económicamente ni para su salud.

Cabe destacar que aunque algunos autores utilicen los términos “flexibilizar” y “desregular” como sinónimos, no parece ser un criterio correcto, pues el término flexibilizar es “adecuar la normativa imperante de un ordenamiento jurídico a una realidad económico-social crítica que reclama su protección, debido a la rauda fluctuación del sistema económico”. Sin embargo, “Desregular” alude a una supuesta sobrecarga normativa que interfiere en el desenvolvimiento de las actividades que regula”. (Montoro Gil, 2010, pág. 157).

El término “flexibilización laboral” puede estar conceptualizado de dos formas: la primera, bajo la óptica de la flexibilización en la organización productiva que “se relaciona estrechamente con la descentralización productiva, la contratación y subcontratación de obras y servicios, y la organización del trabajo de la empresa”, el segundo concepto, “es la posibilidad legal de contratar temporalmente y a tiempo parcial sin demasiadas limitaciones”. (Grisolia J. A., 2013, pág. 20).

La flexibilidad laboral que se establece en este ámbito está determinada por el empleador, el trabajador y el Estado. La flexibilidad en los contratos es lo que permite al empleador llevar a cabo sus intereses y objetivos sin ningún inconveniente; siempre y cuando el empleado, esté respaldado por la ley.

Hay quienes entienden que la flexibilización del derecho laboral tradicional tiene dos caras: una que mira hacia adelante, y otra que mira hacia atrás; es decir una positiva y una negativa. La parte positiva estaría representada por la flexibilidad que permite a las empresas, mantener su competitividad, realizando ajustes y estimulando la diversificación y expansión del empleo. (Hoyos, 1987, pág. 193) La parte negativa, se observa cuando esa flexibilización se traduce en precarización laboral y pérdida de derechos.

Para muchos, las flexibilizaciones laborales vulneran, necesariamente, los derechos fundamentales de los trabajadores, mientras que para otros, es solo un modo de controlar el poder de los sindicatos, lo que igualmente vulnera los derechos fundamentales. Otros sostienen que es una forma de adecuar los esquemas de producción a los sistemas productivos modernos. Las salvedades

que se hacen para el caso en que se considera a la flexibilización como no desregulatoria, se solicita una modernización laboral que garantice dos valores fundamentales:

- Al trabajador le deben asegurar sus derechos fundamentales, sobre todo aquellos que están ligados al amparo de la dignidad del hombre que trabaja. el principio de suficiencia del salario y la custodia de los institutos fundamentales, como son la jornada, el descanso y la estabilidad en el empleo;
- Al empleador le deben garantizar seguridad jurídica en el nuevo marco legal y regulatorio, el que debe basarse en la existencia de mecanismos idóneos para resolver los conflictos y la existencia de una justicia independiente que preserve los valores de la equidad y de la distribución equitativa basada en darle a cada uno lo que por derecho le corresponde, sin caer en la sobreprotección ni en la desprotección, buscando un punto de equilibrio. (De Diego, 2002, pág. 572).

De los conceptos mencionados anteriormente, se determina que la flexibilización es un conjunto de mecanismos de optimización de los recursos humanos, económicos, tecnológicos y físicos de la empresa, donde el objetivo es adaptar las relaciones laborales a las exigencias económicas del mercado.

La finalidad es aprovechar al máximo, todos los elementos mencionados anteriormente que están al servicio de la producción. La clave es adaptar las relaciones laborales al factor trabajo, dentro de un mercado dinámico y que permita satisfacer las exigencias de una economía mundial globalizada.

Como consecuencia por el incumplimiento de las leyes surgen grandes perjuicios financieros para los Estados, porque estos dejan de recibir las contribuciones sociales que normalmente son cobradas a los trabajadores registrados. Por otro lado, el trabajador rural agrícola no registrado queda totalmente desprotegido de los beneficios sociales ofrecidos por el Estado a los

trabajadores registrados, además de sobrevivir bajo pésimas condiciones financieras porque no hay ningún incremento en su patrimonio.

Estos derechos fundamentales son incorporados en muchas Constituciones y cuerpos normativos nacionales, incluyendo Argentina y Brasil. Sin embargo, el hecho de que figuren en una norma legal o en un principio enunciado en la constitución, no implica su aplicación directa ni la eficacia inmediata de un derecho fundamental, ya que cumple una función declarativa, no constitutiva. Sin embargo, existe una tutela de los derechos fundamentales dada por el texto constitucional que debe colmar las lagunas de la regulación legal y cubrir supuestos no contemplados específicamente o las limitaciones de los instrumentos de control del Derecho privado. Asimismo, “donde hay un derecho hay un remedio legal para hacerlo valer toda vez que sea desconocido; principio del que ha nacido la acción de amparo, pues las garantías constitucionales existen y protegen a los individuos por el solo hecho de estar en la Constitución e independientemente de sus leyes reglamentarias, cuyas limitaciones no pueden constituir obstáculo para la vigencia efectiva de dichas garantías.” (Meik, Duarte, Canessa, Zas, Cremonte, & Crespo, 2014, pág. 493).

Es por ello que los derechos fundamentales se deben hacer cumplir independientemente de la existencia de una norma legal especial que los contemple, bastando con que estén garantizados por la constitución o por leyes generales que aborden las garantías individuales. Sin embargo, frecuentemente se observa que la igualdad consagrada por las Constituciones, Leyes e instrumentos internacionales a los que adhieren los Estados, terminan siendo un concepto meramente formal, que solo figura en planes, programas y aún en leyes especiales, pero que en lugar de consagrar los valores fundamentales de dignidad humana, libertad, justicia social, no discriminación y seguridad que deben imprimir todo desarrollo con eficacia sostenible en materia económica y social, genera condiciones que alcanzan formas de trabajo forzoso o que violan los presupuestos mínimos de protección laboral.

Nadie niega la exigibilidad de estos derechos fundamentales en la teoría, pero en el funcionamiento del Estado de Derecho, el control de constitucionalidad

falla aún en la sanción de normas que propician la vulneración sistemática de las garantías consagradas en la Carta Magna (Flexibilización desreguladora, por ejemplo). También falla, como se ha señalado, en la institucionalización de mecanismos de control que garanticen la eficacia de la normativa vigente, por lo que la organización y acción colectiva quedan como último frente para lograr el reconocimiento pleno y efectivo de los derechos fundamentales del trabajador vulnerados por mecanismos de desregulación o simplemente incumpliendo la ley. (Meik, Duarte, Canessa, Zas, Cremonte, & Crespo, 2014).

Para observar su eficacia, cabe analizar, en principio, si estos han sido plasmados en los cuerpos constitucionales nacionales de los países estudiados, y si existen mecanismos normativos, regulatorios e institucionales para hacerlos cumplir. Para ello cabe realizar una breve descripción del marco normativo vigente en materia laboral, con énfasis en el trabajo rural en ambos países.

5. Marco Normativo vigente

El marco normativo está compuesto por los instrumentos legales de aplicación para la relación de empleo del trabajador rural que serán utilizados en la presente investigación.

En Argentina el régimen laboral está regulado de la siguiente forma:

En primer lugar, la Constitución de la Nación Argentina y su Artículo 14 bis, mencionan expresamente de qué forma el trabajo estará organizado.

Artículo 14 bis Constitución Nacional. El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución justa; salario mínimo vital móvil; igual remuneración por igual tarea; participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección; protección contra el despido arbitrario; estabilidad del empleado público;

organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial. (InfoLEG, 2015).

La Constitución Nacional de 1949, contaba con un Capítulo III, art. 37, en el que se consolidaban a nivel nacional los derechos laborales fundamentales. Sin embargo, dicha reforma fue anulada en 1955, quedando solo de ello el art. 14 bis mencionado, que se incluyó en la reforma del '57. (De Diego, 2002).

El derecho rural argentino se vincula con el inicio del período de la colonización, quedando fuertemente condicionado por las características naturales de la región donde se permitía apenas la cría del ganado para ser sacrificado en los frigoríficos y el aprovechamiento del cuero en la manufactura local. (Pastorino, 2011, pág. 2).

Sin posibilidades de ejercer actividades de agricultura ni ganadería, y no habiendo ningún mineral para extraer, los indios Pampas de la región del Río de la Plata sólo podían tener una economía de subsistencia, pero cuando el ganado que habían dejado los españoles, se multiplicó porque encontró un ambiente favorable para su desarrollo, comenzaron a tener una materia prima útil para el intercambio.

A partir de los problemas de la limitación en la cría de ganado fue que nació en el país la típica institución del derecho agrario que permanece en vigor hasta el día de hoy. (Pastorino, 2011, págs. 3-4).

El trabajo rural en Argentina tuvo como marco histórico la reglamentación de Urquiza, en el gobierno de la provincia de Entre Ríos, donde importó las normas de derecho individual del trabajo indígena, para la protección del trabajo de los indios, que incluía también a los trabajadores rurales y poseía reglas muy rígidas. (Maiztegui Martínez, 2005, págs. 10-11).

Respecto a los derechos de los trabajadores rurales argentinos, inicialmente, ha de observarse el Estatuto del Peón (de ahora en adelante referido como el Estatuto), promulgado el 17 de octubre de 1944, y ratificado en seguida, por la

ley 12.921 de 1947. El Estatuto presenta los salarios mínimos para cada categoría de trabajadores: trabajadores, gestores, feriantes, quinteros, etc., y moneda de pago nacional; pausas para desayuno, almuerzo y merienda, condiciones mínimas de salud, seguridad y confort en alojamientos, que no podrían ser utilizados como depósitos y tendrían una separación completa de los puntos de reproducción, guarda o acceso de animales. Los patrones debían proporcionar a los trabajadores vestuario y calzado adecuado para protegerlos contra la lluvia y el lodo, además, era obligatoria la provisión de asistencia médica y farmacéutica. La cuota de alquiler, la prohibición del trabajo de niños menores de 12 años, así como el despido sin justa causa o su correspondiente indemnización y las multas por incumplimiento del Estatuto del Peón también están previstos por la ley.

Sin lugar a dudas, fue un verdadero avance para la época. En 1947, el gobierno peronista sancionó la ley 13.020, un suplemento del Estatuto. Fueron contempladas condiciones del trabajador rural, entre las cuales se destacan: salarios, indemnizaciones por accidentes, jubilaciones, vacaciones, trabajo infantil, etc. (Carcía & Lemmi, 2011).

A través de varios cambios en las normas de protección a los trabajadores rurales, en Argentina, actualmente, están en vigencia el nuevo Régimen de Trabajo Agrario, Ley nº 26.727/2011 que busca establecer las directrices acerca de la obligatoriedad de los empleadores y empleados de seguir las normas relativas a la protección del trabajador en el medio rural, que “Desde luego que comparadas con la anterior normativa rural, las disposiciones del RNTA mejoran ostensiblemente su tenor tuitivo y en algunos pocos temas su protección supera a la de la LCT”. (Ackerman, 2007, pág. 34) También la Ley del Contrato de Trabajo 20.744 de 1976 amplió la protección jurídica contractual del trabajador rural buscando cubrir la laguna existente en la falta de aplicación y cumplimiento de las normas para los trabajadores rurales de Argentina así como ocurre en Brasil. (Meireles & Meireles, 2009, pág. 65).

La Ley 25.191 de 1999 al crear el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE), le daba a este la función de brindar las prestaciones

del seguro obligatorio por desempleo a los trabajadores agrarios. Con la sanción de la Ley 26.727, dichas funciones fueron transferidas a un ente estatal perteneciente al Ministerio de Trabajo administrado por un director designado por el Poder Ejecutivo de la Nación. La Ley 26.727/2011 mantuvo un cuestionamiento por años, por el cual se quitaba la administración directa del seguro por desempleo a los trabajadores y empleadores rurales. En 2015, el fallo de la causa “Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores c/Poder Ejecutivo Nacional y otro s/ acción de amparo” dictado por la Corte Suprema de la Nación, restituye dichas funciones al RENATRE, bajo el argumento de que “si el seguro de desempleo fue puesto a cargo de un ente creado por el legislador ateniéndose al modelo de administración por los interesados previsto en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, cualquier reforma posterior que pretenda imponer un régimen de administración del seguro que no respete dicho modelo comportaría vulnerar tanto la letra como el espíritu del texto constitucional.” (Centro de Información Judicial, 2015).

Con este fallo firme, quedando declarada la inconstitucionalidad de los artículos 106 y 107 de la Ley 26.727, se dicta el Decreto 1014/2016 por el cual se declara la reorganización institucional del Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (RENATEA), ente autárquico bajo la jurisdicción del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, a fin de adaptarlo a los términos de la jurisprudencia aplicable. Con ello se restablece el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) como Ente de Derecho Público no Estatal, conforme lo dispuesto por la ley 25.191, restableciendo sus funciones originales. (Decreto 1014 de reorganización institucional del Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios, 2016).

Aún con la promulgación de leyes duras, que imponen multas muy altas al empleador que no registra al empleado, el problema se transformó en una cuestión social, pues, no se le confieren al trabajador rural condiciones mínimas para llevar una vida digna. Apenas a modo ilustrativo, en la Argentina, en el segundo trimestre de 2013, más de 800.000 trabajadores rurales

trabajaban en la informalidad y no estaban registrados. (Grisolia, 2013, pág. 168).

La justificación de la censura del carácter protectorio del derecho del trabajo en función de las reglas del mercado de trabajo y del mercado económico, suele exigir que se ignoren derechos fundamentales recepcionados por la Constitución Nacional y los tratados elevados a jerarquía constitucional. Ello ha llevado muchas veces a consentir que la reglamentación del derecho del trabajo reconocido constitucionalmente, resigne el profundo contenido humanístico y protectorio del trabajador de las normas de mayor jerarquía de nuestro marco legal en función del dictado de las leyes del mercado. Al respecto, la doctrina de la Corte Suprema, ha determinado que el trabajo del hombre no debe ser objeto del mercado, sino que se debe encuadrar dentro de un marco de respeto por sus derechos, libertades y garantías. (Vizzotti, Carlos Alberto c/Amsa S.A., 2004) También sostiene que las medidas de ajuste derivadas de las crisis económicas, no deben llevar a la desregulación, sino que deben conducir a las autoridades a esforzarse por proteger los derechos económicos, sociales y culturales con mayor énfasis, en especial de los grupos más vulnerables, en especial en el campo laboral y salarial. (Asociación de Trabajadores del Estado, 2013) La Corte Suprema insiste en que el trabajo humano no constituye una mercancía, (Paredes, Humberto c/Compañía Colectiva Costera Criolla S.A., 1974) y que la relación laboral debe considerarse como una actividad humana inseparable de la persona humana y de su dignidad. (Pérez, Aníbal Raúl c/Disco S.A., 2009); (Álvarez, Maximiliano y otros c/Cencosud S.A., 2010); (Meik, Duarte, Canessa, Zas, Cremonte, & Crespo, 2014, pág. 407).

El contenido del Derecho del Trabajo se puede dividir en dos grandes ámbitos: el Derecho Individual y el derecho colectivo del trabajo, criterio que ha recogido Canessa Montejo, (2006) para su esquematización de los derechos laborales fundamentales. Siguiendo el mismo criterio clasificatorio, es posible encontrar en el derecho laboral argentino, los siguientes tópicos de regulación, entre los cuales se pueden apreciar varios derechos fundamentales:

Gráfico: 5 “ Derechos fundamentales laborales en el ordenamiento nacional argentino individual y colectivo. ” Elaboración Propia sobre base de (De Diego, 2002, págs. 67-38); (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2016)

La Constitución Nacional Argentina, en su reforma de 1994, con la redacción del art. 75 inc. 2, ha innovado de forma directa en cuanto a la recepción normativa de los derechos fundamentales, al dar jerarquía constitucional a los tratados sobre derechos humanos suscriptos por la Nación. (Vazquez Vialard, Derecho del trabajo y de la seguridad social, 1999a) Es por ello que el sistema de derechos fundamentales de la República no se regula exclusivamente por los derechos y garantías que contempla la Constitución Nacional, sino que se integra con las disposiciones de tratados internacionales que tienen el carácter de ley suprema de la Nación. (Grisolia J. A., 2013); (Servini de Cubría, María Romilda s/amparo, 1992).

Cabe considerar, entonces, la profusa normativa internacional y los Convenios Colectivos de Trabajo de la OIT nº 10, 11, 12, 36, 87, 98, 129, 141, 144, 150, 151, 154, y 184 en los que se establecen acuerdos salariales y condiciones laborales para un sector productivo específico, o entre una empresa particular y el sindicato correspondiente, así como las Recomendaciones 111, 113, 149 y 192 de la OIT.

En el Marco Normativo laboral argentino, entre sus normas más relevantes, se puede señalar la Ley de Régimen Laboral (Nº 25.877), la Ley de Contrato de Trabajo (Nº 20.744), la Ley de Protección del Trabajo (Nº 24.013), la Ley de Riesgos de Trabajo (Nº 24.557), la Ley de Reforma Laboral (Nº 25.013), la Ley de Sindicatos argentina (Nº 25.551), ley Nº 26.390 de Prohibición del Trabajo Infantil y Protección del Trabajo Adolescente promulgada en 2008, la Ley de Régimen de Trabajo Agrario (nº 26.727), y por fin, la Ley de Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (nº 26.940), sancionada en 2014 y conocida como Ley de Promoción del Trabajo Registrado, objeto fundamental de nuestra investigación. (InfoLEG, 2015).

Esta última ha creado un Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL), que funciona como una herramienta para enfrentar el empleo no registrado. Las empresas que presentan sanciones por infracciones a la ley laboral, permanecen en dicho registro, deben pagar una multa, y:

Mientras los empleadores sancionados permanecen en el Registro no pueden acceder a programas, acciones asistenciales o de fomento, beneficios o subsidios administrados, implementados o financiados por el Estado nacional, líneas de crédito otorgadas por bancos públicos, ni celebrar contratos de compraventa, suministros, servicios, locaciones, consultoría, alquileres con opción a compra, permutas, concesiones de uso de los bienes del dominio público y privado del Estado nacional, que celebren las jurisdicciones y entidades comprendidas en su ámbito de aplicación. No pueden participar en concesiones de obras públicas ni de servicios públicos o licencias, ni acceder a los beneficios económicos de promoción de las contrataciones previstos en los artículos 19 y siguientes y 24 y siguientes de la ley Nº 26.940. Si el infractor reincide en la misma falta por la que se lo incluyó en el REPSAL en un lapso de tres años será excluido de pleno derecho del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes en el caso de los monotributistas o se impedirá deducir en el impuesto a las ganancias los gastos inherentes al personal — empleados, dependientes u obreros — , de acuerdo con lo previsto por el

artículo 87, incisos a) y g) de la ley de este tributo. (Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL), 2015).

Esta se complementa con la Ley nº 26.941 de sanciones por infracciones laborales, que prevé fuertes sanciones para los empleadores que no hayan registrado o hayan registrado irregularmente a algún trabajador, y aún más severas para reincidentes, a la vez que prevé beneficios para las empresas que incrementen el número de empleados registrados. La Ley 26.940, reglamentada por el Decreto 1714/2014, contempla el Régimen Permanente de Contribuciones a la Seguridad Social para Microempleadores que alcanza a los microempleadores con hasta 5 empleados, y propone la disminución de los aportes jubilatorios para los empleados de estas personas físicas o pequeñas sociedades. (Federación Argentina de la Industria Gráfica y Afines, 2014) (Ley de Promoción del Trabajo Registrado y prevención del Fraude Laboral - Ley 26.940, 2015) (Decreto 1714/2014: Ley 26940 – Promoción del trabajo registrado y prevención del fraude laboral, 2014) (Resolución Conjunta A.F.I.P. 3.763/15 y M.T.E. y S.S. 287/15, 2014).

Por su parte la Ley 26.727 que, entre otras cosas crea el Registro Nacional de Trabajadores y Empleados Agrarios (RENATEA) y el Decreto 301/2013 que la reglamenta, y las Resoluciones de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario, regulan la actividad agraria en el país, quedando fuera de aplicación para este ámbito de la actividad agraria o rural la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) que regula las actividades de los demás trabajadores. (Neiman, Caso de Argentina, 2012) Esta ley, que deroga la 22.248, presenta avances significativos respecto de la anterior, en materia de dignidad humana en el trabajo rural. Especifica aspectos de seguridad e higiene, acerca de la alimentación y vivienda, garantías de salubridad, traslados, cuidados a la familia del trabajador, en especial a los menores, límites a la jornada, régimen jubilatorio.

Si bien muchas de estas condiciones mínimas impuestas por la nueva ley pueden aparentar simples e incluso elementales, lamentablemente su inclusión lejos está de ser sobreabundante o innecesaria toda vez que las condiciones en las que el trabajo agrario se realiza y las dificultades que

éstas generan para su control han sido caldo de cultivo para el desprecio del más básico trato humano, habiéndose detectado, tal como se mencionara antes, numerosas situaciones que llegan incluso a la reducción a la servidumbre. Pero la normativa ya vigente no se limita a fijar un mínimo de respeto por las condiciones dignas de los trabajadores sino que tiende también a su progreso y desarrollo. Así, garantiza el derecho de los trabajadores agrarios a la capacitación mediante programas cuyos contenidos y desarrollo deberán ser realizados con acuerdo de la asociación sindical más representativa de cada sector. Asimismo, para incentivar la participación de los trabajadores en estos programas, además de considerar la asistencia a ellos como tiempo de trabajo, su realización genera el derecho al cobro de una bonificación remunerativa. (Silguero Correa, 2012, pág. 325).

La Ley 25.191 declara la obligatoriedad del uso de la Libreta del Trabajador Rural. (Neiman, Caso de Argentina, 2012) Esta norma, sancionada en 1999, constituye una excepción a la fragmentación normativa que Sánchez Enrique (2016) señala como propia del sistema normativo en materia regulación de trabajo rural.

No obstante, esta fragmentación normativa, todos los trabajadores que desempeñen actividades rurales, se encuentran comprendidos en la Ley 25.191, que declara el uso obligatorio de la Libreta del Trabajador Rural. Este documento es personal, intransferible y probatorio de la relación laboral, sirve como certificación de servicios y remuneraciones, y debe indicar el inicio y el cese de cada contratación. Esta documentación puede entenderse como un modo de proteger a la parte más débil de toda relación laboral y de contrarrestar que los medios probatorios que, en general, se encuentran en poder de quien contrató mano de obra, por la desigualdad básica que caracteriza toda relación de trabajo entre empleador y trabajador, que justifica la consagración jurídica del principio pro operario. (Sánchez Enrique, 2016, pág. 29).

Existen más normas que se ocupan de aspectos más específicos del trabajo agrario, en especial en materia de salud y seguridad, y, cabe considerar, muy especialmente, las que se refieren al trabajo temporal:

Decreto 617/1997: Reglamento de Higiene y Seguridad para la Actividad Agraria. (B.O. 11/07/1997) Ley 25.739: Apruébese el Convenio sobre la seguridad y la salud en la agricultura – núm. 184 – . (B.O. 24/06/2003) Res. 11/2011 de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA): Condiciones Generales de Trabajo para trabajadores agrarios temporarios, cíclicos y estacionales. (B.O. 11/04/2011) Res. 46/2011 CNTA: Condiciones Generales de Trabajo para trabajadores agrarios temporarios que se desempeñan en la actividad Semillera. (B.O. 16/08/2011) Ley 26.727: Apruébese el Régimen de Trabajo Agrario. Título VII: De la seguridad y los riesgos en el trabajo (B.O. 28/11/2011) (Normas Legales Vigentes sobre Salud y Seguridad en el Trabajo, 2014).

La Ley 24.465 de Régimen de Contrato de Trabajo sancionada el 15 de marzo de 1995, fue conocida como la Ley de Flexibilización Laboral en Argentina. En ella se elimina la negociación salarial colectiva, que pasa a manejarse a través de negociaciones por empresas. Incorpora las figuras de Período de Prueba, Contrato de Trabajo a tiempo Parcial, el Contrato de Aprendizaje y una modalidad especial de fomento de empleo para mayores de 40 años, personas con discapacidad, mujeres y ex combatientes de la guerra de Malvinas. (Ley Nº 24.465 Régimen de Contrato de Trabajo. Modificación. Modalidad Especial de Fomento del Empleo. Contrato de Aprendizaje, 1995).

Las modalidades de contrato de trabajo vigentes en Argentina son: Trabajo por plazo fijo (con extinción prevista), Trabajo eventual o temporario (para la realización de un trabajo concreto, se extingue cuando el trabajador finaliza la tarea), Trabajo por temporada (por la naturaleza de la actividad se celebra en determinadas épocas del año), Trabajo por equipo (se contrata a un grupo de trabajadores y un empleador), Trabajo de aprendizaje (para jóvenes entre 15 y 28 años con máxima duración de un año), Trabajo a tiempo parcial, trabajo por pasantía (se celebra entre un empleador y un estudiante desocupado de entre

15 y 26 años y es de carácter educativo, no laboral) Trabajo por período de prueba (3 meses, se puede extender a 6 meses o un año) (Delpech Fernández, Grenetto, Asta, Currao, & Coppia, 2006).

Dentro de las críticas que se hacen al marco legal en materia de trabajo rural, Sánchez Enrique (2016) llama la atención sobre la fragmentación del trabajo rural temporario, lo que en la realidad se traduce en trabajadores rurales que se desempeñan bajo distintos regímenes legales a lo largo del año, ya que se suelen trasladar hacia distintos tipos de cultivo o tareas, en distintas provincias, y bajo un diseño institucional en el que este colectivo desempeña sus tareas bajo distintas reglamentaciones, organismos de control y sindicatos, generando una fragmentación que licúa las posibilidades de ordenamiento y reclamos de este tipo de trabajador rural en especial. La Ley 26.727 regula el trabajo agrario, pero excluye el régimen agrícola para ciertos tipos de cosecha. El trabajo temporario rural se basa en la estacionalidad, temporalidad y movilidad, por lo que un mismo trabajador se desempeña bajo regímenes laborales diferentes, generándose fragmentación jurídica, sindical y de inspección y control de este tipo de empleo.

A pesar de que la contratación temporal y la tercerización laboral son legales, para estos trabajadores, generan consecuencias de precariedad, incrementan las situaciones de desempleo estacional, de inseguridad en el ingreso, y debilitan los vínculos entre el trabajador y sus empleadores. Con todo ello, la capacidad de negociación de los trabajadores es mínima o nula para exigir condiciones dignas de trabajo o que se respeten sus derechos laborales. En la tercerización de mano de obra, si bien el intermediador y el beneficiario de la actividad del trabajador rural son solidariamente responsables, se licúa la responsabilidad directa por las obligaciones del empleador, ya que las asume la empresa contratista, distorsionando aún más el esquema. En la Ley 26.727, muchos de estos trabajadores, quedan excluidos del régimen de trabajo agrícola y por lo tanto de su tutela, y se les aplican Convenios Colectivos de Trabajo especiales. Ejemplos de ello son el caso de la cosecha de uva (Convenio Colectivo de Trabajo 85/89 y 154/91) en las actividades de obreros de viña y operarios de bodega y también los cosechadores de fruta sujetos al

Convenio Colectivo de Trabajo 1/76 (cosecha de manzana y otros en Río Negro y Neuquén) o Convenio Colectivo de Trabajo 271/96 (actividad cítrica) y la Ley 20.744, para los cuales la norma subsidiaria no es la Ley 26.727 sino la Ley de Contrato de Trabajo por lo que no se les aplican los beneficios del régimen agrario, atentándose con ello contra el principio jurídico de igualdad ante la ley en similares condiciones.

Así, los trabajadores de cosecha de frutos, en general, se encuentran comprendidos por el régimen de trabajo agrícola, pero hay un grupo de trabajadores excluidos de dicho régimen que quedan regidos por Convenios Colectivos de Trabajo y en la norma supletoria por la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744, que en sus artículos 96 y 98 hace referencia al contrato por temporada. El único criterio unificador normativo, es el uso de la Libreta del Trabajador Rural (Ley 25.191) (Sánchez Enrique, 2016) Esta exclusión por el art. 3 de la Ley 26.727 de los trabajadores de cosecha de fruta y vid, tiene una serie de consecuencias prácticas que perjudican no solo al trabajador, sino también al empleador, complejizando los regímenes de contratación.

Es habitual que los asalariados temporarios luego de algunos meses en las cosechas de aceitunas o yerba, regidas por el régimen general de trabajo agrícola, se trasladen a otra provincia para continuar su trayectoria laboral en las cosechas de uva, o bien de fruta, limones o manzanas, que se rigen por convenios colectivos de trabajo especiales, a los que se les aplica subsidiariamente el régimen general de la LCT. De esta manera, un mismo trabajador de cosecha, debería ser registrado y sus tareas, en las diferentes cosechas, serían reguladas por tres legislaciones diferentes a pesar de tratarse prácticamente de la misma actividad rural. En este sentido, conviene mencionar el caso de las agroindustrias que tienen explotaciones agrícolas, donde se cultiva y cosecha el fruto, por ejemplo aceitunas, y es la misma empresa la que procesa industrialmente el producto. En este caso, si un trabajador es contratado temporalmente para la cosecha y luego para trabajar en la industrialización de producto, por ejemplo envasado de aceitunas, o bien producción de aceite de oliva deberá darse de baja y ser nuevamente registrado bajo el régimen de la

LCT, lo que implica también cierta complejidad tanto en la práctica, como en el control de la correcta registración laboral. (Sánchez Enrique, 2016, pág. 30).

Esto complica no solo el correcto registro laboral de los trabajadores, sino su encuadramiento y participación sindical, y la administración de las prestaciones de seguridad social, entre otros derechos económicos, laborales y sociales vulnerados. También coloca a los cosecheros en una situación de discriminación, ya que al ser considerados trabajadores temporales, sus empleadores no están obligados a volver a contratarlos las siguientes temporadas, ni gozan de los derechos de bonificación por antigüedad, vacaciones pagas, indemnización y estabilidad de los que sí se benefician los trabajadores permanentes. Los abusos se agravan, ya que los cosecheros menores de 18 años tienen permitido cobrar salarios inferiores por la misma tarea, vulnerando el artículo 14 bis de la Constitución Nacional que consagra el principio de igual salario por igual tarea; se los somete a jornadas más largas; se les realizan deducciones por vivienda y alimentos (lo que, por la naturaleza del trabajo debería estar a cargo del empleador), acentuándose por las diferencias jurisdiccionales y las dificultades propias de la geografía que limitan los controles en el medio rural. (Egan, 2013).

Mientras que los trabajadores comprendidos dentro del régimen agrícola de la Ley 26.727 pertenecen al ámbito de sindicalización de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores, UATRE, un sindicato fuerte y consolidado, los trabajadores de cosecha de la uva y de frutas quedan bajo el encuadre del Sindicato de Obreros y Empleados Vitivinícolas y Afine (SOEVA) y del Sindicato de la Fruta de Río Negro y Neuquén.

En Brasil, el trabajo rural está regulado por la Constitución Federal de 1988, en su artículo 7º, donde enumera derechos tanto del trabajador urbano, como del trabajador rural. Se ha mencionado la importancia del artículo 14 bis de la Constitución Argentina para la protección de los derechos del trabajador. Su equivalente en la Constitución brasileña, es el art. 7º, que establece previsiones respecto del salario mínimo, las vacaciones anuales, el preaviso, las licencias

de maternidad y paternidad, la responsabilidad del empleador por los accidentes de trabajo, la protección laboral de menores de 18 años, los plazos de prescripción y, también, de los límites diario y semanal de la jornada de trabajo, entre muchas otras:

Constitución de la República Federativa del Brasil (2008) – Artículo 7º

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

- I - relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei complementar, que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos;
- II - seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário;
- III - fundo de garantia do tempo de serviço;
- IV - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim;
- V - piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho;
- VI - irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo;
- VII - garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, para os que percebem remuneração variável;
- VIII - décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria;
- IX - remuneração do trabalho noturno superior à do diurno;
- X - proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa;
- XI - participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei;
- XII - salário-família pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda nos termos da lei; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)
- XIII - duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho; (vide Decreto-Lei nº 5.452, de 1943)
- XIV - jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva;
- XV - repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos;
- XVI - remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinquenta por cento à do normal; (Vide Del 5.452, art. 59 § 1º)
- XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal;
- XVIII - licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e vinte dias;
- XIX - licença-paternidade, nos termos fixados em lei;
- XX - proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, nos termos da lei;
- XXI - aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de trinta dias, nos termos da lei;
- XXII - redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança;
- XXIII - adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei;
- XXIV - aposentadoria;
- XXV - assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 (cinco) anos de idade em creches e pré-escolas; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006)
- XXVI - reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho;
- XXVII - proteção em face da automação, na forma da lei;
- XXVIII - seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa;
- XXIX - ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 28, de 25/05/2000)
- XXX - proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil;
- XXXI - proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência;
- XXXII - proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual ou entre os profissionais respectivos;
- XXXIII - proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)
- XXXIV - igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso

Parágrafo único. São assegurados à categoria dos trabalhadores domésticos os direitos previstos nos incisos IV, VI, VII, VIII, X, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIV, XXVI, XXX, XXXI e XXXIII e, atendidas as condições estabelecidas em lei e observada a simplificação do cumprimento das obrigações tributárias, principais e acessórias, decorrentes da relação de trabalho e suas peculiaridades, os previstos nos incisos I, II, III, IX, XII, XXV e XXVIII, bem como a sua integração à previdência social. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 72, de 2013)

Gráfico: 6 “Derechos laborales en art. 7 de la Constitución de la República Federativa del Brasil”. Fuente: Elaboración Propia con base en texto de (Constitución de la República Federativa del Brasil, 2012)

Cabe destacar que los derechos previstos en el artículo 7 de la Constitución, alcanzan a todos los trabajadores, y contemplan los derechos y garantías fundamentales de la persona. A su vez, la Constitución de la República Federal

del Brasil en el apartado 1 del art. 5, sostiene que las disposiciones que definen los derechos y garantías fundamentales son de aplicación inmediata, por lo que se garantiza constitucionalmente la aplicabilidad efectiva e inmediata de las reglas que sustentan a los derechos fundamentales democráticos e individuales, aunque los que definen los derechos sociales suelen tener eficacia limitada y aplicabilidad indirecta. Esta disposición constitucional, implica que toda norma que contenga derechos fundamentales debe ser de aplicación inmediata, en la medida en que las instituciones cuenten con medios para proporcionar las condiciones para su cumplimiento, y que el Poder Judicial, cada vez que se invoquen éstas en una situación concreta, deben, necesariamente, aplicarlas. El artículo 5 en el § 2, contempla, asimismo, la integración de las normas constitucionales que contienen derechos y garantías, ya que estos no excluyen a otros derivados de tratados internacionales en los que la República Federal de Brasil sea parte. Este texto constitucional, establece expresamente que los demás derechos y garantías establecidos en los tratados internacionales firmados por Brasil también tienen aplicación inmediata tan pronto sean incorporados a la legislación interna.

Una Convención internacional, después de haber sido aprobada por el Congreso Nacional (art. 49, I, Constitución Federal) por el Decreto Legislativo, se encuentra en condiciones de ser ratificada por acto soberano del Jefe de Estado. Una vez ratificada la Convención, ésta se incorporan al derecho interno brasileño y entra en vigor un año después de la fecha de ratificación. Así, una Convención Internacional se equipara jerárquicamente a la ley federal, como se desprende del art. 105, III, a) de la Constitución. La Carga Magna de Brasil de 1988, ha adoptado la teoría del monismo jurídico por la cual, un tratado ratificado, complementa, altera o revoca el derecho interno, ya que se trata de una normativa de aplicación inmediata, siempre que se trate de derechos o garantías fundamentales (§1º del art. 5º). Con ello, los derechos fundamentales y sociales inherentes al trabajo establecido en el artículo 7 de la Carta Magna, están totalmente integrados con el derecho internacional incorporado al derecho brasileño, y, en plena condición de aplicabilidad inmediata. (Teixeira, 2003).

En cuanto a la Seguridad Social, la Ley Nº 13.183 sancionada en 2015, garantiza una pensión especial para los trabajadores rurales y la extensión del beneficio asociado a cooperativas agropecuarias o de crédito rural. Se establece con estas nuevas reglas para el Sistema General de Seguridad Social, el derecho a jubilación especial para los trabajadores rurales a los 60 años para los hombres y 55 para las mujeres, aún sin haber satisfecho la demanda hecha al trabajador urbano, de contribuir al plan de pensiones durante 30 años (mujeres) y 35 años (hombres). (Previdência Social Portal Brasil, 2015)

A pesar de estar contemplados estos derechos en el plano constitucional, algunas de estas garantías carecen de una regulación que posibilite su cumplimiento, tal es el caso de la garantía general contra los despidos arbitrarios, ya que la normativa actual solo contempla algunas situaciones específicas, como la de las empleadas embarazadas, obreros accidentales, trabajadores que han sido objeto de alguna forma de discriminación o dirigentes gremiales, pero no garantiza la permanencia en el empleo de manera extensiva a toda la clase trabajadora. El trabajador brasileño tampoco cuenta con una regulación de la intermediación de la mano de obra asalariada a través de la tercerización de servicios subordinados, aspecto que ya se ha señalado como un factor clave entre las causas de precarización laboral en el país. Esto atenta contra la igualdad de derechos entre el trabajador contratado directamente y el subcontratado. (Toledo Filho, Barroso, & De Freitas, 2012, pág. 3).

Es posible apreciar que las normas que introducen la flexibilidad laboral en el mercado brasileño no son patrimonio exclusivo de los años '90, sino que figuras flexibles como la Estágio (Decreto Nº 87.497, de 1982); y mucho antes, la Ley Nº 6.019 que incluye el trabajo temporal, ya se encontraban en el cuerpo normativo. En función de ello, es comprensible que la desregulación de los años '90 del mercado laboral brasileño, como el banco de horas, los turnos sin interrupción, el contrato por plazo determinado y las modalidades de contratación temporal para jóvenes, entre otros, no se hayan utilizado asiduamente, dado que las empresas les dieron una utilización mesurada, en la

observación de Darcilene Gomes (2006), quien observa que el sistema de relaciones del trabajo brasileño ya presentaba una gran flexibilidad a nivel histórico. Las formas flexibles de contratación, ya eran una práctica común mucho antes de los años ´90, además de la facilidad de utilizar fuerza de trabajo de manera informal. (Gomes, 2006, pág. 19).

Las modalidades de contrato de trabajo vigentes en Brasil son sumamente amplias, dado que la legislación brasileña reconoce el contrato verbal como válido, al establecer que no es necesario un contrato formal para la determinación de la existencia de un vínculo laboral. Sin embargo, si el contrato no está por escrito, y a su vez, no es registrado en la Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), el trabajador no tiene el acceso a los derechos laborales garantizado. La CLT define los siguientes tipos de contrato de trabajo: Contrato de experiencia (utilizado para comprobar la capacidad del empleado, no superior a 90 días), Contrato de trabajo temporal (diseñado para atender necesidades transitorias, como la sustitución de empleados permanentes o para cubrir sobrecargas de trabajo. El plazo lo define por el empleador según sus necesidades), Contrato de trabajo a tiempo parcial (jornada máxima de 25 horas semanales con remuneración proporcional), Contrato por tiempo determinado (con fecha de inicio y de finalización predeterminadas, no superiores a dos años), Contrato por obra, Contrato por tiempo indeterminado (esta es la modalidad de contrato más utilizada en el mercado laboral brasileiro. Permite la contratación de empleados por un período indefinido. Estos contratos pueden finalizarse por decisión del empleado o del empleador, ya sea con o sin justa causa y en cada caso con procedimientos de rescisión diferentes y regulados por la ley) (Pino Posada, 2014, pág. 34).

Por ser uno de los primeros códigos de Brasil, el Estatuto de la Tierra (Ley nº 4.504/1964), fue creado con el objetivo de imponer reglas a los movimientos de los trabajadores rurales, que se multiplicaban durante el gobierno de João Goulart (1961- 1964), que tenía como principales metas la reforma agraria y el desarrollo de la agricultura.

La ley específica nº 5.889/73, reglamentada por el Decreto nº 73.626/74, es una norma que dispone acerca de las relaciones y atribuciones de la actividad del trabajo rural en Brasil.

Por medio de los convenios internacionales de trabajo ratificados por la OIT nº 11, 12, 98, 144, 151, 154 que fueron ratificados por Brasil en materia de trabajo rural, así como las Recomendaciones de la OIT nº 111, 149 y 192, también son reglamentadas las actividades del trabajo rural y serán utilizadas en la presente investigación.

A continuación, tenemos la Consolidación de las Leyes del Trabajo - CLT -, aprobada por el Decreto-ley nº 5.452, del 01/05/1943 que es la que rige de modo general las reglas de protección del trabajo y, en el artículo 187, señala que la política agrícola será planeada y ejecutada en la forma especificada por la ley, con la participación efectiva del sector de producción, involucrando a productores y trabajadores rurales, así como a los sectores de comercialización, de almacenamiento y de transportes, teniendo en cuenta, especialmente: VIII - la habitación para el trabajador rural.

El problema surge al cotejar el aspecto teórico con las prácticas reales en el trabajo rural. En Brasil la situación no es muy diferente a la que se ha señalado en cuanto al bajo acatamiento de las normas laborales en el ámbito rural. Las informaciones dan cuenta de que más de 3 millones de trabajadores rurales en el año de 2013 se encontraban sin registro de trabajo. (Iglesias, 2013).

Observamos que la actividad rural brasileña está dividida en cuatro clases: los hacendados, los empleadores, los trabajadores del campo y los comerciantes. (Nascimento, 2011, pág. 78) La doctrina ha manifestado que “el trabajo en el campo es el combustible que impulsa la economía mundial, además de generar alimentos para la supervivencia de los seres humanos” (Delgado, 2014) , sin embargo, “aún existe un prejuicio muy grande acerca de los trabajadores que ejercen tal actividad, cercana al apartheid” (Meireles & Meireles, 2009, pág. 98) .”Los peones trabajan solos y sin recibir ninguna protección laboral por parte de

los empleadores por la realización de esas actividades". (Meireles E. , Abuso do Direito na Relação de Emprego, 2004, pág. 67).

Es común que estos trabajadores trabajen entre 8 y 12 horas diarias, no cobren horas extra, no posean registro en nómina y no sean beneficiados por la recaudación previsional. (Martínez, 2011, pág. 87).

Como se ha mencionado, el trabajo rural en Brasil está previsto por la Ley nº 5.889/73, y reglamentado por el Decreto nº 73.626/74 y en el artículo 7º de la Carta Magna de 1988. Por esa indicación legal, al trabajador le debe ser asegurado el salario mínimo, pero el piso salarial de la categoría en la que esté el empleado también debe ser respetado. Empleado rural es cualquier persona física, que trabaja en una propiedad rural o construcción rústica, prestando servicio de naturaleza no eventual a un empleador, debiendo éste concederle una remuneración justa y conforme a los requisitos legales. La jornada de trabajo es de 44 horas semanales y 220 horas mensuales. Entre dos jornadas debe establecerse un período mínimo de 11 (once) horas consecutivas para el descanso. Sin embargo, es una realidad que el número de horas trabajadas es muy superior. (Batich, 2004).

Para ellos, la necesidad de trabajar un mayor número de horas se traduce en un aumento de la producción para cumplir una meta de ganancia real semanal, con el fin de estar en condiciones de adquirir alimentos para su familia, además de utilizar la mano de obra de los hijos (Ivo, 1987) para aumentar el rendimiento del trabajo - trabajo infantil de riesgo y sin protección alguna, como afirma la investigación ligada al Ministerio de Previsión Social. (Programa de erradicação do trabalho infantil: Manual de Orientações., 2004) Además, "constituye un engranaje en lo que en la Teoría económica del Capital Humano se denominan "trampas de pobreza". (Noceti, 2011).

Si observamos el derecho comparado, específicamente el derecho argentino, los trabajadores rurales poseen protección a través del Régimen de Trabajo Agrario, Ley nº 26.727/2011 que procura establecer las reglas acerca de la obligatoriedad de que los empleadores sigan las normas relativas a la

protección del trabajador en el medio rural. También los derechos laborales fundamentales de los trabajadores rurales garantizados por la legislación son obtenidos por medio de la norma positiva emanada del Poder Legislativo, y sin embargo, son clasificados según la actividad que desarrolla y el tipo de vínculo que posee con el empleador para fines de indemnización, conforme jurisprudencia. (Sansó, 2006, pág. 34).

Aun existiendo todo ese aparato legal para proteger a los trabajadores rurales es bastante común tanto en Argentina como en Brasil encontrar datos alarmantes en los órganos de control de ambos países, de trabajadores sin registro de trabajo, especialmente en el sector agrícola, constituyendo, por tanto, fraude en la legislación laboral por parte de los empleadores.

Ahora bien, si existe todo un ordenamiento legal que ampara a todos esos trabajadores, ¿por qué sigue habiendo un impedimento para la efectivización de las conquistas de los derechos fundamentales laborales de los trabajadores rurales agrícolas no registrados?

La protección jurídica contra la discriminación en las relaciones de trabajo puede ser de distintas formas, siendo las más comunes las que se refieren a la equiparación salarial, en relación a la función, en relación al nivel salarial del empleado sustituido, al tipo de actividad desarrollada (Delgado, 2014, pág. 836), o incluso, a un sentimiento natural de antipatía o prejuicio, entre otras situaciones. (Barros, 2012, pág. 891) En el trabajo rural, la discriminación todavía está bastante presente, y el no cumplimiento de los derechos laborales por parte del empleador rural, también es una forma de discriminación laboral.

El Convenio nº 129 de la OIT es otro instrumento de suma importancia que tiene por objetivo evitar la discriminación de los trabajadores en la agricultura y fue ratificado por la Argentina, pero no por Brasil. Dicho Convenio ha sido objeto de muchas discusiones en toda la sociedad brasileña, principalmente, desde la equiparación de trabajadores urbanos y rurales por la Constitución Federal, fundada en la protección de la igualdad y de los derechos fundamentales de los trabajadores.

La igualdad de derechos protegida por las normas “debe ser respetada y observada por todos de igual forma, y siendo una norma, es necesario que se observe y, en caso de no cumplimiento, debe haber un castigo”. (Ferrajoli, 2001, pág. 79).

Con base en estas ideas, el Estado tiene el deber de actuar por medio del poder de policía administrativo, para fiscalizar de forma eficiente de modo de extinguir la contratación de empleados rurales no registrados.

CAPÍTULO III

1. Aspectos prácticos de su contemplación efectiva. Diagnóstico. Leading case : Buenos Aires

Por su parte, García & González, (2015) sostienen que “ Se entiende que la eficiencia de la nueva normativa laboral depende no sólo de su calidad, de su difusión y del control para su cumplimiento sino que también depende de su adaptabilidad a la realidad bajo estudio. ” Pág. 2. Con ello se llama a considerar el contexto en el que se procura que un conjunto normativo alcance un nivel satisfactorio de eficacia.

Se han seleccionado dos centros agrícolas importantes de Argentina y Brasil, en el primero, en la zona rural de la provincia de Buenos Aires, y en el segundo, en la región sisaleira de Bahía. En ambos lugares señalados, se han detectado trabajadores rurales agrícolas no registrados en cantidades preocupantes, lo que indica una alta tasa de incumplimiento de las normativas de trabajo rural vigentes en ambos países y lleva a cuestionarse acerca de las causas de este fenómeno.

2. Irregularidades detectadas. El trabajo rural no registrado. Información estadística, actuación de las instituciones estatales y sindicales, nivel de cumplimiento de la normativa vigente.

En el caso de Argentina y Brasil, si se considera la situación en el país de las tasas de empleo no registrado, y se compara su evolución a lo largo de los años con otros países latinoamericanos, se encuentra que Argentina ha tenido niveles bajos de crecimiento del empleo registrado, y que Brasil ha tenido un leve crecimiento pero en 2015 el empleo registrado se derrumbó, siendo Uruguay y Brasil los únicos países con tasas de empleo registrado negativas. Otros países como Costa Rica y Guatemala han presentado niveles de crecimiento levemente mayores a los de Argentina y Brasil y el resto (El Salvador, México, Nicaragua) los ha superado significativamente.

Gráfico: 7 “Tasas de crecimiento del empleo registrado en países Latinoamericanos” Fuente: (Titelman, y otros, 2016, pág. 11)

En América Latina y Caribe, el empleo agropecuario ha caído un 0,5% mientras que los demás sectores han crecido hasta casi un 2%, en la variación interanual 2014-2015. La contracción fue importante en Brasil, Venezuela, Jamaica y República Dominicana.

En cuanto a la relación con la rama de actividad, el problema de Latinoamérica ha sido la caída de empleo registrado en general, en la labor agraria, mientras

que los demás sectores han crecido levemente. Ello da cuenta de la incidencia de fenómenos macroeconómicos que afectan a la región entera expulsando mano de obra del ámbito rural, fenómeno al que ni Brasil ni Argentina escapan.

Gráfico: 8 “ Promedio ponderado de la variación interanual del empleo por rama de actividad en trece países de América Latina y el Caribe ” Fuente: (Titelman, y otros, 2016, pág. 12)

En la entrevista realizada al Jefe de Gabinete de Planeamiento en la Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina (OSPRERA) de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), Juan Carlos Paulucci, a pesar de que la producción de las economías regionales constituye una de las fuentes más importantes de riqueza del país y se cuenta en Argentina con un vasto territorio con actividad rural y producción agrícola sostenida, no se respetan los derechos fundamentales de los trabajadores rurales y el trabajo no registrado o en negro es una constante que se repite a lo largo y a lo ancho de todo el país, en parte por la gran extensión territorial de Argentina, cualidad que este país comparte con Brasil, y en parte también por una falta de conocimiento de parte de las autoridades e instituciones estatales de las características de las actividades que se realizan en toda esta extensa distribución geográfica. El interés por mejorar la vida del trabajador rural cobra fuerza recién en los años ´90 en Argentina, impulsado por la fuerza de los

gremios, y se comenzó a obtener logros en el plano normativo que permitieron plasmar en leyes y regulaciones los derechos de los trabajadores rurales. La Libreta del trabajador rural fue una etapa fundamental en el trabajo de registración que se inicia durante ese periodo. (Paulucci, 2016).

A fin de contrastar estos lineamientos generales con datos objetivos, se considera observar las siguientes informaciones. De acuerdo con el informe del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación sobre la Situación y Evolución del Trabajo asalariado en el sector privado con datos a abril de 2016, desde 2012 se ha dado un crecimiento del número de empleos registrados a nivel nacional. Sobre la base de datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y de los generados por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), se han determinado los siguientes datos.

Gráfico: 9 “Evolución del empleo registrado a nivel nacional” Fuente: (Situación y Evolución del Trabajo asalariado en el sector privado, 2016, pág. 6)

De un total de 6.179.053 trabajadores registrados, 320.010 se desempeñan en tareas de agricultura, ganadería y silvicultura. En términos porcentuales, la variación interanual abril 2015-abril 2016 ha sido del -4.7%, ya que se han contabilizado 15.672 trabajadores menos que el año anterior. (Situación y Evolución del Trabajo asalariado en el sector privado, 2016)

En un documento de la Organización Internacional del Trabajo en el que Bertranou, Casanova, & Lukin (2013) llevan a cabo una investigación sobre la formalización laboral en Argentina, los autores han encontrado que a pesar de que el nivel de informalidad ha descendido unos 14 puntos porcentuales desde el año 2003, considerando a los trabajadores asalariados y a los independientes, una incidencia de no registro en la seguridad social del 58%, y una informalidad laboral que se ubicó en un 44% en 2010. De estos, dos tercios son asalariados y un tercio independientes. La reducción del empleo asalariado no registrado que se dio en los últimos años se ha concentrado en el trabajo doméstico, los servicios sociales y de salud, el comercio, la construcción y la industria manufacturera. En otros sectores de actividad, como el agrícola, las diferencias han sido sustanciales, con sectores de alta informalidad que en 2003 y 2012 continuaron siendo el trabajo cuentapropista, el doméstico, el empleo asalariado en la construcción, el comercio, y, naturalmente, el trabajo agrario en el ámbito rural. OIT (Bertranou, Casanova, & Lukin, 2013).

Durante los últimos años se creó empleo masivamente, sin que ello redunde en un mayor registro de trabajadores.

Mientras el promedio de empleo no registrado en la década del 90 se ubicó en torno al 40%, en 2014 tenemos un 34,3% de trabajadores "en negro". Tras 10 años, solo se ha mejorado en 6 puntos el registro de trabajadores, mientras que la diferencia salarial entre trabajadores registrados y no registrados se incrementó. En 2001 un trabajador "en negro" cobraba el 73% del salario de un trabajador "en blanco". Para 2013 ese porcentaje disminuyó al 62%. (Harari, 2015, pág. 1).

Mientras que las ramas económicas que más cantidad de empleo han generado son la construcción, la gastronomía y la agricultura, las que contenían ya el 62.46% del total del empleo en 2012, se destaca que son precisamente éstas las ramas con mayor empleo en negro y con salarios más

bajos. Las diferencias salariales entre trabajadores en blanco y en negro de estos sectores, pueden superar el 50% en la mayoría de los casos. (Harari, 2015)

El centro de estudios IDESA - Instituto para el Desarrollo Social Argentino, ha calculado que solo el 21% de la población en edad activa ha logrado acceder a empleos de calidad. El resto se encuentra en inactividad laboral, desempleado, o realiza otras ocupaciones precarizadas, o directamente informales.

Gráfico: 10 “ Sólo 1 de cada 5 personas en edad activa tiene un empleo de calidad ” Fuente: (IDESA, 2015)

El mismo centro de estudios mencionado, IDESA - Instituto para el Desarrollo Social Argentino, en su Informe Número 671 publicado el 25 de septiembre de 2016, sobre la base de datos del INDEC, el Ministerio de Trabajo, la Encuesta Permanente de Hogares, (considerando para ello los informes privados que estiman que un tercio de los asalariados y dos tercios de los cuentapropistas no se encuentran dentro del ámbito laboral formal) ha estimado que el nivel de informalidad laboral alcanza al 42% de los ocupados en la actualidad. El informe establece la estrecha relación entre pobreza e informalidad laboral, dado que las remuneraciones del sector informal resultan significativamente menores a las del sector formal, y se encuentran muy por debajo de la línea de pobreza:

Gráfico: 11 "Remuneración del sector informal" Fuente: (IDES, 2016)

Por su parte, Haimovich, Ventura, Rameri, Lozano, & Raffo, (2015) señalan las dificultades de obtener precisión en las cifras por presuntas manipulaciones de la información estadística pública, por lo que, en base a datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos -INDEC y de la Encuesta permanente de Hogares han elaborado sobre las siguientes cifras, una estimación de la variación interanual de informalidad laboral.

	4to trim 2013		2do trim 2014		4to trim 2014		Variación Semestral	Variación Anual
	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%		
Asalariados registrados	8.272.017	66,4%	8.041.844	66,8%	8.098.406	65,5%	56.562	-173.611
Asalariados no registrados	4.184.980	33,6%	4.003.047	33,2%	4.262.063	34,5%	259.016	77.083
Total de Asalariados	12.459.450	100,0%	12.044.890	100,0%	12.360.469	100,0%	315.578	-98.982

Gráfico: 12 "Contexto de variación interanual empleo no registrado" Fuente: (Haimovich, Ventura, Rameri, Lozano, & Raffo, 2015, pág. 12)

Estos autores hablan de caída del empleo formal desde 2013, profundizándose en 2014, concentrada fundamentalmente en el sector formal y expandiéndose la informalidad laboral ascendiendo del 33.5% al 34.5% entre 2013 y 2014. La caída de desempleo que se inicia a mediados de 2013 se detiene a mediados de 2014 mediante la creación de nuevos asalariados informales.

Gráfico: 13 “Evolución de la tasa de informalidad 2001 - 2014” Fuente: (Haimovich, Ventura, Rameri, Lozano, & Raffo, 2015, pág. 12)

A ello se debe sumar que de la Fuerza Laboral total, un 50.5% en 2014 era fuerza laboral precarizada, un 34.8% carecía de contratación laboral y un 25.3% eran Asalariados no registrados. Solo el 5.8% eran asalariados registrados permanentes. (Haimovich, Ventura, Rameri, Lozano, & Raffo, 2015).

Por su parte, Delfini y Pinazo (2014), también señalan las dificultades en torno a la confiabilidad de las estadísticas oficiales en materia económica y laboral de Argentina, y ensayan una reconstrucción de la información, concluyendo que la informalidad entre los asalariados pasó del 51% en 2003 al 38% en 2013. (Delfini & Pinazo, 2014).

Como se puede observar, no existe consenso en cuanto a las estadísticas y se carece de información oficial confiable, pero las estimaciones coinciden, fundamentalmente, en que el empleo informal se mantiene alto, muy por encima del 30%, y se concentra en el ámbito rural.

Se han observado mejoras que no han durado mucho, ya que se han visto afectadas por factores coyunturales y políticas permeables a los cambios y vaivenes del mercado mundial, y que Paulucci atribuye a la labor y los esfuerzos de los sindicatos, que han impulsado estrategias de fiscalización relativamente exitosas y de acuerdos con los empleadores, que luego, en los

últimos años, fracasaron cuando el Estado ha intervenido restándole poder a los gremios y prescindiendo de su experiencia y conocimiento de las necesidades reales de los trabajadores, en la mesa de negociación. Ello llevó a que se cuente actualmente con un marco normativo aparentemente valioso, pero que en la realidad no se aplica o es inadecuado. El desplazamiento de los sindicatos de la mesa de negociación por parte del Estado, ha perjudicado la calidad de diálogo social que se había logrado en años anteriores, y que permitían la búsqueda de soluciones conjuntas sobre la base de sólidos conocimientos de la realidad de cada sector rural del país, y devino en la toma de decisiones alejadas de las verdaderas necesidades del trabajador, muchas veces directamente perjudiciales. Por otro lado, la incidencia de diferencias ideológicas entre el sector dirigente del gobierno de los últimos años y el sector sindical del ámbito rural, llevó a lo que Paulucci llama una persecución ideológica, lo que atentó contra el cumplimiento de los derechos de los trabajadores, por limitaciones a la acción sindical y por falta de acción y voluntad estatal.

La injerencia del Estado en las negociaciones entre empleadores y trabajadores, desde su desconocimiento de las realidades de cada sector productivo, termina limitando las posibilidades de gestionar acuerdos sobre las condiciones de trabajo o imponiendo negociaciones colectivas generales que se limitan a consensuar salarios y evitan el tema de las condiciones de trabajo y que no constituyen una modalidad válida para atender la situación de contextos tan distintos y variados como los que se dan en las distintas regiones del ámbito geográfico rural del país. También señala el entrevistado que el poder de fiscalización de los sindicatos rurales se ha visto limitado por la injerencia estatal, y a su vez, el poder fiscalizador del Estado resulta claramente ineficiente, por lo que directamente no funciona. Con la participación del gremio sindical, las labores de sindicalización eran conjuntas y se trabajaba desde la concientización del empleador, considerando las irregularidades de contratación y tratamiento del trabajador como prácticas desleales frente a sus competidores y se había iniciado la construcción de un cambio cultural al respecto. Pero nuevamente, al arrogarse para sí el Estado las tareas de fiscalización en detrimento de la participación sindical, su labor,

por desconocimiento e ineficiencia, ha resultado en un abandono del trabajador rural, dejándolo al servicio de las leyes del mercado o las ambiciones de los empleadores, fomentándose todo tipo de irregularidades y explotación. (Paulucci, 2016).

Parte de la ineficiencia estatal que denuncia Paulucci, se manifiesta en la ausencia de registros oficiales respecto de las condiciones laborales del trabajador rural y de los índices de trabajo no registrado. Por ello, en Argentina resulta difícil realizar una cuantificación real del trabajo no registrado en el ámbito rural, por tratarse de una actividad que se realiza al margen de la legalidad y del control del Estado. Dentro de las estadísticas oficiales solo es posible conocer con exactitud el número de trabajadores rurales registrados, y dentro de otras fuentes de información como la Encuesta Permanente de Hogares, no se contemplan los trabajadores rurales, sino solo los urbanos, por lo que se debe recurrir a informes alternativos. En 2011, el informe del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA), llegó a la conclusión de que solo uno de cada cuatro trabajadores rurales se encuentra registrado, lo que equivale un 75% de informalidad. De 1.3 millones de trabajadores, en 2010 solo 350 mil eran empleados registrados, y unos 950 mil, se encontraban trabajando en negro. La estimación se ha realizado de la siguiente manera:

En el caso del régimen especial para trabajadores rurales se cuenta con información fragmentada. Sin embargo, en base a datos oficiales se pueden estimar que:

- Según el Censo 2010, la población total de la Argentina se estima en 40,1 millones de habitantes de los cuales 3,4 millones de personas habitan zonas rurales.
- Estimando una tasa de participación laboral en el orden del 40%, los trabajadores rurales serían aproximadamente 1,3 millones de personas.
- La cantidad de trabajadores asalariados registrados en el sector rural asciende a 335 mil personas, o sea, aproximadamente 25% del total de trabajadores rurales.

En base a esta información de fuentes oficiales se deduce que los trabajadores rurales que acceden a la cobertura de la seguridad social y, por lo tanto, serían los beneficiarios directos del régimen especial, constituyen una minoría. De cada 4 trabajadores, 3 van a quedar excluidos porque trabajan “en negro” u, ocasionalmente, son cuentapropistas con aportes intermitentes. Además, existen indicios de que los excluidos son los que más necesitan de la protección del Estado. Según datos de la AFIP, los 335 mil trabajadores “en blanco” reciben una remuneración promedio de \$2.500 mensuales, un nivel que casi duplica la que percibe un trabajador “en negro” urbano y seguramente también es mucho más alta que los ingresos que reciben la mayoría de los trabajadores informales rurales. (IDESA, 2011).

El estudio ha observado que de acuerdo a la zona y el rubro, estas cifras varían. La horticultura, el algodón y la caña suelen tener mayor proporción de informalidad, por ser obra intensiva, que los cultivos extensivos. Asimismo, de acuerdo a las zonas de producción, se ha encontrado que la mayor informalidad se encuentra en el Norte del país, siendo menor en la Pampa Húmeda, zona en estudio en el presente estudio, esta última. (IDESA, 2011).

Gráfico: 14 “Trabajo no registrado en el ámbito rural, año 2010” (IDESA, 2011, pág. 2)

El Programa Nacional de Regularización del Trabajo (PNRT), por su parte, en 2013, encontró con que un entre un 50% y un 46% de la nómina laboral de los establecimientos visitados, se encontraba no registrado. El relevamiento se realizó en más de 118 mil establecimientos a lo largo de todo 2013 en

cumplimiento de la Ley 25.877 que crea este organismo en el marco del Plan de Regularización para la fiscalización del cumplimiento de las normas del trabajo, la verificación de infracciones de los empleadores a las obligaciones de seguridad social y como ente de aplicación de las penalidades que correspondieren. El organismo encontró índices de irregularidad similares a los de 2012 y ha detectado en los casos más flagrantes de vulneración de derechos, el delito de trata de personas en el ámbito rural y también en el sector textil, afectando en un 78% de los casos a trabajadores extranjeros. (Construcción y agro, al tope del empleo informal, 2013).

3. Región Pampeana de la Provincia de Buenos Aires

La Región Pampeana, comprende gran parte de la Provincia de Buenos Aires, sur de Santa Fe y Córdoba, norte de La Pampa y sudeste de San Luis. En cuanto a la Región Pampeana de la Provincia de Buenos Aires, ésta constituye un sector agroindustrial que concentra gran parte de la producción exportable del agro argentino.

Gráfico: 15 “Pampa Húmeda ubicación geográfica”

De acuerdo con el Ministro de Agroindustria de la Provincia de Buenos Aires, Leonardo Sarquís, la provincia, en términos agroindustriales, representa la

mitad del país: “ Hoy la exportación del 57% del trigo, más del 40% de soja, alrededor del 50% de faena y el 68% de pesca, proviene de la provincia de Buenos Aires. ” (Fierro, 2016, pág. 1) Es por ello, un sector que ha experimentado profundas transformaciones a lo largo de las últimas décadas, y los sujetos sociales que integran este sector han debido adaptarse a estos cambios, siendo el asalariado el más perjudicado. En esta realidad compleja, los cambios tecnológicos y de mercado han modificado profundamente la vida cotidiana y las relaciones entre empleados y empleadores. Esta zona, por sus características climáticas y de suelo, ha sido apta para actividades agrícola-ganaderas, pero en los últimos años han avanzado cultivos, en especial la soja, que requieren mediana aptitud agrícola, marginando otros cultivos y la ganadería a suelos menos productivos. Estas explotaciones suelen tener entre 3.000 y 10.000 hectáreas, por lo que se manejan con estructuras altamente tecnificadas.

El cultivo de la soja requiere mínima mano de obra, quedando un excedente desocupado o subocupado que ha debido buscar medios de subsistencia alternativos a los tradicionales. Los productores suelen trabajar en forma de tenencia en propiedad o en la de tenencia mixta, tercerizando y contratando mano de obra, asumiendo formas de gestión basadas en el modelo de organización en red. Otros solo tercerizan la cosecha y los chacareros que quedan, no tienen personal profesional en la dirección de sus empresas y a su vez van abandonando el modelo de explotación familiar, aunque se privilegian las sociedades familiares y el trabajo familiar que subsiste suele ser remunerado.

La contratación de mano de obra es una práctica que desde hace varias décadas predomina en la región, pero la tercerización de labores es un fenómeno más reciente, así como el crecimiento de la agricultura y desplazamiento de la ganadería. La expansión de la producción se suele resolver actualmente a través de la aplicación de nuevas tecnologías y de la contratación de terceros. El contratista es entonces una figura que hace mucho tiempo existe en el agro pampeano, pero la tercerización de servicios se ha dado solo en las últimas décadas. Esta última, es, en parte, una actividad

considerada como refugio de productores que han sido desplazados del sector como consecuencia de los cambios de la dinámica productiva y de mercado de los últimos años. Asimismo, el patrón de residencia de estos trabajadores, se ha ido modificando, y se ha desplazado de rural a urbano, siendo las poblaciones urbanas cercanas elegidas como residencia para el trabajador del agro de la región pampeana bonaerense. Existe un sector que se dedica al arriendo de sus campos, generalmente con hijos profesionales que se han ido a las ciudades, y que no tienen el campo como destino, y que se encuentran fuera del ámbito laboral, los rentistas. Generalmente son ex productores que han heredado el campo. Algunos se reservan algunas hectáreas para la producción propia. (Moreno M. , 2014).

El protagonismo de los últimos años en la región pampeana, se ha dado fundamentalmente en los cultivos extensivos, siendo la soja el más representativo, por reunir una serie de atributos que, a diferencia de los cultivos perennes, se enfrenta a menores riesgos climáticos y de mercado, ya que se encuentran insertos en circuitos globales de continua demanda para la exportación. El esquema productivo de los cultivos extensivos se caracteriza por:

- La rapidez del ciclo. La soja, en un lapso de seis meses, se siembra y cosecha, permitiendo una rápida recuperación del capital invertido. En el caso de la fruticultura, se planta el monte y se tarda años en empezar a producir.
- La simplicidad del trabajo y de sus requerimientos tecnológicos. Ello presenta características estandarizadas que permiten una gestión a distancia de la explotación. Comparando, otras modalidades productivas, requieren saberes aprendidos y no codificados y cuidados permanentes.
- Bajos requerimientos de mano de obra y facilidad para producir con escasas inversiones fijas. Para ello, este tipo de producción se apoya en la tercerización llevada a cabo con contratistas de servicios. La

fruticultura y horticultura, en cambio, requieren un reclutamiento selectivo, organizar y supervisar el personal transitorio para las tareas de cultivo, cosecha y empaque. (Craviotti & Palacios, 2013).

Observa Paulucci (2016) que las condiciones del trabajador de la Pampa Húmeda, son muy diferentes a las del trabajador que está en otras zonas más inhóspitas, más difíciles. En función de ello, las condiciones laborales presentan importantes diferencias, y aún la condición del sistema salarial varía de manera significativa. Hay una franja en el país, la Pampa Húmeda, que abarca varias provincias y gran parte de Buenos Aires, que tiene un desarrollo de la actividad agraria sostenido, muy fuerte y orientado principalmente a la exportación de materias primas, por lo que los trabajadores suelen estar en mejores condiciones que los del resto del país. Sin embargo, aún dentro del territorio bonaerense rural, se desarrollan simultáneamente distintos tipos de producción y modalidades administrativas, por lo que dentro de esta zona, también se aprecian diferencias profundas que es preciso considerar.

Los trabajadores rurales de la región pampeana bonaerense, han experimentado transformaciones que han generado cambios en el tipo y cantidad de mano de obra utilizada en el sector. La tendencia en esta zona, es a la incorporación de personal calificado, capaz de desempeñarse conforme a los cambios tecnológicos, lo que se observa tanto en los puestos directivos como entre los trabajadores manuales. En cuanto a los roles, por un lado se tiende a la especialización en ciertas tareas, y por otro, a una flexibilización que favorezca una inserción polivalente. Junto con ello, se han acentuado en las últimas décadas los fenómenos de escasa sindicalización y empleo no registrado. En cuanto a las formas de organización y gestión, conviven en la zona, el tipo empresarial conforme al nuevo modelo del agro, y modalidades tradicionales, como la explotación directa familiar, aunque combinada con estrategias para subsistir en un entorno cambiante, como el trabajo extra predial, la cesión de una parte del predio a la explotación, la asociación con otros familiares, etc. La tendencia general es hacia la concentración de la producción, y un avance sostenido en recambio tecnológico. En cuanto al rol del Estado, este es un sector en el que, de acuerdo con el estudio de Moreno

(2014), este no interviene y deja libradas las relaciones a las lógicas del mercado afectando negativamente a los pequeños y medianos productores, que tienden a ser expulsados, y a los trabajadores asalariados, que padecen sistemáticamente condiciones laborales irregulares y precarias. (Moreno M. , 2014).

En esta zona, aunque con menor visibilidad, también se desarrolla una importante labor hortícola. En materia laboral, esta actividad es de suma importancia, ya que la horticultura se caracteriza por requerir del uso intensivo de mano de obra, por lo que la demanda de trabajo es alta. También para este tipo de producción, se requiere de una incorporación de capital significativa, especialmente por las instalaciones de invernáculos.

La labor hortícola se caracteriza por requerir de una mano de obra que realice tareas intensas, continuas, monótonas, repetitivas y generalmente se distingue por ser un trabajo duro y generalmente, mal pago. Es por ello que, en la región, ha resultado un polo de atracción para la mano de obra migrante, actualmente, de origen boliviano. Ello genera algunas distorsiones, ya que quienes se valen de dicha mano de obra mal paga, incrementan la competitividad de manera desleal respecto de otros productores. (García, Fuerza de trabajo en la horticultura de La Plata (Buenos Aires, Argentina, 2014).

La zona periurbana bonaerense, por su parte, es un sector poco estudiado, al punto que García y González (2015) lo describen como una zona de actividad hortícola caracterizada por su discreción e invisibilidad. Este ámbito se distingue por su informalidad y escasa regulación, con trabajadores agrarios explotados a cambio de paupérrimas condiciones laborales y de calidad de vida. Es un sector constituido por pequeños establecimientos familiares atomizados en las afueras del área metropolitana urbana de Buenos Aires, con un uso muy intensivo de mano de obra, en su mayoría de inmigrantes bolivianos en condiciones de residencia irregular y con una necesidad imperiosa de trabajar para subsistir. En este contexto surge un caldo de cultivo ideal para la informalidad y para formas de explotación como la mediería, los jornaleros o el trabajo a destajo (por labor realizada o rendimiento). La

propuesta para combatir esta realidad del sector agropecuario, no muy alejada de la situación que se presenta en otras zonas y regiones, la normativa ha propuesto una reforma laboral agraria. En estos ámbitos, entre el 56 y el 60% del trabajo permanente lo realizan el productor y su familia (muchos de ellos menores), y el resto proviene de trabajadores extrafamiliares. (García & González, 2015).

En este ámbito, de la horticultura bonaerense, la principal figura de contratación de mano de obra es a través del peón-asalariado. Este, a su vez, puede ser permanente asalariado, jornalero (contratado por día) o tantero (contratado por trabajo a destajo). El peón permanente suele recibir una paga mensual, y se le suele proporcionar una casa-habitación con los servicios de luz y gas cubiertos. La Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA) suele convenir un estipendio para el peón hortícola de Buenos Aires en función de las tareas que éste realice y de su experiencia. En la práctica, generalmente los peones de la región suelen cobrar menos del 65% del monto que les corresponde. Por otro lado, de acuerdo con la Resolución 16/02 de este mismo organismo, la jornada de los peones hortícolas no debe superar las 8 horas diarias ó 48 semanales, de Lunes a Sábado, y se le deben reconocer con doble paga los días domingos y feriados. Lo cierto es que en la práctica, García (2014) ha observado que los peones suelen trabajar entre 8 y 10 horas durante el invierno, llegando a jornadas de 12 horas en verano. También se ha observado que, al ser los domingos días de cosecha y empaque y los lunes, días en que no hay mercado, estos trabajadores no reciben adicional alguno.

El caso de los jornaleros, por lo que se ha observado en las prácticas de la región, suele constar de jornadas laborales de unas 9 horas, y lo que cobran suele ser un 38% menor a lo que estipula la Comisión Nacional de Trabajo Agrario. Los tanteros o trabajadores a destajo, por su parte, cobran por unidad finalizada, como por ejemplo, por línea de tomates podada y ese tipo de tareas. Esta modalidad se suele utilizar para los embaladores de tomate, entre los meses de noviembre y mayo, y el resto del año, estos trabajadores suelen trasladarse para trabajar en Salta de mayo a octubre y a Corrientes de septiembre a noviembre. Esta práctica se suele poner en práctica para lo que

en Argentina se llaman “changas” , que son trabajos esporádicos, o para poner a prueba a un trabajador. Este tipo de modalidad laboral carece de regulación alguna, aunque desde el gremio de los trabajadores rurales (UATRE) se sostiene que este tipo de situación es cubierta por el uso de la Libreta de Trabajo (Ley N°25.191). (García & Lemmi, 2011) Estas formas de contratación eventual de mano de obra, si bien se encuentran dentro de la normativa, dan lugar a formas precarizadas de contratación laboral y permiten la práctica habitual de las irregularidades descriptas. Este tipo de trabajadores suele desconocer cuáles son las remuneraciones que les corresponde por ley, y las condiciones de Seguridad e Higiene que se les debería garantizar. El no registro de trabajadores, en este contexto, es coincidente con los bajos salarios y la explotación, prevaleciendo el contrato de palabra, con ausencia total de registro alguno. (García, Fuerza de trabajo en la horticultura de La Plata (Buenos Aires, Argentina, 2014).

En la historia de la realidad pampeana, existe la figura emblemática del chacarero, que, como tal, ya prácticamente no existe. Los chacareros de principios del siglo XX han dado lugar a distintas modalidades basadas en la intensificación del trabajo asalariado, tras el agotamiento del entorno de vida del chacarero tradicional, la profesionalización de los hijos y su migración hacia espacios urbanos, terminándose con el traspaso intergeneracional de técnicas de producción y de la explotación de los campos propios. El agricultor familiar, a pesar de los cambios en el sistema productivo agrícola ganadero de los espacios rurales de Argentina, hibridándose con modalidades de explotación insertas en el sistema capitalista moderno, basadas en estrategias empresariales. Nogueira (2013) sostiene que la región pampeana se ubica, en relación al producto, la productividad y la estructura social, en un territorio esencialmente capitalista. En este, aún la producción familiar pampeana, se define como pequeña producción capitalista, y ya no como estrictamente familiar, aun cuando se encuentren en cierto estado de marginalidad con relación a los grupos de productores más grandes. Esta se caracteriza por la propiedad familiar del negocio y gestión de control, la presencia de miembros de la familia en la realización de tareas productivas, la existencia de transferencia generacional y la residencia de la familia en la explotación, con

las salvedades que se han mencionado, de muchos hijos que se profesionalizan y se dedican a negocios urbanos.

En general, los agronegocios familiares no acumulan capital y reinvierten el excedente regular en la explotación, y ello les permita invertir en mayor eficiencia productiva. El productor familiar de la zona núcleo de la pampa húmeda, se encuentra en un territorio en el que las relaciones de producción capitalista se encuentran consolidadas, y difiere mucho de la producción familiar de otras partes del país, menos tecnificadas y generalmente con economías de mera subsistencia. La diferencia entre la zona pampeana y otras zonas agrícolas del país, se basa fundamentalmente en que la producción familiar de la región pampeana, posee un excedente al final del ciclo productivo, mientras que la demás no. Además, muchos productores pampeanos suelen tener explotaciones pluriactivas, en la que los miembros de la familia combinan el trabajo en la explotación familiar con otras ocupaciones relacionadas o no con el sector agrícola, sea como cuentapropistas, empleadores o asalariados. Se estima que la región pampeana contiene casi al 40% de las explotaciones pluriactivas del país. (Nogueira, 2013).

Gráfico: 16 “Cuenca del Noreste, ubicación geográfica”

En la zona noreste de la región pampeana bonaerense, se desarrolla otro tipo de cultivo, en este caso, la fruticultura, una actividad encarada por productores familiares trabajo-intensiva orientada al mercado interno y con un mercado de trabajo estacional. Si bien no se trata de una expansión importante como la destinada al cultivo de soja, con su modelo socio-técnico característico, se trata de una zona que ha logrado articular factores productivos con características estandarizadas propias y modalidades flexibles, en la que la mano de obra constituye un componente fundamental. En este sector, también es destacada la persistencia de los productores familiares en un contexto rural insertado en una fase del desarrollo del capitalismo a escala mundial, en el que emergen nuevos circuitos de valorización del capital en los que ocupan un rol destacado las producciones de circuitos agroindustriales llevados adelante por grandes empresas de capitales trasnacionales. Así, el mundo rural se reconfigura, y los actores buscan organizarse en recursos y estrategias productivas dentro de los límites que el contexto les presenta. La región pampeana argentina ha devenido en un derrotero de sucesivas transformaciones que desde su origen chacarero han cedido el protagonismo a las grandes explotaciones sojeras, y en el cual se han sufrido procesos de exclusión del circuito productivo y generado áreas de refugio para estos productores y trabajadores desplazados, en producciones trabajo- intensivas generalmente orientadas al mercado interno.

En el noreste bonaerense, se ha desarrollado en una superficie que ocupa alrededor de 6.700 hectáreas, una producción frutícola que se reparte entre cítricos y duraznos. Si bien se trata de producciones en proceso de retracción que ha sido afectada en los últimos 15 años por factores climáticos y políticas económicas que afectaron negativamente la actividad, se mantiene por una serie de ventajas estratégicas, como su localización, cercana a importantes centros de consumo como la Ciudad de Buenos Aires y de Rosario. (Craviotti & Palacios, 2013).

En la región Pampeana, también se han detectado en dos tipos de producciones intensivas propias de la zona: la lechería y la horticultura. Estas producciones han desarrollado procesos de reestructuración en los que no se

han considerado formas de trabajo típicamente asalariadas. En la producción lechera, la figura del tambero mediero (a cargo del ordeño a cambio de un porcentaje de la producción) se ha tenido que adaptar a las nuevas demandas del mercado, llegando a situaciones de crisis, y en la producción hortícola, los trabajadores familiares, asalariados permanentes y temporarios, fueron reemplazados por medieros, en su mayoría de origen boliviano, quienes recurren a sus redes sociales establecidas con su lugar de origen para la contratación de mano de obra temporal. (Benencia & Quaranta, Los mercados de trabajo agrarios en Argentina: demanda y oferta en distintos contextos históricos, 2006).

4. Factores que propician la informalidad del sector

En Argentina, persisten una serie de factores que propician la informalidad del sector, y que Paulucci (2016) ha señalado como problemas fundamentalmente basados en el desconocimiento del Estado respecto del sector rural argentino y sus necesidades reales, lo que junto con un desplazamiento del sector sindical de la toma de decisiones y mesa de negociación, y la arrogación casi exclusiva de las actividades de fiscalización, terminan llevando a una situación insostenible en la que la Ley no es en absoluto observada, por lo tanto, no es eficaz. A estos motivos, cabe agregar otros aspectos que permiten contextualizar la situación para una mejor comprensión del fenómeno.

En un estudio para la Organización Internacional del Trabajo, realizado en conjunto con el Ministerio de Trabajo, la Confederación General del Trabajo, la Central de Trabajadores de la Argentina y la Unión Industrial Argentina, Bertranou y otros (2015) encuentran a la informalidad laboral en el sector rural como una característica distintiva, en especial en el ámbito agropecuario. Entre los factores que propician la informalidad en el sector, los autores destacan la dificultad de adaptación a los procesos de cambio tecnológico y restructuración de la producción que han transformado el mercado de trabajo en las últimas décadas, modificando los requerimientos de la mano de obra y llevando a la reducción del empleo directo. La consecuencia observable ha sido el registro de un descenso trabajadores permanentes y un incremento de los transitorios,

junto con la recalificación de tareas, relocalización de la mano de obra rural hacia áreas urbanas, una mayor participación de los jóvenes, una intensificación de los procesos migratorios y el crecimiento de empleos ligados a servicios para la producción primaria. En medio de todo ello, han surgido los intermediarios para la contratación de trabajadores temporarios. (Bertranou, y otros, 2015).

Ampliando la injerencia estatal en cuestiones gremiales planteada por Paulucci (2016), el estudio de Lewkowicz, (2011), llama la atención sobre la inestabilidad, la desprotección social, la informalidad laboral y la pérdida de calidad de empleo, que para el autor encuentran sus fuentes en el plano colectivo. Esto es, en la acción sindical, y en la vulnerabilidad propia de los hogares pobres de los trabajadores que en su situación se encuentran limitados para rechazar empleos precarizados. También señala Lewkowicz que la fiscalización constituye un fenómeno fácil de sortear, ya que los agentes llegan a la tranquera, y el patrón simplemente ordena que se vayan los trabajadores en negro y que queden solo los que están en blanco.

Para Quaranta y Fabio (2010), otro factor precarizador lo constituye el trabajo temporario, que representa la mitad del universo de trabajadores rurales, con capacidad de organización limitada. También la reducción de demanda de mano de obra en cierto tipo de cultivos de la región pampeana, como en los cultivos de soja, trigo y maíz, que requieren muy poca mano de obra. La mecanización de la cosecha ha alcanzado también al norte del país en cultivos como el algodón y el azúcar en las explotaciones medianas. Las producciones alternativas no logran absorber la pérdida de empleo, y a medida que avanza la tecnificación de las labores, la proporción de trabajadores permanentes se reduce, creciendo la demanda del empleo estacional y transitorio. También el cambio organizacional de las empresas del sector, a fin de reducir gastos, ajusta la contratación de empleados a los tiempos efectivos de trabajo, eventualizando la contratación de los jornales. Se dan así casos de empresas frutícolas sumamente grandes en las que solo trabajan diez empleados permanentes. (Lewkowicz, 2011); (Quaranta & Fabio, 2010).

La tendencia creciente a la contratación temporaria o estacional de mano de obra rural, es un fenómeno que, como se ha señalado a comienzos del presente capítulo, afecta a América Latina en general. Si bien la estacionalidad de la producción agrícola puede explicar en parte esta tendencia, cabe considerar también, la incidencia de las estrategias empresariales que procuran reducir al mínimo los costos fijos de contratación de trabajadores, y lo hacen sustituyendo la mano de obra permanente por trabajadores transitorios. Sánchez Enrique (2016) sostiene que a pesar de la reforma del régimen agrario que se ha realizado en Argentina con la sanción de la Ley 26.727, y de los avances en materia de reconocimiento de los derechos de los trabajadores rurales, las estrategias para evitar fraudes laborales han tenido resultados magros, dado que persiste una fragmentación jurídica en el ámbito del trabajo rural temporario y aún persiste fuertemente la figura del contratista. Y con ello, se produce la fragmentación sindical:

En este sentido, la fragmentación normativa trae como consecuencia un nivel de segmentación sindical que debilita la identificación, participación y representación gremial de los trabajadores y la exigibilidad de sus derechos, lo que se agrava por la incidencia de la estacionalidad y movilidad laboral en el transcurso del año que caracteriza a este sector del mercado de trabajo rural. Al mismo tiempo, la diversidad jurídica aplicable al empleo estacional genera un complejo esquema de entidades competentes, no siempre coordinados, en materia de fiscalización de condiciones de trabajo rural temporario, que dificultan la integración orgánico funcional y la coordinación sistemática de las acciones conjuntas entre los distintos organismos competentes y conspira contra la eficiencia de las inspecciones y por tanto de la garantía de los DESC⁵ de los trabajadores, en materia tanto de registración laboral como de condiciones de trabajo, lo que se agrava por la necesidad de articular las facultades de inspección a nivel nacional y provincial. (Sánchez Enrique, 2016, pág. 36).

⁵ Derechos Económicos, Sociales y Culturales

Esta fragmentación da lugar a la complejización del esquema institucional, fragmentándose junto con el cuerpo normativo aplicable, la estructura sindical y la coordinación de los organismos de inspección. Ello deja vacíos que permiten que el fenómeno de tercerización laboral rural se expanda, ya que es elegido por los empleadores para simplificar la gestión de contratación, y por medio de la intermediación, reducir costos fijos de mano de obra y evitar los riesgos jurídicos de la contratación directa. Con ello, se flexibilizan tanto la continuidad como el vínculo laboral, distanciando la relación entre el empleado y el beneficiario de la actividad. La figura del contratista es la que responde a estos requisitos de tercerización del trabajo rural temporario, a través de empresas de colocación de mano de obra. Con ello se profundiza la precarización laboral y se vulneran aún más los derechos del trabajador rural. De este modo, concluye Sánchez Enrique (2016), que si bien la sanción de la Ley 26.727 ha incorporado avances innegables en materia de protección frente a la flexibilización y tercerización laboral en el ámbito rural, estos progresos han sido parciales, ya que excluyen a un sector importante como es el colectivo de los trabajadores temporarios.

Paulucci (2016) ha señalado que la vastedad, las grandes distancias y la heterogeneidad de las distintas actividades que se desarrollan en el ámbito rural dificultan la eficacia de la normativa vigente. Coincidentemente, García y González (2015) afirman que:

La validez de una ley de trabajo agrario no implica desconocer las claras y evidentes heterogeneidades dentro del sector, como las que se observan entre las actividades intensivas –ejemplo, hortícola– y las extensivas. Suelen ser estas heterogeneidades base argumentativa para afirmar que es imposible abarcar el trabajo agrario con una normativa común sin caer en injusticias [...]. Si bien una ley macro que regule todo el trabajo agrario indefectiblemente obliga a que se pierdan particularidades, las mismas pueden y deben ser resueltas a través de resoluciones de los organismos competentes, como la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA), o

también a través de convenios y de acuerdos colectivos de trabajo que la anterior ley prohibía expresamente. (pág. 7).

García, en otro estudio realizado junto a otros colegas, sostiene otras causas por las cuales se produce el incumplimiento de la normativa vigente en materia laboral rural. En primer lugar, la distorsión del accionar del gremio, que Paulucci (2016) sostiene que se debe a una persecución e injerencia de parte del Estado en los últimos años. Por otra parte, García señala desconocimiento e inacción de los organismos de gobierno para proteger los derechos de los trabajadores rurales, cosa que, si se toma en cuenta que muchos trabajadores desconocen el alcance de sus derechos, conspira contra cualquier expectativa de mejora de las condiciones laborales del trabajador rural.

Asimismo, hay sectores aún dentro de la región pampeana bonaerense, más marginados que otros, y aún invisibilizados, como los que se han mencionado en la industria frutihortícola de las zonas noreste y periurbana de Buenos Aires, en las que predomina la mano de obra migrante, proveniente del interior del país o de países fronterizos, en especial Bolivia, que en sus condiciones de precaria existencia se suelen predisponer a trabajar en condiciones no aceptables para los trabajadores que son residentes locales y a cambio de beneficios muy por debajo de los que les corresponden. A ello se suman más y más factores, entre ellos:

Otro tanto sucede con los mercados de insumos, de productos, de tierras y de capitales desregulados. Estos son parte causal de la precarización laboral, por cuanto su mayor poder de puja por el valor generado potencia el accionar del (pequeño) productor para con el trabajador. Paralelamente, una política que no diferencia los diferentes tipos de productores es una política laboral regresiva. Además, este incumplimiento se estaría facilitando ante una carga social no acorde a la estructura productiva de los productores hortícolas familiares bonaerense, lo que hasta genera una situación de casi autojustificación del no- registro de los trabajadores. Más allá de esta realidad que amerita su estudio y que implica el no pago (y, por ende, no cumplimiento de derechos tales

como jubilación, obra social, etc.), esa situación no justifica ni implica que no se respeten el resto de los derechos. (García & Lemmi, 2011).

El análisis de la normativa y su cumplimiento deben hacerse en consideración del contexto. Cuando ello no se hace, es más probable incurrir en errores. Las condiciones de trabajo, las variables que inciden en ello, las necesidades específicas de cada sector productivo, se rigen por una normativa vigente en la medida en que estas se adaptan a la realidad de la región y en la medida en que es posible adaptar los requisitos y demandas normativas a las particularidades de cada modalidad productiva. (García & González, El nuevo Régimen de Trabajo Agrario. Desajustes y propuestas de adecuación para el sector hortícola del periurbano bonaerense sur, 2015).

El reclamo de Paulucci al respecto, coincidente con el de Sánchez Enrique (2016), García y otros autores mencionados en el presente capítulo, demanda una mayor observación de la realidad específica de cada sector de la producción rural, a fin de buscar soluciones conjuntas, en las que empleadores, trabajadores, Estado y sindicatos, encuentren puntos de acuerdo y propongan no solo convenios sino los cambios normativos necesarios para dar respuesta a las distintas realidades complejas que le toca enfrentar a cada sector. La escasez de presencia sindical y la pérdida de los sindicatos de control sobre las negociaciones colectivas constituyen otro factor que Paulucci (2016) ha señalado como causantes del deterioro de la calidad del trabajo rural y la ineficacia de la ley, también son aspectos reconocidos en distintos estudios realizados en Argentina rural en distintos momentos, y se coincide en ello. (Soto Baquero & Klein, 2012) ; (Sánchez Enrique, 2016) ; (García & Lemmi, 2011) ; (García & González, El nuevo Régimen de Trabajo Agrario. Desajustes y propuestas de adecuación para el sector hortícola del periurbano bonaerense sur, 2015).

En cuanto a situaciones extremas, como trata laboral de personas o reducción a la esclavitud, en Argentina se han detectado pocos casos. Entre 2009 y 2013 se detectaron 71 casos, concentrados principalmente en Buenos Aires y Entre Ríos. De estos, un 42.74% fue captado para trabajo textil, y un 28.5% para

trabajo rural. El resto de las víctimas fue captada para realizar actividades de trabajo doméstico, venta ambulante, trabajo fabril, comercio o construcción. (Colombo & Mángano, 2014) La zona que lidera los casos de trata laboral en zona rural es Buenos Aires. Desde 2008 se ha tipificado la trata de personas como un delito federal y los operativos de RENATEA han permitido que la problemática se vaya reduciendo a lo largo de los años. (Jacamo, 2015).

Actualmente uno de los aspectos que se encuentran en el centro de la atención es el trabajo infantil en establecimientos rurales. (Honorable Cámara de Diputados de la Nación, 2015) El trabajo infantil resulta también una realidad resistente a los intentos por combatirla. Para Badeni (2016), a pesar de que desde 2004 no se cuenta con estadísticas oficiales confiables en Argentina, el problema del trabajo infantil tiene una base cultural por la que se ha naturalizado que los menores de 16 años. De acuerdo con el informe de 2013 del Observatorio de la Deuda Social que realizó la Universidad Católica Argentina en 2013, el 14.7% de los menores comprendidos entre 5 y 17 años trabaja. En 2014 el porcentaje descendió a 13 y en 2015 a 12. Ello acarrea una serie de perjuicios que llevan al niño a la deserción escolar, a la pérdida de espacios de socialización y esparcimiento y a niveles de explotación altamente preocupantes, ya que muchas tareas a las que se los somete suelen estar mal remuneradas o directamente no remuneradas. (Badeni, 2016) (Observatorio de la Deuda Social Argentina, 2016).

Gráfico: 17 “Incidencia del trabajo infantil años 2010/2015 en población de 5 a 17 años” (Observatorio de la Deuda Social Argentina, 2016, pág. 19)

El trabajo infantil y juvenil se asocia a una necesidad de sobrevivencia, pero cabe contemplar que en el contexto rural representa una tradición histórica en la que los conocimientos se transmitían de generación en generación. Sin embargo, en la actualidad, el aprendizaje de las tareas del campo, no necesariamente resulta útil ante un futuro probablemente urbano de hijos de pobladores rurales que ven en la posibilidad de empleo en la ciudad, posibilidades de salir de una situación de condición de vida precaria. Si bien la asociación de la vida rural a la pobreza es una cuestión socio-histórica y no intrínseca, esta es la realidad que viven los pobladores rurales y que ha sumado nuevas variables al debate sobre el trabajo infantil y juvenil rural.

Es por ello que la justificación del trabajo rural infantil en función de la adquisición de experiencias formativas a través de la participación en actividades prediales, no encuentra asidero firme en un contexto de desempleo estructural, y la necesidad de educación y el aprendizaje de abstracciones se hacen una necesidad más reconocida ante la expectativa de un proceso de urbanización creciente del que Argentina es un representante fiel. Es por ello que las tareas de niños y jóvenes asociadas a la reproducción familiar doméstica en el ámbito rural, si bien resulta innegable que pueden constituir experiencias formativas, en el contexto actual, paralelamente constituyen modalidades de trabajo erradicable, a pesar de encontrarse legitimadas en la práctica de las comunidades. Si bien resultan necesarias para la transmisión del patrimonio de saberes y para la construcción de sucesores en la actividad rural, no dejan de tomar ventaja de la fuerza de trabajo y de extraer un plusvalor de parte del adulto, ni de poner al niño en situaciones de riesgo con escasas y muchas veces nulas situaciones de aprendizaje de oficios y habilidades más complejas. La tradición debe ser así vista a la luz de la reformulación del concepto de trabajo infantil, a fin de distinguir el carácter formativo de ciertas actividades transmisibles de manera inter- generacional, de excesos que atenten contra la calidad de vida de la infancia y sus posibilidades de acceso y permanencia en el ámbito de la educación universal y obligatoria.

El marco normativo nacional ha ido adaptándose a estos nuevos conceptos, y así, la Ley 20.744 que permitía el trabajo en empresas familiares desde los 14 años de edad, ha precisado que ello se debe limitar a jornadas de no más de 3 horas diarias y prohibiendo las tareas penosas, peligrosas e insalubres, y asegurando que el menor concorra a algún establecimiento escolar. Asimismo, la Ley 26.390 sancionada en 2008 sostiene que los jóvenes de entre 16 y 18 años pueden celebrar contratos de trabajo siempre que cuenten con autorización de sus tutores y no en cualquier actividad. De esta manera, el cuerpo normativo nacional, reconoce la incorporación al trabajo predial de los jóvenes desde los 14 años a fin de que reciba la formación de saberes transmisibles inter generacionalmente, pero procura establecer límites claros a fin de protegerlos de situaciones que vulneren sus derechos.

Con ello se admite la posibilidad de que los jóvenes rurales participen en experiencias formativas que colaboren en su formación como sujetos autónomos, bajo ciertas condiciones que distingan el trabajo formativo del trabajo erradicable. (Padawer, 2014) Sin embargo, no se debe perder de vista que existen prioridades que no se pueden dejar de lado, como la educación del niño.

El daño que se le hace al niño es enorme, particularmente cuando, porque trabaja, deja de ir a la escuela, cosa que ocurre en promedio entre el 20 y 30% de los niños que abandonan la escuela y que solo trabajan. [...] el abandono prematuro de la escuela le significará al niño un ingreso permanentemente más bajo durante toda su trayectoria laboral, aumentando de esa manera su probabilidad de ser pobre durante su vida adulta. En eso consiste la transmisión intergeneracional de la pobreza: los hijos reciben de sus padres la herencia de ser pobres. El problema del trabajo infantil es también un asunto cultural porque en las sociedades en desarrollo en general, y particularmente en las zonas rurales, se valora el trabajo de los niños y niñas. Es decir, no solo no lo consideran perjudicial para ellos sino que encuentran positivo el hecho que ellos les ayuden a sus padres a aportar trabajo e ingreso al hogar. (Soto Baquero & Klein, 2012, pág. 35).

En sus años de experiencia recorriendo los distintos ámbitos de la vida rural argentina, Paulucci (2016) ha observado ciertas particularidades del sector infantil y de los ancianos que no suelen ser considerados por los legisladores, dando lugar a normas que no siempre responden a la realidad que se vive en el campo. La jubilación es un aspecto crucial, ya que Argentina, si bien cuenta con una ley especial de jubilación para el trabajador rural, esta no es adecuada.

La norma debería contemplar que la edad de jubilación del trabajador debe responder al tipo de labor que se realiza en el ámbito rural, el cual requiere de movilidad, fuerza, desgaste físico, tolerancia al frío, al calor. Asimismo, debe considerar que a cada tipo de actividad corresponden distintos niveles de exigencia en todos los aspectos mencionados. Por ello, una edad igual para todos constituye un error, ya que las actividades son muy diferentes en la vida rural. No se puede considerar la edad jubilatoria para el trabajador rural con el mismo criterio que se evalúa en un oficinista que trabaja con aire acondicionado, calefacción, sillones cómodos, café caliente. El trabajador que patea granos en un silo, expuesto a químicos peligrosos y con el desgaste físico que ello conlleva, no puede tener el mismo régimen jubilatorio que un trabajador urbano o trabajar hasta los 70 años de edad. Las consecuencias son muy negativas:

La norma es una norma escasa, que no le da la protección necesaria al trabajador, fundamentalmente porque no le asegura un haber provisional justo. Y cuando una persona no tiene un haber provisional justo, qué pasa... sigue trabajando. Entonces la situación es más grave todavía, porque la labor suele ser más dura, porque ese trabajador mayor es un marginado, y muchas veces el empleador se aprovecha de eso, y ya tienen en su espalda, muchos años de trabajo. La gente ¿Cómo se va a jubilar a los 55 años, si el haber que le dan no le sirve para vivir? La gente sale a trabajar porque necesita comer. (Paulucci, 2016).

Este tipo de encuadre normativo inadecuado, es producto, en la experiencia de Paulucci (2016), de una voluntad estatal de avanzar en la regulación, sin

convocar a los actores sociales interesados a fin de generar normas realistas y consecuentemente efectivas. Con la problemática del trabajo infantil, ocurre algo similar, ya que si no se conoce la problemática, no se regula adecuadamente. Independientemente de las razones culturales mencionadas que hacen al trabajo infantil en el ámbito rural, existen otras causas, entre ellas, económicas, por las cuales un padre de familia se lleva al niño a trabajar porque no le alcanza su propio trabajo para cubrir las necesidades de una familia. En estos casos, la mera prohibición no aporta una solución, ya que ante la extrema necesidad, simplemente se la ignorará. Es por ello que para atacar el trabajo infantil, es necesario resolver otro tipo de cuestiones más amplias. El registro del trabajador, los salarios decentes, la calidad laboral, son algunos de los factores que pueden ir aportando soluciones a este sector, beneficiando a los niños. Suscribir acuerdos internacionales, sin posibilidades efectivas de cumplimiento, no es la vía.

Las consecuencias del trabajo no registrado, de acuerdo con el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores (RENATRE), tiene una multiplicidad de efectos negativos para el trabajador, sus hijos, sus familias. El trabajador no registrado queda, junto con su familia, excluido del régimen de seguridad social, carece de obra social, jubilación, y no tiene acceso al Sistema Integral de Prestaciones por Desempleo que el propio RENATRE administra. (Soto Baquero & Klein, 2012).

CAPÍTULO IV

1. Aspectos prácticos de su contemplación efectiva. Diagnóstico. Leading case : Región de Sisal en el Estado de Bahía.

2. Irregularidades detectadas. El trabajo rural no registrado. Información estadística, actuación de las instituciones estatales y sindicales, nivel de cumplimiento de la normativa vigente.

Las condiciones en que trabaja el campesinado en Brasil, consisten en parte de una estructura que privilegia el trabajo rural familiar como pilar de la reproducción de sistemas estructurados de concentración de poder económico y político en la sociedad brasileña. Ante ello, ha sido una constante la lucha del trabajador rural brasileño por una integración y autonomía relativa, resistiendo a las formas de sometimiento que debe aceptar para asegurar su subsistencia, muchas veces fuera de lo que los patrones culturales definen como digna. El campesinado se integra al juego de las fuerzas sociales en un marco de modalidades de producción y variables de mercado en condiciones que aseguran su imposibilidad de ascenso social, independencia y progreso económico, que reproducen sistemas de tutela de condiciones de vida y trabajo de la existencia campesina generación tras generación. (Pessanha Neves & de Moraes Silva, 2008).

Se ha mencionado que Brasil, al igual que Argentina, presenta una gran extensión territorial, lo que facilita la falta de control estatal en el ámbito rural. En Brasil, la problemática rural se encuentra particularmente agravada por situaciones de incumplimiento de la normativa vigente no solo en zonas remotas o periféricas, sino en zonas agrícolas centrales. En Brasil, la proporción de la población económicamente activa y de la ocupación laboral en zonas rurales ha sido, en porcentajes, del 19.9% en 2005 y del 15.7% en 2014, disminuyendo la participación en el empleo de la población rural, significativamente. (Titelman, y otros, 2016) Sobre datos aportados por relevamientos de la Comissão Pastoral da Terra en 2011, se han desarrollado los siguientes gráficos, en los que se observa por Estado, los conflictos laborales más destacados: trabajo esclavo, sobreexplotación y acciones de resistencia. Por acciones de resistencia se enciende a las acciones de lucha de los trabajadores por la conquista de los derechos laborales y se refieren a huelgas u otras formas de protesta. La sobreexplotación se define por condiciones de trabajo precarias y vivienda por debajo de condiciones dignas, además del incumplimiento de paga de salarios conforme a la normativa vigente. (En Bahia, se han denunciado 17 situaciones de sobreexplotación y se ha liberado a 16. También se ha encontrado en este Estado en 2011, a 10 trabajadores esclavizados), así como un detalle de modalidades de trabajo

esclavo y explotación de menores de edad. (En Bahía, 162 trabajadores en situación de trabajo esclavo).

Gráfico: 18 “Modalidades de trabajo esclavo por Estado en Brasil” Fuente: (de Moraes Silva, Medeiros de Melo, & Vasconcellos de Verçoza, 2011, pág. 91)

Como se puede apreciar, el incumplimiento de la ley se da en mayor o menor medida en todos los estados. El estado con mayor número de trabajadores esclavos es el de Mato Grosso del Sur con 1293, seguido de Goiás (541); Pará (495); Marañón (259); Tocantins (256); Minas Gerais (236); Bahía (162); Río de Janeiro (111); Mato Grosso (109); Santa Catarina (107). En los demás estados, el número de trabajadores esclavizados en el campo, fue de menos de 100. En los gráficos también se muestra el número de los trabajadores que fueron puestos en libertad por los organismos responsables de la supervisión, variable mucho más baja en muchos estados, lo que demuestra que por más que se informe de situaciones irregulares, la liberación no siempre llega, evidenciando una profunda falla en la eficacia de dichos organismos. El sometimiento a situaciones de esclavitud incluye, como se puede apreciar, también a menores de edad.

En el Estado de Bahía, los casos de sobreexplotación detectados, se relacionan con la producción de carbón, la minería y las plantaciones de

A esta situación se suman conflictos por expropiaciones ilegales de tierras a familias agrícolas o a pueblos originarios, amenazas y muertes a trabajadores rurales que realizan reclamos por sus derechos, en números preocupantes, y una persistencia del latifundio bajo una nueva modalidad que se conoce como agronegocio y que no varía mucho respecto de la estructura latifundista original, y que impone reglas en las que los pequeños agricultores, las comunidades indígenas y los trabajadores rurales, se encuentran desprovistos de toda protección estatal y a merced de todo tipo de abusos. Entre 2000 y 2011 se han registrado más de mil ochocientas amenazas de muerte a trabajadores rurales, de los cuales 42 fueron efectivamente asesinados y 30 sufrieron atentados contra sus vidas. Entre ellos se encuentran líderes religiosos, agentes pastorales o simples trabajadores que luchan por sus derechos. Durante 2014 los asesinatos continuaron. En el Estado de Bahía se concretaron 3 y en el total del país, unos 36. En los años subsiguientes el número de trabajadores en condición de sobreexplotación o esclavitud ha disminuido, pero no por razones de desuso de dichas prácticas, sino por haber menguado los mecanismos de fiscalización. (Alves da Silva, y otros, 2012, pág. 141) (Canuto, da Silva Luz, & Rodrigues Costa, 2015, pág. 115).

De acuerdo con Antônio Inácio (2015), Secretario de Salarios de la Federación de los Trabajadores en la Agricultura en el Estado de Bahía-Brasil, a quien se ha entrevistado en función del presente estudio, la permanencia de los latifundios constituye un factor destacado en cuanto a la modalidad de explotación del capital que da lugar a que no se respeten los derechos fundamentales de los trabajadores de Bahía. En estos contextos laborales, los trabajadores no tienen una buena calidad de vida, trabajan sin ningún tipo de protección expuestos a herramientas peligrosas, cuentan con horarios de almuerzo reducidos y realizan una labor extenuante. Generalmente se levantan a las cuatro de la mañana y a eso de las seis de la tarde vuelven a sus casas, lo que representa jornadas de trabajo de unas 14 horas. Muchos residen en los lugares de producción y solo ven a sus familias cada 15 días o una vez por mes, lo que atenta contra la unidad familiar.

El Estado de Bahía, se sitúa en segundo lugar en el ranking de violencias en el ámbito rural, con situaciones de violencia, amenazas de muerte e intentos de asesinato, intimidación, disputas, invasiones territoriales, etc. La intervención de las autoridades estatales en estos casos es mínima o nula. Estas situaciones se recrudecen en las zonas donde habitan los pueblos originarios. (Canuto, da Silva Luz, & Rodrigues Costa, 2015, pág. 115).

La situación de trabajo en condición similar a la esclavitud ha sido formulada en el artículo 149 del Código Penal brasileño, en un intento de visibilizar la situación y aportar soluciones jurídicas. Sin embargo, las propuestas de ley relacionadas con el tema, no han hecho sino proponer un retroceso legal respecto de los derechos alcanzados con mucho esfuerzo durante los últimos años. La imposición de condiciones de trabajo degradantes se observa de norte a sur del país. La actividad basada en la modalidad de subcontratación, habitual en el país, conduce frecuentemente a situaciones de una brutal violación de la libertad y de la dignidad humana. Como se puede apreciar, la situación de Brasil es mucho más grave que la inobservancia de algunos derechos laborales. Directamente la gravedad de la situación lleva a tener que lidiar con situaciones de privación de la libertad, trabajo esclavo, degradación de la persona en su condición humana, situaciones de humillación, cosificación, en las que los propios trabajadores rescatados describen que eran tratados peor que los animales. En virtud de la Ley 10.803/2003 se ha reformulado el artículo 149 del Código Penal, que define la condición análoga al trabajo esclavo, y en la actualidad existen en el marco jurídico brasileño cuatro elementos que definen una condición análoga a la esclavitud: el trabajo forzoso, la servidumbre por deudas, condiciones degradantes (trabajo poco digno que pone en peligro la vida del trabajador) y el viaje agotador (que conduce al agotamiento completo de la persona, dependiendo de la intensidad de la explotación, y pone en peligro su vida).

El comité ruralista ha propuesto eliminar las condiciones degradantes y el viaje agotador, argumentando que se trata de una situación subjetiva y difícil de identificar, generando un clima de inseguridad jurídica para el empleador. Luego de varios intentos por regular esta situación, en 2014 se aprueba una

enmienda constitucional, la N° 81, por la cual se determina la confiscación de los bienes en las propiedades en las que se encuentra trabajo esclavo. Ello se encuentra en discusión por lo tanto no es aplicable, al punto que es posible afirmar que “el incumplimiento de las leyes laborales es normal, natural y no configura un crimen pasible de condena en Brasil” (Canuto, da Silva Luz, & Rodrigues Costa, 2015, pág. 139).

El territorio del Sisal, es una idea relativamente reciente. Se conformó en los años 90 en el estado de Bahía. Este territorio no solo es relevante por su contribución económica a través de la cadena productiva del sisal, sino que también ha sido históricamente un centro de fortalecimiento de los movimientos sociales en Bahía, a través de organizaciones no gubernamentales que proponen acciones en función de contribuir con la mejora de la calidad de vida y desarrollo de los habitantes de la región. (Moreira & Ferreira, 2011).

La importancia económica del cultivo del sisal se empezó a desarrollar en los años '30. Con su cultivo y producción, la región sufrió una profunda transformación socioeconómica en el ámbito rural, dando un fuerte impulso a las economías locales y generando riqueza, lo que atrajo el asentamiento de poblaciones. Ello permitió recuperar económica y socialmente un territorio árido y vasto que vivía en la más extrema miseria y expulsaba a sus habitantes. Hacia 1938 y hasta 1969, este cultivo recibió un impulso estatal por sus condiciones para la inserción en el mercado mundial, y el sisal se extendió por todo el nordeste del estado de Bahía, y la región comenzó a llamarse sisalera. La exportación se consolidó en los años '40 generándose por primera vez en la región, una integración de los mercados locales con los internacionales. La inserción de procesos mecanizados de trituración gracias al impulso industrializador de la década del 60 y el alto precio del sisal en el mercado internacional llevaron a que sea considerado este cultivo como el “oro verde”. Esto no duró, y de 1975 en adelante, se redujo su producción a menos de la mitad, con la entrada en el mercado de sustitutos semisintéticos y sintéticos y la competencia del sisal africano. Ello generó una expulsión poblacional que tuvo que emigrar a los centros urbanos, llevando nuevamente a la población a la pobreza y la miseria. En este caso, la crisis internacional provocó efectos

negativos en la población vinculada al cultivo. Recién en 2002 re comenzó a generar una moderada recuperación del producto, en función de una renovación de la demanda por cuestiones ambientales, ya que el sisal es biodegradable, con un interés especial de China por adquirir esta materia prima, recuperando el sisal su vitalidad económica. (Macedo da Silva, 2016).

Como se puede apreciar, a la natural conflictividad de las zonas rurales brasileñas en las cuales se lucha por el acceso a la tierra y contra los grandes latifundios y sus abusos, cabe agregar factores macroeconómicos que influyen en las relaciones laborales generando vaivenes en los que el sector menos favorecido, se enfrenta a periodos de escasez y pobreza que precarizan aún más su situación. (Moreira & Ferreira, 2011).

Las áreas semiáridas del noreste de Brasil, han sido beneficiarias del crecimiento de la inversión pública, pero la sucesión de sequías que socavaron la producción tradicional de cultivos tanto de los latifundios como de la agricultura de subsistencia, ha llevado a una situación en Bahía Llamativa, que se describe como una “economía sin producción” (Gomes, 2002) que depende de la transferencia de ingresos públicos. Las transferencias federales han permitido que los pequeños productores y la economía local subsistan con cierto grado de estabilidad, al margen de la estrecha productividad. La transferencia de recursos se ha realizado a través de la creación de empleo público y del empleo estatal en servicios, lo que ha contribuido a sostener cierta estabilidad, y, paralelamente, a asegurar la perpetuación del poder político y los votos de la población local para quienes se presentan como sus beneficiarios de turno, y a sostener el dominio de familias dominantes con poder económico y político en los pequeños poblados. Las transferencias financieras federales a los gobiernos municipales, suelen ser superiores a los ingresos impositivos locales y al valor de la producción agrícola. (Quan, Ruiz Olalde, & Santos Rocha Sousa, 2011).

En Brasil se perpetúa hasta la actualidad el criterio latifundista, por el cual la propiedad de la tierra resiste un carácter especulativo y de concentración del poder en pocas manos. Algunos propietarios, al ser territorios, en el caso de

Bahía, semiáridos, detentan las tierras para obtener préstamos bancarios o simplemente para perpetuar la estructura desigual que ha caracterizado históricamente el espacio rural brasileño. Esto se da en todo Brasil, y no es diferente en el estado de Bahía, donde lo común es que existan grandes propiedades, de miles de hectáreas, y la concentración de grandes parcelas de tierra destinadas a la explotación de monocultivos de sisal. Estos latifundistas, no actúen como empresarios rurales, sino que han construido un espacio rural caracterizado por su escaso dinamismo y por el mantenimiento de una estructura organizativa orientada a la inmovilidad a fin de conservar las relaciones de poder. Estos espacios se caracterizan de esta manera no solo en el cultivo del sisal, sino también en las explotaciones de ganadería extensiva, que generalmente son improductivas pero se mantienen como un medio para sostener estáticas relaciones entre el propietario y los agentes del Estado y los trabajadores, estos últimos, que sin acceder a la propiedad de la tierra quedan reducidos a la posibilidad de ser usados como mano de obra barata de estas grandes propiedades. Algunos propietarios latifundistas adoptan una mentalidad empresarial, e invierten en grandes cultivos o empresas ganaderas, y buscan la expansión de la homogenización del espacio rural por la vía de la mantención de mecanismos que faciliten la reproducción de esquemas rígidos de uso del territorio. Ello le permite producir para un mercado mundial de productos agrícolas a través de la explotación del sisal, que es exportado en bruto o en forma de cordones, cuerdas, alfombras.

Con los grandes latifundistas, conviven los pequeños propietarios de la tierra, que se basan en un esquema de trabajo familiar que sirve para mantener las necesidades básicas de la familia. Generalmente una pequeña producción carece de recursos técnicos y su producción se vende de manera irregular a los mercados locales y regionales. Para sobrevivir, estos suelen cultivar maíz, frijoles, frutas y yuca y también criar cabras y ovejas y mantener un pequeño campo de sisal del que extraen la fibra una vez al año. Con ello se han creado pequeñas granjas en varias regiones del Estado de Bahía que producen frutas y verduras que se consumen en las ciudades cercanas. Estos productores pequeños suelen concurrir a ferias organizadas por los gobiernos locales y venden sus productos directamente al público de las grandes y medianas

ciudades. Para la producción, estos pequeños productores, suelen ayudarse entre familias en época de recolección, generándose un flujo de solidaridad en el ámbito rural interno que les permiten generar pequeñas acciones para tareas de recolección y comercialización de animales (cabras, pollos, ganado) generándose redes regionales de integración de las que no participan los grandes productores. Los pequeños productores, también se han organizado en asociaciones para exigir mejores precios por la venta del sisal, como, por ejemplo, la APAEB-Valente Asociación para el Desarrollo Sostenible y Estados Sisaleros de la región. Sin embargo, estas se ocupan de mejorar la competitividad de los establecimientos pequeños, pero no de las condiciones de trabajo de quienes desempeñan sus tareas en el campo de la fibra. (Moreira & Ferreira, 2011).

La fibra del sisal brasileña es un producto articulado con el mercado internacional ya que el estado de Bahía región nordeste cultiva casi el 50% de la producción mundial de esta fibra. Es un tipo de cultivo extensivo para el cual se utiliza, en Bahía, tecnología bastante rudimentaria. Se prepara el suelo y fertiliza de forma manual, se corta manualmente y se transporta por jumentos que permiten transportar unas 200 horas de sisal por viaje. A través de un proceso rudimentario y a la vez complejo, se tritura la hora de sisal con un raspador que permite procesar hasta 300 kg por día, con lo que se logra la etapa de fibra. Triturar entre 150 y 200 gramos de fibra seca lleva unas 10 horas de trabajo y requiere de unos ocho trabajadores, lo que permite apreciar que se trata de una industria que requiere de numerosa mano de obra. La fibra se transporta a unos tanques con agua para su limpieza, y luego de 8 a 12 horas de inmersión, se la seca en grandes tendedores unas 8 a 10 horas. Todo este trabajo es manual, y una vez finalizado, se continúa en las ciudades, el trabajo de sacudido, alisado, clasificación, etc. (Macedo da Silva, 2016).

La situación de los asalariados rurales, aparceros, arrendatarios, que no son dueños de los medios de producción, es muy diferente en esta región. Estos se encuentran obligados a ofrecer su trabajo en condiciones diferentes, algunas en las que el dueño de la tierra se apropia del excedente generado por el trabajo rural, lo que se encuentra dentro de los parámetros legales de trabajo,

basado en una relación de acuerdo verbal con el propietario. El aparcerero, se asocia con el propietario de la tierra, y realiza el trabajo a cambio de dar una participación al propietario de la producción. Otras veces, las relaciones se dan entre trabajador asalariado y productores. Este tipo de trabajo se realiza con una contratación oral, por la cual se convoca al trabajador desempleado a realizar tareas por uno o varios días en un establecimiento, a cambio de una suma preestablecida de dinero que este cobra una vez finalizada la tarea acordada. Una vez terminada la actividad el trabajador vuelve a su condición de desempleado y, obviamente, carece de tipo alguno de contraprestación social. (Moreira & Ferreira, 2011).

Las zonas Norte y Nordeste del país, concentran el 55% de los casos de trabajo forzoso identificados en 2014 y las actividades que lideran este tipo de casos son la agricultura y la ganadería, aunque también se ha observado en actividades no agrícolas, como en la explotación minera. Muchos de ellos son extranjeros o migrantes internos, y hay menores y mujeres, además de miembros de comunidades tradicionales indígenas. La dimensión de esta situación se comprende cuando se informa que muchos de estos trabajadores, se encuentran en situación similares a la esclavitud desde hace más de diez años (Canuto, da Silva Luz, & Rodrigues Costa, 2015).

Fueron detectados en Brasil, 4.339.053 establecimientos agropecuarios. De este total, el 75% fue considerado unidades familiares, distribuidas en las diversas regiones del país, ocurriendo que en la región Nordeste se concentra el mayor número de éstos, en total 2,3 millones de establecimientos, y 7 millones de personas, [...]El Nordeste posee 53% de los establecimientos familiares del país, con un 34,7% del área tot al de estos establecimientos. [...] La agricultura familiar ocupa al 59% del total de personas que trabajan en la agricultura en Brasil. Todavía, la cantidad de personas ocupadas en la agricultura familiar varía en cada región. Las regiones del país que concentran los mayores índices de personas ocupadas en esta actividad son: el Norte con el 75,6%; el Nordeste con el 67,6 % y el Sur con el 65,6%. En estas tres regiones se concentra el 85% de todas las familias agricultoras, alcanzando el

Nordeste el mayor número de personas ocupadas en la agricultura familiar, es decir, el 50,8% del total del país. (Vasconcelos, 2001, pág. 56).

La acción del Estado en la región de Bahía no ha creado infraestructura ni ha implementado políticas o programas que permitan mejorar la estructura de estas grandes zonas rurales en el Territorio de sisal. No se han ofrecido créditos subvencionados, ni políticas de vivienda, ni infraestructuras para riego ni programa alguno de diversificación productiva de la región. Tampoco ha intervenido significativamente de forma indirecta a través de sindicatos, asociaciones o instituciones educativas. Los programas que en las últimas décadas se pueden destacar, han sido el programa de incentivo para la cría de cabras, y el Programa Nacional de Fortalecimiento de la Agricultura Familiar (PRONAF) y Programa de Erradicación del Trabajo Infantil (PETI). Estos programas han adquirido relevancia al contribuir con la reducción de las desigualdades, pero no han logrado generar una reestructuración de los esquemas de relaciones y productivos del campo, que sigue sosteniéndose sobre la base de producción sisalera, ovina y caprina y con la agricultura de subsistencia de la mayoría de las pequeñas propiedades. En términos generales, el Estado ha favorecido con sus acciones y omisiones, la perpetuación de las grandes extensiones de explotación de escaso rendimiento. (Moreira & Ferreira, 2011).

En el territorio del Sisal existe una intensa labor sindical, en asociación con las cooperativas rurales y movimientos sociales civiles y religiosos. Esta asociación ha permitido para lograr visibilidad ante las autoridades estatales. Sin embargo, los trabajadores, los terratenientes y el Estado se encuentran muy enfrentados en función de sus intereses y el rol clave del Estado ha actuado sobre la organización de las zonas rurales generalmente a favor de los intereses de los latifundistas, aunque con matices dados por las ideologías y políticas establecidas por cada gobierno, lo que ha mermado la efectividad de las acciones orientadas a la mejora de la situación del trabajador rural, por su falta de continuidad. (Moreira & Ferreira, 2011).

De acuerdo con las observaciones de Inácio (2015), la intervención de los sindicatos ha tenido ciertos logros, como la equidad de remuneración para las mujeres que trabajan en el territorio del sisal, y la igualdad del salario entre trabajadores rurales y urbanos. Sin embargo, la cuestión laboral, de acuerdo con los datos recogidos, se encuentra lejos de ser aceptable. El territorio de sisal, se ha caracterizado históricamente por contar con una alta tasa de informalidad que gira en torno al 80% de la población económicamente activa, y cuenta con una alta tasa de desempleo de alrededor del 46% de la población en edad de trabajar. Esta región presenta una alta dificultad o resistencia para la generación de empleos formales y también una excesiva dependencia de los trabajos en la administración pública, especialmente en actividades relacionadas con el municipio. En la región sisalera, entre 1985 y 2009, la participación laboral en el sector de la administración pública pasó del 46% al 60%, alcanzando picos como en 1995, año en que la participación de la administración pública alcanzó increíble 68,3% del total del mercado formal. En cuanto a salarios, la situación no es alentadora, ya que el ingreso per cápita, el Territorio de sisal tiene uno de los peores salarios promedio del estado de Bahía. La tasa de desempleo es muy alta, con un 46% de la población en edad de trabajar sin ingresos, y alrededor del 39% de esta con solo un ingreso de salario mínimo o menos. Esto significa que 85% de la población en edad de trabajar vive sin ingresos o con bajos ingresos. Como se puede apreciar, el territorio de sisal ofrece un contexto laboral de gran inseguridad en los ingresos, alta incidencia de la pobreza y alta precariedad. La vulnerabilidad social y carencia de cobertura social de cualquier tipo es muy alta y la exclusión social y pobreza afectan a gran parte de la población de la región, con situaciones de desnutrición, carencia de viviendas, subempleo, desempleo, bajos ingresos, etc. La economía de la zona sisalera es aún rudimentaria y depende de las actividades de la administración pública, y no cuenta con los aportes del sector productivo. (Macedo da Silva, Desenvolvimento territorial: A experiência do Território do Sisal na Bahia, 2013).

De acuerdo con el Observatorio de Trabajo de Bahía, en el sector agrícola de este estado, entre los años 2000 y 2010, el empleo formal creció un 48.7% y el informal un 9%. Sin embargo, en 2010, los trabajadores no registrados

continúan representando un 50% del total. (Figueiredo, Mineiro, Santos, & Freitas, 2012) En Brasil, desde los años 90 se reconoce la existencia de mano de obra esclava, que se sostiene en el endeudamiento abusivo de los trabajadores y la presencia de vigilantes armados que impiden su huida. La Organización Internacional del Trabajo ha interpelado a Brasil sobre este tema, y desde 2000 se han procurado aplicar medidas severas en contra de estas prácticas.

Brasil adoptó en marzo de 2003, su Plan Nacional de Acción contra el Trabajo Esclavo basado en la siguiente estrategia: sensibilización a gran escala; coordinación de las actividades gubernamentales; promoción de una nueva legislación que imponga sanciones más severas a los infractores, incluida la confiscación de los bienes; liberación de muchas más personas víctimas del trabajo forzoso en zonas remotas gracias a unas unidades de policía móviles y a otros agentes encargados del cumplimiento de la legislación penal y laboral, y aumento progresivo del número de enjuiciamientos. (Theulé, 2000, pág. 12).

Sin embargo, en la práctica, no existen las fiscalizaciones, ni se da curso por la vía jurídica a los reclamos de los trabajadores, que muchas veces son enviados por los juzgados del trabajo directamente a volver a su estado de esclavitud, y la ineficacia de los mecanismos de control tanto estatal como sindicales generan el contexto ideal para que este tipo de situaciones prosperen en la práctica. (Vasconcelos, 2001); (Canuto, da Silva Luz, & Rodrigues Costa, 2015).

El sistema que se ha extendido en la región de Bahía es el de contratación de trabajadores migrantes, lo que de acuerdo con los estudios de Riella y Mascheroni (2015), ha sido utilizado sistemáticamente como una estratégica política de dominación. Este sistema de contratación y selección se lleva adelante mediante agentes llamados “turmeiros” que buscan trabajadores con buen nivel de productividad, obedientes y capaces de realizar un trabajo intensivo. La productividad media de los cultivos se ha logrado incrementar mediante un incremento en la explotación y degradación de las condiciones de

trabajo, y provocando un desgaste físico prematuro, enfermedades y abusos en los trabajadores. (Riella & Mascheroni, 2015).

Si bien entre los años 1994 y 2004 la renta creció un 54% en el territorio del Sisal y la expectativa de vida aumento 8 años. (Portilla Rodríguez, La cadena del Sisal: Motor de Desarrollo en el Estado de Bahía - Brasil, 2008) Ello no se ha traducido en mejoras para los asalariados y los trabajadores rurales sin tierra. Inácio (2015) reconoce que las leyes laborales de protección del trabajador rural no se respetan en la región sisalera de Bahía, y que la situación de los trabajadores resulta penosa en virtud de los peligros que implica el desarrollo de esta actividad sin recaudos ni asistencia médica. Los trabajadores se cortan con las máquinas, a veces pierden dedos, manos o brazos, lo que resulta inaceptable en un mundo tecnológico como el actual. Sin embargo, la región sisalera continúa con mínimos niveles de tecnificación y son los trabajadores los que resultan perjudicados por ello, ya que carecen de cobertura de salud alguna y simplemente son descartados sin más cuando no pueden continuar realizando su labor por haber perdido sus extremidades o por accidentes graves. En parte, el incumplimiento de las cuestiones de seguridad e higiene laboral, se debe a las contradicciones de la Norma Reguladora 31 que regula el uso de herramientas y equipos de protección individual. (EPI's) y a la falta de tareas de fiscalización de parte de los sindicatos. A ello se suma la falta de fiscalización de parte del Estado, que no se hace presente en estas zonas. Así, ni una entidad ni otra se ocupan de hacer cumplir de ley, y su observación depende de la buena voluntad de los empresarios, ya que no existen represalias por ignorarla. A ello se suma que cuando el Estado recibe quejas por la violación de derechos de los trabajadores rurales, realizadas muchas veces por los sindicatos, simplemente las ignora, o se retrasa en darle respuesta, o no pone en funcionamiento los mecanismos para hacer algo al respecto. Ello lleva a que se naturalice todo tipo de exceso, como la esclavitud.

En la región sisalera, continúa exponiendo Inácio (2015), es muy común que haya trabajadores sin registrar. La excusa de los empresarios es que no se pueden permitir el "lujo" de pagar lo que corresponde de aportes al trabajador porque no podrían sobrevivir ya que consideran que el gobierno cobra

impuestos excesivos. Por lo que Portilla Rodríguez (2008) señala en cuanto al crecimiento de la renta en el territorio del sisal, dicha justificación carece de sustento en términos reales. Inácio (2015) considera al respecto que hace falta una labor de concientización a partir de políticas públicas que permita cambiar ese sentimiento de los empresarios.

Las mujeres en el trabajo del sisal reciben una paga menor a la de los hombres, y deben realizar actividades agresivas y sacrificadas. Como no tienen quién les cuide los niños, se los llevan a cargar la paja y los niños terminan abandonando la escuela. (Correa, 2014).

Los Estados de Bahía y Paraíba presentan una escena igualmente injusta e inhumana; 9.000 niños trabajaban en el corte y procesamiento de la caña y del sisal. El día 30 de agosto de 1995, la revista VEJA publicó una nota sobre un niño de 11 años que trabajaba desde los 5 en una fábrica de procesamiento del sisal. Su actividad consistía en cargar sobre sus tiernas espaldas las hojas puntiagudas desde el local donde eran cortadas hasta la máquina que las molía. La distancia entre el local del corte de las hojas y la máquina se acercaba a los 100 metros. Él recorría este trayecto durante 12 horas cada día, transportando, en total, una tonelada de hojas de sisal (CPT, 1995). (Vasconcelos, 2001, pág. 27).

La realidad que se observa en el territorio sisalero como una constante, es la de un sistema de producción apoyado en el aprovechamiento de condiciones inhumanas de trabajo, en un contexto en el que la ley simplemente no se observa ya que no existe fiscalización efectiva ni del ámbito estatal ni del sindical, por lo que los maltratos físicos y psicológicos, los salarios insuficientes e injustos, la explotación en cuanto a la jornada diaria de trabajo, el trabajo infantil, la falta de asistencia social y la esclavitud, son parte de la cotidianeidad para el trabajador bahiano. La falta de seguridad social es uno de los aspectos más visibles de la crueldad que todo ello implica:

Hay otro elemento digno de mención: es la falta de seguridad, ocasionando accidentes terribles que mutilan a los niños y los adultos. Es

común encontrar niños sin manos y sin brazos, cortados por las máquinas de procesamiento de sisal y de caña de azúcar. Los accidentes también ocurren con los propios instrumentos de trabajo que los niños no dominan por su poca edad y por las hojas cortantes y puntiagudas de la caña y del sisal cuando realizan el corte y las transportan en sus espaldas. (Vasconcelos, 2001, pág. 28).

Esta situación resulta dramática, y las denuncias que distintos organismos realizan ante los poderes públicos para sensibilizarlos acerca de esta problemática, solo ha logrado pronunciamientos declarativos en discursos públicos que reconocen la problemática, pero sin acciones concretas para hacer algo al respecto. Si bien se ha creado en 1995 una comisión de trabajo con poderes especiales llamada Grupo Ejecutivo de Represión al Trabajo Forzado (GERTRAF), dependiente del poder ejecutivo para ocuparse de estas cuestiones y aplicar las penalizaciones correspondientes, el poder local de los grupos oligárquicos es tal, que impide que estas fuerzas realicen su labor, ya sea colocando ellos los delegados regionales, que responden a facciones políticas regionales y se ocupan, en lugar de fiscalizar y denunciar estas mutilaciones y abusos, de proteger a los grandes productores para que las denuncias por condiciones inhumanas de trabajo o esclavitud, no prosperen. Esta corrupción alcanza también a los fiscales que llegan a la región a visitar los centros de producción, y no informan las irregularidades detectadas, por más aberrantes que sean.

El grupo creado por el Presidente de la República, el GERTRAF, tiene amplios poderes para accionar, pero las denuncias de trabajo en régimen de esclavitud no salen de los despachos de los delegados regionales. Si la denuncia llega directamente al GERTRAF, en Brasilia, el grupo inmediatamente toma las medidas enviando a la propiedad denunciada un equipo multidisciplinario compuesto por representantes de varios organismos federales. Ahí el grupo investiga, y si es comprobada la denuncia, libera a los empleados, procesa al propietario o lo advierte, exigiendo el cumplimiento de las normas legales; realiza un trabajo educativo (op. cit.). Desgraciadamente la actuación del GERTRAF es limitada debido a que la

máquina administrativa del Estado está montada sobre una estructura en la que prevalecen los intereses patrimoniales de las oligarquías regionales. Para que el trabajo en condiciones de esclavitud sea extinguido en el campo, es necesario una acción conjunta del Gobierno y de la sociedad civil como un todo; incluso para disolver los grupos oligárquicos que detentan el poder en su propio beneficio dejando a la gran mayoría de la población sin tener la posibilidad de hacer uso de sus derechos de ciudadanos. (Vasconcelos, 2001, pág. 28).

Es así que el poder de los grandes señores latifundistas, se impone por sobre cualquier intento de penetrar en el territorio del sisal para hacer cumplir la ley laboral, por lo que solo quedan los movimientos sociales locales como mecanismo de resistencia, ante un mecanismo que ni toda la fuerza del estado federal puede o quiere enfrentar. Así, la falta de seguridad laboral, la explotación extrema de la mano de obra, los sueldos exiguos o la inexistencia de éstos y el imperio de la esclavitud, pasan a ser el la base del modelo productivo de las grandes empresas latifundistas del territorio del sisal. (Vasconcelos, 2001).

3. Factores que propician la informalidad del sector

Estos factores propician la informalidad en el sector rural en estudio. Cabe mencionar que existen factores históricos e ideológicos que han reafirmado un esquema de bases latifundistas que justifica todo tipo de atropellos contra la población rural, naturalizando el abuso y la expropiación de la tierra. Ante ello, se ha erigido un debate muy polarizado tanto en el ámbito académico como en el político e ideológico. Durante el periodo de dictadura cívico militar en Brasil, que transcurrió entre 1964 y 1985, se produjo un brote de desarrollo capitalista de las fuerzas productivas en el campo, con un carácter esencialmente colonial, que ha dado lugar al proceso de expropiación más intenso en toda la formación territorial del país. A partir de 1970, se ha generado con ello una disminución de la población rural en términos absolutos que se completó en menos de una generación, cuando en países industrializados de Europa fue un proceso que tardó más de un siglo en producirse.

Gráfico: 20 “Evolución de la población Rural brasileña 1950 -201 0” Fuente: (Canuto, da Silva Luz, & Rodrigues Costa, 2015, pág. 139)

Ese proceso fue dirigido por una coalición de clases que conformó un bloque de poder que actuó consecuente con el capital extranjero de multinacionales como Monsanto, Cargill, Syngenta y Bunge, y el capital del país, como Embrapa o Brasil Bank, en conjunto con las oligarquías terratenientes tradicionales y con vínculos estrechos con los medios de comunicación. Esta coalición de poderes perpetuó mecanismos similares a las concesiones de tierra de la época colonial. (Canuto, da Silva Luz, & Rodrigues Costa, 2015) Entre los actores claves que operan en las zonas rurales del Territorio de sisal en el Estado de Bahía y que caracterizaron las principales formas de acción, se destacan los siguientes:

1. Los propietarios de tierras: terratenientes y los pequeños agricultores;
 2. asalariados rurales, socios, arrendatarios y aparceros;
 3. Los empresarios rurales;
 4. Los movimientos sociales de lucha por la tierra;
 5. Estado; y
 6. Las organizaciones civiles: asociaciones, cooperativas y sindicatos.
- (Moreira Santos & Araujo da Silva, 2010)

El problema que ha llevado al fracaso a el intento brasileño de crear estándares mínimos de condiciones laborales a través de acuerdos multilaterales, ha sido la formulación de una sindicalización controlada y direccionada a actividades

asistencialistas y apolíticas y la ausencia de representación sindical dentro de los lugares de trabajo, entre otros factores que han llevado a un sindicalismo de tipo corporativista estatal en el que se obliga a la unicidad sindical de organismos financiados por el Estado mediante impuesto sindical. A pesar de que desde los años ochenta la asociación sindical creció casi un 50% y se crearon más de 980 sindicatos rurales y urbanos, la falta de una necesaria reforma sindical ha impedido que estos logren alcanzar capacidad política real de instalar mejores prácticas laborales en el país. La reacción a la apertura de los años ochenta, tuvo su contra reacción en la década siguiente, en la que se dio un periodo de fragmentación, debilitación y moderación de los sindicatos, y se implementaron reformas neoliberales que propiciaron una mayor flexibilización y deterioro de la calidad laboral. Rápidamente descendió el número de trabajadores afiliados y con ello la capacidad de los sindicatos de utilizar su poder político en beneficio de los trabajadores en las negociaciones colectivas. Entre 2004 y 2008 se logró bajar un poco el empleo informal (del 16.7 al 15.9) pero no se eliminaron los controles estatales sobre la actividad sindical, por lo que no se logró una mejora significativa en materia laboral rural durante esos años ni hasta la actualidad. (Silverman, 2015).

Los procesos de diálogo social pueden fracasar cuando los siguientes factores se manifiestan: la predominancia de intereses particulares y la falta de voluntad de implementar reformas más amplias; la falta de concordancia sobre las prescripciones económicas para ser aplicadas; y la falta de legitimidad democrática tanto del proceso como de los actores sociales que participen en el dialogo. En el caso de los acuerdos estudiados, vemos que la predominancia de intereses de menor ámbito tendía a prevalecer entre los grupos que participaron, en el caso de los empresarios y trabajadores, debido a su representación pulverizada, y en el caso del gobierno, debido a la prevalencia de prácticas políticas “pemedebistas”. Y con respecto a la legitimidad democrática de los procesos de diálogo y los participantes, aunque hubo un alto nivel de transparencia en la conducción de los diálogos, con un importante esfuerzo comunicativo hecho por la Secretaria General de la Presidencia de Brasil, se puede cuestionar la exclusión de representantes de

trabajadores informales y migrantes empleados en estos dos sectores, que son socialmente y laboralmente mucho más vulnerables que sus pares con contratos formales y plenos derechos de ciudadanía. (Silverman, 2015, pág. 51).

Si bien en años más recientes se ha consolidado una política nacional de erradicación de trabajo forzoso, en la práctica, los controles efectivos resultan mínimos, el entorno político niega la problemática y se ha producido un retroceso en la lucha contra el trabajo esclavo. La falta de recursos y de priorización para el grupo nacional de vigilancia móvil es un reclamo constante de dicha entidad, y el número de inspectores de trabajo se ha reducido a una etapa crítica, llegándose a principios de 2015 a contar con el número de inspectores de trabajo más bajo en la historia del país, desde 1996. A principios de 2015, algunas unidades regionales del Ministerio de Trabajo, incluso consideran inviable actuar en el seguimiento de los casos de trabajo esclavo con eficacia tan pequeña. La COETRAE (Comisión Estatal para la Erradicación del Trabajo Esclavo) ha denunciado que la Superintendencia Regional de Trabajo y Empleo (SRTE), solo ha previsto un número insignificante de fiscales disponibles para ir al campo. Tan solo siete fiscales se han previsto para la vasta función de supervisión del trabajo esclavo en algunos estados en 2015. (Canuto, da Silva Luz, & Rodrigues Costa, 2015).

Se ha producido en los últimos años una asfixia gradual de los mecanismos de inspección, la revisión desregulatoria y a la baja de la definición legal del trabajo análogo a la condición de esclavitud, y se ha provocado la extinción de la Lista Sucia o lista negra por la cual se ponía en evidencia a las explotaciones que incurrían en este tipo de prácticas. Tras 20 años de labor, el Grupo de Inspección Móvil, en 2015, se ha encontrado con este cambio dramático. Se ha abandonado todo intento de fortalecimiento de la política nacional de lucha contra el trabajo esclavo. (Canuto, da Silva Luz, & Rodrigues Costa, 2015).

Este nivel de desamparo resulta de una gravedad inusitada. Lo que se observa en los autores y cifras mencionados, es simplemente, que no existe eficacia normativa en materia de derechos laborales en Brasil, y que esta ineficacia es

absoluta. En la práctica, los juicios contra quienes esclavizan mano de obra no prosperan, a pesar de que las pruebas hayan sido contundentes o producto de inspecciones del Ministerio de Trabajo y Empleo, y muchas veces, la justicia decide regresar a los trabajadores esclavizados a sus lugares de explotación, exponiéndolos a todo tipo de represalias y violencias. La justicia federal desde los tribunales del Nordeste de Brasil y de otras regiones, ha fallado sistemáticamente contra los trabajadores, bajo argumentos absurdos y contrarios a toda lógica. (Canuto, da Silva Luz, & Rodrigues Costa, 2015).

Los esfuerzos de entidades civiles para mejorar la vida de los productores de la región sisalera, han informado significativos éxitos, pero ello no ha logrado excluir de la pobreza a sus trabajadores y aún a los pequeños productores familiares. Tampoco se han logrado políticas económicas que permitan sobrevivir ante el dinamismo económico variable de una materia prima exportable expuesta a los vaivenes del mercado internacional. Las políticas de desarrollo territorial impulsadas por el Gobierno de Bahía así como del Gobierno Federal, a pesar de ser validadas por organismos multilaterales, académicos, políticos y activistas de movimientos sociales y organizaciones no gubernamentales como alternativas válidas y eficaces para la promoción del desarrollo social y económico, luego de más de una década de implementación de programas de desarrollo territorial, la realidad económica del Territorio del sisal ha cambiado muy poco, persistiendo las mismas problemáticas de siempre. A pesar de la fuerte presencia de actores sociales e institucionales, el territorio del sisal continúa presentando algunos de los peores indicadores económicos y sociales de Brasil. Las acciones de gobierno federal se han orientado a la inclusión social, la expansión del consumo masivo. En 2008 se realiza un reconocimiento de la planificación territorial, y el Gobierno de Bahía, en concordancia con el Gobierno Federal, estableció distintos territorios para facilitar su administración. Se crearon organismos para el fortalecimiento de la agricultura familiar y para la creación de infraestructura y servicios en el ámbito rural, pero la falta de articulación de las acciones ministeriales resultó en la creación de obstáculos que impidieron realizar dicha labor de manera coordinada y ordenada. (Macedo da Silva, Desenvolvimento territorial: A experiência do Território do Sisal na Bahia, 2013).

Los esfuerzos de reactivación productiva y económica de la región llevados adelante por cooperativas, asociaciones y sindicatos, se han orientado tanto a la organización de los trabajadores y productores, como al desarrollo social y comunitario. La desvinculación de estas asociaciones del poder político ha permitido deslindarse de vicios municipalistas y han permitido el éxito de múltiples acciones que van desde la asistencia legal y sanitaria hasta la facilitación de créditos y recursos técnicos. Sin embargo, los esfuerzos aislados de la comunidad local no bastan para transformar un territorio que requiere de profundas mejoras estructurales para poner fin a la pobreza y la sujeción de los ingresos a la situación macroeconómica internacional. Las experiencias exitosas han suscitado gran reconocimiento, pero la ausencia de mediaciones entre lo local y lo global, y una aproximación demasiado local sin perspectiva regional e internacional, han impedido una transformación suficiente como para revertir la situación del territorio. La injerencia estatal que entorpecía la labor sindical llevó a que se procurara aislarse de las instituciones gubernamentales para concretar logros sin trabas burocráticas innecesarias, lo que dio lugar a un gran éxito de las medidas implementadas para establecer redes entre los pequeños productores, fomentar el cooperativismo y demás, pero a su vez, llevó a que se diseñen estrategias locales descontextualizadas y desarticuladas de una visión regional y nacional económica, productiva y social, limitando a acciones sin mayor trascendencia en el ámbito estructural de las relaciones productivas y laborales del territorio sisalero, que no han logrado erradicar las problemáticas que más deterioran la calidad de vida de los trabajadores y pequeños productores, ni la estructura que sustenta este tipo de situaciones adversas para un sector de la población reducido a una porción mínima de la tierra o carente de acceso a ella en absoluto. Las propuestas y programas estatales, a su vez, no se han convertido en inversión pública en la zona minimizando, limitando y cercenando el alcance del éxito de las políticas llevadas adelante por la sociedad civil en su proyecto colectivo. El fuerte capital social del territorio de sisal no ha bastado para provocar un círculo virtuoso de desarrollo y el alcance de sus éxitos ha sido pequeño y muchas veces efímero. Ello no ha bastado para fortalecer la economía ni de transformar la realidad productiva y social de la zona. Los beneficios de las acciones civiles se han

limitado a algunas clases sociales, concretamente a los pequeños productores, y no han alcanzado al trabajador asalariado o carente de acceso a la tierra. Muchas de estas asociaciones y cooperativas funcionan con fondos de recursos destinados a través de los programas de gobierno, por lo que su dependencia económica de los municipios continúa siendo amplia. Una cadena productiva con altos costos, bajo nivel de productividad e ingresos, con un nivel tecnológico muy básico, dificulta cualquier intento de transformación si no se aborda de manera integral. (Macedo da Silva, Desenvolvimento territorial: A experiência do Território do Sisal na Bahia, 2013).

La labor de los sindicatos, en las apreciaciones de Riella y Mascheroni 2015, no ha sido visible en muchas de las luchas de los trabajadores por la mejora de sus condiciones laborales. De las huelgas estudiadas por estos autores en 2008, ninguna fue organizada por los sindicatos, sino que surgieron por la insatisfacción de los trabajadores por cuestiones salariales, o por quejas sobre las condiciones de alojamientos y otros excesos. Pero estas acciones colectivas autónomas y espontáneas de los trabajadores, no se encontraban acompañadas por una representación política de los sindicatos.

Esto conlleva algunos problemas, ya que estas huelgas, precisamente por ser espontáneas y carecer del respaldo y acompañamiento de los sindicatos, carecen de toda organización y liderazgo. Ello dificulta la realización de negociaciones y la elección de voceros y representantes de parte del sector de los trabajadores, limitando las posibilidades de llegar a un acuerdo beneficioso para el sector. (Riella & Mascheroni, 2015).

A su vez, en la experiencia del sindicalista Inácio (2015), existe un enfrentamiento entre el Sindicato y el Ministerio Público del Trabajo. Por ley, la función de fiscalización es del ámbito exclusivo del Ministerio Público del Trabajo, y a su vez, este carece de autoridad suficiente para hacer las tareas que demanda la fiscalización en el campo. En función de ello, los sindicatos, que carecen de jurisdicción para fiscalizar, se ven obligados a jugar un papel que le corresponde al Estado y que les está vedado. Ello deriva en luchas constantes entre los sindicatos y el Ministerio, quedando en el medio,

desprotegido, el trabajador rural. No se cuenta, en la región del sisal, con una labor armoniosa, articulada o conjunta de los órganos del Estado para combatir las injusticias existentes. El Estado no ejerce su función con eficacia, pero se niega a brindar competencia para a la fiscalización a los sindicatos. No resulta sorprendente, entonces, que en la región sisalera sea normal el trabajo esclavo y se concluye que la persistencia de la explotación de los trabajadores es producto de una falta de voluntad estatal.

La concentración de la tierra y de la pequeña propiedad, la fragmentación y desarticulación económica y social entre los municipios, el clientelismo político son marcas presentes en este sector, junto con la ineficacia de las políticas públicas. Ante ello, la participación de la sociedad civil, a pesar de haber sido un logro gradual en los últimos años, sigue siendo frágil e insuficiente. La participación social en Bahía procura desarrollar la integración de los actores sociales en la gestión política democrática, orientada a la creación de una gama de participación colectiva para el logro de la gestión social. Sin embargo ello es solo un paso de un largo camino a recorrer. La falta de coordinación entre las áreas implicadas impide el avance integral hacia soluciones estructurales. Las asociaciones y cooperativas, los consejos municipales y los organismos federales, deben analizar la situación trascendiendo los aspectos aislados que se contemplan en la actualidad. Solo abordando de manera integral cuestiones económicas, financieras, sociales, culturales, de salud, educativas, etc., es posible mejorar las posibilidades de los individuos y permitirles la autonomía de toma de decisiones, como ciudadanos. Sin embargo, generalmente, las políticas públicas sectoriales, son cooptadas por los grandes propietarios y comerciantes que se confunden e integran con la dirección política, en una búsqueda perpetuas de alternativas endógenas para la supervivencia y la reproducción social de esquemas productivos y sociales que no se desea modificar. (Brito Oliveira, 2015).

La situación de los sindicatos en Brasil, ha seguido un derrotero de largos años de debilitamiento. Considerando que en los años 90 se llegó en Brasil a tener un porcentaje del 70% de trabajadores no registrados, el nivel de afiliación a los sindicatos era mínimo. Hacia 2006 solo un 21% de la población ocupada se

encontraba afiliada a algún sindicato, y solo un 18.1% lo estaba en 2012. La cooptación de los sindicatos por parte del Partido de los Trabajadores gobernante, ha llevado a una crisis más cualitativa que cuantitativa y en 2014 se profundiza el debilitamiento de las organizaciones sindicales aún más. Por otro lado, el nuevo sindicalismo posterior a la crisis pos neoliberal, no fue capaz de superar las limitaciones impuestas por el nuevo mundo del trabajo ni de reducir las desigualdades sociales que ello había generado. (Ramalho Martins & Lima, 2016).

La región del Noreste se caracteriza por la carencia de infraestructuras y tecnologías que los campesinos puedan utilizar para mejorar su calidad de vida o incrementar su productividad. Considerando que la mitad de la clase campesina de Brasil reside en la región sisalera, se está hablando de un país cuya vida rural se define por su extrema pobreza y su subsistencia a través de programas paliativos de gobierno, como la bolsa familia, que el 88% de las pequeñas explotaciones utilizan para comer, y que ocupan el 60% de la región. Muchas veces estas ayudas no son suficientes, y parte de la población rural se ve obligada a migrar estacionalmente a regiones concentradas de explotación para conseguir el sustento para sobrevivir, y se ocupan en tareas en la cosecha de caña de azúcar, naranja o café. En estas condiciones, precarias y carentes, los agricultores del Noreste se las arreglan para producir el 82% de la mandioca de la región, el 79% de las legumbres, el 70% del arroz y el 65% del maíz que se consume en la región. Pobres, mal equipados, con pocos recursos, escasa tierra y sin tecnologías, estos campesinos garantizan la seguridad alimentaria del país. A cambio reciben más pobreza, menos derechos y total ausencia del Estado en materia de infraestructura, salud y demás cuestiones elementales para la subsistencia ya no digna, solo subsistencia. Este sistema es alimentado por un sistema de caciques políticos que mantienen el dominio de las élites latifundistas en la región. Como si esto no fuera suficiente, a la problemática se suman expropiaciones de la tierra a pequeños campesinos, bajo el atropello de las grandes plantaciones de soja que no se limitan en su necesidad de expansión ante la propiedad ajena. El acaparamiento de tierras de parte de empresas extranjeras, ha generado una nueva problemática de la tierra en la región, y los monocultivos subordinan y

margina a los campesinos y pueblos indígenas en defensa de “los intereses de la agroindustria” (Mançano Fernandes, Welch, & Gonçalves, 2012).

CAPÍTULO V

1. Diagnóstico

2. Eficacia del derecho laboral en Argentina y Brasil para trabajadores en tareas agrícolas no registrados. El rol de las instituciones.

Sobre la base de los datos expuestos en los capítulos anteriores, se procura sintetizar y organizar la información a fin de establecer comparaciones que permitan aproximar los elementos para la elaboración de las conclusiones.

El incumplimiento de la normativa laboral tanto en Argentina como Brasil en el ámbito rural es alto. Si se toma como indicador el índice de trabajo no registrado, lo que se observa es un nivel que si bien oscila, tiende a ser extremadamente alto. En el caso de Argentina, ha tenido periodos en los que esta tendencia se ha logrado revertir, en especial en la zona pampeana bonaerense, donde hay mayores controles que en el resto del país, pero en el caso de Brasil, la falta de controles y la violación a los derechos del trabajador es sistemática.

Gráfico: 21 “Tasa de informalidad rural Argentina - Brasil” Elaboración Propia

Tanto Argentina como Brasil carecen de registros oficiales claros respecto del empleo informal y son entidades internacionales o asociaciones civiles independientes las que elaboran las estadísticas que permiten obtener información sobre la situación del trabajador rural no registrado. En Argentina se estima que entre un 50 y un 75% de los trabajadores rurales no se encuentra registrado, porcentaje que varía a lo largo de los años pero que se mantiene dentro de ese rango aproximado. El salario del trabajador registrado por igual labor, es mayor al 50% del salario de un trabajador rural “en negro” y en algunos casos de más del 60%, generando profundas diferencias de ingresos entre uno y otro colectivo laboral. (Vasconcelos, 2001).

En Brasil, la zona Bahiana tiene otras características. Se ha mencionado que allí el 60 o 70%, según los años, de la fuerza laboral se emplea en trabajos administrativos estatales municipales o de servicios, por lo que no es el empleo rural la principal fuente de ingresos de sus pobladores. Un 46% de la población de esta región es desempleada y un 80% de trabajadores rurales lo hacen en condiciones de explotación y bajo regímenes de contratación irregulares, o directamente en forma de esclavitud. Resulta alarmante concluir que un 85%

de la población de esta zona vive con bajos ingresos o directamente sin ellos. (Macedo da Silva, Desenvolvimento territorial: A experiência do Território do Sisal na Bahia, 2013).

3. Variables que inciden en los altos índices de empleo no registrado en las zonas estudiadas. Cómo afectan el contexto, en distintas dimensiones observables.

A fin de continuar con las comparaciones entre las dos regiones que se han elegido para cotejar en Argentina y Brasil, se toman en cuenta una serie de dimensiones que permiten ordenar la información obtenida bajo diferentes criterios a fin de establecer similitudes y diferencias que aporten mayor claridad acerca de los factores que influyen en la eficacia de la norma laboral en ambas regiones. Estas dimensiones de los aspectos contextuales generales a evaluar son:

Gráfico: 22 "Dimensiones" Elaboración Propia

La agricultura argentina se caracteriza por estar desarrollada principalmente por grandes empresas que generan gran parte de las exportaciones del país, que se concentran en productos como el trigo, el maíz, el sorgo, la soja y el girasol, comprendiendo estos el 70% de las exportaciones agrícolas y concentrándose su producción en la región pampeana húmeda, gran parte de ella ocupando casi todo el territorio bonaerense. Dentro de la región pampeana bonaerense existen zonas agrícolas que se dedican al abastecimiento de las ciudades circundantes o del interior del país, y que se diferencian mucho de las

modalidades productivas de las plantaciones extensivas. Estas se encuentran en zonas periurbanas o concentradas en el noreste de la provincia y consisten en pequeños predios frutihortícolas con baja productividad. A diferencia de las zonas agrícolas del resto del país, con problemas de baja productividad, economías de escala minifundistas mientras que la región pampeana sostiene tipos de producción más rentables y tecnificados y predomina la agricultura empresarial orientada a la exportación. Su rentabilidad depende de las variables intervinientes en costos de producción (valor del dólar, inflación, precio de insumos) y precio de colocación del producto en el mercado internacional. Cuando estos factores se combinan en un escenario desfavorable, se produce un proceso de concentración de la actividad y se afecta principalmente a los medianos y pequeños agricultores, lo que retrasa el vuelco de inversión en renovación tecnológica. (Escalante & Rodríguez, 1996).

La estructura de la agricultura brasileña, en cambio, se caracteriza por sus grandes contrastes, producto de una alta concentración de la tierra en pocas manos. Las hectáreas, los créditos, la mecanización y la producción de bienes rentables agroexportables, se concentran en la oligarquía rural brasileña. La falta de tecnificación es uno de los principales obstáculos a nivel productivo, y mediante apoyos gubernamentales se ha logrado modernizar la agricultura empresarial. (Escalante & Rodríguez, 1996).

Atendiendo a las dimensiones mencionadas, se observa a continuación, la comparación de algunos aspectos que diferencian las dinámicas de la región sisalera y la región pampeana bonaerense, a fin de comprender la suma de variables que inciden en los resultados observados de alta irregularidad laboral y baja efectividad de la normativa laboral.

Gráfico: 23 "Región Pampeana bonaerense - Tierra del Sisal. Comparativa" Fuente: Elaboración Propia

Como se puede apreciar, las situaciones de una y otra región presentan diferencias sustantivas, siendo la región pampeana bonaerense la más favorecida por el contexto en materia de disponibilidad de recursos, ya que la producción de esta zona es altamente rentable. Sin embargo, ha alcanzado niveles de trabajo no registrados similares al de su par brasileña.

En Argentina, la alta tecnificación ha desplazado la mano de obra permanente, dando lugar a la predominancia de modalidades de contratación temporal, lo que ha precarizado la labor rural a nivel estructural por cuestiones de dinámica del mercado, principalmente. Otro factor a considerar, es el cambio organizacional de las empresas agroexportadoras argentinas del sector, que utilizan como variable de ajuste para reducir gastos, la contratación de empleados, reemplazando las modalidades de contratación estables por la eventualización de la contratación de los jornales, preferentemente tercerizada.

En Brasil, lo que se observa, es el uso de la explotación del trabajador directamente como base de la modalidad productiva, absorbiendo éste los mayores costos, permitiendo que los grandes latifundios rechacen la tecnificación en función del beneficio que les brinda mantener a la clase trabajadora rural en un estado de mínima supervivencia, con una finalidad orientada más a retener una estructura de poder concentrado, que un beneficio económico-productivo, que se mantiene bajo con una falta de inversión deliberada en tecnología e infraestructura. Indistintamente de los motivos, el efecto es igualmente negativo, aunque en Brasil haya adquirido niveles de violencia más extremos, como la esclavitud, la mutilación de niños trabajadores y la expropiación de tierras.

En estos factores se encuentran las causas que generan la aceptación de la clase trabajadora rural de las condiciones a las que se los somete, por falta de oportunidades alternativas.

Cabe, entonces, observar, cuáles son los factores que permiten que esa informalidad se perpetúe en el tiempo y cuál es el rol del Estado y las instituciones en este contexto, ante su deber de hacer cumplir los derechos

fundamentales de los trabajadores, tal como las Cartas Magnas de ambos países proclaman.

4. Causas que contribuyen a la ineficacia en la protección de los derechos legalmente vigentes del trabajador rural en Argentina y Brasil.

Al igual que con los puntos mencionados, dado que estos aspectos se han ido desgranando en los capítulos anteriores, se realiza a continuación una síntesis gráfica que permita realizar una evaluación integral de la situación descrita en cada una de las dos regiones estudiadas.

Gráfico: 24 "Causas de ineficacia de la protección de los derechos legalmente vigentes del trabajador rural en Argentina y Brasil" Fuente: Elaboración Propia

En el centro del gráfico se pueden apreciar factores comunes a ambas regiones y países, que dan muestra fundamentalmente de ineficiencias en los mecanismos de fiscalización, intervención estatal en detrimento del poder sindical y una normativa que no contempla las particularidades de cada sector de la vida rural en el ámbito productivo y laboral, en países con un vasto territorio, variado y con múltiples realidades complejas que requieren de respuestas normativas adecuadas. En Argentina, el acento se encuentra en la fragmentación y desregulación normativa, mientras que en Brasil, si bien no está exento de la desregulación, la problemática más grave se concentra en la imposibilidad, ineficacia o desinterés del Estado en contrarrestar el poder casi absoluto de las hegemonías locales latifundistas que dominan todos los aspectos de la vida rural en todos los ámbitos: productivo, económico, político, laboral y social.

Considerando estas diferenciaciones, cabe volver sobre las estrategias que sí han dado resultados positivos en uno y otro país, a fin de capitalizar la experiencia de ambos países en pos de una propuesta superadora que ofrezca soluciones posibles a ambos, conforme a sus particularidades.

5. El rol de los Tribunales laborales en la defensa de los intereses del trabajador rural

En los últimos dos informes disponibles de la Comissão Pastoral da Terra sobre los conflictos del trabajador rural, se da cuenta de una situación abiertamente injusta a la que dan lugar los Tribunales del Trabajo en Brasil. La conclusión de estos estudios es que “el incumplimiento de las leyes laborales es normal, natural y no configura un crimen pasible de condena en Brasil” (Canuto, da Silva Luz, & Rodrigues Costa, 2015, pág. 139).

En el informe de 2015, se describe la desgarradora situación de familias de trabajadores, que tras la apropiación de sus tierras por parte de un grupo de empresarios, fueron sometidos a trabajo esclavo. Luego de que los empresarios del Fernando y Marcos Vieira del Engenho Contra-Açude hayan recibido en primera instancia, por el Tribunal Federal de Pernambuco, en 2010

una condena de siete años y once meses de cárcel por la práctica del trabajo esclavo en el ingenio donde 101 trabajadores vivían en condiciones análogas a la esclavitud. La situación fue detectada por una inspección del Ministerio del Trabajo y Empleo a través del grupo especial de vigilancia móvil. Dos años más tarde, el caso va a juicio a la Corte Federal para decidir sobre la apelación interpuesta por los empresarios.

La defensa de los acusados, precaria e incluso absurda, argumenta a favor de los empresarios que el incumplimiento de la legislación laboral es normal, natural y no establece una infracción sancionada con pena en Brasil. A pesar de que parezca imposible que en el ámbito jurídico estos argumentos sean tomados como válidos, dos de los tres jueces que componen la Segunda Sala de la Corte, el magistrado ponente del caso, el Dr. Vladimir Souza Carvalho, en su voto, también considera normal y natural el incumplimiento sistemático de las condiciones de la legislación laboral en un contexto de violaciones habituales de los derechos en la zona rural del nordeste, especialmente en la industria azucarera. De esta manera, el tribunal legitima la violencia, el sufrimiento, la agresión y la explotación, colocándolo en el plano de lo natural y normal. Los trabajadores, amenazados por haber denunciado, tuvieron que volver a su situación de esclavitud, tras lo cual sufrieron actos de violencia a modo de persecución, intimidación, amenazas de muerte, envenenamiento de agua, destrucción de plantaciones, violencia contra las mujeres y maltrato contra los animales. Todo ello, avalado por el Tribunal Regional Federal, que no solo considera que el incumplimiento de las leyes fundamentales es normal, sino que es natural. (Canuto, da Silva Luz, & Rodrigues Costa, 2015).

El siguiente informe, da cuenta de que “ La terrible sombra de la impunidad persiste ” (Canuto, da Silva, Luz, & Pinto Andrade, 2016, pág. 150) Los autores observan que la violencia campesina constituye un elemento estructurante del proceso de formación territorial de Brasil. En 2015, la violencia contra sectores de la resistencia rural de parte de la agroindustria, ha sido la responsable del mayor número de asesinatos en zona rural desde 2004. La situación, lejos de entrar en los carriles de la mediación civilizada, se ha encarnizado en todo el territorio nacional, especialmente en el Norte y Nordeste de Brasil, donde se

concentra la mayor cantidad de casos de violencia contra hombres y mujeres en el campo. El 90% de las muertes ocurridas en 2015, se localizan en esta región. La impunidad y la injusticia son los factores claves que propician y sostienen esta situación en la que la tortura seguida de muerte y la masacre de campesinos e indígenas es una realidad frecuente y naturalizada.

La Comissão Pastoral da Terra señala ante esta proliferación de milicias armadas al mando de grandes explotaciones y empresas que expropian tierras matando a sus residentes, no solo a la incapacidad y desinterés de parte de todas las instituciones estatales, sino a la inacción del Poder Judicial, que arrastra los procesos judiciales por décadas sin darles solución alguna a los trabajadores y desplazados. Ni siquiera el Programa Nacional para la Protección de los Defensores Derechos humanos (PPDDH) ha sido capaz de proporcionar la protección prometida en sus disposiciones, sea por falta de recursos, sea por la obstaculización a su trabajo de parte de esferas de poder político y económico que defiende la expansión de la agroindustria sobre la base del asesinato y la explotación. Los grandes monocultivos que han cambiado el paisaje de la Amazonia brasileña, van acompañados de acciones de violencia extrema.

La violencia se ha convertido en un instrumento el control y la aplicación efectiva y única forma de comunicación entre las estructuras poder y los campesinos e indígenas. La fuerza bruta y las restricciones físicas, constituyen una forma de relación legítima, de manera implícita, para los aparatos poder. Esta expansión destructiva, se asocia con la negación sistemática e ilegal de organismos oficiales. (Canuto, da Silva, Luz, & Pinto Andrade, 2016, pág. 147).

Los organismos encargados de regular la propiedad de la tierra, promueven el reconocimiento de propiedad de los grandes latifundistas que avanzan sobre las tierras de los pequeños agricultores y comunidades indígenas, facilitando el acaparamiento de tierras y omitiendo absolutamente cualquier dispositivo para asegurar el reconocimiento de la propiedad de la tierra a comunidades que viven allí desde hace décadas. El Estado brasileño, quien debería realizar las

mediaciones entre los grandes capitales y las comunidades locales, trabaja arbitrariamente en favor de los grandes latifundios y sus avances expansionistas, asegurándoles impunidad. Así, los responsables por los crímenes contra los residentes rurales no son penalizados, acrecentando el sentimiento de temor de la población en función de la inoperancia de las autoridades. A modo ilustrativo, se señala que de los 1723 asesinatos de personas ligadas a los movimientos sociales rurales en Brasil, solo 109 casos fueron llevados a juicio y se condenaron solo 32 demandados. En el estado de Maranhão, de las 144 muertes, solo hubo cuatro juicios y ninguna condena. (Canuto, da Silva, Luz, & Pinto Andrade, 2016).

Coincidentemente, el Informe de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, ha manifestado su preocupación la escasez de número de sentencias condenatorias pronunciadas por la jurisdicción penal ante los delitos de reducción de trabajadores a la condición análoga a la esclavitud, en aplicación del artículo 149 del Código Penal brasileño. Se ha dado una condena en 2006 tras sentencia del Tribunal Supremo Federal por el crimen de reducción de una persona a condición análoga a la esclavitud, y luego en 2008, dos más, una del Tribunal Federal de Marabá y otra impuesta por el Tribunal Federal de Maranhão, que condenó a 14 años de prisión al demandado. Fuera de estos casos, poco ha podido ofrecer el Estado Brasileño a la Comisión para dar cuenta de acciones concretas en su lucha contra el trabajo esclavo en Brasil. (Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, 2010, pág. 258).

La Comisión recuerda que la aplicación efectiva de sanciones en caso de infracción a la legislación del trabajo, es un elemento esencial de la lucha contra el trabajo esclavo, en la medida en la que el trabajo esclavo se caracteriza por diversas infracciones a la legislación del trabajo que deben sancionarse como tales. Además, en su conjunto, estas infracciones del derecho de trabajo se suman a la comisión del delito penal de «reducción de una persona a una condición análoga a la esclavitud», y constituyen un delito que requiere sanciones específicas. La Comisión toma nota de que,

en sus observaciones, la CUT⁶ subraya que, a fin de poner fin a la práctica del trabajo esclavo es imprescindible reconocer la insuficiencia de los mecanismos de sanción y la necesidad de imponer sanciones civiles y penales más graves. (Comisión de Observación Organización Internacional del Trabajo, 2010).

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha presentado a Brasil el primer juicio internacional relacionado con el trabajo esclavo contemporáneo al Estado brasileño ante la denuncia de una sucesión de fiscalizaciones en las que a pesar de constatarse trabajo esclavo, no hubo ninguna consecuencia de investigación penal ni reparación alguna a las víctimas o castigo a los responsables. Esta ha alertado sobre la insuficiencia de la fiscalización y liberación del trabajador para poner fin a la esclavitud en el país si no se investigan las causas a fin de evitar la reproducción sistemática de este tipo de prácticas, y no se aleja a las víctimas de los riesgos de la mano de obra esclava. (Fontenele, 2016).

Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Estado de Brasil falló a la hora de tomar medidas de respuesta ante la situación en la que se encontraban las víctimas. Al no actuar, a pesar de que conocía la situación, el Estado fue considerado internacionalmente responsable por no garantizar que los trabajadores dejaran de ser sometidos a la práctica del trabajo esclavo, por no poner a disposición de los trabajadores un mecanismo judicial efectivo que protegiera sus derechos, por no ejecutar sanciones contra los responsables y por no promover una reparación adecuada a las víctimas. (Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, 2015, pág. 2).

Califica de escándalo la falta de actuación penal ante los empleadores de trabajo esclavo y cuestiona que se haya suspendido la Lista sucia por una medida cautelar de la justicia, evidenciando la puesta de los Tribunales del

⁶ Central Única de Trabajadores (CUT), organismo sindical de Brasil.

Trabajo a disposición de los intereses de los explotadores. (Fontenele, 2016); (Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, 2008)

La lista sucia del trabajo esclavo, que reúne a empleadores descubiertos en flagrante delito, fue creada en 2003 y es responsabilidad del Ministerio del Trabajo, pero fue suspendida el 23 de diciembre de 2014 por el ministro del Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski, mediante la Acción directa de Inconstitucionalidad (ADI) N° 5.209, todavía en trámite. Actualmente, un brasileiro no puede conocer quién practica el trabajo esclavo en el país. "Esto es un atentado al derecho a la información." (Fontenele, 2016, pág. 1).

El pago de reparaciones y la ausencia de punición es una materia pendiente que el estado brasileño mantiene desde hace décadas. (Mezarobba, 2010) Por mencionar un ejemplo, los responsables de la masacre de Unaí, quienes asesinaron en 2006 a los auditores fiscales del trabajo Erastóstenes de Almeida Gonçalves, João Batista Soares Lage y Nelson José da Silva, y al chofer Ailton Pereira de Oliveira, mientras atendían una denuncia en una hacienda en la zona rural de Unaí situada en el Mato Grosso, continúan libres 10 años más tarde sin que se logre sentencia firme. (Tozzi & Barreto, 2016).

Los casos en los que hay condenas, suelen estar orientados a productores sin poder, como el caso Juciel Dias Correa, un pobre arrendatario sin influencias, que pudo ser condenado sin que los inspectores y jueces tengan que enfrentar consecuencias políticas. Muy diferentes son los casos de terratenientes poderosos o grandes corporaciones, ante los cuales los oficiales son más cautelosos. Ante ellos, los inspectores moldean la presentación de evidencia durante las negociaciones y los juicios y se terminan desestimando las causas por tratarse de "subjetividades inapropiadas" (Scott, Andrade Barbosa, & Borlido Haddad, 2016).

En Argentina las autoridades de Renatea han detectado trabajadores en condiciones en las que se abusa de sus derechos, con pagos inferiores al que les corresponde, jornadas sin descanso, malos tratos y falta de herramientas

de trabajo. La Procuraduría de Trata de Personas también ha intervenido y confirma que este tipo de prácticas se ha difundido en el ámbito agrario. Las inspecciones se realizan en conjunto con la Policía Federal y sus delegaciones provinciales, quienes acompañan en todos los operativos. Los sectores de cultivo de frutas y hortalizas son los más afectados. Sin embargo, se han hecho importantes avances en algunos sectores productivos, como el Tabacalero, el del cultivo de la Vid y del arándano, en el que han sido los propios productores los que han hecho un esfuerzo por regularizar su situación. Cuando el Renatea detecta situaciones irregulares, da parte al Juzgado Federal, y da seguimiento a la situación de los trabajadores, no dando por terminado su rol, sino que continúa asistiendo a los damnificados a fin de que su situación sea enmendada. (Rodríguez, 2014).

Sin embargo, Argentina es un país especialmente cuestionado por los atrasos en sus procesos laborales, cuestión que se complejiza por la dispersión de sistemas procesales laborales, producto del diseño federal del sistema. (Arese, 2015) El sistema sostiene la mediación previa obligatoria, lo que es cuestionado por Grisolia (2003) en caso de no extremarse los recaudos en sus homologaciones a fin de evitar que, por necesidad del trabajador, se termine violando el principio de irrenunciabilidad. (Grisolia J. A., El Derecho del Trabajo en Tiempos de crisis, 2003) Una vez cumplido el Servicio de Conciliación Laboral Obligatorio (SECLO), se interpone la demanda, en los insuficientes juzgados que se encuentran sobrepasados con cantidades inmanejables de causas. La tramitación desde la presentación de la demanda hasta alcanzar una sentencia supera, en promedio, al año, lo que en situación de necesidad, resulta una dilación que atenta contra una idea acabada de justicia. Existen distintas modalidades procesales que permiten resolver las controversias laborales en modalidades abreviadas en las Provincias de Buenos Aires, Córdoba (Juicio oral y público y Santa Fe (Procedimiento declarativo con trámite abreviado para algunos casos). (Arese, 2015).

La situación en Argentina, presenta situaciones más heterogéneas, sin tendencias generalizadas como en Brasil. En algunos lugares, como en Santiago del Estero, se han realizado denuncias de connivencias de fuerzas

policiales y jueces para no condenar situaciones de abusos laborales de grandes multinacionales con explotaciones en dicha provincia. Sin embargo, existen casos de grandes empresas que han sido denunciadas por reducir trabajadores a condiciones de servidumbre, como el caso de la empresa Nidera, que fueron sancionadas y cuyos juicios se llevaron a término condenándolas. (Transnacionales en Argentina esclavizan a sus trabajadores, 2016).

CAPÍTULO VI

1. Propuestas para la mejora de las condiciones laborales del trabajador rural agrícola en Argentina y en Brasil.

2. Activismo social

Dentro de las propuestas que han dado resultados positivos, a pesar de las limitaciones mencionadas, se encuentra, en el caso de Brasil, el activismo social orientado hacia el cooperativismo y el desarrollo local.

En cuanto al rol de instituciones civiles, la Associação dos Pequenos Agricultores do Estado da Bahia (APAEB) fundada en 1980, ha logrado destacarse en proyectos destinados a la reorganización productiva de la propiedad, de acuerdo con un aprovechamiento adecuado de sistemas productivos acordes a la región semi-árida. Esta ha impulsado en la región sisalera, un flujo entre las zonas rurales y urbanas de intercambio, proveyendo de leche, pieles y sisal a los municipios cercanos, y generando relaciones educativas de intercambio para la Escuela Familiar Agrícola. Sus actividades han tenido una repercusión directa en la reorganización de las propiedades rurales pequeñas y sus miembros. Este tipo de asociaciones, que nacen de un pequeño grupo de trabajadores rurales en el ejercicio de cooperación, pueden mejorar significativamente la calidad de vida de la comunidad. La experiencia de Bahía al respecto ha señalado un camino hacia la reestructuración del campo brasileño sobre la base de la mentalidad asociativa de los integrantes

del espacio rural. Partiendo de este tipo de asociaciones, han surgido cooperativas, que participan en actividades económicas compartiendo los beneficios del lucro entre sus integrantes. En el Territorio del Sisal han realizado una labor destacada las cooperativas de producción y de crédito. Por ejemplo, la Cooperativa Valentense de Crédito Rural (COOPERE) fundada en 1993 y con alcance a 6 municipios del suelo semi árido bahiano, y que posee agencias bancarias para el financiamiento de los agricultores. (Moreira & Ferreira, 2011).

En el estado de Bahía, la Associação de Desenvolvimento Sustentável e Solidário da Região Sisaleira (APAEB), es una institución que se ha ocupado de la promoción del desarrollo sostenible socioeconómico en la región sisalera y de la población que vive en la región sobre la base de las siguientes actuaciones:

- Puesta en valor del cultivo de sisal a través de la intervención directa en el mercado: la organización de los agricultores para que puedan vender en bloque tanto a las industrias domésticas como a la exportación, sin intermediarios.
- Incentivo a la cría de cabras y ovejas a través de la creación de una curtiduría donde comercializar las pieles, de la instalación de un laboratorio donde examinar a los animales, la introducción de la cría seleccionada y de prácticas de mejora genética y cursos de formación para pequeños agricultores.
- Establecimiento de incentivos para la creación de asociaciones y cooperativas por medio de cursos de formación y apoyo a las iniciativas de organización comunitaria.
- Desarrollo de una cooperativa de crédito y de proyectos educativos, deportivos, de ocio y de comunicación.

- Desarrollo de un proyecto pedagógico dirigido a los niños y jóvenes del ámbito rural, llevado a cabo a través de la Escuela de Agricultura Familiar. El proyecto pedagógico sigue los métodos adoptados en diversos países a través de los cuales los estudiantes pasan semanas alternas en un internado y en su casa, donde pueden aplicar sus nuevos conocimientos en sus propios terrenos y transmitir los nuevos conocimientos a sus familias. (Lopes da Cunha, 2006, pág. 1).

Esta asociación ha inaugurado una fábrica de mantas y alfombras de sisal en 1996 que en poco tiempo (1999) ya había llevado a incrementar el precio de la tonelada métrica de sisal en un 188% en la región. Con ello se han creado cooperativas femeninas que han dado empleo a cientos de mujeres. También han creado cuentas de ahorro y escuelas de agricultura familiar. Esta asociación da cuenta de que en la región sisalera se cuenta con muy pocas opciones para la subsistencia. Esta se ve afectada por las oscilaciones del precio del sisal en los mercados externos y al no haber alternativas a dicha actividad, y no contarse con políticas públicas que ofrezcan alternativas para explotar los recursos locales, los periodos de escasez y sequía rápidamente sumergen a la población en la pobreza más absoluta. Es por ello que, al tratarse de una región con condiciones semiáridas, la búsqueda de alternativas para la viabilidad de las pequeñas granjas, se ha orientado a dar incentivos a los granjeros para la cría de cabras y ovejas, animales que rápidamente se adaptan a las condiciones de esta zona.

Para ello se ha requerido de asociaciones técnicas y financieras, de programas de crédito para agricultores, creación de cooperativas y búsqueda de programas de financiación alternativos. A través de la recaudación de fondos con ayuda de ONG locales y extranjeras y de instituciones municipales y regionales, a partir del año 2000, organismos públicos financieros comenzaron a conceder créditos y con los recursos obtenidos se crearon fondos para proyectos sociales. La experiencia que se menciona, ha debido enfrentar múltiples dificultades, pero ha logrado crear unidades productivas y constituir un grupo multidisciplinar que combina educación, agronomía y cría de ganado

para lograr autonomía y autoabastecerse. Este solo proyecto, ha obtenido los siguientes resultados:

- Creación de 900 puestos de trabajo directos.
- 3.000 familias se han beneficiado del valor añadido a su cultivo de sisal.
- 2.000 personas han recibido cursos de formación.
- Se han desarrollado cadenas de producción:
- Se ha utilizado el sisal en la fábrica de alfombras.
- Se ha incrementado la viabilidad mercantil de la leche de cabra a través de la fábrica de lácteos.
- Se han comprado, procesado y vendido las pieles de ovejas y cabras a la fábrica de curtido y cueros y a los pequeños talleres artesanos locales.
- Lanzamiento de una cooperativa de crédito.
- Lanzamiento de una emisora de radio comunitaria y producción de un programa de televisión en la cadena pública regional de televisión (TV Cultura do Sertão) que se emite diariamente y se dirige a la educación rural; también se ha puesto en marcha un sitio restringido de internet (Sertão Net) que facilita el intercambio gratuito de información a través de un servidor disponible para toda la población de la región.
- Apertura de la Escuela de Agricultura Familiar.
- Desarrollo de un proyecto pedagógico de educación rural y desarrollo de un proyecto deportivo denominado Tu tiro [Bola da Vez] dirigido a la población rural. El proyecto APAEB-Valente ha abierto iniciativas que no tienen fecha de caducidad, permiten una evaluación continua, su reestructuración y la generación de nuevos resultados. (Lopes da Cunha, 2006, pág. 7).

Ello se ha combinado con la creación de unidades productivas con invernaderos para los semilleros y especies vegetales a desarrollar, el uso de energía solar, la revalorización de la identidad cultural, el refuerzo de los lazos sociales comunitarios y el respeto por las características locales, generando un caso testigo con alto potencial de replicación.

El rol de la comunidad organizada, si bien en estado embrionario en el territorio del Sisal en Brasil, ha permitido avanzar en algunos aspectos relacionados con la diversificación de actividades productivas, la mejora de la cadena de producción del sisal y el fortalecimiento de los pequeños productores. Sin embargo, estas actividades llevadas a cabo por iniciativa local, requieren de la participación federal, a fin de formar parte integrada de un proyecto mayor, en el que se discutan políticas permanentes que combinen la participación de la sociedad civil en el proceso de gestión de la tierra, con el poder estatal para gestionar cambios en la realidad socio- espacial y en su integración con el resto del país y con el mundo. (Brito Oliveira, 2015).

La Asociación de pequeños productores de fibra de sisal de Bahia surgió como una comunidad eclesial de base rural, y se abrió paso en una región de latifundios arcaicos, políticas populistas llevadas adelante por familias tradicionales, seguías y grandes diferencias económicas y sociales. Estas movilizaciones enseñaron a los ciudadanos bahienses la importancia de la organización.

Lograron eliminar intermediarios, dar valor añadido a sus productos, capacitarse técnicamente y diversificar la producción. Las tensiones surgieron por la ausencia de una estrategia institucional y la diversidad de intereses y la relación con las instituciones formales estatales se dieron solo con el tiempo, cuando estos grupos iniciaron actividades de representación política en los consejos municipales. Sin embargo, solo se ha logrado beneficiar a un número muy pequeño de trabajadores, en relación a la gran cantidad de trabajadores explotados en la región. Sus cooperativas empleaban en épocas de auge de la exportación a 600 personas, pero a partir del 2003, por causas macroeconómicas, la situación se deterioró. Estas pequeñas acciones constituyen experiencias valiosas, pero resulta necesario articularlas con relaciones instituciones gubernamentales que complementen las estrategias desarrolladas y no atenten contra los logros obtenidos. (Baptista, 2009).

3. Acción sindical

Con la elección de un ex dirigente sindical en 2002, Luiz Inacio “Lula” da Silva, del Partido del Trabajadores, se abrió una oportunidad a los sindicatos para fortalecerse como acciones sociales y mejorar las condiciones de trabajo. Desde entonces, se ha apostado a la apertura de nuevos espacios tripartitos y cuadripartitos de diálogo social con la finalidad de acompañar y monitorear las políticas públicas. Con ello se ha buscado resolver problemas históricos de explotación laboral, a través de acuerdos que crearan estándares mínimos de condiciones laborales para el trabajador, así como la eliminación de contratos precarios, trabajo infantil, sobreexplotación y trabajo esclavo. Este tipo de propuesta es lo que Paulucci (2016) ha sostenido como vía de solución para los problemas del trabajo rural en Argentina. En la experiencia brasileña, sin embargo, estos pactos no han logrado superar conflictos sociales que aún persisten, dado que la representación de intereses se encuentra muy fragmentada tanto en el sector de los trabajadores como en el empresarial, y las entidades gubernamentales no han sabido cumplir con los términos pactados en los acuerdos que se han logrado cerrar. (Silverman, 2015).

Dentro de las herramientas apropiadas que Argentina ha encontrado en el ámbito sindical para promover el trabajo registrado, se encuentran los Convenios de Corresponsabilidad Gremial en materia de seguridad social, que permiten disminuir el grado de evasión y formalizar las relaciones laborales.

Con el fin de estimular la formalización de las relaciones laborales, también se establece un beneficio en las contribuciones patronales integradas en la tarifa sustitutiva de los CCG⁷. Respecto de esto, la ley dispone que los empleadores comprendidos en el régimen de sustitución de aportes y contribuciones emergentes de CCG suscritos en el marco de la Ley N° 26.377 gozarán de una reducción de sus contribuciones patronales destinadas al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), al Fondo Nacional de Empleo, al Régimen

⁷ CCG - Convenios de Corresponsabilidad Gremial

Nacional de Asignaciones Familiares y, si corresponde, al Régimen Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (RENATEA). Específicamente, durante el primer período de vigencia de un CCG, el cálculo de la tarifa sustitutiva que debe pagar el empleador se realizará aplicándole una reducción del 50% a las contribuciones mencionadas, en tanto que durante el segundo período de vigencia del CCG, la reducción será del 25%. Luego, en casos críticos debidamente fundamentados, el Poder Ejecutivo nacional podrá extender la aplicación de esta última reducción a otros períodos posteriores. (Bertranou, y otros, 2015, pág. 217).

La carga de los aportes patronales constituye cifras elevadas que, en los casos de productividad sin excedentes, es visto por los empresarios como una carga. Este tipo de exenciones pueden ser instrumentos valiosos para dar impulso a la regularización de los asalariados del sector, permitiendo la capitalización del empleador hasta alcanzar la rentabilidad necesaria para hacerse cargo de las contribuciones correspondientes en su totalidad.

4. Certificación laboral de productos

Esta propuesta no forma parte de las experiencias observadas en las regiones en estudio, pero cabe mencionarla por la aproximación innovadora que hace a la problemática, desde una perspectiva de responsabilidad social empresarial.

En el comercio mundial, es una tendencia cada vez más difundida, la presencia de mecanismos de certificación internacional de los productos agropecuarios, entre otros. Por sector e industria se cuenta con mecanismos y normas de certificación que permiten utilizar un etiquetado que da cuenta del cumplimiento de normas especiales sobre medio ambiente, seguridad alimentaria, normas sociales y derechos laborales.

La certificación se enmarca dentro de un concepto más amplio y se relaciona con lo que se conoce como Responsabilidad Social Empresarial. A pesar de que existen múltiples definiciones del concepto, de modo general se puede sostener que se trata de que las empresas

traten a todos los interesados en ella de manera ética y responsablemente. Aunque la certificación se realiza para todo tipo de empresas e industrias interesadas, la presencia de organismos no gubernamentales trabajando con los pobres rurales está adquiriendo una relevancia cada vez mayor, sobre todo en el caso de los productos agropecuarios. Se trata -entre otros- del advenimiento de los Criterios de Comercio Justo (Fairtrade), que benefician económicamente a aquellos productores que ingresan a ese sistema de producción y comercialización, los que, usualmente están asociados en organizaciones de pequeños productores, como por ejemplo, en el caso del café, la fruta y la horticultura. Se benefician económicamente, porque al estar certificados como cumpliendo con ciertos criterios definidos por estos organismos no gubernamentales, tienen una demanda constante por sus productos a un precio más estable y alto, aparte de obtener Primas de Comercio Justo para sus organizaciones. Pero deben cumplir con los requisitos impuestos por las organizaciones que certifican el producto, que por supuesto aumentan los costos. Pero la relación costo-beneficio es positiva. (Soto Baquero & Klein, 2012, pág. 38).

Ello implica cumplir estrictamente con los estándares previstos para los productos del comercio justo (Fairtrade) establecidos por organizaciones sin fines de lucro. Actualmente se ocupa de ello la Fairtrade Labelling Organization (FLO) International, quien se encarga de desarrollar y revisar patrones de comercio justo y de apoyar a los Productores Certificados de Comercio Justo, para que mantengan su Certificación. La certificación la realiza la compañía internacional FLO-CERT GMBH, que realiza las inspecciones y certificaciones de productores y de comerciantes. La difusión de estas organizaciones ya ha alcanzado más de 70 países y garantiza a los consumidores que con su compra contribuyen al desarrollo económico y social de los productores y sus familias, y a su vez adquieren productos de excelente calidad controlada y generalmente con características orgánicas. Por ejemplo, el café hondureño de exportación, cuenta con este tipo de certificación. (Soto Baquero & Klein, 2012, pág. 38).

Otras organizaciones ofrecen certificaciones de ética agraria similares. La Norma de Responsabilidad Social 8000 o SA 8000, formulada por Social Accountability International (SAI) , observa, fundamentalmente, el cumplimiento de la legislación laboral vigente, conforme a los principios establecidos por los organismos internacionales, y a la vez incorpora estándares sociales como de clima laboral, promoción de los trabajadores, y otros similares. (Fernández Besada, 2008) Por su parte, la certificación ISO 14001 (International Organization for Standardization) se enfoca en requisitos ambientales e incluye metas políticas y procedimentales como documentación y capacitación del personal. En Argentina se encuentra autorizada para dar esta certificación, IRAM (Instituto Argentino de Normalización y Certificación. (Andersen, 2003).

Existen otras experiencias en distintos lugares del mundo, como:

- El Movimiento de Agricultura Orgánica, (IFOAM)
- La iniciativa de minoristas miembros del grupo EUREP (Euro-Retailer Produce WorkingGroup), con certificación global de GlobalGap basada en criterios de seguridad alimentaria, calidad y medio-ambiente, cumplimiento de objetivos relacionados con la salud, seguridad y bienestar del trabajador.
- El Proyecto SASA (Social Accountability Sustainable Agricultura) , en el que participan la Federación Internacional de Movimientos de Agricultura Orgánica (IFOAM), SAI, Organizaciones Internacionales de etiquetado en Comercio Justo (FLO) y la Red de Agricultura Sustentables (SAN), tiene como objetivo armonizar las recomendaciones sobre estándares o guías claves en materia de requisitos sociales a certificar, tomando como punto de referencia las convenciones de la International Labor Organization (ILO) y ejemplos relevantes de legislaciones nacionales.
- La Organización no gubernamental Food Alliance, desde Estados Unidos, impulsa un programa de certificación de responsabilidad social, sobre la base de criterios de justicia social y medio ambiente. Los estándares para la certificación evalúan “condiciones de trabajo de los trabajadores, bienestar animal, no utilización de hormonas ni antibióticos, no utilización de organismos modificados genéticamente, prácticas de conversión de los recursos de agua y suelo, protección de

la fauna, planes de capacitación para los trabajadores, y oportunidades educativas para niños y jóvenes. ” (Fernández Besada, 2008, pág. 8)

- Desde Reino Unido, la Soil Association en articulación con la certificadora Certi-Mex de México, han incorporado requisitos sociales para sus programas de certificación.
- Finalmente, la norteamericana Justice Agriculture Project (AJP) se basa en los criterios de respeto por el medio ambiente y en la justicia social, y certifican agricultura orgánica socialmente justa y buenas prácticas laborales. (Fernández Besada, 2008).

Las experiencias en Sudamérica se han implementado con éxito y ya han dado sus frutos, estableciéndose bajo distintas modalidades en distintos países del Mercosur, contándose ya con experiencias en Argentina y en Brasil. En Argentina, la Certificadora de Producción Orgánica Argencert (Asociación Orgánica Certificada, incluye buenas prácticas laborales entre sus requisitos. (Argencert, 2015) Asimismo, también:

En Argentina, la certificación de este referencial ha sido muy importante a nivel de fruticultura y, en menor escala, en horticultura, alcanzándose en 2010 una superficie de certificación mayor a 75-000 ha (el 72% corresponde a limones, peras y manzanas), con un total de 1.416 productores certificados. El sector agroindustrial argentino ha solicitado a iram (Instituto Argentino de Normalización y Certificación) el estudio de una Norma de Buenas Prácticas Agrícolas, con el objeto de poder mejorar la calidad de la materia prima a utilizar en sus procesos. Dicha Norma fue elaborada con la participación de todos los sectores involucrados (institutos de investigación, productores, inta, senasa, etc.) en distintas regiones del país, para lograr mayor participación y representatividad y fue publicada en agosto de 2011 como iram 14110-1 Buenas Prácticas Agrícolas. Producciones de origen vegetal – Requisitos Generales. (Fonallera, 2012, pág. 60).

En este mismo marco, Brasil cuenta con la Producción Integral Agropecuaria, que cuenta con un proceso de certificación voluntaria que verifica la INMETRO

con la firma oficial de MAPA, basado en valorización de la mano de obra, prácticas sustentables de producción y bajo impacto ambiental. (Fonallera, 2012, pág. 60).

También se ha desarrollado en el Mercosur, comprendiendo a Argentina y Brasil entre otros países, las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), que realiza certificaciones sobre atributos de calidad, preservación del medioambiente y seguridad laboral. Este tipo de certificación ofrece beneficios, especialmente para los pequeños y medianos productores agrícolas a los cuales:

- Les permite estar preparados para exportar a mercados exigentes y tener mejor acceso a la exportación en un futuro.
- Les permite obtener un producto diferenciado por calidad e inocuidad, lo que puede implicar un mayor precio de venta.
- Les facilita un mayor control del proceso productivo por la obtención de mejor y nueva información sobre su propia producción, merced a los análisis de laboratorio y a los sistemas de registros (trazabilidad).
- Reduce los riesgos en la toma de decisiones por la mejor gestión (administración y control de personal, insumos, instalaciones, etc.) de la finca en términos productivos y económicos.
- Aumenta la competitividad por reducción de costos (menores pérdidas de insumos, horas de trabajo, tiempos muertos, etc.)

Mejora la calidad de vida de los productores por:

- Creación de capital humano por la educación recibida (manejo de pesticidas y plagas).
- Reducción de riesgos de intoxicaciones, higiene del predio y durante la cosecha).
- Mejores condiciones de higiene personal que los empleadores deben garantizarle a sus empleados (disponibilidad de baños y de agua potable).

- Aumento de la autoestima por sentirse capaces de alcanzar metas y por tener reconocimiento, acceso a los mercados, etc. (Izquierdo & Rodríguez Fazzzone, 2006, pág. 29).

Con este tipo de iniciativas, se procura despertar el interés de los consumidores por el modo en que se obtienen los productos que consumen y bajo qué condiciones, a fin de que su participación activa permita premiar a las organizaciones responsables y alentar a las que no cumplen con los criterios deseados a hacer los cambios necesarios para ingresar a los beneficios que ofrece pertenecer a este selecto grupo de productores socialmente y ambientalmente responsables

5. Soluciones desde las políticas hacia el mercado de trabajo

Se ha observado en Argentina, una serie de factores que favorecen la proliferación de prácticas laborales que vulneran los derechos de los trabajadores e influyen en los altos índices de precarización y trabajo no registrado en el ámbito rural, muchos de ellos, de índole económica, relacionados a los vaivenes del mercado propios del tipo de producción inserta en los mecanismos de exportación de materia prima que rigen en la zona pampeana de la Provincia de Buenos Aires. Al respecto, Soto Baquero & Klein, (2012), llaman a considerar que es responsabilidad del Estado intervenir con políticas públicas para asegurar un nivel alto y estable de empleo y velar por el cumplimiento de la normativa legal vigente. Estas políticas, tienden a alterar el resultado natural que surge de las interacciones entre los actores del mercado, y encuentran su justificación en el reconocimiento de que los mercados de trabajo, si se deja que funcionen sin intervención alguna, pueden tener consecuencias indeseables en el ámbito social, económico y político.

Estas intervenciones se conocen normalmente como políticas activas de empleo, aunque no siempre son claramente diferenciables de las denominadas políticas pasivas, que no incorporan a las personas al empleo. [...] El Estado es una de las principales instituciones que provee los arreglos para la satisfacción de las variadas necesidades, siendo el

empleo una de las necesidades más importantes. Ello es así porque no solo cumple la función económica de ser el principal instrumento para alcanzar un nivel de ingresos y, por lo tanto para evitar la pobreza, sino que, también, porque es un elemento central para la integración de las personas a la sociedad. Permite la inclusión social. Como lo señaló T. H. Marshall, " una persona que ha perdido su empleo, perdió su pasaporte a la sociedad" (Marshall, T. H., 1965). Por eso las políticas de empleo fortalecen el tejido social y, desde Marshall, el empleo ha sido considerado un derecho social fundido en la ciudadanía. (Soto Baquero & Klein, 2012, pág. 41).

En la experiencia Brasileña, la intervención estatal ha sido dar empleo público en puestos administrativos estatales a alrededor de un 60% de la población activa bahiense a fin de paliar los efectos de prácticas agrícolas de baja productividad y escasa rentabilidad. En Argentina, lo que se ha observado, es una intervención más orientada a la fiscalización y a la concertación de acuerdos entre trabajadores y empleadores, con participación sindical, aunque esta última limitada.

La CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe), ha elaborado una clasificación de los instrumentos de la política de empleo que los ministerios de Trabajo suelen aplicar en América Latina.

Gráfico: 25 “Políticas orientadas al mercado del trabajo” Fuente: (Soto Baquero & Klein, 2012, pág. 41)

A partir de dicha clasificación, es posible apreciar la variedad de instrumentos con los que el Estado cuenta para mejorar la situación del empleo. Uno de los principales escollos que encuentran los países latinoamericanos para su implementación, es el logro de una articulación coordinada, en la que cada Institución realice su labor con eficiencia, sin interferir con otros organismos, de manera integrada. (Soto Baquero & Klein, 2012).

Las políticas activas en el mercado de trabajo han tenido logros importantes en Argentina en los años ´90, cuando lograron disminuir en un 50% los niveles de pobreza, lo que acompañado por un aumento del salario mínimo real y una caída de la tasa de inflación tuvo efectos beneficiosos palpables. Sin embargo, en las áreas rurales, las políticas activas y pasivas han estado ausentes. Solo se cuenta con la experiencia de programas de emergencia para la creación de empleos temporales, cosa que todos los países de la región han implementado, cosa que si bien tiene un impacto significativo para las familias más pobres del ámbito rural, no constituye una solución permanente. Sin embargo, en contextos de crisis, resultan necesarios.

Las políticas activas para el ámbito rural, suelen ser menos apropiadas para la generación directa de empleo o para reducir la pobreza. En el caso de los subsidios a la contratación de mano de obra para el sector privado, no se han observado resultados favorables, dado que terminan siendo utilizados para mano de obra estacional. Tampoco la creación de empleo público resulta útil en el ámbito rural, ya que no suele ocupar a los más pobres. Sí se han observado resultados positivos en las políticas basadas en programas de crédito, subsidios y asistencia para la pequeña empresa y para el sector informal, ya que han permitido incrementar los ingresos familiares a la vez que fomentaron la tasa de participación de las mujeres, que al poder desarrollar emprendimientos desde sus hogares no se enfrentan a la problemática de no tener cómo cuidar a los niños.

Este tipo de programas, no suelen ser implementados únicamente por el Estado, sino que, como se ha observado en el caso de Brasil, las entidades no gubernamentales y organizaciones civiles, pueden apoyar a las empresas rurales, a pequeñas industrias, artesanos y comerciantes, incrementando la diversificación de fuentes laborales para la región. En este tipo de programas es frecuente que se ofrezca también capacitación, en especial para jóvenes y mujeres, lo que produce un efecto sinérgico. Sin embargo, en la experiencia brasileña, se ha comprobado que es necesario el apoyo estatal, ya que las organizaciones locales por sí solas no pueden realizar las transformaciones necesarias como para revertir las situaciones de pobreza estructural y prácticas laborales de explotación arraigadas. (Soto Baquero & Klein, 2012).

En Argentina, se han implementado una serie de políticas y programas desde 2003 en adelante que abordan los siguientes aspectos:

Pilar	Políticas y programas destacados	Ley de promoción del trabajo registrado y prevención del fraude laboral
Esquema macro económico	Características de las políticas macroeconómicas (fiscal, monetaria y cambiaria) que fomentan la demanda de trabajo decente. Mejoras en la administración tributaria. Articulación con el funcionamiento de las instituciones laborales (negociaciones salariales y salario mínimo vital). Rol activo del Estado.	Fortalecimiento de la inspección laboral. Intervenciones específicas en sectores críticos (creación de la Unidad Especial de Fiscalización del Trabajo Irregular).
Regulación de Actividades Informales	Simplificación de reglas y procedimientos, reducción de costos de entrada y mecanismos de acceso a la formalidad. Se destacan los programas de simplificación tributaria, gobierno electrónico y de ventanilla única a nivel municipal y provincial.	
Acciones destinadas a trabajadores informales en empresas formales	Régimen de promoción y protección del empleo registrado. Se destacan las reducciones de contribuciones a la seguridad social y las facilidades de pago para la regularización de deudas vencidas (Ley N° 26.476). El beneficio, que dura 24 meses, consiste en una reducción del 50% en la alícuota de la contribución patronal para las nuevas contrataciones durante los primeros 12 meses, y del 25% para los 12 meses siguientes. Esas acciones permitieron actuar en forma anti cíclica frente al estallido de la crisis internacional. Plan Nacional de Regularización del Trabajo. Vigente desde 2003. Fortalecimiento de la capacidad de fiscalización e inspección del Estado nacional. Incremento significativo en el número de inspectores e informatización del proceso. Estimación de oficio o presunción de los aportes y contribuciones de la seguridad social a liquidar. Sectores de la construcción, de la industria textil y trabajo doméstica. Perfeccionamiento de los métodos de pagos de las obligaciones de los empleadores. Se destacan los Convenios de Corresponsabilidad Gremial (CCG) en el ámbito rural a través de los cuales el empleador reemplaza el pago mensual de aportes y contribuciones a la seguridad social por un pago diferido que realiza en el momento más adecuado del proceso productivo. Creación del Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL). Las empresas que permanezcan en este registro no podrán acceder a otros programas de fomento del Estado.	Incentivos económicos para la formalización de trabajadores en las microempresas. Creación de un régimen permanente de contribuciones a la seguridad social para microempleadores (reducción permanente de contribuciones patronales). Readecuación del Régimen de promoción y protección del empleo registrado: las reducciones temporales de contribuciones patronales serán diferenciadas por tamaño de empresa (límite: empresas de hasta 80 trabajadores). Fortalecimiento de la inspección laboral: en particular del rol del Ministerio de Trabajo. Creación de una Unidad Especial de Investigación del Fraude Laboral (indicadores sectoriales, seguimiento de cadenas de valor, otros). Ampliación de los CCG. Beneficios adicionales (reducción temporal de contribuciones patronales).
Formalización de relaciones laborales difusas y relaciones laborales en empresas informales	Régimen de seguridad social para el personal del servicio doméstico. Se destacan deducciones del impuesto a las ganancias para los empleadores. Presunción -salvo prueba en contrario- de que toda persona con un determinado nivel de ingresos y patrimonio cuenta con un trabajador doméstico (extensión de indicador de trabajadores mínimos a la actividad). Modificaciones en la política sobre migraciones. Se destacan la nueva Ley de Migraciones (Ley N° 25871) y las acciones para la normalización documentaria. Nuevo régimen laboral para el personal de casas particulares. Se nivelan derechos entre los trabajadores domésticos y el resto de los trabajadores. Nuevo régimen de trabajo agrario. Creación del RENATEA. Convenios de Corresponsabilidad Gremial (CCG). Modificación del régimen de empresas de servicios eventuales. Adecuación de la reglamentación al concepto de trabajo decente, estableciendo nuevas pautas.	Fortalecimiento de la inspección Laboral. Intervenciones específicas en sectores críticos (Creación de la Unidad Especial de Fiscalización del Trabajo Irregular).
Mejora de la Empleabilidad	Acciones de formación y capacitación. Se destacan los programas de formación profesional, terminación de estudios formales, registro de normas de competencias laborales y certificación de trabajadores.	
Concientización social sobre la problemática	Campana sistemática de sensibilización en los medios masivos de comunicación sobre las ventajas de cumplir con las obligaciones laborales y tributarias y la protección social que de esto se deriva. Mediante el Plan de Responsabilidad Social Empresarial las empresas líderes concientizan a sus clientes y proveedores sobre la necesidad y obligación de cumplir con las normas laborales.	
Protección del empleo formal frente a shocks	Preservación del empleo formal. Se destacan los Procedimientos Preventivos de Crisis y el Programa Recuperación Productiva.	
Protección social para trabajadores informales y sus familias	Programas de transferencias de ingresos con componentes de promoción de la empleabilidad. Se destacan el Seguro de Capacitación y Empleo, el Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, y el Programa Argentina Trabaja. Extensión de la seguridad social a trabajadores informales. Se destacan el Plan de Inclusión previsional, la Asignación Universal por Hijo y Embarazo y el monotributo social.	

Gráfico: 26 “Estrategias políticas y acciones en el marco de la Ley N° 26.940 de Promoción del empleo registrado y prevención del fraude laboral” Fuente: (Bertranou, y otros, 2015, págs. 220-221)

Para que estas estrategias resulten efectivas y se traduzcan en mayor formalización del empleo, las políticas deben fortalecerse desde cuatro dimensiones paralelas:

- I. la simplificación de la registración y la reducción de los costos fiscales y de la seguridad social en el caso de las empresas de menor tamaño;
- II. el apoyo productivo a las firmas pequeñas y medianas (ya que su baja eficiencia es un factor que favorece la evasión total o parcial de las obligaciones fiscales, previsionales y de otro tipo);
- III. la inspección laboral, y
- IV. el modo como todo esto debería contemplar la coordinación entre las diferentes instituciones (y entre los distintos niveles de gobiernos) con competencia en las políticas de formalización. (Bertranou, y otros, 2015, pág. 218).

En Argentina, tanto la Ley de Promoción del empleo como de prevención del fraude laboral aborda, considera las distintas dimensiones necesarias para la eficacia de las políticas laborales, procurando derribar los aspectos que actúan como barrera para la formalización del empleo, como por ejemplo, las dificultades de las pequeñas empresas para afrontar los costos vinculados al registro laboral. Ninguno de estos factores es efectivo por sí mismo, si no está integrado a una estrategia multidimensional, en la que se consideren todos los aspectos de la problemática, en este caso, del trabajo rural no registrado.

Cuando se observa en la práctica la implementación de lo que dicta la ley, tanto Argentina como Brasil presentan fallas importantes en las tareas de fiscalización, en parte, por haber desplazado a los sindicatos de esta labor.

La presencia del Estado es un aspecto fundamental para el cumplimiento de la legislación laboral, tanto en el momento de la toma de decisiones en el ámbito legislativo para la formulación de normativas adecuadas, como en el ámbito de los controles para su observación. En el medio, la formulación de políticas de influencia directa, como la generación de agentes que hacen a la viabilidad de

la labor de los productores, que protejan simultáneamente al trabajador y fomenten el desarrollo de los emprendedores y productores, facilitando así por distintas vías la regulación del mercado de trabajo. Es por ello que la intervención del Estado debe observarse desde una perspectiva integral. En otras palabras, “ La problemática de la mano de obra debe ser entendida en el marco de un sistema, en el que la modificación o intervención de algún elemento/interacción podrá ser más eficiente si se consideran las interrelaciones existentes con los otros elementos. ” (García & González, 2015, pág. 14).

El grado de apropiación de la plusvalía no es igual para todos los tipos de productores, por lo que la heterogeneidad en distintas producciones es un aspecto que debe ser tenido en cuenta si se desea que la ley se cumpla de forma eficiente sin generar nuevas distorsiones. Es por ello que Paulucci (2016) insiste en la necesidad de legislar para las distintas realidades rurales, sobre todo en territorios tan extensos y variados como lo son Argentina y Brasil, en los que se trabaja en distintos tipos de clima, entorno, y bajo los parámetros que impone cada tipo de producción en el ámbito ganadero, hortícola, frutícola, extensivo, lácteo, etc. Lo mismo ocurre con el tamaño de los establecimientos productores, ya que en la mayoría de los casos, los productores que trabajan con mano de obra familiar, suelen tener dificultades para sostener los gastos que implica tener trabajadores registrados. Es por ello que, la regulación de asuntos que afectan a sectores económicos vulnerables, debe prever que sus disposiciones no generen nuevas restricciones o directamente la inviabilidad de un estrato vulnerable de productores. Ante ello, además de un derecho que considere la realidad de los distintos rincones de la geografía rural de cada país, resulta necesario que se cuente con políticas complementarias focalizadas que faciliten el cumplimiento de los derechos laborales.

Así, el control y la fiscalización para el cumplimiento de la legislación laboral agraria, puede beneficiarse de políticas complementarias. Argentina cuenta con un registro especial, el Registro Nacional de la Agricultura Familiar (RENAF), creado por resolución 255/07 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Nación y ratificado por la Ley de Reparación Histórica de

la Agricultura Familiar 27.118 a fin de que el estado conozca las necesidades específicas de este tipo de productores, enfocando sus políticas públicas de apoyo a la producción y la comercialización a fin de que lleguen de manera coordinada y efectiva al sector. (Ley 27.118 de Agricultura Familiar, 2015); (Registro Nacional de Agricultura Familiar (ReNAF), 2016) En el marco de las iniciativas llevadas a cabo por la Secretaría de Agricultura Familiar, se ha desarrollado otro ejemplo de política complementaria para favorecer el cumplimiento de los derechos laborales, en forma de un Monotributo social en el que se incluye a la economía formal a grupos vulnerables. Permite contar con cobertura de Obra Social para el contribuyente y a su grupo familiar, y acceder a la jubilación a los agricultores familiares en situación de vulnerabilidad socioeconómica que, entre otros requisitos, no superen un ingreso anual de 72.000 pesos argentinos. Este no alcanza a empleados, sino a productores. Este se encuentra subsidiado en su totalidad, por lo que tiene costo cero para el contribuyente. (Monotributo Social, 2016) Este estrato, considerando incluso a los productores que no sean dueños de la tierra, puede tener un subsidio parcial o total para los aportes patronales, a fin de que las limitaciones económicas no les impida participar de la economía formal.

El papel de las políticas de empleo y de protección social como propulsoras de la productividad y del empleo formal se ha manifestado en programas similares implementados en Brasil, como es el caso del programa gubernamental “Supersimples” lanzado en el año 1996, por el cual se ha beneficiado a las pequeñas empresas con reducción impositiva y simplificación de la reglamentación. La desgravación fiscal que permite la inscripción a este programa, es de alrededor de un 40% anual. Esto ha permitido que muchas empresas se encuadren dentro de la economía formal, unos 9 millones desde 2006, lo que ha significado un ingreso significativo para el erario estatal. Este sistema tributario que permite aliviar la carga fiscal de micro y pequeñas empresas brasileñas, se ha hecho extensivo a todo el país, y requiere de mínimos requisitos para la incorporación al sistema. Uno de ellos, no superar un volumen de ventas anual de 3,6 millones de reales.

Ello abarca todo tipo de actividades, reduce la burocracia, acelera los trámites de creación de la empresa y contrasta con el sistema anterior, engorroso y difícil de cumplir para los pequeños emprendedores, en especial en las delicadas circunstancias en que se desarrollan las economías familiares rurales. Este ejemplo es indicador de que cuando se lanzan estrategias que contemplan factores económicos, institucionales, políticos y sociales que se refuerzan mutuamente, la economía informal se puede combatir. (Barbosa, 2014); (OIT Oficina Regional para América Latina y el Caribe, 2012).

Este tipo de iniciativas permiten que no se busque solución solamente desde el problema emergente, esto es, la precarización laboral, sino que a través de un tratamiento heterogéneo de los productores diferenciándolos conforme a su situación socioeconómica, permite abordar la situación desde las causas trabajando desde una perspectiva de la viabilidad y no de la coacción. Si las acciones de las iniciativas políticas se enfocan sobre las causas de la precarización laboral en lugar de combatir el emergente, lo que permitiría focalizar los esfuerzos de fiscalización en aquellos productores que se apropian de parte o del total de la plusvalía extraída al trabajador sin justificación alguna.

Si la pretensión de reducir la informalidad y precarización laboral se sesga sobre el mercado de trabajo sin considerar a los otros mercados y agentes, y además se desestima la heterogeneidad de los productores, lejos de solucionarse la precarización laboral, se corre el riesgo de generar un nuevo problema [...] . Por ello, se plantea la necesidad de avanzar en la regulación también de los mercados de insumos, de capitales, de productos, en pos de reducir la problemática en el mercado laboral. (García & González, El nuevo Régimen de Trabajo Agrario. Desajustes y propuestas de adecuación para el sector hortícola del periurbano bonaerense sur, 2015, pág. 15)

Cuando las acciones políticas se enfocan exclusivamente en la regulación del mercado laboral, ignorando todas las demás variables que inciden en la conformación de las relaciones empleador-empleado, la mera sanción no basta, y la ley no se cumple. Es por ello que las intervenciones deben

realizarse en consonancia con la realidad integral del productor, de la región, del sistema productivo sobre el que se está interviniendo. Las acciones de gobierno tienden a focalizar sus esfuerzos en la regulación del mercado de trabajo, ignorando que el mercado de insumos, de productos, de capitales y de tierras son factores dinámicos que afectan de manera muy diferente a los grandes, medianos y pequeños productores.

Gráfico: 27 "Esquemmatización de la acción del Gobierno sobre la interacción productor-trabajador, ignorando la estratificación de productores y la influencia de los otros agentes y mercados" (García & González, 2015, pág. 14)

La búsqueda de una aplicación homogénea de la normativa laboral, atenta contra la complejidad de una realidad que simplemente no puede adaptarse a marcos rígidos, y que requiere de ciertas flexibilidades, que no tienen por qué pasar siempre por el trabajador, sino que pueden preverse en otras dimensiones del proceso productivo, a fin de que la seguridad y bienestar del trabajador no se conviertan en la variable de ajuste ante un cuadro normativo que limita las opciones.

En cuanto a los incentivos por sanción, en Brasil se ha creado una Lista negra o Lista sucia, que ha dado buenos resultados. El registro de empleadores capturados con mano de obra esclava brasileño, conocido como el instrumento "lista sucia" mantenido a través de la Ordenanza Interministerial 02/2011, el

Ministerio de Trabajo y Empleo y la Secretaría de derechos Humanos, ha sido uno de los mecanismos más importantes para combatir este crimen. Sin embargo éste ha caído en desuso sin justificación alguna. (Canuto, da Silva Luz, & Rodrigues Costa, 2015).

Argentina cuenta, por su parte, con la REPSAL (Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales) establecida por la Ley 26.940). En esta lista se publican las sanciones firmes por trabajo no registrado, trabajo infantil y adolescente, aplicadas por el Ministerio de Trabajo y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), así como del Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (RENATEA) y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT).

Mientras los empleadores sancionados permanecen en el Registro no pueden acceder a programas, acciones asistenciales o de fomento, beneficios o subsidios administrados, implementados o financiados por el Estado nacional, líneas de crédito otorgadas por bancos públicos, ni celebrar contratos de compraventa, suministros, servicios, locaciones, consultoría, alquileres con opción a compra, permutas, concesiones de uso de los bienes del dominio público y privado del Estado nacional, que celebren las jurisdicciones y entidades comprendidas en su ámbito de aplicación. No pueden participar en concesiones de obras públicas ni de servicios públicos o licencias, ni acceder a los beneficios económicos de promoción de las contrataciones previstos en los artículos 19 y siguientes y 24 y siguientes de la ley N° 26.940. (Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales, 2016)

En caso de que el infractor reincida en la misma falta por la que se lo incluyó en el Listado en el marco de los siguientes tres de la primera infracción, se lo excluye de pleno derecho del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes en el caso de los monotributistas o se les impide deducir en el impuesto a las ganancias los gastos de personal. (Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales, 2016) (Bertranou, y otros, 2015).

El aspecto práctico de las metodologías de control y registro también es un aspecto a considerar. En Argentina, la Libreta del trabajador rural, se ha considerado un hito histórico, ya que con la sanción de la Ley 25.191, este instrumento permite poner al trabajador en control de los registros de sus tareas, y procura una solución al problema de la dispersión de los trabajadores en todo el país, las distancias y el registro de tareas no permanentes, por lo que la falta de un seguimiento adecuado, deviene naturalmente en la irregularidad laboral. La Libreta del trabajo Agrario en Argentina, fue un elemento que dio impulso a la registración, y que permite al trabajador rural contar con cobertura social en caso de estar desempleado. Esta libreta es de uso obligatorio para todo el territorio argentino en cualquier tipo de tarea agraria que el trabajador realice. Esta Libreta es un instrumento válido como principio de prueba para acreditar la calidad de inscripto en el sistema de previsión social y del control de los años trabajados. Sirve, entonces, también como certificación de servicios prestados. (Paulucci, 2016); (de Celis & Arizmendi, 2016) Brasil también cuenta con un sistema de libreta de trabajo como documento para formalizar la contratación en el ámbito rural. (Soto Baquero & Klein, 2012).

6. Cambio normativo

La Libreta del trabajador rural, es uno de los aspectos más elogiados por los estudiosos del derecho laboral rural, así como por quienes se han desempeñado en el ámbito laboral en Argentina. Este documento único e intransferible ha permitido unificar el control de trabajadores que se desempeñan bajo múltiples parámetros fragmentados: en distintos tipos de producción, distintas tareas, distintas estaciones y por periodos de tiempo variables, y bajo distintos regímenes regulatorios. En un ámbito de fragmentación normativa, este criterio unificador es el que más acertado se considera. (Sánchez Enrique, 2016, pág. 29); (Paulucci, 2016).

A lo largo del presente, se han considerado reclamos que interpelan al marco normativo de ambos países en estudio sobre múltiples aspectos de la problemática. La cuestión sindical es un fenómeno que se observa tanto en

Brasil como en Argentina, donde la experiencia de fiscalización e intervención gremial en las negociaciones ha sido exitosa, pero luego cooptada por el Estado, que se ha arrogado la exclusividad de la fiscalización o ha debilitado el ámbito de competencia de los sindicatos, y los mantiene al margen de las negociaciones que requieren del conocimiento de aquellos que conocen en primera persona las problemáticas de los trabajadores de cada sector productivo y cada región con sus particularidades, costumbres y necesidades. En parte, se requiere de un cambio normativo a fin de determinar con precisión mecanismos que aseguren la participación de los sindicatos sin injerencias excesivas del poder estatal, y que eliminen los factores por los que el estado debilita el alcance de acción de los sindicatos. Su fraccionamiento es otro aspecto que merece una revisión, a fin de que los trabajadores temporales cuenten con un sindicato fuerte unificado, que represente sus intereses particulares, cosa que actualmente no se ha logrado en ninguno de los dos países. La libertad de acción sindical está siendo limitada en ambos países, por lo que se requiere de mecanismos para asegurarla. Asimismo, las tareas de fiscalización de los sindicatos deben ser establecidas con mayor presencia, ya que, en Argentina estas son efectivas pero insuficientes, y en Brasil les han sido vedadas.

Paulucci (2016) sostiene que el cambio normativo debe reforzar los mecanismos de registro, pero que este sea controlado no solo por el Estado, sino en una acción tripartita en la que participen los trabajadores y los empleadores también. Ello ha sido una experiencia que en Argentina ha permitido lograr resultados efectivos, y es una modalidad que resultaría beneficioso recuperar, así como extrapolar su práctica en Brasil. Brasil requiere aún de un trabajo más exhaustivo, en el que en cada observación, se erige como principal problema el excesivo poder económico y político de los grandes latifundistas, que aún tienen el control de los tribunales laborales, lo que ya representa una crisis institucional que requiere de soluciones más complejas. La intervención de organismos nacionales ha hecho lo posible por revertir esta situación, y los sucesivos gobiernos han prometido buscar soluciones, pero la realidad demuestra que son los grandes latifundistas los que dictan sus propias leyes en el ámbito rural. Ello requiere no solo de un marco normativo que

contemple la transformación gradual y efectiva de la estructura agraria brasileña, sino de una fuerte voluntad política dispuesta a enfrentar un conglomerado de grandes poderes económico-políticos que han ejercido su poder prácticamente sin limitaciones durante décadas.

La ampliación de la cobertura y la incorporación de los activos rurales a los sistemas de protección social, son aspectos que dependen “ de decisiones de carácter más bien políticas. ” (Soto Baquero & Klein, 2012, pág. 12) Por lo que es en el refuerzo de los mecanismos republicanos y democráticos el primer lugar donde resulta necesario trabajar, a fin de generar el contexto normativo adecuado para que los reclamos sociales reciban respuestas políticas acordes a la realidad económica, productiva y social, y se evite por todos los medios, el gobierno limitado a los intereses impuestos por un sector determinado.

El cuerpo normativo es un medio para alcanzar metas de índole económica, social y para encauzar las acciones políticas hacia objetivos consensuados. Cuando Argentina suscribe en 2003 a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, proponiendo para el año 2015 reducir el desempleo a una tasa inferior al 10%, reducir la tasa de empleo no registrado a menos del 30% y erradicar el trabajo infantil, entre otras metas, fue a través de la sanción de leyes que puso en marcha los mecanismos para alcanzar estas metas. En función de ello, el gobierno nacional sanciona en 2004 la Ley 25.877 de Ordenamiento del Régimen Laboral a fin de promover el trabajo decente en las políticas públicas; en 2008 la Ley 26.930 de Prohibición del Trabajo Infantil y Protección del Trabajo Adolescente; la Ley de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas Nº 26.364/2008 y el Régimen de Trabajo Agrario (Ley 26.727/2011. También en 2009, el país suscribe al Pacto Mundial para el Empleo en la 98ª Conferencia Internacional del Trabajo, proponiéndose como estrategia la promoción del empleo de calidad como respuesta a la crisis económica. De acuerdo a este informe, el empleo asalariado no registrado constituye una de las problemáticas más graves del mercado de trabajo nacional, alcanzando al 33% en 2012. (Organización Internacional del Trabajo, 2013).

Dentro del área de Fiscalización del trabajo, la Ley de Promoción del trabajo registrado N° 28.877 ha fortalecido el papel del Estado nacional en la inspección laboral a través del Ministerio de Trabajo y su Unidad Especial de Fiscalización del Trabajo Irregular. La regulación del funcionamiento de las instituciones es otro factor que debe estar debidamente ordenado. Se ha mencionado las dificultades que representa para Argentina, la superposición de funciones o la falta de articulación de la labor de las entidades que trabajan en conjunto en pos del bienestar del trabajador rural. Sin embargo, a pesar de que individualmente cada cuerpo regulatorio sea consistente, si este presenta contradicciones o conduce a conflictos con otras instituciones, ya sea por superposición de funciones como por vacíos, las tareas de éstas perderán eficiencia y se desperdiciarán recursos que no se traducirán en beneficios para los trabajadores:

La experiencia de Argentina en los últimos años deja en evidencia que reducciones importantes de la informalidad requieren de una estrategia integral. Esta estrategia debe incluir desde el contexto macroeconómico hasta acciones específicas, como fueron el Programa Nacional de Regularización del Trabajo, la promoción y el apoyo a actividades económicas que generan empleo decente y los programas de sostenimiento del empleo durante la crisis, un conjunto de medidas que ha permitido prevenir transiciones no solo hacia el desempleo, sino principalmente hacia la informalidad. Sin embargo, dos circunstancias particulares obligan a fortalecer y rediseñar la estrategia. Las tasas de crecimiento de la economía se han ralentizado y la informalidad está concentrada en algunos núcleos de más difícil formalización, debido a sus características económicas y sociales. Por lo tanto, la tarea no es sencilla. Persiste una estructura productiva y social heterogénea, la rotación laboral y la incidencia del cuentapropismo es alta y todavía hay segmentos de la población con déficit educativos y de calificaciones. Es de esperar, entonces, que cambios en la composición del empleo sectorial tengan relativamente bajo impacto en la dinámica del ENR (efecto estructura por rama). (Bertranou, y otros, 2015, pág. 80).

Como se puede apreciar, la complejidad de los aspectos a regular es amplia, y el desafío de hacerlo de manera integrada y armónica es aún mayor. Sin embargo, el derecho es dinámico y perfeccionable, por lo que el incesante trabajo por coordinar sus distintos elementos es un trabajo en el que no puede haber pausa alguna ante tamaña tarea. Las acciones que inciden sobre el empleo no registrado en el sector rural, requiere, además de un cuerpo normativo armónico, de esfuerzos adicionales que trascienden el ámbito de la regulación laboral, para reducir la informalidad. Los cambios necesarios abarcan el ámbito cultural y la participación de toda la sociedad. El grado de tolerancia colectiva hacia la informalidad, la precariedad laboral y las grandes desigualdades, requiere de una sensibilización de la sociedad en todos los niveles y sectores. Mientras se amplía el desarrollo de programas que permitan reducir la informalidad laboral en áreas críticas como el ámbito rural, las acciones de mejora de las condiciones de vida de los segmentos sumergidos en la informalidad, pueden ir avanzando por carriles paralelos. El acceso a la protección social, la seguridad y la salud en el trabajo son aspectos que no se deben descuidar en el proceso de formalización de los sectores alejados del ideal de condiciones de trabajo dignas. (Bertranou, y otros, 2015).

La norma por sí sola no es suficiente si no se cuenta con mecanismos para hacerla efectiva. A modo de ejemplo, se menciona que si bien en Argentina la Ley 26.727 ha establecido mejoras en el nivel de control con el incremento del accionar del Ministerio de Trabajo y el gremio en su rol inspector, la metodología y su accionar no han dado lugar ni a legitimidad ni a eficacia, por lo que García y González sostienen que resulta necesario continuar avanzando en las tareas de fiscalización. Esta norma, si bien ha sido un avance modernizador del trabajo rural, conserva vestigios de un régimen rural antiguo en Argentina, en el que se continúa tolerando el trabajo a destajo (por tanto), sin obligar al pago bancarizado, y evita reglamentar situaciones muy habituales en la vida del productor rural como la mediería. Asimismo este Nuevo Estatuto del Peón propuesto por la Ley 26.727, tiene otros aspectos que podrían ofrecer mejores condiciones para el abordaje de la problemática rural desde el punto de vista institucional:

También es para destacar que se perdió una oportunidad al no haber unificado la entidad que relaciona trabajadores, empleadores y el Gobierno. En efecto, conviven la Comisión Nacional de Trabajo Agrario y el RENATEA. Aun cuando es cierto que ambas instituciones tienen tareas o funciones diferentes, nada impide que se unifiquen, lo que generaría un ahorro tanto del gasto público como de la burocracia necesaria para el registro de un trabajador agrario. Otro tanto sucede con el no avance de regulaciones específicas para subsectores con particularidades, como es la horticultura y su demanda de mano de obra. (García & González, 2015, pág. 9).

Se insiste en la necesidad de una coordinación de los diferentes instrumentos normativos en los distintos ámbitos que estos deben regular. Bertranou, y otros, (2015) sostienen que las intervenciones de la acción política deberían orientarse de manera simultánea a la simplificación de trámites para el registro de trabajadores, la relajación de algunos requerimientos o la reducción de ciertos costos en los sectores más vulnerables, lo que requiere permanentemente de la revisión normativa, y el incremento de los controles fiscales y la inspección del trabajo, pero ordenado sobre un criterio que no atente contra la viabilidad de los productores y evite así la subdeclaración como mecanismo de supervivencia. Ello requiere que el diseño de políticas y que los aspectos detallados de la regulación y de los programas a implementar, se adecúen al tipo de actividad y tamaño de cada unidad productiva, sin por ello continuar fragmentando el cuerpo normativo. Surge aquí un doble desafío que ni la normativa de Brasil ni la Argentina han alcanzado:

- La normativa integral, que considere los distintos aspectos que inciden en la irregularidad del empleo, abordando tanto el emergente como sus causas.
- La distinción normativa de tamaños de unidad productiva, tipo de producción, características de la región, entorno, tipo de mano de obra requerida y de tareas a desempeñar.
- La heterogeneidad normativa en la contemplación de las distintas realidades que se dan en los distintos puntos, regiones y sectores

productivos de cada país, articulada a una homogeneidad que permita contar con mecanismos de control del registro de trabajadores preciso, confiable y adecuado.

- Mecanismos que aseguren el cumplimiento de la normativa vigente previstos por Ley, más allá de la fiscalización y la sanción.

Se insiste, tomando en cuenta la experiencia de Paulucci (2016) en el rubro, en otro aspecto fundamental: la importancia de que el primer paso para exigir el cumplimiento de los derechos del trabajador sea su conocimiento. Por lo que la educación del trabajador respecto del alcance de sus derechos laborales, en aspectos tan básicos como la provisión de agua potable, la seguridad en el trabajo, los límites de las jornadas laborales o los montos mínimos que deben recibir como retribución a su trabajo, es un conocimiento que se debe poner al alcance de cada uno de los trabajadores rurales. En Brasil han sido las instituciones civiles las que han hecho esta labor de comunicación y concientización, ya que en la zona de Bahía la participación de los sindicatos ha sido mínima. En Argentina, la situación es otra:

Poco y nada se ha avanzado en este sentido, a pesar de la existencia de antecedentes que demuestran que con voluntad política ello es posible. Por ejemplo, el Estatuto del Peón en la época de Perón buscaba su cumplimiento a través de la toma de conciencia de los propios trabajadores. Por caso, se exigía que los montos de los salarios debían estar publicados en los lugares habituales de concurrencia de los trabajadores (ej.: FF.CC., salas de primeros auxilios, escuelas); de no estar la información visible, la responsabilidad era de dicha institución. Sería una medida sencilla y fácil de aplicar, y no por ello poco eficaz. Otra forma sería que los organismos como el RENATEA y aun los gremios de trabajadores agrarios informen acerca de los derechos de los trabajadores a través de diferentes medios: charlas, reuniones, encuentros, radio, televisión, diarios, etc. Estas tareas, tan obvias como imprescindibles, no se llevan a cabo, y así se delegan –al menos en el área hortícola regional– en personas más que en instituciones, que a través de prácticas

más ligadas a la militancia las llevan a cabo de la manera que puede. (García & González, 2015, pág. 14).

Este aspecto resulta fundamental, ya que el accionar del trabajador para el cumplimiento de sus derechos, constituye un complemento de importancia para poner en movimiento el poder de policía del Estado y asegurar el cumplimiento de sus derechos, que si el trabajador rural desconoce, no puede exigir.

11. CONCLUSIONES

En el presente estudio se ha propuesto dar respuesta a ¿Por qué los dispositivos legales establecidos por las constituciones de Argentina y Brasil, así como las leyes positivas, no consiguen garantizar los derechos fundamentales en las relaciones de trabajo del trabajador agrícola no registrado? También se ha procurado dilucidar si la función fiscalizadora del sindicato rural es eficiente para garantizar los derechos laborales de los trabajadores.

Se ha partido del supuesto de que es muy difícil el control de la aplicación de los derechos laborales fundamentales al trabajador rural agrícola sin registro de empleo, fundamentalmente por una ineficiencia o ausencia en el ejercicio de las tareas de fiscalización del Estado para disuadir al empleador de estas prácticas ilegales. Sin embargo en el transcurso del desarrollo de la investigación, se ha encontrado una multiplicidad de factores, algunos coincidentes en ambas regiones estudiadas, otros con bastantes divergencias entre un país y otro, que se encuentran en la raíz del problema y se inscriben en la categoría de las causas, directas o indirectas de la informalidad laboral en el sector rural, y que deben ser atendidos; además de los factores que propician la informalidad del sector, relacionados con la ineficacia para resolver el emergente, esto es, la violación de la ley laboral ya cometida.

Tanto Argentina como Brasil, han suscripto al Convenio n° 129 de la OIT, que trata de la inspección del trabajo agrícola, aunque fue ratificado por Argentina y

no por Brasil. Ello ha abierto a ambos países a la guía que proporcionan los derechos internacionales y que, en el caso de Argentina, son de observación obligatoria en virtud de su asimilación a la jerarquía constitucional. Brasil, por su parte, no ha ratificado el Convenio, pero ha incorporado a su Carta Magna los derechos fundamentales del trabajador. Argentina también los menciona en su Constitución pero de manera más general. Asimismo, se ha regulado en función de garantizar el cumplimiento de dichos derechos fundamentales profusamente en ambos países, aunque ello no se observe en resultados concretos, ya que muchos de esos derechos son sistemáticamente vulnerados en la población trabajadora rural de ambos países.

En esta función de hacer efectiva la ley, la fiscalización de parte del Estado a través de sus órganos administrativos resulta fundamental a fin de velar por la defensa de los derechos del trabajador rural agrícola. Se ha consultado a representantes del sector sindical de ambos países, y estos coinciden en que los estados brasileño y Argentino realizan esta labor deficientemente, sin aprovechar la posibilidad de dar mayor lugar a los sindicatos para realizar controles y fiscalizar. Por el contrario, en Brasil lo tienen prohibido, y en Argentina se les ha limitado bastante el poder de fiscalización. El problema es que el Estado, en sus tareas de fiscalización, se comporta de manera desarticulada, con superposiciones y vacíos en el trabajo disgregado entre sus múltiples organismos, y, en gran parte, por desconocimiento, termina siendo ineficiente.

Los sindicatos, ante ello, plantean que se les debe dar participación tanto en las tareas de fiscalización como en el diseño de normas, convenios y programas, ya que estos conocen la realidad de un vasto territorio en el que cada sector, cada tipo de producción, cada realidad regional, presenta particularidades muy diferentes que resulta necesario conocer, a fin de asegurarse de que las propuestas y exigencias resulten acordes a las verdaderas necesidades y realidades de cada región. Brasil y Argentina son dos países destacados por su gran extensión territorial, diversidad de climas, de biomas, de suelos, y es una constante el reclamo de la consideración de estas heterogeneidades en el diseño de la ley laboral. La realidad del

trabajador rural, a su vez es muy diferente de la de otros trabajadores, por lo que resulta necesario conocer en detalle sus particularidades a fin de ofrecer un marco normativo lógico y viable.

Tanto Argentina como Brasil, también han tenido desencuentros entre el estado y los sindicatos. En ambos países se ha restado poder e injerencia a los gremios por distintos mecanismos, y el Estado interviene en decisiones muchas veces llevando a propuestas inadecuadas, simplemente por desconocimiento. La participación sindical en todas las instancias resulta fundamental, por ser este tipo de agrupación cercana a los reclamos diarios de los trabajadores en su diversidad de contextos, lo que le permite ofrecer en las mesas de diálogo soluciones realistas y que efectivamente se puedan cumplir.

Argentina presenta algunas particularidades que atentan contra el cumplimiento de los derechos laborales en el sector rural. La fragmentación normativa y sindical es una de las más mencionadas a lo largo del presente estudio, ya que es característico del trabajador rural argentino, realizar tareas estacionales trasladándose por el territorio nacional, quedando a lo largo de un año bajo distintos regímenes normativos y bajo la tutela de distintos sindicatos, complejizando la observación y control de sus derechos y diluyendo aún más el poder de los sindicatos rurales que acogen a los trabajadores temporarios, sector más afectado por el flagelo de la informalidad laboral, con todos los perjuicios que ello conlleva y los abusos que ello permite. La Flexibilización también ha sido un factor negativo para este grupo especialmente vulnerable, ya que admite modalidades de contratación temporaria precarizadas, cosa que, gracias a la función homogeneizadora de la Libreta del Trabajador rural, es susceptible de algún tipo de control.

Brasil presenta otro tipo de problemas, que si bien se encuentran presentes en Argentina, no se manifiestan con la intensidad y la crudeza que sí presentan en aquél. La ineficiencia en materia de sindicalización es mayor en el estado y absoluta en los sindicatos, en parte porque la legislación le impide a los sindicatos realizar tareas de control, y en parte porque los organismos estatales procuran no enfrentarse a las grandes oligarquías latifundistas que detentan un

poder político y económico impenetrable en zonas como la sisalera, leading case en el presente estudio. El Estado se ha ocupado cuidadosamente en Brasil de limitar el poder de los sindicatos, direccionando su rol a actividades apolíticas, al punto que los intentos de contrarrestar el poder latifundista de los pequeños agricultores y trabajadores sin tierra del estado de Bahía, lo han hecho aislados, sin apoyo sindical.

Brasil enfrenta un poder que trasciende el ámbito del derecho laboral, y se inserta en la matriz misma de la estructura político económico histórico del país. Los grandes latifundios se basan como forma de mantener su poder, en la explotación del trabajador, la expropiación de tierras, la violencia y la baja productividad de sus tierras a fin de que la dinámica no afecte las relaciones tradicionales de completa sumisión de los pobladores ante las grandes empresas agrícolas y a los grandes propietarios de la tierra. Si bien el poder concentrado latifundista ha acaparado todos los resortes del poder, la sociedad civil, en su aislamiento y desprotección, ha dado lugar a la emergencia de asociaciones civiles a través de las cuales ha establecido redes de contención y colaboración entre los pequeños productores, a fin de dar valor a su trabajo y su producción. Lamentablemente estas asociaciones no alcanzan a beneficiar a todos los trabajadores, sino a los pocos que logran contratar en sus cooperativas, quedando el resto a merced de las exigencias de los grandes productores. Estos enormes esfuerzos de la sociedad civil, poco han logrado hacer, ante la realidad de una centenaria estructura de poder sólida y blindada, que garantiza la ineficiencia de las políticas públicas, fomenta el clientelismo, coopta el poder político local y reproduce los esquemas productivos y sociales que favorecen a los latifundistas y élites locales. Ante el blindaje que imponen estas familias influyentes, la fiscalización simplemente es impedida, y no llega a la región del sisal.

La influencia de las élites latifundistas de Brasil, alcanza también a las decisiones judiciales. Por ejemplo, dándose de baja mediante un mecanismo de sanción que daba buenos resultados, la Lista sucia o lista negra, que en Argentina funciona, pero en Brasil ha sido eliminada mediante un amparo, por lo que permite desregular a modo de desarmar los instrumentos previstos para

garantizar el cumplimiento de los derechos laborales. Otro modo en que el Poder Judicial trabaja en favor de las élites propietarias de la tierra, es naturalizando en sus sentencias la explotación y el trabajo esclavo, evitando sancionar a los que ignoran sistemáticamente la ley laboral. La experiencia ha dado cuenta de que solo se condena a aquellos infractores con poca tierra y escasa influencia en el poder político. El resto de los casos, queda impune, profundizando el control de estos grandes productores sobre el desprotegido trabajador, ante el cual el estado responde reforzando el poder de sus esclavizadores.

En Argentina se han denunciado connivencias de jueces en infracciones a la ley en algunas zonas, pero no existe una tendencia tan marcada como en Brasil a favorecer a los grandes dueños de la tierra y cuando se descubre trabajo esclavo, las sanciones se concretan, y se combate el trabajo no registrado. La pampa húmeda se diferencia mucho de la región sisalera brasileña, ya que es un sector altamente tecnificado, muy productivo, dinámico y que prácticamente no requiere mano de obra, por lo que no presenta los problemas que sí se observan en el cultivo del sisal, poco tecnificado y con gran demanda de mano de obra permanente. Los sectores que presentan problemas son los frutihortícolas, que se encuentran en pequeñas zonas bonaerenses, en donde la mano de obra familiar y temporaria es muy común, y se ha desarrollado una gran informalidad, más por falta de medios para enfrentar los costos que la regularización implica, que por un deseo manifiesto de maximizar sus ganancias a costa de los trabajadores. En Brasil, los motivos son aún más complejos: no se trata de apropiarse de la plusvalía del trabajador como modo de ganar mayor renta, sino que este es un mecanismo de dominación, ya que mantener al trabajador rural en la pobreza extrema y prácticamente reducido a la esclavitud, es lo que garantiza que las relaciones de poder se mantengan inalterables.

En Argentina, para asegurar el cumplimiento de los derechos fundamentales del trabajador rural, se requiere de una revisión de la normativa, a fin de contemplar las distintas realidades y a su vez articular la labor de los organismos de control y fiscalización. Asimismo, se requiere profundizar en los

mecanismos que permiten diferenciar la situación de distintos tipos y tamaño de productores a fin de facilitar el ingreso a la economía formal de los pequeños productores, con incentivos impositivos y demás.

En Brasil, el trabajo a hacer es mucho más profundo, ya que lo que hay que combatir, en primer lugar, es la perpetuación de la estructura hegemónica de los latifundios, y controlar el poder político que estos grandes productores ejercen en detrimento del funcionamiento de los organismos estatales que se deben ocupar de hacer cumplir la ley.

La acción conjunta del gobierno y la sociedad civil, resulta necesaria para disolver los grupos oligárquicos, bajo la conducción de una firme voluntad política para democratizar las relaciones rurales y traerlas a los estándares del siglo XXI.

En Argentina la alta tecnificación de los campos ha desplazado grandes cantidades de mano de obra rural, que no ha sido absorbida en su totalidad por otros sectores ajenos a las prácticas de cultivos extensivos. Ante ello, la diversificación, la educación y la capacitación constituyen vías que pueden ayudar a los trabajadores desplazados a encontrar otros ámbitos en los que desempeñar tareas laborales que les permitan vivir con dignidad.

En Brasil, la tecnificación es casi nula, lo que requiere de trabajos penosos y con alta exigencia y exposición física a accidentes, ya que se trabaja con instrumentos cortantes y maquinarias rústicas peligrosas, por lo que los cortes y amputaciones son una realidad cotidiana, que se soporta sin cobertura social ni sanitaria, en total desamparo.

La concientización de los trabajadores respecto de cuáles son sus derechos, es otro aspecto que no puede ser dejado de lado, ya que éste no puede exigir derechos que desconoce. En este aspecto, los sindicatos tienen una enorme tarea por delante.

Los sindicatos brasileños dependen del sostén económico estatal, por lo que se han reducido mucho en sus libertades. Este es otro aspecto que se debe revisar desde lo normativo, a fin de que éstos se financien sin una intervención tan marcada del poder estatal de turno.

Las tasas de informalidad rural en Argentina rondan el 50% y han llegado a alcanzar el 75% en periodos de crisis. En Brasil, se encuentra alrededor del 80%. Ello da cuenta de un franco y sistemático incumplimiento de la normativa legal vigente.

Los sindicatos argentinos señalan que existe buena predisposición de los productores para regularizar su situación, cosa que ocurría con mayor asiduidad cuando los sindicatos tenían una relación más directa en las tareas de negociación y fiscalización. Sin embargo, ante esta situación, de productores generalmente con producciones rentables, la fiscalización es una respuesta adecuada, y ante los productores que luchan por su subsistencia, los incentivos constituyen una vía alternativa para hacer posible la regularización de todos los trabajadores.

En Brasil, los grandes latifundios no suelen ser altamente productivos, por lo que el abordaje es totalmente diferente. En territorio sisalero el 85% de la población vive con bajos ingresos o directamente sin ellos. A pesar de que tanto la producción argentina como la brasileña es en su mayoría de exportación y está ligada a los mercados internacionales, la baja productividad de los grandes latifundios es un factor que se puede revertir diversificando la producción, tecnificando, o más importante: dando acceso a la tierra a las pequeñas familias o a los trabajadores bajo modalidades de renta, mediería, etc. Aunque el reclamo de los trabajadores, es el de incorporar mecanismos de redistribución de la tierra, ya que muchos latifundios se han construido expropiando tierras a pobladores originales a través de actos de violencia que llegan incluso a concluir en la muerte de los pobladores rurales, aún hasta el día de hoy, con total impunidad.

En Brasil es el trabajador permanente el más habitual en el trabajo para la producción sisalera, mientras que en Argentina, es el trabajador temporal el más afectado ya que se desempeña en producciones menos rentables, como la frutihortícola. Brasil debe trabajar sobre la estructura misma de sus grandes contrastes en el mundo agrario, y Argentina puede enfocarse en cuestiones más puntuales, como la regulación de los trabajadores temporales, conforme a sus necesidades reales. Brasil, principalmente, debe enfrentarse, ante todo, al poder de los grandes señores latifundistas, que se impone por sobre cualquier intento de penetrar en el territorio del sisal para hacer cumplir la ley laboral, para lo cual actualmente solo cuenta con la resistencia de los movimientos sociales locales que lucha contra un entramado de poder que ni toda la fuerza del estado federal puede o quiere enfrentar.

Ello implica una profunda reforma agraria, política y económica, además de los cambios normativos que semejante cambio requiere. De otro modo, su cuerpo normativo laboral, tan completo en cuanto al reconocimiento de los derechos fundamentales del trabajador, continuará siendo letra muerta, ante una realidad en la que la explotación y la esclavitud, constituyen la base de la estructura agraria actual de la región sisalera.

Argentina enfrenta problemas menos graves, ya que, si bien se han denunciado casos de explotación laboral, no se vive una cotidianeidad de luchas sangrientas, asesinatos y expropiaciones sistemáticas como en Brasil. Con ajustes normativos y una mejor articulación institucional, además de mayor participación de los sindicatos en la toma de decisiones a nivel normativo y de acuerdos, las mejoras pueden resultar significativas en un plazo razonable.

El Activismo social es una respuesta que ha dado la población brasileña ante la ausencia de presencia estatal. En Argentina, la población rural se encuentra muy aislada y los trabajadores más vulnerables se encuentran en constante migración, por lo que las soluciones institucionales se consideran las más adecuadas, en especial en cuanto a la unificación de los sindicatos que receptan a este tipo de trabajador estacional.

La Acción sindical es un factor fundamental para apuntalar el éxito de las medidas conducentes hacia la regularización del mercado laboral rural, para lo que los sindicatos deben luchar por su independencia y por recuperar su protagonismo en las tareas de fiscalización y su posición central en las mesas de negociación entre empleados, trabajadores y el Estado.

Las políticas hacia el mercado de trabajo, han sido una de las formas en que las acciones de gobierno procuran intervenir en este a fin de corregir distorsiones. Sin embargo, cuando las políticas estatales se realizan sin considerar las demás dimensiones intervinientes en la ecuación: Mercado de tierras, de insumos, de productos y de capitales, y no evalúa cómo afectan cada una de éstas al gran, mediano y pequeño productor, puede generar el efecto contrario al deseado, introduciendo distorsiones nuevas. Es por ello, que las políticas de acción sobre el mercado de trabajo, se deben abordar de manera integral, sobre la base de un profundo estudio previo de la realidad completa que enfrentan los productores, a fin de proponer soluciones viables, que no atenten contra sus posibilidades de subsistir. En este sentido, el cuerpo normativo, constituye un medio para alcanzar metas económicas, sociales y para encauzar las acciones políticas hacia los objetivos consensuados. Es por ello que el fortalecimiento de la presencia estatal no se limita a una labor de prohibición y fiscalización, sino también de estímulo, de corrección de distorsiones, de prevención de abusos, y de regulación, dentro de los límites que la democracia liberal impone, de los mercados en general.

Lo que deja en claro el presente estudio, es que no existen recetas aplicables a todos los países, y que la heterogeneidad y complejidad de cada realidad productiva, económica, política y social, requiere de la regulación de instrumentos específicos para corregir las distorsiones presentes en cada entramado complejo, a fin de impedir que la variable de ajuste sea el trabajador. Brasil cuenta entre las causas de sus altísimos índices de trabajo no registrado, con cuestiones de fuerte raigambre histórica, que se han perpetuado manifestándose en una estructura agraria profundamente desigual, que necesita de grandes cambios para lograr modificar la realidad de sus trabajadores rurales. Allí las organizaciones sociales realizan una invaluable

labor, ya que se trata de grupos poblacionales concentrados en extensiones productivas que requieren de numerosa mano de obra permanente, y es el poder estatal el que actúa en defensa de los intereses de los grandes productores, y desactiva todos los mecanismos previstos por la ley para proteger al trabajador (fiscalización, justicia, poder de policía).

Argentina, si bien requiere de profundos ajustes institucionales y presenta índices de trabajo irregular preocupantes, tiene en la región pampeana bonaerense una realidad dinámica, que da impulso a toda la economía del país, por lo que la atención está mucho más puesta en lo que hace o deja de hacer ese sector del campo. Zonas más alejadas presentan situaciones de mayor desprotección a los trabajadores rurales, pero los mecanismos de fiscalización y asistencia judicial, si bien con niveles de eficacia alejados de lo óptimo, funcionan aceptablemente. Una mayor participación de los sindicatos, labores de concientización en el trabajador rural, y una mejor protección normativa del trabajador estacional, son los primeros pasos que pueden garantizar que los esfuerzos por incentivar la inserción de los productores más pequeños en el sistema formal, den mayores resultados.

Se sugiere, como un paso a más para a la institucionalización de soluciones normativas, la importancia de armonización por medio de la ratificación de convenios de la OIT en la materia entre ambos países integrantes del Mercosur a fin de lograr los mecanismos de integración económica que si propone el Tratado de Asunción, firmado en 26 de marzo de 1991 que creó el Mercosur.

Otro aspecto que se ha mencionado, es el del aprovechamiento de la sensibilización de la población en general por la cuestión ambiental y la protección de los grupos más vulnerables. En función de ello, bajo los parámetros de la Responsabilidad Social Empresaria, existen iniciativas regionales e internacionales de certificación de productos libres de trabajo esclavo y de prácticas abusivas en lo laboral, así como producción con baja huella ecológica y bajo criterios de respeto por la ley. Este tipo de certificación resulta otra herramienta más, y ha dado resultados satisfactorios en ciertos grupos productivos, como la industria yerbatera en Argentina, que con sus

campañas de certificación de productos libres de trabajo infantil y demás, ha logrado concientizar a los productores y aún reducir los índices de trabajo no registrado. La industria vitivinícola ha hecho lo propio con óptimos resultados, y los productores de arándanos también.

Las soluciones encontradas, no son factibles de extrapolación sin un trabajo de análisis de todas las dimensiones intervinientes en los procesos que derivan en la conformación de una estructura rural con altos índices de violación de los derechos laborales. Como se ha observado, y en ello han insistido mucho los representantes sindicales entrevistados, cada realidad es única y requiere de respuestas adaptadas a cada país, cada región, cada tipo productivo, cada clima, etc. La respuesta es, entonces, poner el énfasis en el conocimiento cabal de la realidad de cada colectivo de trabajadores que se procura ayudar, y regular conforme a la realidad de éstos, a fin de promover prácticas viables para los productores, y satisfactorias para la dignidad del trabajador rural.

12. Bibliografía

(2004). Programa de erradicação do trabalho infantil: Manual de Orientações. Brasília: Secretaria de Estado de Assistência Social – SEAS / Ministério da Previdência e Assistência.

(2010). Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo. Conferencia Internacional del Trabajo 99ª. Ginebra: Oficina Internacional del Trabajo.

(2016). Situación y Evolución del Trabajo asalariado en el sector privado. Buenos Aires: Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social .
2015. Goiânia: Comissão Pastoral da Terra.

Ackerman, M. E. (2007). Tratado de Derecho del Trabajo: Estatutos y regulaciones especiales: régimen nacional del trabajo agrario. Santa Fe: Rubinzal-Culzoni.

Álvarez, Maximiliano y otros c/Cencosud S.A., 533 (2306 07 de 12 de 2010).

- Alves da Silva, A., Oliveira, L. M., Rizzante Gallazzi, A. M., Lima Silva, A. C., Rodrigues Costa, A. E., Valmecí de Souza, J., y otros. (2012). *Conflitos no campo Brasil*. Goiânia: Secretaria Nacional da CPT.
- Alves Pereira Mourad, L. A. (2015). *O trabalho escravo e a ocorrência da escravidão rural contemporânea no Rio Grande Do Sul*. Santa María: UFSM Universidade Federal de Santa Maria.
- América Latina y el Caribe. Lima: Organización Internacional del Trabajo.
- Andersen, M. (2003). *¿Es la certificación algo para mí?* San José: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación.
- Araya Pochet, C. (1995). *Historia de América en perspectiva latinoamericana*. San José de Costa Rica: EUNED.
- Arce, A. (2013). *Género, Trabajo y Representaciones del Mundo Rural. El agro pampeano y el norte argentino (1930-1960)*. Recuperado el 19 de 07 de 2015, de Universidad Nacional de Quilmes.: <http://ppct.caicyt.gov.ar/index.php/estudiosrurales/article/download/4248/3919>
- Arese, C. (Julio-Diciembre de 2015). El acceso a tutela judicial efectiva laboral. *Revista Latinoamericana de Derecho Social*, 21 .
- Argencert. (2015). *Manual de Normas de Producción Orgánica*. Buenos Aires: Certi bio
- Argentina: mal uso de los agroquímicos provoca problemas de salud. (21 de 10 de 2013). Recuperado el 07 de 05 de 2017, de Infobae: <http://www.infobae.com/2013/10/21/1517756-argentina-mal-uso-los-agroquimicos-provoca-problemas-salud/>
- Asociación de Trabajadores del Estado, A 598 XLIII (Corte Suprema de Justicia de la Nación 18 de 06 de 2013).
- Ávila Sánchez, H. (1999). La dinámica actual de los territorios rurales en América Latina. *Scripta Nova*, 45 (40).
- Badeni, M. (16 de 10 de 2016). El trabajo infantil limita el futuro. Recuperado el 16 de 10 de 2016, de Diario La Prensa: <http://www.laprensa.com.ar/445259-El-trabajo-infantil-limita-el-futuro.note.aspx>
- Baptista, E. (2009). *Emprendimientos comunitarios, racionalidad económica y vínculos solidarios*. XXVII Congreso de la Asociación Latinoamericana

- de Sociología. VIII Jornadas de Sociología de la Universidad de Buenos Aires .
- Barbosa, W. (09 de 10 de 2014). Salir de la informalidad en Brasil, un camino "simple" hacia el empleo formal. Recuperado el 20 de 09 de 2016, de Organización Internacional del Trabajo: http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/features/WCMS_312177/lang-es/index.htm
- Barros, A. M. (2012). Curso de Direito do Trabalho. San Pablo: Ltr.
- Barroso, L. R. (1996). O direito constitucional e a efetividade de suas normas: limites e possibilidades da Constituição Brasileira. Rio de Janeiro: Renovar.
- Barroso, L. R. (2010). Curso de Direito Constitucional Contemporâneo. San Pablo: Saraiva.
- Batich, M. (2004). Previdência do trabalhador: uma trajetória inesperada. São Paulo em Perspectiva, 18 (3).
- Beltrao, M. M. (2009). Trabalho informal e desemprego: Desigualdades sociais. . Recuperado el 19 de 07 de 2015, de <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8132/tde-05032010-130328/pt-br.php>.
- Benencia, R. (2004). Trabajo y prejuicio. Violencia sobre inmigrantes bolivianos en la agricultura periférica de Buenos Aires ». Revue européenne des migrations internationales, 20 (1).
- Benencia, R., & Quaranta, G. (2006). Los mercados de trabajo agrarios en Argentina: demanda y oferta en distintos contextos históricos. Estudios del Trabajo (42), 81-119.
- Bertello, F. (14 de 03 de 2015). Hay 1,5 millones de empleos en riesgo, advirtió el campo. Recuperado el 19 de 07 de 2015, de La Nación Negocios: <http://www.lanacion.com.ar/1776078-hay-15-millones-de-empleos-en-riesgo-advirtio-el-campo>
- Bertello, F. (30 de 05 de 2016). Denuncian irregularidades en el Renatea, un ente para el campo, que controló el kirchnerismo y desvió \$15 millones. Recuperado el 18 de 09 de 2016, de La Nación: <http://www.lanacion.com.ar/1903848-denuncian-irregularidades-en-el-renatea-un-ente-para-el-campo-que-controlo-el-kirchnerismo-y-desvio-15-millones>

- Bertranou, F., Casanova, L., & Lukin, T. (2013). La formalización laboral en Argentina: Avances recientes y el camino por recorrer . Recuperado el 19 de 07 de 2015, de http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---ilo-buenos_aires/documents/publication/wcms_228768.pdf.
- Bertranou, F., Casanova, L., Beccaria, A., Coatz, D., Contartese, D., Funes de Rioja, D., y otros. (2015). Caminos hacia la formalización laboral en Argentina. Buenos Aires: Organización Internacional del Trabajo.
- Biagi, M. C. (2012). Pesquisa Científica. Roteiro prático para desenvolver projetos e teses. Curitiba: Juruá.
- Biblioteca%20Virtual/_archivos/000005-Género%20y%20Jóvenes/060100-Estado%20del%20arte%20de%20la%20investigación%20sobre%20Juventud%20Rural%20(Kessler).PDF
- Bonavides, P. (1980). Do estado liberal ao estado social. Rio de Janeiro: Forense. Bonavides, P. (2001). Curso de Direito Constitucional. San Pablo: Malheiros.
- Brito Oliveira, M. A. (enero-marzo de 2015). Gestao e território: O papel da sociedade civil organizada em um recorte do semiárido Baiano. Revista CCCSS Contribuciones a las Ciencias Sociales (27).
- Bulacio, L. (08 de 2006). Riesgos en el trabajo rural. Revisa Agromensajes(19).
- Canessa Montejó, M. F. (2006). Los Derechos Humanos Laborales en el Derecho Internacional. Instituto de Derechos Humanos "Bartolomé de las Casas". Universidad Carlos III de Madrid : Madrid.
- Canuto, A., da Silva Luz, C. R., & Rodrigues Costa, E. (2015). Conflitos no Campo – Brasil 2014.
- Canuto, A., da Silva, C. R., Luz, T., & Pinto Andrade, V. (2016). Conflitos no Campo Brasil
- Carcía, M., & Lemmi, S. (2011). Legislative Policy and Work in Horticulture in the Metropolitan Area of Buenos Aires (Argentina). Origins and Continuities of Labor Preorganization in Horticulture. Secuencia, 79 .
- Carneiro Morais, G. d., Araújo Braz, C., de Souza, J. E., Couto, J., Araújo Queiroz, J. A., & Souza de Oliveira, G. (2010). Defensa de la igualdad y de los derechos humanos en la Región Sisalera (Brasil). Ciudades para un Futuro más Sostenible .

- Carrion, V. (2011). Comentários à consolidação das leis do trabalho legislação
- Castro García, M. C., Comelli, M., Ciccolella, M., Negro, M. D., Godfrid, J., & Schwartz, A. (2009). El campo en conflicto: disputas y sentidos en torno a la Resolución N° 125. Instituto de Investigaciones Gino Germani UBA , 1-27.
- Castro Vítores, G. (2004). Eficacia de la Norma Jurídica. Repositorio Documental . Centro por la Justicia y el Derecho Internacional. (2015). Caso Fazenda Brasil verde vs Estado de Brasil. Recuperado el 25 de 09 de 2016, de CEJIL: https://www.cejil.org/sites/default/files/cejil_punteo_fbv.pdf
- Centro de Información Judicial. (24 de 11 de 2015). La Corte admitió un cuestionamiento a la ley que en 2011 le quitó a los trabajadores y empleadores rurales la administración del seguro por desempleo de ese sector. Recuperado el 12 de 01 de 2017, de Centro de Información Judicial - Agencia de Noticias del Poder Judicial: <http://www.cij.gov.ar/nota-19110-La-Corte-admiti--un-cuestionamiento-a-la-ley-que-en-2011-le-quit--a-los-trabajadores-y-empleadores-rurales-la-administraci-n-del-seguro-por-desempleo-de-ese-sector.html>
- Calderón, H. (1990). America Latina Y El Caribe Pobreza Rural Persistente. San José de Costa Rica: Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura IICA.
- Colombo, M., & Mángano, M. A. (2014). Trata Laboral en Argentina. Buenos Aires: Ministerio Público Fiscal.
- Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones . (2008). Aplicacion de Las Normas Internacionales Del Trabajo 2008. Ginebra: Organización Internacional del Trabajo.
- Comisión de Observación Organización Internacional del Trabajo. (2010). Observación (CEACR) - Adopción: 2009, Publicación: 99ª reunión CIT - Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) - Brasil (Ratificación : 1957). Recuperado el 20 de 09 de 2016, de

http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:13100:0::NO::P13100_COMMENT_ID:2308723

Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (1999). Seguimiento de las recomendaciones formuladas por la CIDH en informes sobre países - Brasil. Washington: Organización de los Estados Americanos.

Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. (10 de 2008). Enfermedades Profesionales de los Agricultores. Recuperado el 07 de 05 de 2017, de <http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Instituto/Comision/GruposTrabajo/ficheros/folleto%20enfermedades.pdf>

Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA) . (2016). Recuperado el 18 de 09 de 2016, de Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social: [http://www.trabajo.gob.ar/agrario/complementar /jurisprudência](http://www.trabajo.gob.ar/agrario/complementar/jurisprudencia). (36 ed.). San Pablo: Saraiva.

Constitución de la República Federal de Brasil. (1988). Recuperado el 19 de 07 de 2015, de Georgetown University Political Database of the Americas: <http://pdpa.georgetown.edu/Constitutions/Brazil/esp88.html>

Construcción y agro, al tope del empleo informal. (12 de 11 de 2013). Recuperado el 20 de 09 de 2016, de Ámbito Financiero: [http://www.ambito.com/715612- construccion-y-agro-al-tope-del-empleo-informal](http://www.ambito.com/715612-construccion-y-agro-al-tope-del-empleo-informal)

Cooperación en el Mercosur. (2014). Recuperado el 07 de 05 de 2017, de Mercosur: <http://www.mercosur.int/innovaportal/v/6304/7/innova.front/objetivos-y-principios>

Cordeiro, W. d. (2000). A regulamentação das relações de trabalho individuais e coletivas no âmbito do Mercosul. . São Paulo: LTr.

Correa, C. (14 de 10 de 2014). Proyecto del Instituto Camargo Corrêa fortalece la comunidad productora de sisal en Bahia . Recuperado el 18 de 09 de 2016, de Tiempo de Emprender: <http://www.camargocorrea.com.br/es/el->

grupo- camargo-correa/comunicacion/noticias/proyecto-del-instituto-
camargo-correa- fortalece-la-comunidad-productora-de-sisal-en-
bahia.html

- Craviotti, C., & Palacios, P. (2013). Estrategias de productores familiares en contextos socio-productivos adversos: La fruticultura familiar en el noreste de la provincia de Buenos Aires, Argentina. *Sociología del Trabajo* (20), 259-279.
- de Celis, C., & Arizmendi, J. (16 de 06 de 2016). Registración del Trabajador Rural: ¿qué hay que saber? Recuperado el 20 de 08 de 2016, de Agrofy News: <http://news.agrofy.com.ar/noticia/158781/registracion-trabajador-rural-que-hay-que-saber>
- De Diego, J. A. (2002). *Manual de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social* (5 ed.). Buenos Aires: Abeledo Perrot.
- de Moraes Silva, M. A., Medeiros de Melo, B., & Vasconcellos de Verçozza, L. (2011). Os (não direitos) dos trabalhadores rurais: “A permanência do intolerável”. En C. R. da Silva Luz, M. Carrijo Viana, P. Pereira, A. Alves da Silva, L. M. Oliveira, C. Lima Silva, y otros, *Conflictos no Campo Brasil* (págs. 90-98). Goiânia: Secretaria Nacional da CPT.
- Decreto 1714/2014: Ley 26940 – Promoción del trabajo registrado y prevención del fraude laboral . (2014). Recuperado el 19 de 07 de 2015, de Económicas: <http://eco-nomicas.com.ar/3613-ley-26940-promocion-del-trabajo-registrado-y-prevencion-del-fraude-laboral>
- Defensa de la igualdad y de los derechos humanos en la Región Sisalera (Brasil). (2010). Recuperado el 19 de 07 de 2015, de Ciudades para un Futuro más Sostenible : <http://habitat.aq.upm.es/dubai/10/bp2594.html#4>
- Delfini, M., & Pinazo, G. (2014). El empleo informal en la última década. III Jornadas Nacionales sobre estudios regionales y mercados de trabajo. San Salvador del Jujuy: Facultad de Cs. Económicas y Unidad de.
- Delgado, M. G. (2014). *Curso de direito do trabalho*. San Pablo: Ltr.
- Delpuch Fernández, H., Grenetto, G., Asta, G., Currao, C., & Coppia, W. (2006). El Sistema Laboral Argentino, evolución e impacto sobre los costos Empresariales. Recuperado el 09 de 10 de 2014, de Horacio Fernandez

Delpech:[http://www.hfernandezdelpech.com.ar/PUBLICAtrabajosSistemaLaboralArgeti no.html](http://www.hfernandezdelpech.com.ar/PUBLICAtrabajosSistemaLaboralArgeti%20no.html)

- Dezemone, M. (2007). Impactos da era Vargas no mundo rural: Leis, Direitos e
- Duarte, D. (2011). Los Derechos Fundamentales del Trabajador: La nulidad del despido discriminatorio y la reinstalación del trabajador. XVII Jornadas Rioplatenses de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Córdoba: Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social - Asociación Uruguay de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.
- Durate, D. (14 de 05 de 2011). Los Derechso Fundamentales del Trabajador: La nulidad del despido discriminatorio y la reinstalación del trabajador. Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social .
- Dutra Neto, C. (2005). Sudoeste del Estado de Bahía, un espacio en transformación. Problemas sociales y regionales en América Latina. Estudio de Casos , 27-48.
- Egan, J. F. (2013). Del Estatuto del Peón al Régimen de Trabajo Agrario: Avances y retrocesos en la regulació ndel trabajo rural. X Jornadas de Sociología .
- El campo está peor que en 2008 cuando estalló el conflicto por la 125. (23 de 03 de 2014). Recuperado el 19 de 07 de 2015, de Diario Hoy: [http://diariohoy.net/politica/el-campo-esta-peor-que-en-2008-cuando-estallo- el-conflicto-por-la-125-23520](http://diariohoy.net/politica/el-campo-esta-peor-que-en-2008-cuando-estallo-el-conflicto-por-la-125-23520)
- El gran éxodo: el campo se vacía y huye a ciudades hacinadas. (17 de 06 de 2015). Recuperado el 19 de 07 de 2015, de La Nación Negocios: <http://www.lanacion.com.ar/1802453-el-gran-exodo-el-campo-se-vacia-y-huye-a-ciudades-hacinadas>
- Escalante, R., & Rodríguez, C. (enero-marzo de 1996). La Agricultura latinoamericana:
- Fabio, J. F. (2010). Regulación social de la transitoriedad. El mercado de trabajo en la producción de uvas en Mendoza, Argentina. Cuadernos de Desarrollo Rural, 64 , 31-35.
- Faiguenbaum, S., Ortega, C., & Soto Baquero, F. (2013). Pobreza rural y políticas públicas en América Latina y el Caribe Tomo I. Santiago de Chile: FAO.

- Federación Argentina de la Industria Gráfica y Afines. (2014). Análisis de las leyes 26.940 y 26.941 (Promoción del Trabajo Registrado y Prevención del Fraude). Recuperado el 19 de 07 de 2015, de http://www.faiga.com/media/2396_Análisis%20leyes%20laborales.pdf
- Feito, M. C. (2005). Antropología y Desarrollo Rural, contribuciones del abordaje etnográfico a los procesos de producción e implementación de políticas. *Avá Revista de Antropología*, 1 (6), 1-26.
- Fernández Besada, A. (29 de 5 de 2008). Las Certificaciones Sociales en el Agro. Recuperado el 20 de 09 de 2016, de Instituto de Ética y Calidad en el Agro: <http://eticagro.org/modules/smartsection/makepdf.php?itemid=61>
- Ferrajoli, L. (2001). *Los Fundamentos de los Derechos Fundamentales*. Madrid: Trotta.
- Ferrajoli, L. (2002). *Direito e razão: teoria do garantismo penal*. San Pablo: Revista dos Tribunais.
- Ferrajoli, L. (2004). *Derechos y Garantías: la ley del más débil*. Madrid: Trotta.
- FETAG-BA. (2016). Recuperado el 07 de 08 de 2016, de <http://fetag-ba.org.br/category/secretarias/secretaria-de-assalariados/>
- Fierro, M. (octubre de 2016). Preocupación por el empleo y el trabajo en negro en el Foro de Agronegocios. Recuperado el 18 de 09 de 2016, de Primicias Rurales: <http://www.ruralprimicias.com.ar/noticia--preocupacion-por-el-empleo-y-el-trabajo-en-negro-en-el-foro-de-agronegocios-27621.php>
- Figueiredo, A., Mineiro, A., Santos, A., & Freitas, A. (2012). *A informalidade no mercado de trabalho na Bahia nos anos 2000*. San Pablo: DIEESE - Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos.
- Fonallera, M. L. (2012). *Situación y perspectivas de las buenas prácticas agrícolas de la*. Montevideo: Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura.
- Fontenele, C. (03 de 02 de 2016). El Estado brasileiro será juzgado en la Corte Interamericana por denuncias de trabajo esclavo. Recuperado el 25 de 08 de 2016, de Adital: <http://site.adital.com.br/site/noticia.php?lang=ES&cod=87963>
- França, V. d. (2000). *Eficiência administrativa*. Revista de Direito Administrativo (220).
- García Holgado, B. (2011). *Validez, Eficacia y la Norma Hipotética*

- Fundamental en el pensamiento de Hans Kelsen. Ambrosio Gioja (5), 462-474.
- García, M. (2014). Fuerza de trabajo en la horticultura de La Plata (Buenos Aires, Argentina). *Trabajo y Sociedad* (22), 67-85.
- García, M., & González, E. (2015). El nuevo Régimen de Trabajo Agrario. Desajustes y propuestas de adecuación para el sector hortícola del periurbano bonaerense sur. (U. N. Educación., Ed.) *Mundo Agrario*, 16 (33).
- García, M., & Lemmi, S. (2011). Política legislativa y trabajo en la horticultura del Área Metropolitana de Buenos Aires (Argentina) Orígenes y continuidades de la precarización laboral en la horticultura. *Secuencia* (79), 91-112.
- Gil, A. C. (2001). *Métodos e técnicas de pesquisa social* (6 ed.). San Pablo: Atlas.
- Gomes, M. (2002). *Velhas secas em novas Sertões*. Brasília: IPEA.
- Goiânia: Comissão Pastoral da Terra.
- Gómez, J. (26 de Junio de 2008). El problema de investigación . Recuperado el 04 de Mayo de 2014, de Sobre nuevas rutas de pensamiento: <http://blog.pucp.edu.pe/item/25155/el-problema-de-investigacion>
- Gonçalves, C. R. (2010). *Direito civil brasileiro: parte general*. San Pablo: Saraiva.
- Goodman, A. (1961). Snowball Sampling. *The Annals of Mathematical Statistics* , 32:148-170.
- Grisolia, J. A. (2003). El Derecho del Trabajo en Tiempos de crisis. Recuperado el 2016, de Intersindical: <http://www.intersindical.com/materias/page/contenido/04Apuntes/Sociedad/Trabajo%20en%20tiempos%20de%20crisis.htm>
- Grisolia, J. A. (2013). *Manual de derecho laboral*. Buenos Aires: Abeledo-Perrot.
- Haimovich, A., Ventura, A. J., Rameri, A., Lozano, C., & Raffo, T. (2015). *Análisis del Mercado Laboral y las Condiciones de Vida Año 2014*. Buenos Aires: Instituto IPYPP Pensamiento y Políticas Públicas.
- Grisolia, J. A. (2013). *Tratado de derecho del trabajo y de la seguridad social*. Buenos Aires: Abeledo-Perrot.
- Harari, I. (05 de 05 de 2015). Motivos para que no festeje el trabajador. Recuperado el 18 de 09 de 2016, de El Economista:

<http://www.eleconomistaamerica.com.ar/politica-eAm-ar/noticias/6684988/05/15/Motivos-para-que-no-festeje-el-trabajador.html#.Kku8afkV5lspw3X>

- Hernández Cruz, A. (2015). Eficacia constitucional y derechos humanos. Distrito Federal México: Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
- Hertford, R., Echeverri Perico, R., & Moscardi, E. (2000). Papel Estratégico Del Sector Rural en El Desarrollo de América Latina. Cartagena de Indias: IICA Biblioteca Venezuela.
- Honorable Cámara de Diputados de la Nación. (2015). La situación de los derechos humanos en la República Argentina. Recuperado el 18 de 09 de 2016, de http://www4.hcdn.gob.ar/Informe_DDHH.pdf
- Hoyos, A. (1987). La flexibilidad del derecho laboral tradicional. Tendencias internacionales recientes. Revista derecho laboral, Montevideo. (147).
- IDESA. (03 de 05 de 2015). Sólo 1 de cada 5 personas en edad activa tiene un empleo de calidad. Informe 598. Recuperado el 25 de 09 de 2016
- IDESA. (25 de 09 de 2016). Informales ganan sólo la mitad de la línea de pobreza. Recuperado el 18 de 10 de 2016, de <http://www.idesa.org/informes/1499>
- IDESA. (31 de 07 de 2011). Sólo 1 de cada 4 trabajadores rurales está registrado. Informe N° 400. Recuperado el 18 de 09 de 2016, de <http://www.idesa.org/sites/default/files/documentos/2011-07-31%20Informe%20Nacional.pdf>
- Iglesias, G. I. (24 de 07 de 2013). Asalariados rurales: la precariedad permanente. Recuperado el 19 de 07 de 2015, de Rel UITA: <http://www.rel-uita.org/index.php/es/sindicatos/item/3567-asalariados-rurales-la- precariedad-permanente>
- INFOJUS. (2011). Sistema Argentino de Información Jurídica . Recuperado el 19 de 07 de 2015, de <http://www.infojus.gob.ar/26727-nacional-trabajo-agrario-Ins0005710-2011-12-21/123456789-0abc-defg-g01-75000scanyel>
- InfoLEG . (2015). Recuperado el 19 de 07 de 2015, de Centro de Documentación e Información del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas: <http://www.infoleg.gob.ar/>

- Ivo, A. (1987). A Reespecialização da Estrutura Fundiária do Estado da Bahia. Cadernos do CEAS, 109 , 29-45.
- Izquierdo, J., & Rodríguez Fazzone, M. (2006). Buenas Prácticas Agrícolas (BPA). Santiago de Chile: Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe .
- Jacamo, D. (08 de 05 de 2015). Entre 2013 y 2014 el Renatea halló 45 víctimas de trata laboral en zonas rurales de San Juan. Recuperado el 18 de 09 de 2016, de San Juan 8: <http://www.sanjuan8.com/entre-2013-y-2014-el-renatea-hallo-45-victimas-trata-laboral-zonas-rurales-san-juan-n1052375.html>
- Kelsen, H. (1945). General Theory of Law and State. Cambridge: Harvard University Press.
- Kessler, G., & Cortés, M. (2005). Estado del arte de la investigación sobre Juventud Rural en América Latina. Recuperado el 19 de 07 de 2015, de Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca: <http://www.minagri.gob.ar/site/areas/prodernea/50->
- Leite, L. (2014). Segurado especial: a dificuldade de comprovação da atividade rural. Recuperado el 18 de 09 de 2016, de Jus Brasil: <http://lucasgdleite.jusbrasil.com.br/artigos/127253694/segurado-especial-a-dificuldade-de-comprovacao-da-atividade-rural>
- Lerma, H. (2003). Metodología de la investigación: propuesta, anteproyecto y proyecto. Colombia: ECOE Ediciones.
- Lewkowicz, J. (11 de 02 de 2011). Empleo rural, un manual de la explotación. Recuperado el 20 de 09 de 2016, de Página 12: <http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-162131-2011-02-11.html>
- Ley 27.118 de Agricultura Familiar . (20 de 01 de 2015). Recuperado el 20 de 08 de 2016, de InfoLEG: <http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/240000-244999/241352/norma.htm>
- Ley de Promoción del Trabajo Registrado y prevención del Fraude Laboral - Ley 26.940 . (2015). Recuperado el 19 de 07 de 2015, de AFIP: <http://www.afip.gob.ar/genericos/novedades/leypromociontrabajoregistradoyprevencionelfraudelaboral.asp>

- Ley N° 24.465 Régimen de Contrato de Trabajo. Modificación. Modalidad Especial de Fomento del Empleo. Contrato de Aprendizaje . (1995). Recuperado el 09 de 10 de 2014, de InfoLEG: <http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/15931/norma.htm>
- Lopes da Cunha, M. (2006). Desarrollo Sostenible en la Región Sisaleira (Brasil). Boletín de Ciudades para un Futuro más Sostenible .
- Lopes, H. M. (1999). Direito Administrativo Brasileiro. San Pablo: Malheiros.
- López Días, E. (2006). Iniciación al Derecho. Madrid: Delta.
- López, R. (2008). La agenda territorial del Desarrollo Rural en América Latina. Observatorio de la Economía Latinoamericana Eumed, 1 (96).
- Los casos de México, Argentina, Brasil y Chile. Estudios Agrarios, 2 (2), 120-140. Evangelista, A. d. (2010). O processo de ocupação do bioma caatinga e suas repercussões socioambientais na sisalândia, Bahia. Recuperado el 19 de 07 de 2015, de Scribd: <http://pt.scribd.com/doc/146091203/ANTONIA-EVANGELISTA-dissertacao>.
- Luparia, C. H. (2001). Trabajo rural en Argentina. Buenos Aires: Aset Asociación Argentina de Especialistas en Estudios del Trabajo.
- Macedo da Silva, P. F. (2013). Desenvolvimento territorial: A experiência do Território do Sisal na Bahia. Universidade Federal de Uberlândia , 1-20.
- Macedo da Silva, P. F. (2016). El mercado de fibras naturales en una economía globalizada. Fundación de Estudios Rurales , 239-244.
- Mainglia, E. (2009). As interfaces do direito agrário e dos direitos humanos e a segurança alimentar. Cultura Academica .
- Maiztegui Martínez, H. (2005). El trabajador rural. Santa Fe: Rubinzal-Culzoni.
- Maletta, H. (2009). Epistemología aplicada : Metodología y técnica de la producción científica. Perú: Universidad del Pacífico.
- Mançano Fernandes, B., Welch, C. A., & Gonçalves, E. C. (2012). Gobernanza de la tierra en Brasil. (D. Wilson, Ed.) Roma: International Land Coalition.
- Marchesani, J. P. (31 de 05 de 2016). El RENATEA estaría a punto de desaparecer. Recuperado el 18 de 09 de 2016, de Info Saladillo: <http://www.infosaladillo.com.ar/123749/2016/05/31/el-renatea-estaria-a-punto-de-desaparecer/>

- Martínez, L. (2011). Curso de Direito do Trabalho Relações Individuais, Sindicais e Coletivas do Trabalho. San Pablo: Saravia.
- Martins, J. d. (2003). A reforma agrária no segundo mandato de Fernando Henrique Cardoso. Tempo social, 15 (2).
- Meik, M., Duarte, D., Canessa, M., Zas, O., Cremonte, M., & Crespo, G. (2014). Estudios críticos de derecho del trabajo. Buenos Aires: Legis Argentina.
- Meireles, A. C., & Meireles, E. (2009). Meireles, Edilton . A intangibilidade dos Direitos Trabalhistas. San Pablo: Ltr.
- Meireles, E. (04 de 02 de 2007). Garantia do emprego como instrumento para efetivo acesso à justiça (proibição de despedir no curso do processo judicial). Evocati, 14 .
- Meireles, E. (2004). Abuso do Direito na Relação de Emprego. San Pablo: Ltr.
- Melo Quintslr, M. M. (2013). Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2012. Síntese de Indicadores Sociais. Uma análise da condição de vida da população brasileira. Rio de Janeiro: Estudos & Pesquisas - IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
- Memórias. Perseu, 1 (1).
- Mezarobba, G. (enero de 2010). Entre Reparaciones, Medias Verdades e Impunidad: La Difícil Ruptura con el Legado de la Dictadura en Brasil. Conectas Human Rights, 7 (13).
- Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. (18 de 09 de 2016). Información Legislativa. Recuperado el 18 de 09 de 2016, de <http://servicios.infoleg.gob.ar>
- Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. (2016). Metodología de las inspecciones, Fiscalización. Recuperado el 18 de 09 de 2016, de <http://www.trabajo.gob.ar/inspeccion/metodologia/>
- Mira, C. (17 de 07 de 2015). Un cóctel explosivo moviliza hoy la jornada de protesta del campo. Recuperado el 07 de 19 de 2015, de La Nación Negocios: <http://www.lanacion.com.ar/1811177-un-coctel-explosivo-moviliza-hoy-la-jornada-de-protesta-del-campo>
- Monotributo Social . (2016). Recuperado el 28 de 09 de 2016, de Ministerio de Desarrollo Social: <http://www.desarrollosocial.gob.ar/tramitemonotributo>
- Montoro Gil, G. V. (2010). Derecho del trabajo y de la Seguridad Social. . Buenos Aires: D y D SRL.

- Mora y Araujo , M. (2002). Encuestas Políticas. Formulación, Análisis y Uso Estratégico. Buenos Aires: Di Tella.
- Moraes, E. d. (2011). Princípio Constitucional da Eficiência: aspectos relevantes. *Revista Direito, Cultura e Cidadania*, 1 , 95-130.
- Moreira Santos, E., & Araujo da Silva, O. (febrero de 2010). Agentes sociales de la producción del espacio rural en el territorio do Sisal - Bahia. *Campo-Território, revista de geografia agrária*, 5 (9), 71-88.
- Moreira, G., & Ferreira, G. M. (2011). La construcción de la comunicación comunitaria en la región del sisal: una redtejida con fibra y resistencia. En C. Drohling Peruzzo, T. Tufte, & J. Vega Casanova, *Trazos de otra comunicación en América Latina: Prácticas comunitarias, teorías y demandas sociales* (págs. 181-198). Barranquilla: Universidad del Norte - Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación.
- Moreno, M. (2014). Los sujetos sociales en el agro pampeano actual. Estudio de caso.(N. Básico, Ed.) *Trabajo y Sociedad* (22), 15-36.
- Moreno, M. S. (2009). Estudio comparativo. La situación del obrero rural temporario en dos modalidades productivas vitivinícolas diferenciales de Mendoza, ubicadas en las localidades de Isla Grande (Maipú), y Gualtallary (Tupungato). Recuperado el 19 de 07 de 2015, de Universidad Nacional de Cuyo: http://bdigital.uncu.edu.ar/objetos_digitales/4929/tesis-silvia-moreno.pdf.
- Naghi, N. (2000). Metodología de la investigación. México: Limusa.
- Nápoli, R. A. (1958). El trabajador rural en la República Argentina: Estudio social, económico y jurídico. Buenos Aires: Abeledo Perrot.
- Nascimento, A. M. (2010). Princípios do Direito do Trabalho e Direitos Fundamentais do Trabalhador. *Revista Ltr*, 67 (8).
- Nascimento, A. M. (2011). *Direito Contemporâneo do Trabalho*. São Paulo: Saraiva.
- Neiman, G. (2010). Los estudios sobre el trabajo agrario en la última década: una revisión para el caso argentino. *Mundo Agrario*, 10 (20).
- Neiman, G. (2012). Caso de Argentina. En F. Soto Baquero, & E. Klein, *Políticas de mercado de trabajo y pobreza rural en América Latina Tomo II* (págs. 9-35). Roma: Naciones Unidas - CEPAL - OIT - FAO.

- Noceti, M. B. (2011). "Trabajo infantil rural" y "explotación laboral infantil rural": Aportes antropológicos a la diferenciación de conceptos para el diseño de políticas de protección de derechos del niño en el sudoeste bonaerense. Centro de Estudios Interdisciplinarios Etnolingüísticos Antropológicos Socioculturales, 22 .
- Nogueira, M. E. (2013). Agricultura familiar y políticas públicas en la Argentina de los últimos años. Trabajo y Sociedad , 49-66.
- Normas Legales Vigentes sobre Salud y Seguridad en el Trabajo . (27 de 01 de 2014). Recuperado el 19 de 07 de 2015, de Gerencia de Comunicación Institucional y Capacitación de la SRT: <http://www.srt.gob.ar/adjuntos/PreguntasFrecuentes/ListadoSaludSeguridadTrabajo.pdf>
- Norte Grande: revelador informe sobre el trabajo rural en negro. (22 de 04 de 2013). Recuperado el 18 de 09 de 2016, de Región Norte Grande: [http://www.regionnortegrande.com.ar/?noticia=23608\(2016\)](http://www.regionnortegrande.com.ar/?noticia=23608(2016)).
- Observatorio de la Deuda Social Argentina. Buenos Aires: Universidad Católica Argentina.
- Oficina Internacional del Trabajo. (2000). Su voz en el trabajo: informe global con arreglo al seguimiento de la declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo. Ginebra: International Labour Organization.
- Oficina Internacional del Trabajo. (2001). Alto al trabajo forzoso: informe global con arreglo al seguimiento de la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo. Ginebra: International Labour Organization.
- OIT Argentina. (2016). Trabajo infantil en Argentina. Recuperado el 25 de 05 de 2017, de <http://www.ilo.org/buenosaires/temas/trabajo-infantil/lang-es/index.htm>
- OIT Oficina Regional para América Latina y el Caribe. (2012). Panorama Laboral 2012
- OIT. (2015). Convenio nº 141 Artículo 2 . Recuperado el 19 de 07 de 2015, de http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C141

- Organización de los Estados Americanos. (07 de 05 de 2015). CIDH presenta caso sobre Brasil a la Corte IDH. Comunicado de Prensa N° 045/15. Recuperado el 18 de 09 de 2016, de <http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2015/045.asp>
- Organización Internacional del Trabajo. (2001). Seguridad y Salud en la Agricultura. Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente, Departamento de la Protección del Trabajo, Ginebra.
- Organización Internacional del Trabajo. (2013). Programa de Trabajo Decente por País para Argentina. Buenos Aires: OIT - CGT - UIA - Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.
- Organización Internacional del Trabajo. (2017). Legislación sobre trabajo infantil en Argentina. Recuperado el 07 de 05 de 2017, de http://www.ilo.org/buenosaires/temas/trabajo-infantil/WCMS_221784/lang-es/index.htm
- Organización Internacional del Trabajo. (25 de 06 de 1969). C129 - Convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura) N° 129. Recuperado el 18 de 09 de 2016, de http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_1LO_CODE:C129
- Osorio Rojas, C. (04 de 2007). Los nuevos esclavos agrícolas en el pujante y moderno Brasil. Recuperado el 18 de 09 de 2016, de <http://base.d-ph.info/es/fiches/dph/fiche-dph-7337.html>
- Padawer, A. (2014). "Mis hijos caen en cualquier día en una chacra y no van a pasar hambre, porque ellos saben": Oportunidades formativas y trabajo predial de los jóvenes en el sudoeste de Misiones-Argentina. Trabajo y Sociedad (22), 87- 101.
- Paredes, Humberto c/Compañía Colectiva Costera Criolla S.A., 290 116 (Corte Suprema de Justicia de la Nación 25 de 10 de 1974).
- Pastorino, L. F. (2011). Derecho Agrario Argentino. Buenos Aires: Abeledo Perrot. Percinula, A., Jorge, A., Calvo, C., Mariotti, D., Domínguez, D., Estrada, M., y otros. (2011). La violencia rural en la Argentina de los agronegocios: crónicas. Revista NERA, 14 (19), 08-23.
- Pérez, Aníbal Raúl c/Disco S.A., 332 2043 (Corte Suprema de Justicia de la Nación 01 de 09 de 2009).

- Pessanha Neves, D., & de Moraes Silva, M. A. (2008). *Processos de constituição e reprodução do campesinato no Brasil* (Vol. I). Brasília: Unesp - Ministério do Desenvolvimento Agrário.
- Pope, J. (2002). *Investigación de mercados*. Bogotá, D.C.: Grupo Editorial Norma.
- Portilla Rodríguez, M. (30 de 05 de 2008). *La Cadena del Sisal: motor de desarrollo en el Estado de Bahia - Brasil*. Recuperado el 19 de 07 de 2015, de The Competitiveness Institute - Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura: <http://www.tci-network.org/uploads/media/News/0001/02/a45a704acccb2ce55adc652685e408ef341bc1ca.pdf>
- Portilla Rodríguez, M. (Mayo de 2008). *La cadena del Sisal: Motor de Desarrollo en el Estado de Bahía - Brasil*. Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, III .
- Presidência da República Federal do Brasil. (1965). Decreto nº 55871, de 26 de março de 1965. Recuperado el 18 de 09 de 2016, de <http://portal.anvisa.gov.br/documents/33916/391619/DECRETO%2BN%25C2%25BA%2B55.871%252C%2BDE%2B26%2BDE%2BMAR%25C3%2587O%2BDE%2B1965.pdf/59b8704c-52f4-481d-8baa-ac6edadf6490>
- Previdência Social Portal Brasil. (05 de 11 de 2015). *Aposentadoria especial para trabalhador rural está assegurada com novas regras*. Recuperado el 18 de 09 de 2016, de <http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2015/11/aposentadoria-especial-para-trabalhador-rural-esta-assegurada-com-novas-regras>
- Quan, J., Ruiz Olalde, A., & Santos Rocha Sousa, V. (2011). *Territorial diversity and inclusive growth: development dynamics in the Jiquiriçá Valley, Northeast Brazil*. Programa Dinámicas Territoriales Rurales. Santiago de Chile: Rimisp – Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural.
- Quaranta, G., & Fabio, F. (2010). *Intermediación y precariedad laboral en la agricultura. Clásicos y renovados vínculos entre dos fenómenos persistentes*. En A. Del Bono, & G. Quaranta, *Convivir con la incertidumbre. Aproximaciones a la flexibilización y precarización del trabajo en la Argentina*. Buenos Aires: CiCCuS.
- Quintana Pujalte, L., & Piñeyro, N. (2014). *Identidades en conflicto: comunicación política y*

- construcción ciudadana de los campesinos de Corrientes. *Theomai Journal*, 1 (30), 203-2014.
- Ramalho Martins, F., & Lima, J. C. (2016). As múltiplas faces do trabalho precário e o sindicalismo: a experiência brasileira. *Trabajo y Sociedad*, 27 , 93-108.
- Razo Muñoz, C. (1998). *Cómo elaborar y asesorar una investigación de Tesis*. México: Pearson.
- Registro Nacional de Agricultura Familiar (ReNAF) . (2016). Recuperado el 20 de 09 de 2016, de Ministerio de Agroindustria: http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/d_registros_y_monotributo_agropecuario/renaf/index.php
- Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) . (2015). Recuperado el 19 de 07 de 2015, de REPSAL: <http://repsal.trabajo.gob.ar/Home/QueEs>
- Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales. (2016). Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) . Recuperado el 10 de 10 de 2016, de <http://repsal.trabajo.gob.ar/Home/QueEs>
- Resende Chagas, A. M., Salim, C. A., & Mendes Santos Servo, L. (2012). *Saúde e Segurança no Trabalho no Brasil: Aspectos Institucionais, Sistemas de Informação e Indicadores* (2 ed.). San Pablo: Secretaria de Assuntos Estratégicos de la Presidencia de la República - Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada.
- Resolución Conjunta A.F.I.P. 3.763/15 y M.T.E. y S.S. 287/15 . (16 de 04 de 2014). Recuperado el 19 de 07 de 2015, de News IPS: <http://news.ips.com.ar/files/rcafipmtess3763.html>
- Riella, A., & Mascheroni, P. (2015). *Asalariados rurales en América Latina*. Uruguay: CLACSO.
- Rodríguez, M. (2014). Trabajo esclavo: una batalla contra la precarización del empleo rural. Recuperado el 21 de 09 de 2016, de El Tribuno de Salta: <http://www.tribuno.info/trabajo-esclavo-una-batalla-contra-la-precarizacion-del-empleo-rural-n379243>

- Rubio, B., Martínez, C., Jiménez, M., & Valdivia, E. (2002). Reestructuración productiva, comercialización y reorganización de la fuerza de trabajo agrícola en América Latina. México: Plaza y Valdes.
- Samaja, J. (1999). Epistemología y Metodología: Elementos para una teoría de la Investigación Científica. Buenos Aires: Eudeba.
- Sampieri, R., Collado, C., & Lucio, P. (2004). Metodología de la Investigación. México: McGraw-Hill Interamericana.
- Sánchez Enrique, D. V. (mayo de 2016). Trabajo rural temporario y fragmentación normativa en Argentina . Pilquen Ciencias Sociales, 19 (2), 25-37.
- Sansó, M. A. (2006). Derecho Rural. Editorial Jurídica. Santa Fe: Nova Tesis.
- Sarlet, I. W. (2001). Os Direitos Fundamentais na Constituição de 1988. Revista Diálogo Jurídico, 1 (1).
- Scott, R. J., Andrade Barbosa, L. A., & Borlido Haddad, C. H. (2016). ¿Cómo utiliza el derecho una analogía histórica?: Definiendo 'una condición análoga a la de un esclavo' en Brasil. Conferencia SELA de 2016. La Habana: Yale University.
- Sector rural y desarrollo local en América Latina y el Caribe. (2012). Recuperado el 10 de 07 de 2015, de Organización Internacional del Trabajo: <http://www.ilo.org/americas/temas/sector-rural-y-desarrollo-local/lang-es/index.htm>
- Servini de Cubría, María Romilda s/amparo, S. 289. XXIV (Corte Suprema de Justicia de la Nación 08 de 09 de 1992).
- Sieyés, E. (1989). ¿Qué es el Tercer Estado. México: UNAM.
- Silguero Correa, F. (2012). Derechos en el nuevo régimen de trabajo agrario. Revista Trabajo y Seguridad Social, 1 (1), 321-329.
- Sili, M., & Soumoulou, L. (2011). La Problemática de la Tierra en Argentina, conflictos y dinámicas de uso, tenencia y concentración. Roma: Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola - Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Presidencia de La Nación.
- Silva, J. A. (1996). Aplicabilidade das Normas Constitucionais. San Pablo: Malheiros. Silverman, J. K. (julio-diciembre de 2015). Dialogo social en un país periférico – la negociación e implementación de acuerdos

- laborales sectoriales en Brasil bajo el gobierno del Partido dos Trabalhadores. *Leituras de Economia Política* (23), 29-55.
- Soto Baquero, F., & Klein, E. (2012). Políticas de mercado de trabajo y pobreza rural en América Latina - Tomo I. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Ginebra: CEPAL - Naciones Unidas - OIT - FAO.
- Tamayo, M. (2004). *Diccionario de la investigación científica*. Mexico: Limusa.
- Superintendencia de Riesgos del Trabajo. (2008). Enfermedades en el Campo. *Súper Campo*(20), 31-33.
- Superintendencia de Riesgos del Trabajo. (2016). Informe Anual de Accidentabilidad Laboral. Recuperado el 07 de 05 de 2017, de SRT Estadísticas: <http://www.srt.gob.ar/estadisticas>
- Teixeira, J. C. (2003). A legislação de saúde do trabalhador aplicável e vigente no Brasil. (M. P. Trabalho, Ed.) Procuradoria Geral Pub 48 .
- Theulé, C. (2000). El trabajo forzoso en la agroindustria. Buenos Aires: Centro de Estudios e Investigación para la Dirección Agroindustrial-CEIDA.
- Titelman, D., Bertranou, F., Weller, J., Reinecke, G., Lupica, C., Chacaltana, J., y otros. (2016). *Coyuntura Laboral en América Latina y el Caribe*. CEPAL - ONU - OIT. Santiago de Chile: Publicación de las Naciones Unidas.
- Tozzi, V., & Barreto, L. (01 de 02 de 2016). Por el fin de la impunidad. Recuperado el 20 de 09 de 2016, de Sindicatos: <http://informes.reluita.org/index.php/sindicatos/item/por-el-fin-de-la-impunidad>
- Transnacionales en Argentina esclavizan a sus trabajadores. (06 de 01 de 2016). Recuperado el 25 de 08 de 2016, de Grain: <https://www.grain.org/es/article/entries/4265-ataques-politicas-resistencia- relatos>.
- Trinidade, J. D. (2011). *História Social dos Direitos Humanos*. (3 ed.). São Paulo: Petropolis.
- UATRE- Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. (2016). Recuperado el 09 de 09 de 2016, de <http://www.uatre.org.ar/gremio.php>
- Valdés, A., & Wiens, T. (1997). *Pobreza Rural en América Latina y el Caribe*. Rural Finance .

- Vasconcelos, M. d. (2001). El movimiento de los trabajadores rurales sin tierra en el marco de la educación liberadora. El sistema socioeconómico de Brasil y el problema agrario , 5-54.
- Vazquez Vialard, A. (1999a). Derecho del trabajo y de la seguridad social (8 ed., Vol. I). Buenos Aires: Astrea.
- Vazquez Vialard, A. (1999b). Derecho del trabajo y de la seguridad social (8 ed., Vol. II). Buenos Aires: Astrea.
- Venegas denunció vaciamiento en el Renatea y dijo que Tomada irá preso. (22 de 06 de 2016). Recuperado el 18 de 09 de 2016, de La Política Online: <http://www.lapoliticaonline.com/nota/98488/>
- Vitale, L. (2009). Los principales períodos de la historia de América Latina: contribución al debate del bicentenario. Santiago de Chile: Lom Ediciones.
- Vizzotti, Carlos Alberto c/Amsa S.A., 327 3677 (Corte Suprema de Justicia de la Nación 14 de 09 de 2004).
- Wullich, M. (13 de 09 de 2014). Sin margen de error para un trabajo de altorriesgo. Recuperado el 07 de 05 de 2017, de La Nación: <http://www.lanacion.com.ar/1726636-sin-margen-de-error-para-un-trabajo-de-alto-riesgo>
- Zaar, M. H. (febrero de 2011). Las políticas públicas brasileñas y la agricultura familiar: quince años del Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF). Scripta Nova, XV (351).
- Zimmermann, C. R. (2006). Os programas sociais sob a ótica dos direitos humanos: O caso da bolsa família do governo Lula no Brasil sur. Revista internacional de direitos humanos, 3 (4), 145-159.

12.1. Legislación Brasileña:

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Disponible en: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm. accedido en 10 de Abril de 2014.

BRASIL. Consolidação das Leis do Trabalho – CLT. DECRETO-LEI N.º 5.452, DE 1º DE MAIO DE 1943. Disponible en:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm. accedido en 10 de Abril de 2014.

BRASIL. Lei nº 5.889, de 8 de junho de 1973. Disponible en : http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5889.htm. accedido en 10 de abril de 2014. BRASIL, Regulamento da Previdência Social: Disponible en: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3048.htm, accedido en: 12/10/2011.

IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2012. Síntese de Indicadores Sociais. Uma análise da condição de vida da população brasileira 2013. Disponible em:ftp://ftp.ibge.gov.br/Indicadores_Sociais/Sintese_de_Indicadores_Sociais_2013/SI_S_2013.pdf. accedido en 02.09.2014.

DIEESE - Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. A informalidade no mercado de trabalho na Bahia nos anos 2000. Disponible en: <http://geo.dieese.org.br/bahia/download.php?ce=153>. accedido en 03.09.2014.

12.2. Legislación Extranjera:

OIT. Declaração da Organização Internacional do Trabalho. Disponible en: <http://www.oitbrasil.org.br/node/294>. accedido en 10 de Abril de 2014.

Declaração Universal dos Direitos Humanos. Disponible en: <http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2009/11/declaracao-universal-dos-direitos-humanos-garante-igualdade-social>. accedido en 12 de Abril de 2014.

OIT. Convenção sobre todas as formas de eliminação da discriminação (Racial no trabalho/Mulher/entre outros). Disponible en:

http://portal.mj.gov.br/sedh/ct/legis_intern/conv_int_eliminaao_disc_racial.htm. accedido en 12 de Abril de 2014.

OIT. La formalización laboral en Argentina: Avances recientes y el camino por recorrer. Nota preparada por Fabio Bertranou, Luis Casanova y Tomás Lukin. Noviembre 2013. Disponible en: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---ilo-buenos_aires/documents/publication/wcms_228768.pdf. accedido en: 02.09.2014.

OIT, Convenções Internacionais do Trabalho. Disponible en: <http://www.ilo.org/global/publications/lang--en/index.htm>

12.3. Legislación de Trabajo de Argentina:

CONSTITUCION DE LA NACION ARGENTINA. Disponible en: <http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/04999/804/norma.htm>. accedido en 14 de Abril de 2014.

DECRETO nº 1014/2016 - reorganización institucional del Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios. Disponible en: <http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do;jsessionid=DA A55A72473A44AF26E8063AC691EC88?id=265416>. Accedido en 24 de Abril de 2017.

Decreto 1014 de reorganización institucional del Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios. (13 de 09 de 2016). Recuperado el 03 de 01 de 2019, de InfoLEG: <http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/265000-269999/265416/norma.htm>

FALLO nº CSJ 906/2012 - restituye dichas funciones al RENATRE. Disponible en: <http://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByI>

dLinksJSP.html?idDocumento=7268212. Accedido en 24 de Abril de 2017.

LEY nº 26.727/2011 – Nuevo Régimen de Trabajo Agrario - Disponible en: <http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/804/norma.htm>. accedido en 14 de Abril de 2014.

LEY nº 20.774/1976 - Ley de Contrato del Trabajo – Disponible en: <http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/04999/804/norma.htm>. accedido en 14 de Abril de 2014.

LEY nº 11.544/1929 – Ley de la Jornada del Trabajo - Disponible en: <http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/04999/804/norma.htm>. accedido en 14 de Abril de 2014.

LEY nº 23.551/1988 - Ley de Asociaciones Sindicales Disponible en: <http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/20000-24999/20993/texact.htm>. accedido en 14 de Abril de 2014.

LEY nº 14.786/1958 - Ley de Resolución de Conflictos Colectivos de Trabajo Disponible en: <http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/804/norma.htm>. accedido en 14 de Abril de 2014.

LEY Nº 26.940/2014 - Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL). Disponible en: <http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/230000-234999/230592/norma.htm>. accedido en 08 de Enero de 2014.

13. Anexos

13.1. Entrevista semiestructurada a representante sindical de trabajadores rurales de la Región de Sisal. Dirigente Sindical FETAG - Bahía

Nombre del Representante Sindical: Antônio Inácio

Función: Secretario de Salarios

Institución: **FETAG** – Federación de los Trabajadores en la Agricultura en el Estado de Bahía-Brasil

Fecha: 27 de Noviembre de 2015

Breve Reseña sobre FETAG-BA: Tiene como objetivo, defender y luchar por los derechos de los trabajadores rurales, tales como mejoras salariales, convenios colectivos de trabajo, cumplimiento de los derechos laborales, entre los cuales se ocupa de asignaciones de cartera de trabajo, la apertura de juicios en favor de los derechos no respetados a los trabajadores representados por este sindicato.

La Secretaría de la FETAG-BA también tiene por objeto garantizar que los trabajadores y los trabajadores asalariados del país asuman su protagonismo y se involucren en la implementación y consolidación de un Proyecto Alternativo de Desarrollo Rural Sustentable y Solidario -En portugués Projeto Alternativo de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário (PADRSS)- además de proteger los derechos laborales ya adquiridos, contra a cualquier tipo de flexibilización o precarización.

Para realizar estas tareas la Oficina de Trabajadores Rurales y Trabajadores Asalariados trabaja en colaboración con otras secretarías y recibe el apoyo del Departamento Jurídico de la propia Federación. (FETAG-BA, 2016)

Se indaga a continuación sobre las funciones de las representaciones sindicales que tengan como fin velar por la defensa de los intereses colectivos en lo que se refiere a las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores rurales agrícolas.

13.2. Preguntas orientadoras y respuestas del Secretario

Preg. 1.- De acuerdo a su experiencia con trabajadores rurales en su país. ¿Considera Ud. que se respetan los derechos constitucionales fundamentales de éstos? ¿Por qué?

Rta. 1.- No, particularmente en Bahía, donde se encuentra la exploración del capital de las grandes propiedades llamadas "latifundios" para hacer la aplicación de las rentas de las tierras en otras actividades como el comercio, incluso en otro país. Por lo tanto, no tienen los derechos garantizados.

Preg. 2.- ¿Los trabajadores rurales de su país logran alcanzar una calidad de vida digna? ¿Cómo es la vida del trabajador rural brasileiro?

Rta. 2.- Los trabajadores rurales no pueden tener una buena calidad de vida adecuada, porque no hacen uso de las herramientas y equipos de protección individual. (EPI's). Cuentan con horarios de almuerzo reducidos, y su labor es extenuante, dado que se despiertan a las cuatro de la mañana y sólo volver a sus casas alrededor de las 18 horas, esto es tras unas 14 horas de jornada de trabajo.

A veces sólo pueden visitar a sus familiares cada 15 o 30 días, lo que atenta contra la unidad familiar.

Preg. 3.- En los últimos años, ¿Ha observado que las condiciones laborales y económicas de la población rural han mejorado, empeorado o se mantienen estables? ¿Podría describir el panorama general?

Rta. 3.- Sí, especialmente para las mujeres, debido a la intervención del sindicato, que busca la equidad de remuneración.

Preg. 4.- En los últimos años, ¿se han conquistado nuevos derechos en materia laboral rural en su país? ¿Se han plasmado en leyes? ¿Podría ampliar por qué?

Rta. 4.- Sí. El movimiento sindical, junto con los trabajadores rurales lograron nuevos derechos que estaban fuera de la Constitución, a través de acuerdos y de negociación colectiva, así como la actualización de la ley.

Por ejemplo, la igualdad de salarios entre los trabajadores rurales y los trabajadores urbanos.

Preg. 5.- Las leyes laborales de protección del trabajador rural, considera Ud. que se cumplen en la región Sisalera de Bahía? ¿Podría explicar por qué?

Rta. 5.- A pesar de los avances de leyes, no hay cumplimiento de los derechos de los trabajadores rurales.

Las máquinas utilizadas para hacer el trabajo provocan muchos accidentes a los trabajadores.

Los trabajadores tienen las manos, los dedos, los brazos cortados por máquinas. No podemos concebir esto en el mundo actual y tecnológico. Tenemos que eliminar esos accidentes que terminan con la vida del trabajador.

Preg. 6.- Las normas laborales del ámbito rural ¿consideran adecuadamente el bienestar de los niños de las familias de trabajadores? ¿De los ancianos? ¿Y en la práctica concreta éstas se cumplen? ¿Podría ampliar por qué?

Rta. 6.- Nosotros, los sindicatos, federaciones y la Confederación estamos muy preocupados por la situación actual de los trabajadores rurales, sobre todo los jóvenes, hijos de estos trabajadores.

Los jóvenes, hijos de trabajadores rurales estudiarán en la ciudad y no van a volver al campo para trabajar y desarrollar nuevas actividades.

Así que el campo en un futuro muy próximo no tendrá la gente para cuidar de la tierra y trabajarla. El campo está cada vez más desierto de gente.

El Estado no se ha preocupado por ello. La situación es muy grave.

Preg. 7.- Conoce Ud. la existencia de violaciones a los derechos de los trabajadores rurales sin registro en el sector agrícola en la región sisalera del Estado de Bahía? ¿Podría describirlas?

Rta. 7.- Sí, es muy común que haya trabajadores en la región sisalera sin registrar. El empresario sabe de la existencia de los derechos de los trabajadores rurales, pero dice que no puede permitirse el lujo de pagar estos derechos porque si trabajan dentro de la ley no pueden sobrevivir, debido a los altos impuestos que se cobra el gobierno. Creo que falta implementar políticas públicas para cambiar ese sentimiento de los empresarios.

Preg. 8.- ¿Considera Ud. que el marco normativo nacional proporciona a los Sindicatos de trabajadores rurales, les permite cumplir fehacientemente con sus objetivos y finalidades de protección al trabajador? ¿Existen limitaciones? ¿Cuáles?

Rta. 8.- Si, El papel de los sindicatos de trabajadores rurales es el de supervisar las actividades del campo.

Admito deficiencias en la supervisión por parte de los sindicatos en las actividades rurales. Debo reforzar la idea de que los sindicatos deben mejorar la supervisión de las actividades rurales.

También cabe informar que la Norma Reguladora - NR 31 que regula las EPI's tiene muchas contradicciones y su creación fue mal elaborada por el sindicato, el empleador y el Estado (tripartita). Y esta norma está en camino de ser ajustada.

Preg. 9.- Si existen irregularidades, ¿Cuáles cree Ud. que son sus principales causas y responsables?

Rta. 9.- Sí, la mayor dificultad es la falta de Fiscalización por el Estado.

El Estado no tiene autoridad suficiente para fiscalizar el trabajo rural y por eso que la ley no se cumple.

Preg. 10.- ¿Qué aspectos en materia de derechos y condiciones laborales se destacan más en cuanto a diferencias percibidas con los trabajadores rurales en comparación a los trabajadores urbanos, de otras industrias o empleados públicos?

Rta. 10.- El mayor logro de los trabajadores rurales fue la igualdad de derechos. Hoy en día, la Constitución Federal de 1988 considera los mismos derechos a los trabajadores urbanos y rurales.

Antes de esa igualdad, había muchas diferencias económicas entre las clases de los trabajadores rurales y urbanos. Los salarios de los trabajadores rurales fueron muy bajos.

El gran problema de hoy es el incumplimiento de la ley por parte del empleador rural.

Simplemente hace que se empobrezca la clase obrera.

Preg. 11.- Ante los casos en que los trabajadores rurales son menospreciados y sus derechos vulnerados ¿Resulta eficiente el poder fiscalizador del Estado? ¿Y el de los Sindicatos? ¿Qué haría falta mejorar al respecto?

Rta. 11.- Este es otro gran problema al que se enfrentan los sindicatos.

Si bien los sindicatos necesitan mejorar su capacidad de fiscalización, ello no justifica los retrasos por parte del Estado cuando recibe quejas de violación de derechos de trabajadores rurales, realizadas por los sindicatos.

El Ministerio Público del Trabajo recibe denuncias a través del sector de los registros. Pasan seis meses a un año para hacer la Fiscalización de la queja.

En muchos casos no hay más trabajo y ni trabajador porque cerró las actividades y no sucede nada más con el empleador.

Mientras tanto, el empleado ve respetados sus derechos laborales y por no mencionar el sistema de esclavitud de estos trabajos.

Preg. 12.- ¿Qué cambios normativos e institucionales considera Ud. que son necesarios para que los Sindicatos puedan garantizar fehacientemente el cumplimiento efectivo de los derechos fundamentales y laborales del trabajador rural en la región?

Rta. 12.- Hay una gran lucha entre el Sindicato y el Ministerio Publico del Trabajo. Eso porque, la función de fiscalización es solamente del Ministerio Publico del Trabajo otorgado por la ley. Solo que el Ministerio Público del Trabajo no tiene autoridad suficiente para hacer la fiscalización en el campo.

Por lo tanto, ya que los sindicatos no tienen jurisdicción para fiscalizar y jugar un papel del Estado porque está prohibido, hay mucha divergencia entre el Ministerio de Trabajo y el que sufre es el trabajador rural.

La falta de unidad entre los órganos del Estado con el Sindicato para una mejor efectividad y combatir las injusticias.

Dado que el Estado no ejerce su función con eficacia, debe pasar esta competencia para a la fiscalización del sindicato.

En la región sisalera hay mucho trabajo esclavo que ya debería estar prohibido de forma permanente. Pero carecen de la voluntad estatal.

13.3. Entrevista semiestructurada a Dirigente Sindical – UATRE - Argentina

Nombre del Representante Sindical: Juan Carlos Paulucci

Función: Jefe de Gabinete de Planeamiento en la Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina (OSPRERA) de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE)

Institución: UATRE - Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores

Este sindicato agrupa a todos los trabajadores de actividades rurales en la Argentina. Cuenta con una obra social, OSPRERA. Este tiene una larga historia de lucha por la reivindicación de los derechos de los trabajadores rurales, desde 1901, cuando los trabajadores de Pergamino realizan sus primeros movimientos de fuerza. (UATRE- Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores, 2016) Fecha: 10 de Noviembre de 2015

Funciones de las representaciones sindicales que tengan como fin velar por la defensa de los intereses colectivos en lo que se refiere a las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores rurales agrícolas.

13.4. Preguntas orientadoras

Preg. 1.- De acuerdo a su experiencia con trabajadores rurales en su país. ¿Considera Ud. que se respetan los derechos constitucionales fundamentales de éstos? ¿Por qué?

Rta. 1.- Para responder eso hay que hacer una pequeña referencia histórica. El trabajo rural en nuestro país constituye una de las fuentes más importantes de

riqueza del país. Contamos con un vasto territorio que tiene en todas las Provincias y economías regionales donde la actividad importante y fundamental es el trabajo rural. Es decir, los pueblos del interior viven, es decir, subsisten, de acuerdo a la producción agrícola. La producción de las economías regionales, son la fuente de prosperidad, de crecimiento, y aparte es el recurso más importante de ingreso de divisas para el país. Por lo tanto, dentro de este marco podemos señalar al trabajo rural como algo que al país le interesa.

Sin embargo, dada la extensa distribución geográfica de nuestro país, no ha sido siempre fácil el hecho de las grandes distancias a recorrer, la lejanía de los centros urbanos, puesto que el trabajo rural se da en el campo, lejos de los centros urbanos, y obviamente que esta distribución geográfica, esta lejanía, ha hecho que, muchas veces, lo que nosotros denominamos en trabajo rural, el paternalismo, del empleador con algunos rasgos feudales, ha hecho como que el trabajador rural en épocas pasadas estuviera privado de derechos. En las grandes lejanías, esa ausencia que hubo después de la Revolución Industrial, que abarcó a los trabajadores, obviamente el trabajo rural tardó un poco más por estas razones que yo estoy diciendo, la aislación geográfica, estas cuestiones que tienen que ver en las distintas economías regionales que algunas tienen economías prácticamente de subsistencia. Por lo cual es muy difícil llegar a eso. Entonces, y ya yendo a responder concretamente la pregunta, en cuanto a los derechos constitucionales, las garantías tienen que estar dadas, y acá hay que considerar el tema del trabajo formal y el trabajo no formal, y ese paternalismo, esa historia que nos hace ver de que acá estaban los grandes estancieros que eran dueños y señores de su comarca: No respetaban derechos, ellos mismos dictaban las normas a los trabajadores. Esto fue evolucionando hasta dos ciclos importantes.

Uno, haciendo una gran síntesis, en el 44 el Estatuto del Peón que con el Presidente Perón reconoció la problemática y reconoció en la norma la situación del peón y éstos últimos empezaron a disfrutar de estos derechos, y los empleadores tuvieron un límite. Y a partir de ahí comienza una concepción histórica de recuperación de derechos del trabajador.

Existe otro hito muy importante, que fue la propia generación del gremio. Los gremios rurales, no tenían a lo mejor, en su momento, una trascendencia tal como para poder hacer frente a esta situación de este empleador omnipotente. Acá hubo cambios de gobierno y gobiernos que eran muy influenciados por los grandes empleadores, por estancieros muy grandes que cambiaban y ponían y sacaban presidentes, con lo cual es un poder muy importante.

Yo digo que a partir más o menos de los años 90 comenzó una fuerte movida dentro del movimiento sindical argentino, con respecto al tema de los trabajadores rurales, es decir, ahí comenzó el gremio a tener preponderancia, ahí empezó a tener personalidad, y empezaron a enfrentarse un poco estos problemas que yo le estaba diciendo: El problema de tantos trabajadores en negro, problemas salariales, problemas de condiciones de trabajo... El gremio comenzó a tener una entidad importante y tal es así que nosotros creemos que hay un segundo paso, un hito histórico, desde el Estatuto del Peón, hasta el momento en que se sanciona la Ley 25.191 de Libreta del trabajador rural. Esta básicamente procuraba solucionar el problema de la dispersión de los trabajadores de todo el país, las grandes distancias y una característica que tiene nuestro trabajo rural, de actividades que no son permanentes. Es decir, el trabajador va a trabajar por días, por semanas, quizás, con un empleador, y después se retira, con lo cual, si de esto no se hace un seguimiento adecuado, lo que hace es trabajo en negro, evidentemente. Y se le dio a ese trabajador, la prestación por desempleo, que hasta ese momento, todos los trabajadores, a partir de la Ley 24.013, tenían prestación por desempleo, menos los trabajadores rurales. No se sabe la razón, cuál fue, pero el trabajador rural había quedado ausente de este beneficio. Entonces el protagonismo, la fuerza del gremio, hizo que la prestación por desempleo para los trabajadores rurales sea una realidad, e inclusive, se utilizaba la misma contribución, los mismos aportes, que ya venía el empleador depositando ese dinero mensualmente, es decir, no hubo ninguna suba, que se utilizaron todos esos recursos que iban a rentas generales y se le devolvió al trabajador rural a través de una prestación por desempleo y de un organismo que tenía otro tipo de servicios, de prestaciones. Pero básicamente, lo que hizo la Libreta del trabajador rural, comenzó una etapa de registración, (por un lado, cada trabajador que

ingresaba, era obligatorio su inscripción y el otorgamiento de la libreta del trabajo, y por otro lado, cuando ese trabajador estaba desempleado, tenía acceso a la prestación de seguridad. Ahí comenzamos a recuperar los derechos que el trabajador debió haber tenido siempre y que por estas cosas había estado retrasado en cuanto al goce y el ejercicio de estos derechos.

Preg. 2.- ¿Los trabajadores rurales de su país logran alcanzar una calidad de vida digna? ¿Cómo es la vida del trabajador rural argentino/brasileño?

Rta. 2.- En Argentina hay distintas regiones que se caracterizan por los distintos cultivos que se van desarrollando en esas economías regionales. No son iguales las condiciones del trabajador de la Pampa Húmeda que las del trabajador que está en otras zonas más inhóspitas, más difíciles. Entonces, la condición del sistema salarial, inclusive, presenta diferencias. Y en ese sentido lo que se ha procurado es atender a las necesidades de todos esos trabajadores a través de una Obra Social que fue creada con la intención de llegar a cada uno de esos trabajadores a todos esos lugares para dar prestaciones de salud y atender a ese tipo de trabajadores.

Las condiciones de trabajo han evolucionado a partir de esta fuerza, porque el gremio no solamente hizo esto, sino que también empezó a trabajar sobre las condiciones de trabajo, la exposición a químicos, la lucha con respecto al horario ya que en una época se trabajaba de sol a sol cosa que después pasó a ser de ocho horas. Todos estos fueron pasos que se fueron dando. Y hubo un problema que existe y existió en este tipo de trabajadores en el país, que es el tema de la alfabetización. El trabajador rural, conforme a una encuesta que hicimos en el RENATRE⁸ a cada trabajador se le pedía que rellene un formulario cuando se inscribía, que nos cuente sobre todos los aspectos que eran importantes en su vida, con lo cual sabemos su grupo familiar, grupo etario, el nivel de educación que tenía, y nos encontramos con algún tipo de sorpresa con respecto al alto nivel de trabajadores analfabetos. Para eso el gremio organizó un programa muy importante de alfabetización rural, en

⁸ Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores.

seguida comenzaron a trabajar en eso, sobre todo porque estamos hablando de las condiciones de trabajo: Cuando un trabajador no sabe leer ni escribir, es muy difícil que pueda ejercer sus derechos. Le dan un recibo de sueldo, no sabe leer, y no sabe si es la cifra que le están pagando realmente, no tiene defensa. A nosotros nos pareció siempre que eso era básico, importante, y a partir de ahí es que se empezó a tomar conciencia.

Preg. 3.- ¿Podemos decir, entonces, que los trabajadores rurales de Buenos Aires tienen mejores condiciones de trabajo que otros trabajadores del país?

Rta. 3.- Sí, en líneas generales, podríamos decir eso. Hay una franja que es Buenos Aires-Córdoba- -Santa Fe, La Pampa húmeda, que es muy fuerte, en la que evidentemente los trabajadores están en mejores condiciones.

Le doy un ejemplo para que Ud. se haga una idea. El otro día estábamos acá atendiendo a un muchacho de Valle de la Rosa, en Corrientes, y estos son trabajadores que trabajan con el agua hasta la rodilla, y me contaban que se lastiman, era verdaderamente, muy difícil porque ese tipo de trabajo... Nosotros desarrollamos el tema de la ropa, las medidas de protección que en esa actividad es muy difícil que ellos las puedan llevar a cabo. Nosotros acá les decíamos, - "Bueno, muchachos, ¡Pónganse botas! " Pero ellos decían –"No, ¿y cómo vamos a trabajar?" El calor... trabajan a no menos de 45 grados, que es similar a la situación de los trabajadores de Brasil, que ellos nos contaban que cortaban la bota para que les quede libre la suela y trabajaban así.

Preg. 4.- En los últimos años, ¿Ha observado que las condiciones laborales y económicas de la población rural ha mejorado, empeorado o se mantiene estable? ¿Podría describir el panorama general?

Rta. 4.- Se podría decir que sí, a partir de los años 90 fueron mejorando las condiciones laborales por ese fuerte accionar del gremio a través de las paritarias y la organización del RENATRE. El empleador defiende sus intereses, pero evidentemente comenzó a entender que si tenía gente sana, que le iba a rendir mucho más a la empresa, que un trabajador descontento, un

trabajador explotado. Hubo una gran concientización del gremio a partir de una campaña de blanqueo, y esto, en vez de llevar al empleador a confrontar al empleador, lo trajo al empleador a la mesa y con esto comenzó una nueva etapa de diálogo social, de consenso, se buscaron resoluciones conjuntas. A veces la búsqueda de soluciones conjuntas se daban, a veces no se daban, porque era difícil. Pero mediante la voluntad de buscar, se hizo una práctica que yo he vivido a lo largo de diez años, en cada reunión de directorios, se hablaba de todos los temas.

Preg. 5.- En los últimos años, ¿se han conquistado nuevos derechos en materia laboral rural en su país? ¿Se han plasmado en leyes? ¿Podría ampliar por qué?

Rta. 5.- Acá los derechos sociales fueron incorporados desde la Constitución del 49, del 94 y mediante los Tratados incorporados a la Constitución, los Tratados Internacionales en 1994, me parece que fueron muy importantes en materia como vigía para mejorar el tema de la legislación.

De cualquier forma, a mí me da la sensación de que el tema rural, es un tema muy específico y a veces tiene soluciones que tienen que darse dentro del marco de una perspectiva mucho más puntual. A veces soluciones que son para otro tipo de trabajadores, para el trabajo rural no son efectivas. Precisamente, si acá había un régimen jurídico para el trabajador rural, siempre se caracterizó por la existencia de un régimen general para todos los trabajadores: La Ley General del Trabajo, y un régimen específico para el trabajador rural. Este régimen específico venía de una norma que se dictó en la dictadura, con lo cual, se ve que los empleadores habían manejado un estatuto bastante perjudicial para los trabajadores.

Entonces, nosotros, el gremio, durante muchos años, acá siempre fue una prédica del gremio, incorporar un poco de oficio, en la Ley del Contrato de Trabajo, a un régimen específico, que era el que teníamos de la época de la dictadura. Presentamos miles de proyectos. Hasta que, en la última etapa de

este gobierno⁹, incorporaron eso, pero lo incorporaron sin el auxilio del sindicato representativo de los trabajadores, sin los empleados rurales, por lo cual fue una acción estatal, que a lo mejor tuvo una buena intención, pero que podría haber sido mejor, si se lograba a partir de la experiencia, del expertise que tiene la representación del trabajador y del empleador, y poder adecuar la situación... a ver, hoy tenemos unas normas que son muy lindas pero que son inadecuadas, son inaplicables. Porque, la verdad, uno le busca la vuelta, nosotros le venimos buscando la vuelta porque son normas que nosotros venimos luchando, pero a veces como no se hacen con un criterio conociendo la actividad, es muy difícil.

Por ejemplo, el trabajador rural, está en una chacra, una estancia, tiene vacas. Trabaja ocho horas. Pero ese trabajador rural es una persona que está siempre atento porque no puede decir, “terminé las ocho horas, dejo la tranquera abierta”. No. Evidentemente no puede desatender su obligación. Entonces, a veces, en este tipo de cosas, uno tiene que buscar la forma de integrarlas, consensuarlas, son derechos, pero esos derechos, en vez de ser una ventaja para el trabajador, lo perjudican, si uno no lo aplica bien. Por eso, me da la impresión de que este tipo de cosas, tiene que ser complementaria. El RENATRE, por ejemplo, era un organismo tripartito porque están trabajadores, empleadores y Estado. Tres partes. Entonces venía el Estado, impulsaba algo, pero el trabajador decía –“Sí, conviene, esto sí, esto no...” Era una mesa de negociación y de ahí salía generalmente un producto bastante cercano a la realidad.

Preg. 6.- Las leyes laborales de protección del trabajador rural, considera Ud. que se cumplen en la región de la Provincia de Buenos Aires? ¿Podría explicar por qué?

Rta. 6.- Se cumplen en mayor medida que en el resto del país, junto con la zona de Santa Fe, Córdoba y la Pampa húmeda en general, por las razones

⁹ La entrevista se concretó dentro del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que concluyó en diciembre de 2015.

mencionadas. Aunque no todas las zonas de la Provincia de Buenos Aires tienen las mismas características. Si uno habla región de la Pampa Húmeda, va a ver mejor nivel de producción y mejores condiciones laborales.

Preg. 7.- Las normas laborales del ámbito rural ¿consideran adecuadamente el bienestar de los niños de las familias de trabajadores? ¿De los ancianos? ¿Y en la práctica concreta éstas se cumplen? ¿Podría ampliar por qué?

Rta. 7.- El tema de los trabajadores rurales y los ancianos es un tema especial. El trabajador rural necesita una ley especial de jubilación, porque cuando Ud. dice, a qué edad se jubilan los trabajadores, ya que la edad de los trabajadores está relacionada con la posibilidad de continuar trabajando conforme a su actividad. Entonces si Ud. no puede establecer una edad igual para todos porque las actividades son distintas. Una cosa es el que trabaja acá, con aire acondicionado en verano, calefacción en invierno, sillón, café. Otra cosa es estar paleando granos en los silos. Entonces esa persona no puede tener el régimen general de jubilación, porque no puede seguir trabajando hasta los 6 y pico de años o hasta los 70 años de edad. El desgaste físico de esas personas por la exposición a químicos y demás es mucho mayor que el de un trabajador no rural.

Hay una ley de jubilación que se sancionó últimamente. Nosotros hemos trabajado intensamente realizando una gran campaña al respecto, y se hizo una jubilación que no reúne las condiciones necesarias. La norma es una norma escasa, que no le da la protección necesaria al trabajador, fundamentalmente porque no le asegura un haber provisional justo. Y cuando una persona no tiene un haber provisional justo, qué pasa... sigue trabajando. Entonces la situación es más grave todavía, porque la labor suele ser más dura, porque ese trabajador mayor es un marginado, y muchas veces el empleador se aprovecha de eso, y ya tienen en su espalda, muchos años de trabajo.

Preg. 8. La gente ¿Cómo se va a jubilar a los 55 años, si el haber que le dan no le sirve para vivir? La gente sale a trabajar porque necesita comer. Nosotros seguimos en la lucha para lograr una ley justa.

Rta. 8. Cuando las leyes se hacen, por ejemplo, por una voluntad estatal de hacer, sin convocar a los actores sociales y ver, porque esa es la forma de que esa ley sea efectiva, que haya un progreso social, que todos estemos de acuerdo, cuando se hace así, pasan estas cosas como lo de las jubilaciones.

Otra problemática es el trabajo infantil, que es una problemática que hay que conocerla para resolver, porque el trabajo infantil es una cosa que en el campo se da porque a veces al chico se lo lleva, a veces, porque un padre de familia no alcanza para cubrir las necesidades de una familia, entonces se lleva al chico también con él a trabajar. Hay actividades acá, por ejemplo en el tabaco, que llevaban a los chiquitos porque estaban más cerca del piso para ir recogiendo las hojas. En Brasil pasa lo mismo. Pero para ese tipo de cosa se necesitan soluciones que conozca del tema para aportar distintas soluciones ya que si uno saca una ley que simplemente lo prohíbe, no lo vas a solucionar, no te van a hacer caso. Hay otro tipo de cuestiones para resolver. Nosotros con la libreta de trabajo, esa es la idea, ir resolviendo estas cuestiones. No solamente a través de la registración, sino para ir resolviendo en conjunto, las cosas puntuales.

Preg. 9.- Conoce Ud. la existencia de violaciones a los derechos de los trabajadores rurales sin registro en el sector agrícola en la región de la Provincia de Buenos Aires/sisalera del Estado de Bahía? ¿Podría describirlas?

Rta. 9.- Las leyes muchas veces están, y acordes a los convenios internacionales, pero falta que se cumplan.

Preg. 10.- ¿Considera Ud. que el marco normativo nacional proporciona a los Sindicatos de trabajadores rurales, les permite cumplir fehacientemente con

sus objetivos y finalidades de protección al trabajador? ¿Existen limitaciones? ¿Cuáles?

Rta. 10.- Desde el punto de vista jurídico y legal, aparentemente no. Acá el problema pasa por la acción y la voluntad estatal. Durante diez años, acá, en el tema rural, hubo una gran persecución con el tema, respecto a los sindicatos, sobre todo en el ámbito rural. No se sabe bien por qué hubo una gran persecución ideológica y ello atentó contra el desarrollo del sindicato. Este sindicato, la UATRE, es el sindicato más representativo a nivel nacional, de la sociedad rural, inclusive se habló en algún momento de hacer Federación, y en ese caso la UATRE iba a encabezar todos los sindicatos chicos que hay. Con lo cual no pudo avanzar en cuanto a la conquista de derechos, y cumplimiento de derechos, por este tema.

Nosotros pensamos que en el futuro hay un montón de cuestiones para poder seguir trabajando y resolverlas. Pero, no fue una cuestión de que no se le permite al sindicato por una cuestión legal o jurídica, sino una acción política. Que eso, lo vimos muy comprometidos en ese tipo de accionar.

Preg. 11.- Si existen irregularidades, ¿Cuáles cree Ud. que son sus principales causas y responsables?

Rta. 11.- En cuanto al aspecto normativo acá hay un sistema por el cual se reconoce a cada sindicato por actividad, una autorización para funcionar que es la personería gremial. Hay una Ley, que es la Nº 23.551 de Asociaciones Sindicales, que determina el marco de actuación dentro de cada sindicato. Se le da a cada sindicato, una autorización gremial para actuar, supongamos, acá, el de los rurales puede actuar en todo el país. Hay algunos sindicatos que tienen un desarrollo menos, es decir, la personería alcanza para algunas provincias. Hay algunos que son nacionales y otros provinciales.

Acá hay una CGT¹⁰ oficial y después hay algunas otras que no son las oficiales. Esto fue

alentado por el Estado y propició que no pudiera desarrollarse bien esos sindicatos que tenemos personería gremial porque estaban los otros que estaban en ese tema y obedecían a razones políticas.

Preg. 12.- ¿Qué aspectos en materia de derechos y condiciones laborales se destacan más en cuanto a diferencias percibidas con los trabajadores rurales en comparación a los trabajadores urbanos, de otras industrias o empleados públicos?

Rta. 12.- En realidad, los derechos generales son los mismos. Acá lo diferente es que el trabajador rural tiene una forma de establecer las condiciones de trabajo a través de un mecanismo que es nacional, que se llama la Comisión Nacional del Trabajo Agrario que establece las condiciones de trabajo de todos los trabajadores rurales del país. Y está encabezada por el Ministerio de Trabajo. Es decir que, la negociación colectiva, que en otras actividades la tienen entre trabajadores y empleadores, acá hay un organismo, una Comisión, que está dentro del Ministerio de Trabajo, que es la que determina las negociaciones entre trabajadores y empleadores, las condiciones de trabajo y las condiciones salariales. Esto es una cosa bastante histórica que obedece un poco a la importancia que tiene el trabajo rural en el país. Entonces, el Estado ejerce un constante control sobre estas negociaciones que hacen empleados y trabajadores.

El sindicato esto no lo ve bien, pero bueno, esto es lo que nos toca vivir. Las condiciones de trabajo, no existe en el sindicato, a mi modo de ver, una posibilidad de hacer un convenio colectivo de trabajo como hay en otras actividades. Acá uno está obligado a trabajar dentro de un contexto que está encabezado por el Ministerio de Trabajo. Están los trabajadores, están los empleadores, pero está el Ministerio de Trabajo ahí diciéndote lo que vos tenés

¹⁰ Confederación General del Trabajo

que hacer. En otras actividades, lo que se hace es, en una negociación colectiva, hacer el convenio colectivo de trabajo y el Estado lo que hace es homologar ese acuerdo. Acá, en ese aspecto, es algo que no se ha podido solucionar. Hace muchos años que estamos trabajando contra eso, pero, es como que el Estado quiere estar ahí presente en todo lo que tiene que ver con la negociación entre trabajadores y productores. Por eso es que yo creo que hay algunas cuestiones que pasan por las condiciones de trabajo, nosotros tenemos acá las condiciones de trabajo de muchos trabajadores, que son del año 75. Las condiciones generales. Es decir, que con lo cual, esta es una gran lucha, de empezar a actualizar todo eso. Hoy en día, la negociación colectiva no pasa solo por las condiciones salariales, sino que lo más importante son las condiciones de trabajo.

Como en España, con la gente del RENATRE, nosotros le preguntábamos a la gente de allá, y nos decían que ellos el tema salarial más o menos se maneja, pero acá lo importante para nosotros es negociar las condiciones de trabajo. Ahí está el gran secreto. Esto es algo que, la verdad, todavía en Argentina no lo podemos aplicar. Igual acá se ha trabajado mucho, por ejemplo, con los agroquímicos, en higiene y seguridad, pero siempre con ese control estatal.

Preg. 13.- Ante los casos en que los trabajadores rurales son menospreciados y sus derechos vulnerados ¿Resulta eficiente el poder fiscalizador del Estado? ¿Y el de los Sindicatos? ¿Qué haría falta mejorar al respecto?

Rta. 13.- Sí, la fiscalización es un tema muy importante, y nosotros, a partir de la creación del RENATRE, o lo que originalmente era RENATRE, tenía un importante poder de fiscalización. Porque lo que hacía RENATRE era fiscalizar la libreta de trabajo. Tenía la obligación, el empleador, de que en cada relación de trabajo tenía que tener una libreta de trabajo. Entonces, el RENATRE iba a fiscalizar, y a partir de ahí se comenzó una acción muy importante en materia de fiscalización.

Pero, esta fue interrumpida después por esta irrupción del Estado, donde ahora están teniendo los mismos problemas que tuvieron siempre. El Estado, en

materia de fiscalización, no es eficiente. Acá, en el ámbito rural, no es eficiente, porque no tiene estructura, es decir, las fiscalizaciones, en el ámbito rural, volvemos un poco a lo mismo, hay que conocerlo. Y acá, el gremio tenía un conocimiento muy acabado acá y en delegaciones gremiales de todo el país, conocemos cada movimiento y cada cosa que se hace en todos los lugares. Y teníamos a los empleadores sentados ahí en el directorio del RENATRE, con lo cual era más bien una acción inductiva: Inducíamos a través de la fiscalización. No era sancionatorio, ni se trataba de dejar un campo vacío, sino que había una inducción. A partir de ahí se avisaba, se volvía a avisar a los 15 días, al mes ya tenía una sanción y así se fue trabajando. Esto políticamente para el Estado fue algo muy interesante, después lo quisieron tomar para ellos y lo que hicieron, no funcionó.

La nuestra fue una experiencia muy buena porque se hacía una acción conjunta. Inclusive los mismos empleadores utilizaban un concepto, que se llama la competencia desleal: Salía un empleador y le decía al otro –“No, acá hay una competencia desleal, porque si vos no estás contribuyendo con los aportes y contribuciones, vos vas a tener más ganancia y yo tengo que pagar todo.” Así que ellos mismos salían a hablar con los demás y decían –“No, acá hay que pagar. Lucharemos para pagar un poco menos, pero hay que pagar.” Eso era bueno porque se había creado un clima muy interesante.

Preg. 14.- ¿Qué cambios normativos e institucionales considera Ud. que son necesarios para que los Sindicatos puedan garantizar fehacientemente el cumplimiento efectivo de los derechos fundamentales y laborales del trabajador rural en la región?

Rta. 14.- Yo creo que el cambio normativo que se tiene que dar es que vuelva a estar el registro, pero que no sea del Estado, sino con una acción tripartita, es decir que sea de trabajadores, empleadores, y Estado. Me da la impresión de que esto fue algo exitoso, que demostró que sirve, que es eficiente y que es una fuente importante para resolver problemas. No solamente problemas laborales, problemas de seguridad social, sino que inclusive sirve para afianzar economías regionales. Hoy el grave problema que tiene el país es una gran

discusión de las economías regionales. Y a mí me parece que una medida en este sentido debería atender y ahí poder producir normas como la de asignación de salario familiar, la asignación universal, tema de la jubilación y muchos otros que el sindicato tiene como proyectos presentados, y que esto serviría y sería muy importante.

Haciendo una síntesis de todo, creo que el trabajo rural acá en el país se fue evolucionando. Creo que en particular se avanzó mucho a partir del 90 a la fecha, pero, bueno, faltan muchas cosas por hacer, y me da la impresión de que en el trabajo rural, deben aprovecharse las experiencias que son buenas, para continuarlas. Esta es la forma por la cual vamos a volver al objetivo. Y aprovechar sobre todo las experiencias internacionales, de Brasil, de los países que nos rodean, para poder avanzar. Mucho más hoy en día que contamos con tecnologías para comunicarnos y compartir experiencias a través de la distancia.

Nosotros, por ejemplo, la libreta, la trajimos de España. Trajimos el ejemplar de libreta que usaban en Extremadura, y a nosotros nos pareció bueno y se adaptó.